JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00187-00**
Demandante:	**ALEXANDER NARVÁEZ GIRALDO**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar presentada por el apoderado judicial de la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. En escrito separado allegado con el líbelo introductorio el 30 de octubre de 2020, el apoderado judicial del demandante solicitó (*«002SolicitudMedidaCautelar»* del cuaderno de Medida Cautelar):

> *«1. De forma respetuosa solicito al despacho proferir medida cautelar de suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician.*
> *2. De igual forma, solicito se profiera medida cautelar de carácter patrimonial, a favor de ALEXANDER NARVÁEZ GIRALDO identificado C.C*

> *15.962.297 de Salamina en la cual se ordene el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados».*

2.2. Mediante auto de 4 de marzo de 2021 se corrió traslado de la solicitud de medida cautelar de «*suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician*» y de una medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor NARVÁEZ GIRALDO, en la que se ordene «*el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*» a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL («*003AutoCorreTrasladoMC*» del cuaderno de Medida Cautelar).

2.3. El 17 de marzo de 2021 se notificó a la parte demandada el auto admisorio de la demanda junto con el auto que dispuso correr traslado de la medida cautelar («*005NotificacionPersonal*» del cuaderno de Medida Cautelar).

2.4. El 26 de marzo de 2021 la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA, en su condición de apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, descorrió el traslado de la medida cautelar solicitada por el demandante manifestando su oposición y solicitando que la misma sea denegada por carecer de fundamento suficiente. Para el efecto, en síntesis, expuso: (Archivo denominado «*006PronunciamientoMedidaCautelar*» del cuaderno de Medida Cautelar):

2.4.1. En cuanto a la solicitud elevada por el demandante, indicó que ***i)*** *no* estuvo motivada, ***ii)*** no señaló las normas que servían como sustento para ello, evidenciándose una pobre argumentación y, ***iii)*** no indicó los actos administrativos censurados o que pretende sean suspendidos, razones por las cuales señaló que es imposible pronunciarse o ejercer el derecho de defensa y contradicción ante la solicitud de medida cautelar, pues además, no se cuenta con los actos administrativos enjuiciados y que se pretenden sean suspendidos provisionalmente.

2.4.2. Luego de referirse al artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señaló que quien solicita la medida cautelar debe asumir la carga de argumentación y probatoria

que garanticen que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender la valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia.

2.4.3. Posteriormente, previo a señalar los requisitos para decretar la medida cautelar indicó que para que la misma proceda, resulta necesario que del análisis realizado por el Juez, se concluya que existe violación a las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud, resultando claro que en principio no existe vulneración que pueda ser advertida en este momento a través del mecanismo de confrontación que prevé el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, por lo que indicó que debe negarse la solicitud de suspensión provisional solicitada.

2.5. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho («*007ConstanciaDespacho*» del cuaderno de Medida Cautelar).

2.6. El 13 de abril de 2021 la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA allegó poder conferido por el doctor JORGE EDUARDO VALDERRAMA BELTRÁN en calidad de DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, junto con la documental que acredita la calidad de poderdante. («*008EscritoEjercito*» del cuaderno de Medida Cautelar).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

3.1. GENERALIDADES:

3.1.1. MEDIDAS CAUTELARES EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

3.1.1.1. Las medidas cautelares en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentran contempladas en los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y son aplicables en aquellos casos en que se consideren

«necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia» según señala el mismo artículo 229.

Al tenor del artículo 230, que enlista aquellas que pueden ser decretadas, pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. Al respecto, ha señalado el Consejo de Estado:

> *«Avanzando en la tipología desarrollada por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se diferencia entre medidas cautelares preventivas, tendientes a operar como una suerte de acción impeditiva para que no se pueda consolidar una afectación a un derecho; conservativas que buscan mantener o salvaguardar un statu quo ante; anticipativas, en donde se pretende satisfacer por adelantado la pretensión perseguida por el demandante, mediante una decisión que propiamente correspondería al fallo que ponga fin al proceso y que se justifica en tanto que de no adoptarse se incurriría en un perjuicio irremediable para el actor, y de suspensión que corresponde a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.»*[1] (Subraya el Despacho)

3.1.1.2. Sobre los criterios para su procedencia, ha señalado el Alto Tribunal:

> *«…en cuanto a los criterios que debe seguir el juez contencioso administrativo para determinar la procedencia de una medida cautelar, es preciso reconocer que éste cuenta con un espacio de discrecionalidad para adoptarla así como para modular sus efectos en el caso concreto. En este contexto, debe el Juez tener en cuenta el principio de proporcionalidad como, de hecho, se desprende, además de las exigencias constitucionales y convencionales, de la normativa sobre las medidas cautelares al establecer como uno de los requisitos para el decreto de la cautela que "el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla" (artículo 231 CPAyCA).* (Subraya el Despacho)

> *3.10.- Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleja la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar*

[1] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil quince (2015). Radicación número: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057).

los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora[2], debe proceder a un estudio de ponderación y sus subprincipios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad[3].»[4]

3.1.2. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES

El artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a los requisitos que deben tenerse en cuenta al momento del decreto de la medida cautelar dispone:

«**Artículo 231.** ***REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES.***

"Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

---

[2] Cita de cita: *Como ya se ha sostenido, estos principios del periculum in mora y el fumus boni iuris significan que "siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio.". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 27 de febrero de 2013, exp. 45316 (entre otras decisiones similares).*

[3] Cita de cita: *En cualquier clase de decisiones jurídicas debe considerarse la razonabilidad de esta, que no solo se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga en irrazonable, desproporcionada o, en suma, contraria a la constitución; se trata, entonces, de adoptar una decisión que satisfaga el criterio de aceptabilidad; y para lograr ello en buena medida contribuye la valoración de los principios constitucionales.*

[4] Ibídem.

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios»

De lo anterior deviene que la procedencia de la suspensión provisional se presenta cuando la violación de las normas invocadas surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o de las pruebas que el accionante haya aportado para que sea decretada la medida cautelar.

3.1.3. MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PATRIMONIAL

En cuanto a las medidas cautelares de carácter patrimonial, si bien no existe una definición para las mismas, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto No. 2015-00554 de 6 de octubre de 2017 señaló:

«Cuando el mencionado precepto se remite a medidas cautelares de carácter patrimonial, se está refiriendo a medidas que directa e inmediatamente afectan el patrimonio de las personas naturales o jurídicas lo cual no ocurre con la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos. pues estos tienen una naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso evitando transitoriamente, que surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el estado de derecho, lo que claramente excluye su patrimonialidad al no afectar el patrimonio de las personas, sino despojando de sus efectos, temporalmente, a un acto administrativo preliminarmente, considerado como contrario al ordenamiento jurídico. Cuestión diferente es que, indirectamente, la suspensión de los efectos del acto administrativo traiga efectos en el patrimonio de las personas naturales o jurídicas que la han solicitado o que resultan afectadas con la respectiva medida. En consecuencia, se precisa que el estudio del carácter patrimonial de la medida cautelar solicitada con la cual se pretende obviar el requisito de procedibilidad de la conciliación administrativa, debe realizarse conforme a lo solicitado en la demanda empero, ese análisis no puede llevarse a cabo cuando se trata de la medida de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, pues la misma no tiene una naturaleza patrimonial».

3.2. CASO CONCRETO

Descendiendo al caso concreto, se observa que la solicitud de suspensión provisional si bien no fue señalada taxativamente por la parte actora, recae en los efectos del acto administrativo ficto o presunto, producto del silencio administrativo negativo frente a la petición con radicado No. 8IF6NN5EG1 de

2018-05-07, en virtud de la cual se negó el reajuste del 20% de su salario y prestaciones sociales y, además, el reconocimiento y pago de la prima de actividad, aunado a una medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor NARVÁEZ GIRALDO, en la que se ordene «*el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*».

No obstante, el apoderado judicial de la parte actora no expuso los argumentos con el fin de decretar la medida cautelar, es decir, olvidó tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a que la procedencia de la medida a petición de parte «*debidamente sustentada*».

Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante reciente proveído de 1° de julio de 2020 señaló:

> *«La exigencia de sustentar en forma expresa y concreta la referida solicitud se explica por su propia naturaleza dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos. Ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor y sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello».*

Ahora, debe señalarse que en proveído de 14 de febrero de 2019 Sección Primera del Consejo de Estado señaló:

> *«Para resolver se considera que no están presentes los requisitos señalados en los articulo 229 y 231 del C.P.A.C.A. para que sea procedente el decreto de la suspensión provisional solicitada, toda vez que no se sustentó en la forma en que lo ordena la citada disposición, omisión ésta que hace imposible efectuar la comparación normativa para deducir de ella la presunta violación del ordenamiento jurídico que propone el demandante.*
>
> *La exigencia de sustentar en forma expresa y concreta la referida solicitud se explica por su propia naturaleza, dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos.*
>
> *Ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el*

efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor, sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello. Resulta altamente útil traer a colación el análisis que hizo el Despacho en auto del 21 de octubre de 2013 expedido en el proceso número 11001 0324 000 2012 00317 00, en el cual se abordó el tema en un asunto semejante:

"En efecto, el requisito consistente en la sustentación de la medida cautelar no se encuentra en el artículo 231 del CPACA que trae a colación el recurrente, sino en el artículo 229 ejusdem cuyo contenido y alcance fueron explicados en el auto recurrido. Con todo, esta disposición advierte que las medidas cautelares, dentro de las que se encuentra la suspensión provisional, pueden ser decretadas ***a solicitud de parte debidamente sustentada,*** *lo que equivale a decir que la solicitud debe ser suficientemente argumentada por quien la solicite.*

Cosa distinta es que en la demanda se indiquen las normas violadas y el concepto de la violación, ya que esto comporta uno de los requisitos exigidos para este tipo de líbelos según lo dispone el artículo 162 numeral 4 del CPACA, requisito que no puede confundirse con el establecido en el comentado artículo 229.

En el mismo sentido, el alcance de la expresión "procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado" contenida en artículo 231 Ibíd, se encuentra dirigida a explicar que la solicitud de suspensión provisional puede ser presentada en el líbelo introductorio o en un escrito aparate, y no a que la sustentación de la medida cautelar quede suplida con el concepto de violación de las normas indicadas en la demanda, dado que, se reitera, se trata de dos requisitos distintos para fines procesales disimiles: uno, el que se refiere a fundamentar jurídicamente la pretensión de nulidad del acto, el otro, a explicar las razones por las cuales el acto debe ser suspendido provisionalmente.

Lo anterior no quiere decir que los argumentos para cada uno de los fines procesales mencionados puedan coincidir, es más, si lo deseado por la actora era que el concepto de violación expuesto en la demanda sirviera de fundamento de la solicitud de suspensión provisional así debió expresarlo, máxime si se tiene en cuenta que en el escrito de la demanda dedicó un capítulo aparte a la suspensión provisional dentro del cual inscribió un subtítulo denominado "FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL", que fue al que se atuvo este Despacho para resolver la medida.

En otras palabras, la actora en su demanda dedicó un capítulo para sustentar la medida cautelar, a esa sustentación se remitieron la entidad demandada y el Despacho para descorrer el traslado y resolver la medida, sin embargo, ahora, viendo que esa sustentación en varios de sus apartes fue insuficiente, pretende que se tengan como tales los argumentos que utilizó para otros fines procesales.

Finalmente sobre este punto, debe ponerse de relieve que la sustentación de la solicitud de suspensión provisional no constituye un exceso ritual, se trata de la observancia de una carga procesal en cabeza de la actora cuyo cumplimiento es el deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia y a su vez la carga que exige la ley para que, entre otras, se garantice el derecho de defensa de la entidad que expidió el acto.

> *A propósito del derecho de defensa de la entidad demandada, no se puede perder de vista que la nueva codificación trajo consigo la obligación de correr traslado a la parte demandada de la solicitud de suspensión, en ese orden, la carga impuesta para que se sustente la medida también se encuentra dirigida a que la entidad que profirió el acto conozca a ciencia cierta las razones esgrimidas por el actor para poder ejercer eficientemente su derecho de defensa. En ese contexto, no puede tenerse como sustentación de la medida cautelar la sola afirmación de que el acto administrativo desconoce normas de rango superior»*

Así las cosas, resulta evidente que la carga procesal para la procedencia de la solicitud de la medida provisional radica en la parte demandante, la cual debe sustentar jurídicamente la solicitud de suspensión provisional, situación que no acontece dentro del presente asunto, aunado a lo anterior, tampoco se acreditó el criterio de necesidad en el decreto de la medida, ni se probó si quiera de manera sumaria los perjuicios causados de no accederse a la misma, por lo que de no hacerse se estaría faltando a los requisitos señalados en los articulo 229 y 231 de la Ley 1437 de 2011, en ese orden, al no cumplirse con dicha carga procesal dentro del presente asunto, resulta procedente negar la solicitud.

Finalmente se advierte que el análisis efectuado en precedencia resulta aplicable a la solicitud de medida cautelar de «*suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician*», así como a la medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor NARVÁEZ GIRALDO, en la que se ordene «*el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*»

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: NIÉGASE la SUSPENSIÓN PROVISIONAL «*del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician*», así como a la medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor NARVÁEZ GIRALDO, en la que se ordene «*el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*».

SEGUNDO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar a la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA, en calidad de apoderada judicial de la NACIÓN-

MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido obrante en el archivo «008EscritoEjercito» del cuaderno de Medida Cautelar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
6a6a2103bb1a065710fb16a901a09b36b07645e144cb5c205430f5f4df40aae2
Documento generado en 15/04/2021 02:44:15 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00188-00**
DEMANDANTE:	**FREDY ANDRÉS CANTERO GIRALDO**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor FREDY ANDRÉS CANTERO GIRALDO, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El señor FREDY ANDRÉS CANTERO GIRALDO, por conducto de apoderado judicial, el 30 de octubre de 2020 radicó demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole a este Despacho («004ActaReparto»), con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo No. 20163171299021 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 de 28 de septiembre de 2016, por medio del cual la Entidad demandada negó el reconocimiento y ajuste salarial

del actor en un 20% y la reliquidación del subsidio familiar y la prima de navidad.

2.2. El 20 de noviembre de 2020, previo a emitir pronunciamiento sobre la admisión de la demanda, requirió a la parte actora como a la Entidad demandada para que allegaran la constancia del último lugar de prestación de servicios del actor, con el fin de determinar la competencia por el factor territorial (*«006AutoInadmite»*).

2.3. El 7 de abril de 2021 el expediente ingresó en silencio al Despacho para proveer (*«011ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Bajo el contexto expuesto en el acápite de antecedentes y como quiera que este Despacho no puede aún determinar la competencia por el factor territorial en atención a la inexistencia dentro del plenario de la constancia o certificación del último lugar de prestación de servicios del demandante, por segunda vez, se requerirá al apoderado judicial de la parte actora y a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia alleguen constancia del **último lugar** donde prestó y/o presta sus servicios el señor FREDY ANDRÉS CANTERO GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.883.701, **especificando el municipio**. Lo anterior con el fin de determinar la competencia por el factor territorial al tenor de lo dispuesto por el artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y seguir con el curso del presente proceso.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE al apoderado judicial de la parte actora y a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído

alleguen constancia del **último lugar** donde prestó y/o presta sus servicios el señor FREDY ANDRÉS CANTERO GIRALDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.883.701, **especificando el municipio**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
900C8F3D631E2AA55CD309BC10BB1303DA5DA53C4347AB29FEA0BE35500D9CE2
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:37 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00195-00**
DEMANDANTE:	**JULIO ENRIQUE TALERO ESPEJO**
DEMANDADO:	**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
MEDIO DE CONTROL:	**EJECUTIVO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor JULIO ENRIQUE TALERO ESPEJO, por conducto de apoderado judicial, contra el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ por el medio de control ejecutivo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 31 de octubre de 2020, fue remitida a este Despacho solicitud interpuesta por el señor JULIO ENRIQUE TALERO ESPEJO, a través de apoderado judicial, para librar mandamiento ejecutivo contra el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, en virtud de la sentencia de segunda instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN

SEGUNDA, SUBSECCIÓN "A" el 18 de julio de 2019 dentro del proceso con radicación No. 25307333300120160007701[1].

2.2. Mediante proveído de 11 de marzo de 2021 este Despacho inadmitió la demanda para que la parte demandante: ***i)*** allegara la constancia de ejecutoria de la sentencia que pretende ejecutar, ***ii)*** acreditara la radicación de la solicitud de cumplimiento de la sentencia ante el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, y, ***iii)*** acreditara que se agotó la conciliación prejudicial previo a elevar la solicitud de ejecución[2].

2.3. El anterior auto se notificó en debida forma tal y como se desprende del correo electrónico por medio del cual se dio a conocer el estado No. 11 de 12 de marzo de 2021[3].

2.4. El 19 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer sin manifestación alguna por parte del demandante[4].

II. C O N S I D E R A C I O N E S

De conformidad con los artículos 169[5] y 170[6] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho determinará si la parte actora cumplió la carga de subsanar la demanda en debida forma.

---

[1] Archivo denominado 002SolicitudEjecucionSentencia del expediente digitalizado.
[2] Archivo denominado 008AutoInadmite del expediente digitalizado.
[3] Archivo denominado 009NotificacionEstado012Marzook del expediente digitalizado.
[4] Archivo denominado 010ConstanciaDespacho del expediente digitalizado.
[5] «**Artículo 169. *RECHAZO DE LA DEMANDA***. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:
1. Cuando hubiere operado la caducidad.
2. **Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.**
3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial» (Destaca el Despacho).
[6] «**Artículo 170. *INADMISIÓN DE LA DEMANDA***. Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, **para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda**» (Destaca el Despacho).

En ese sentido, de conformidad con los hechos expuestos en el acápite de antecedentes de esta providencia y constatando, por un lado, que el auto inadmisorio de la demanda se notificó en debida forma al correo electrónico indicado en el escrito de la demanda (*«abogadospg@hotmail.com»* visible en los folios 2 y 3 del archivo «oo2SolicitudEjecucionSentencia»[7]) y, por el otro, que la parte actora guardó silencio según se desprende de la constancia secretarial de 19 de abril de 2021, se concluye que la parte actora no dio cumplimiento a lo ordenado por el Despacho en auto de 11 de marzo de 2021, por lo que se rechazará la demanda, de conformidad con lo establecido en los artículo 169 y 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: RECHAZAR la demanda instaurada por el señor JULIO ENRIQUE TALERO ESPEJO contra el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, de conformidad con las consideraciones expuestas.

[7] Conforme se evidencia en la constancia de envío:



Juzgado 01 Administrativo - Cundinamarca - Girardot

De: Juzgado 01 Administrativo - Cundinamarca - Girardot
Enviado el: viernes, 12 de marzo de 2021 8:01 a. m.
Para: procjudadm199@procuraduria.gov.co; juridico10@ramirezyasociados.com.co; henrymonfar@hotmail.es; notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co; notificacionesjudiciales@fusagasuga-cundinamarca.gov.co; fernandela2006 @hotmail.com; abogadospg@hotmail.com; LUIS DANIEL PEÑALOZA SUAREZ; Hugo Erbey Diaz Moreno; procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co; notjudicialppl@fiduprevisora.com.co; hectormanuel65@hotmail.com; margaritazuluaga88@hotmail.com; anaboterito0724 @gmail.com; matudup_14@hotmail.com; notificacionesibague@giraldoabogados.com.co; acropolisjudicial@gmail.com; CONTACTENOS@UNIONASESORESLABORALES.COM; LEOTOR976@HOTMAIL.COM; marcelaramirezsu@hotmail.com; info@ryabogados.com; camilo7605@gmail.com; notificaciones@wyplawyers.com; yacksonabogado@gmail.com; yacksonabogado@outlook.com; carlosalb2312@hotmail.com; info@guerreroyroaconsultores.com; carlosalberto.guerrerolopez55@gmail.com; vyoconsultorestributarios@gmail.com; cumplimiento.normativo@bmm.com.co; recepciongarzonbautista@gmail.com; abg76@hotmail.com; grahad8306@hotmail.com; notificaciones.girardot@mindefensa.gov.co; luzfrabota@hotmail.com; luz.boyaca@mindefensa.gov.co; abogados_especializados7@hotmail.com; alfredo landinez; yacksonabogado@outlook.com; Carmen Ligia Gómez López; luceidardila@hotmail.com; karolsalinas08@hotmail.com; SARAYABOGADA2015 @GMAIL.COM; notificacionescundinamarcalqab@gmail.com; najarori@hotmail.com; abogadospg@hotmail.com; FANNY ALVAREZ RENTERIA; bygabogados205@gmail.com; DUVERNEY VALENCIA; luzmyriher@gmail.com; rfrancisco02@hotmail.com; LawyersAbogadosR@outlook.es; santiago.nieto@fiscalia.gov.co; JUR.NOVEDADES@FISCALIA.GOV.CO; jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; yesikac311@gmail.com; notificacionjuridica@saesas.gov.co; t_sdiaz@fiduprevisora.com.co; procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co;

SEGUNDO: En firme esta decisión, **DEVUÉLVASE** la demanda y los anexos sin necesidad de desglose y **ARCHÍVESE** el expediente previas las constancias de rigor**.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
4107F387300ABD5666B0EEA3592D62573ABFB64EE27244861EE7D6D5E633B07B
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:42 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00202-00**
DEMANDANTE:	**FABIO NELSON PESCADOR MORALES**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor FABIO NELSON PESCADOR MORALES, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. EL señor FABIO NELSON PESCADOR MORALES, por conducto de apoderado judicial, el 18 de septiembre de 2020 radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, correspondiendo el conocimiento AL JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ (Folio 34 del archivo denominado «*002ActaucionJuzgado11AdministrativoBogota*»).

2.2. Por auto de 15 de octubre de 2020 el JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, ordenó remitir el expediente por competencia a los Juzgados Administrativos de Girardot (Folios 36 y 37 del archivo denominado «*002ActaucionJuzgado11AdministrativoBogota*»).

2.3. El 18 de noviembre de 2020 fue radicado el proceso en el correo de reparto de los Juzgados Administrativos de Girardot, una vez efectuado el reparto el mismo día, el proceso le correspondió a este Despacho (Archivos denominados «*003CorreoReparto*» y «*004ActaReparto*»).

2.4. Mediante proveído de 27 de noviembre de 2020 este Despacho inadmitió la demanda para que se allegara ***i)*** la constancia del envío de la demanda y los anexos a la demandada, así como del escrito de subsanación, de conformidad con el artículo 6° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020, ***ii)*** la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor PESCADOR MORALES, especificando el municipio, y ***iii)*** la constancia de publicación, comunicación, notificación o, ejecución del acto administrativo acusado. Así mismo, dispuso oficiar a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que certificara el último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor FABIO NELSON PESCADOR MORALES, especificando el municipio (*«006AutoInadmite»*).

2.3. El anterior auto se notificó en debida forma tal y como se desprende del correo electrónico por medio del cual se dio a conocer el estado No. 41 de 30 de noviembre de 2020 visible en el archivo *«007NotificacionEstado30Noviembre»*.

2.4. El 30 de noviembre de 2020 el doctor WILLIAM PÁEZ RIVERA en calidad de apoderado judicial del demandante allegó escrito mediante el cual pretende subsanar la demanda (*«008EscritoDemandante»*).

2.5. Mediante los oficios No. 0598 de 10 de diciembre de 2020 y No. 118 de 25 de febrero de 2021 se ofició a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-

EJÉRCITO NACIONAL para que certificara el último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor FABIO NELSON PESCADOR MORALES, especificando el municipio (*«009OficioRequiere»* y *«011OficioRequiere»*).

2.6. El 10 de diciembre de 2020 la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA, allegó escrito indicando que solo atiende requerimientos judiciales de los procesos en los que actúa como apoderada de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, por lo que los demás requerimientos deberán remitirse al correo electrónico juridiciadiper@buzonejercito.mil.co de la Dirección de Personal Ejército (*«010EscritoApoderadaEjercito»*).

2.7. El 125 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«012ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, en primer orden, se advierte que el apoderado judicial de la parte actora acreditó el envío de la demanda, el poder, los anexos y el escrito de subsanación a la demandada. Por otro lado, en cuanto a la solicitud de allegar la certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor PESCADOR MORALES, especificando el municipio, y la constancia de publicación, comunicación, notificación o, ejecución del acto administrativo acusado aportó el escrito de petición radicado el 30 de noviembre de 2020 ante el correo electrónico usuarios@mindefensa.gov.co en el que solicitó la mencionada documental, habida cuenta que adujo que no la tenía en su poder.

En ese orden, como quiera que el demandante solicitó mediante escrito de petición la documental requerida en el auto inadmisorio, sin que se advierta que la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL haya emitido pronunciamiento al respecto, resulta procedente previo a adoptar una decisión de fondo sobre la admisión del asunto de la referencia, requerir a dicha Entidad en tal sentido y conminar a la parte actora para que informe si

la demandada ya le entregó la documental solicitada y de ser así, proceda allegarla de manera inmediata.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRASE a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este proveído allegue ***i)*** los documentos solicitados por el doctor WILLIAM PÁEZ RIVERA el 30 de noviembre de 2020 al correo electrónico usuarios@mindefensa.gov.co y ***ii)*** la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor FABIO NELSON PESCADOR MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.034.229, especificando el municipio.

SEGUNDO: REQUIÉRASE al apoderado judicial del demandante doctor WILLIAM PÁEZ RIVERA para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este proveído informe al Despacho si ya fueron entregados los documentos solicitados a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL el 30 de noviembre de 2020 y, en caso de contar con los mismos proceder a allegarlos de manera inmediata.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A

LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
7CF72A18B78ED58082213408F6CB7C9432D0A431FED65C53661F522BD3B3CD00
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:17 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00222-00**
DEMANDANTE:	**GIRALDO SOTELO**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar presentada por el apoderado judicial de la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Con el líbelo introductorio allegado a este Despacho el 6 de agosto de 2020 el apoderado judicial del demandante solicitó (folio 32 «*001SolicitudMedidaCautelar*» del cuaderno «*C02MedidaCautelar*» del expediente digitalizado):

> *«1. De forma respetuosa solicito al despacho proferir medida cautelar de suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician.*
>
> *2. De igual manera, solicito se profiera medida cautelar de carácter patrimonial, a favor de* ***GIRALDO SOTELO,*** *identificado con C.C.*

> *90.042.403 de Candelaria en el cual se ordene el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados».*

1.2. Mediante auto de 11 de marzo de 2021 se corrió traslado de la solicitud de medida cautelar de «*suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician*» y de una medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor GIRALDO SOTELO, en la que se ordene «*el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*» a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL («*002AutoCorreMedidaCautelar*» del cuaderno «*C02MedidaCautelar*» del expediente digitalizado).

1.3. El 24 de marzo de 2021 se notificó a la parte demandada el auto admisorio de la demanda junto con el auto que dispuso correr traslado de la medida cautelar («*004NotificacionPersonal*» del cuaderno del cuaderno «*C02MedidaCautelar*» del expediente digitalizado).

1.4. El 8 de abril de 2021 la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA, en su condición de apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, descorrió el traslado de la medida cautelar solicitada por el demandante manifestando su oposición y solicitando que la misma sea denegada. Para el efecto, en síntesis, expuso («*005PronunciamientoMedida*» del cuaderno del cuaderno «*C02MedidaCautelar*» del expediente digitalizado):

1.4.1. En cuanto a la solicitud elevada por el demandante, indicó que ***i)*** *no* estuvo motivada, ***ii)*** no señaló las normas que servían como sustento para ello, evidenciándose «*una pobre argumentación*» y, ***iii)*** no indicó los actos administrativos censurados o que pretende sean suspendidos, razones por las cuales señaló que es imposible pronunciarse o ejercer el derecho de defensa y contradicción ante la solicitud de medida cautelar, pues además, no se cuenta con los actos administrativos enjuiciados y que se pretenden sean suspendidos provisionalmente.

1.4.2. Luego de referirse al artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señaló que quien solicita la medida cautelar debe asumir la carga de argumentación y probatoria que garanticen que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender la valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia.

1.4.3. Posteriormente, previo a señalar los requisitos para decretar la medida cautelar indicó que para que la misma proceda, resulta necesario que del análisis realizado por el Juez, se concluya que existe violación a las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud, resultando claro que en principio no existe vulneración que pueda ser advertida en este momento a través del mecanismo de confrontación que prevé el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, por lo que indicó que debe negarse la solicitud de suspensión provisional solicitada.

1.5. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer («*006ConstanciaDespacho*» de la carpeta «*C02MedidaCautelar*»).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1. GENERALIDADES:

2.1.1. MEDIDAS CAUTELARES EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

2.1.1.1. Las medidas cautelares en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentran contempladas en los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y son aplicables en aquellos casos en que se consideren «*necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia*» según señala el mismo artículo 229.

Al tenor del artículo 230, que enlista aquellas que pueden ser decretadas, pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. Al respecto, ha señalado el Consejo de Estado:

> *«Avanzando en la tipología desarrollada por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se diferencia entre medidas cautelares preventivas, tendientes a operar como una suerte de acción impeditiva para que no se pueda consolidar una afectación a un derecho; conservativas que buscan mantener o salvaguardar un statu quo ante; anticipativas, en donde se pretende satisfacer por adelantado la pretensión perseguida por el demandante, mediante una decisión que propiamente correspondería al fallo que ponga fin al proceso y que se justifica en tanto que de no adoptarse se incurriría en un perjuicio irremediable para el actor, y de suspensión que corresponde a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.»*[1] (Subraya el Despacho)

2.1.1.2. Sobre los criterios para su procedencia, ha señalado el Alto Tribunal:

> *«…en cuanto a los criterios que debe seguir el juez contencioso administrativo para determinar la procedencia de una medida cautelar, es preciso reconocer que éste cuenta con un espacio de discrecionalidad para adoptarla, así como para modular sus efectos en el caso concreto. En este contexto, debe el Juez tener en cuenta el principio de proporcionalidad como, de hecho, se desprende, además de las exigencias constitucionales y convencionales, de la normativa sobre las medidas cautelares al establecer como uno de los requisitos para el decreto de la cautela que "el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla" (artículo 231 CPAyCA)* (Subraya el Despacho)

> *3.10.- Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleja la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora*[2]*, debe proceder a un estudio de ponderación*

---

[1] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil quince (2015). Radicación número: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057).

[2] Cita de cita: *Como ya se ha sostenido, estos principios del periculum in mora y el fumus boni iuris significan que "siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que*

y sus subprincipios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad[3]*.»*[4]

2.1.2. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES

El artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a los requisitos que deben tenerse en cuenta al momento del decreto de la medida cautelar dispone:

«**Artículo 231.** ***REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES.***

"Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

---

ponga fin al litigio.". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 27 de febrero de 2013, exp. 45316 (entre otras decisiones similares).

[3] Cita de cita: *En cualquier clase de decisiones jurídicas debe considerarse la razonabilidad de esta, que no solo se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga en irrazonable, desproporcionada o, en suma, contraria a la constitución; se trata, entonces, de adoptar una decisión que satisfaga el criterio de aceptabilidad; y para lograr ello en buena medida contribuye la valoración de los principios constitucionales.*

[4] Ibídem.

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios».

De lo anterior deviene que la procedencia de la suspensión provisional se presenta cuando la violación de las normas invocadas surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o de las pruebas que el accionante haya aportado para que sea decretada la medida cautelar.

2.1.3. MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PATRIMONIAL

En cuanto a las medidas cautelares de carácter patrimonial, si bien no existe una definición para las mismas, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto No. 2015-00554 de 6 de octubre de 2017 señaló:

«Cuando el mencionado precepto se remite a medidas cautelares de carácter patrimonial, se está refiriendo a medidas que directa e inmediatamente afectan el patrimonio de las personas naturales o jurídicas lo cual no ocurre con la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos. pues estos tienen una naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso evitando transitoriamente, que surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el estado de derecho, lo que claramente excluye su patrimonialidad al no afectar el patrimonio de las personas, sino despojando de sus efectos, temporalmente, a un acto administrativo preliminarmente, considerado como contrario al ordenamiento jurídico. Cuestión diferente es que, indirectamente, la suspensión de los efectos del acto administrativo traiga efectos en el patrimonio de las personas naturales o jurídicas que la han solicitado o que resultan afectadas con la respectiva medida. En consecuencia, se precisa que el estudio del carácter patrimonial de la medida cautelar solicitada con la cual se pretende obviar el requisito de procedibilidad de la conciliación administrativa, debe realizarse conforme a lo solicitado en la demanda empero, ese análisis no puede llevarse a cabo cuando se trata de la medida de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, pues la misma no tiene una naturaleza patrimonial».

2.2. CASO CONCRETO

Descendiendo al caso concreto, se observa que la solicitud de suspensión provisional si bien no fue señalada taxativamente por la parte actora, recae en los efectos de los actos administrativos Nos. 20183110986331: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 de 27 de mayo de 2018 y en el ficto

o presunto negativo producto del silencio administrativo negativo configurado a partir del escrito radicado bajo el No. NX8JEZ1PA9 de 7 de mayo de 2018 por medio de los cuales se le negó al actor el reconocimiento y/o reajuste salarial del 20%, el subsidio familiar de conformidad con el Decreto 1794 de 2000 y la prima de actividad, aunado a una medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor GIRALDO SOTELO, en la que se ordene «*el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*».

No obstante, el apoderado judicial de la parte actora no expuso las razones que argumentaran su solicitud de decreto de la medida cautelar, es decir obvió la disposición contenida en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, relacionada con que para la procedencia de la medida a petición de parte tiene que estar «*debidamente sustentada*».

Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante reciente proveído de 1° de julio de 2020 señaló:

> *«La exigencia de sustentar en forma expresa y concreta la referida solicitud se explica por su propia naturaleza dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos. Ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor y sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello».*

Ahora, debe señalarse que en proveído de 14 de febrero de 2019 Sección Primera del Consejo de Estado señaló:

> *«Para resolver se considera que no están presentes los requisitos señalados en los articulo 229 y 231 del C.P.A.C.A. para que sea procedente el decreto de la suspensión provisional solicitada, toda vez que no se sustentó en la forma en que lo ordena la citada disposición, omisión ésta que hace imposible efectuar la comparación normativa para deducir de ella la presunta violación del ordenamiento jurídico que propone el demandante.*
>
> *La exigencia de sustentar en forma expresa y concreta la referida solicitud se explica por su propia naturaleza, dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos.*

Ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor, sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello. Resulta altamente útil traer a colación el análisis que hizo el Despacho en auto del 21 de octubre de 2013 expedido en el proceso número 11001 0324 000 2012 00317 00, en el cual se abordó el tema en un asunto semejante:

"En efecto, el requisito consistente en la sustentación de la medida cautelar no se encuentra en el artículo 231 del CPACA que trae a colación el recurrente, sino en el artículo 229 ejusdem cuyo contenido y alcance fueron explicados en el auto recurrido. Con todo, esta disposición advierte que las medidas cautelares, dentro de las que se encuentra la suspensión provisional, pueden ser decretadas ***a solicitud de parte debidamente sustentada,*** *lo que equivale a decir que la solicitud debe ser suficientemente argumentada por quien la solicite.*

Cosa distinta es que en la demanda se indiquen las normas violadas y el concepto de la violación, ya que esto comporta uno de los requisitos exigidos para este tipo de líbelos según lo dispone el artículo 162 numeral 4 del CPACA, requisito que no puede confundirse con el establecido en el comentado artículo 229.

En el mismo sentido, el alcance de la expresión "procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado" contenida en artículo 231 Ibíd, se encuentra dirigida a explicar que la solicitud de suspensión provisional puede ser presentada en el líbelo introductorio o en un escrito aparate, y no a que la sustentación de la medida cautelar quede suplida con el concepto de violación de las normas indicadas en la demanda, dado que, se reitera, se trata de dos requisitos distintos para fines procesales disimiles: uno, el que se refiere a fundamentar jurídicamente la pretensión de nulidad del acto, el otro, a explicar las razones por las cuales el acto debe ser suspendido provisionalmente.

Lo anterior no quiere decir que los argumentos para cada uno de los fines procesales mencionados puedan coincidir, es más, si lo deseado por la actora era que el concepto de violación expuesto en la demanda sirviera de fundamento de la solicitud de suspensión provisional así debió expresarlo, máxime si se tiene en cuenta que en el escrito de la demanda dedicó un capítulo aparte a la suspensión provisional dentro del cual inscribió un subtítulo denominado "FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL", que fue al que se atuvo este Despacho para resolver la medida.

En otras palabras, la actora en su demanda dedicó un capítulo para sustentar la medida cautelar, a esa sustentación se remitieron la entidad demandada y el Despacho para descorrer el traslado y resolver la medida, sin embargo, ahora, viendo que esa sustentación en varios de sus apartes fue insuficiente, pretende que se tengan como tales los argumentos que utilizó para otros fines procesales.

> *Finalmente sobre este punto, debe ponerse de relieve que la sustentación de la solicitud de suspensión provisional no constituye un exceso ritual, se trata de la observancia de una carga procesal en cabeza de la actora cuyo cumplimiento es el deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia y a su vez la carga que exige la ley para que, entre otras, se garantice el derecho de defensa de la entidad que expidió el acto.*
>
> *A propósito del derecho de defensa de la entidad demandada, no se puede perder de vista que la nueva codificación trajo consigo la obligación de correr traslado a la parte demandada de la solicitud de suspensión, en ese orden, la carga impuesta para que se sustente la medida también se encuentra dirigida a que la entidad que profirió el acto conozca a ciencia cierta las razones esgrimidas por el actor para poder ejercer eficientemente su derecho de defensa. En ese contexto, no puede tenerse como sustentación de la medida cautelar la sola afirmación de que el acto administrativo desconoce normas de rango superior».*

Así las cosas, resulta evidente que la carga procesal para la procedencia de la solicitud de la medida provisional radica en la parte demandante, la cual debe sustentar jurídicamente la solicitud de suspensión provisional, situación que no acontece dentro del presente asunto, aunado a lo anterior, tampoco se acreditó el criterio de necesidad en el decreto de la medida, ni se probó si quiera de manera sumaria los perjuicios causados de no accederse a la misma, por lo que de no hacerse se estaría faltando a los requisitos señalados en los artículos 229 y 231 de la Ley 1437 de 2011, en ese orden, al no cumplirse con dicha carga procesal dentro del presente asunto, resulta procedente negar la solicitud.

Finalmente se advierte que el análisis efectuado en precedencia resulta aplicable a la solicitud de medida cautelar de «*suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician*», así como a la medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor GIRALDO SOTELO, en la que se ordene «*el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*».

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: NIÉGASE la SUSPENSIÓN PROVISIONAL «*del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician*», así como a la medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor

GIRALDO SOTELO, en la que se ordene «*el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*».

SEGUNDO: RECONÓCESE PERSONERÍA ADJETIVA a la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA para actuar como apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con el poder a ella conferido visible en el folio 6 del archivo «*005PronunciamientoMedida*» de la carpeta «*C02MedidaCautelar*».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
9cb2e9902e60108dd5de79d96960b8bbc4037815caab032fc4d95054fd5b784e
Documento generado en 15/04/2021 02:43:38 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00227-00**
DEMANDANTE:	**RICHARD NORBEY BARBOSA MORA**
DEMANDADO:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición y decidir sobre la concesión del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del señor RICHARD NORBEY BARBOSA MORA contra el auto de 11 de marzo de 2021 por medio del cual este Despacho se abstuvo de dar trámite al proceso de la referencia y, consecuentemente lo dio por terminado habida consideración que existe identidad de partes, hechos, pretensiones, concepto de la violación, estimación de la cuantía, pruebas y notificaciones con el proceso bajo radicado 25307-3333-001-2020-00184-00.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El señor **RICHARD NORBEY BARBOSA MORA**, por conducto de apoderado judicial, el 18 de diciembre de 2020[1] radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot (*«003CorreoReparto»*).

[1] Pues si bien la presentó el 17 de diciembre de 2020, ese día corresponde al día de la Rama Judicial por consiguiente se entiende presentada el día hábil siguiente.

2.2. Una vez efectuado el reparto, esto es, el 18 de diciembre de 2020, el proceso le correspondió a este Despacho (*«004ActaReparto»*).

2.3. Por auto de 4 de febrero de 2021 se inadmitió la demanda para que allegara ***i)*** la constancia del envío de la demanda y los anexos a la demandada, conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020, poniendo de presente que del mismo modo debería proceder cuando presentara el escrito de subsanación, ***ii)*** el acto administrativo demandado, esto es, el oficio No. DP-2020-007 de 28 de abril de 2020 junto con su constancia de publicación, comunicación, notificación o de ejecución, ***iii)*** El requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial y ***iv)*** los documentos relacionadas en el acápite de pruebas documentales desde la denominada «*Fotocopia cedula de ciudadanía en (1) folio*» hasta la denominada «*Acta de inicio al contrato de prestación de servicios No. 345 de 2017 en (1) folio*» (*«006AutoInadmite»*).

2.4. El 18 de febrero de 2021 la parte actora allegó el escrito de subsanación (*«008EscritoDemandante»*).

2.5. Mediante auto de 11 de marzo de 2021 este Despacho se abstuvo de dar trámite al proceso de la referencia y, consecuentemente lo dio por terminado habida consideración que advirtió la identidad de partes, hechos, pretensiones, concepto de la violación, estimación de la cuantía, pruebas y notificaciones con el proceso radicado bajo el No. 25307-3333-001-2020-00184-00 que se surtía en este mismo Juzgado (*«010AutoTerminaProceso»*).

2.6. El 15 de marzo de 2021 el apoderado judicial de la parte actora interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la decisión de 11 de marzo hogaño (*«012RecursoReposicionSubsidioApelacion»*).

2.7. El 5 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«013ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho abordará el estudio de la procedencia y oportunidad de los recursos incoados, para determinar si hay lugar a concederlos o a revocar la decisión adoptada en el auto atacado.

DEL RECURSO DE REPOSICIÓN:

Frente al recurso de reposición el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021) prevé:

> «**Artículo 242:** ***REPOSICIÓN.*** El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso»

En virtud de ello, resulta imperioso acudir a lo señalado en el artículo 318 del Código General del Proceso[2], en cuanto a la oportunidad para presentar el recurso, en donde se prevé que cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia, el recurso debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto.

---

[2] «**Artículo 318.** ***PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES.*** Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

Parágrafo. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente».

Para el caso en comento, el **auto recurrido de 11 de marzo de 2021** fue **notificado por estado al día siguiente**, es decir, en principio los tres días para presentar el recurso vencían el 17 de marzo siguiente, no obstante atendiendo el contenido del numeral segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021), el término de la notificación del auto notificado sólo empezará a contabilizarse a los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, por lo que finalmente la parte actora tenía como término máximo para recurrir la decisión hasta el **19 de marzo de 2021,** y como quiera que lo hizo el **15 de marzo hogaño**, se advierte presentado en término.

En ese orden, el Despacho puntualiza que el motivo de la interposición del recurso de reposición obedece, en concepto de la parte actora, a que si bien presentó una demanda cuyo radicado correspondió al No. 25307-3333-001-2020-00184-00 la misma fue inadmitida y subsanada de manera extemporánea, por lo que al evidenciar que procedía su rechazo decidió radicarla nuevamente con la finalidad de salvaguardar los derechos de su poderdante y para que no operara el fenómeno de la caducidad, escrito de demanda al que le correspondió el radicado No. 25307-3333-001-2020-00227-00, en ese orden informa que solicitó el desistimiento dentro de la primera nombrada, por lo que solicita se admita la demanda de la referencia y se continúe con el trámite subsiguiente.

Así las cosas, el Despacho advierte que si bien mediante proveído de 11 de marzo de 2021 se abstuvo de dar trámite al proceso de la referencia y, consecuentemente lo dio por terminado habida consideración que existió identidad de partes, hechos, pretensiones, concepto de la violación, estimación de la cuantía, pruebas y notificaciones con el proceso bajo radicado 25307-3333-001-2020-00184-00, lo cierto es que en dicho proceso, mediante proveído de 18 de marzo hogaño notificado al día siguiente, se accedió a la solicitud de retiro de la demanda, por lo que resulta procedente reponer la decisión adoptada mediante auto de 11 de marzo de 2021 y, proceder a resolver sobre la admisión de la demanda.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

En lo que respecta al recurso de apelación, el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021) prevé:

> «**Artículo 243.** ***Apelación.*** Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:
>
> 1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.
>
> 2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
> 3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.
>
> 4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.
>
> 5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.
>
> 6. El que niegue la intervención de terceros.
>
> 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
>
> 8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.
>
> **Parágrafo 1°.** El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.
>
> **Parágrafo 2°.** En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir.
>
> **Parágrafo 3°.** La parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente sustentado, podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la apelación.

> La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.
>
> Parágrafo 4°. Las anteriores reglas se aplicarán sin perjuicio de las normas especiales que regulan el trámite del medio de control de nulidad electoral».

Nótese como el auto recurrido no se encuentra enlistado dentro de los apelables, por lo que se abstendrá de conceder el mismo máxime cuando la decisión en controversia se repondrá.

Puestas en ese estadio las cosas, subsanada la demanda en los términos indicados en el auto de 4 de febrero de 2021, procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la misma que en ejercicio del medio de control de *nulidad y restablecimiento del derecho* presentó el señor **RICHARD NORBEY BARBOSA MORA**, por conducto de apoderado judicial, contra la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**, con el propósito de obtener la nulidad del oficio No. DP-2020-007 de 28 de abril de 2020 por medio de la cual la Entidad demandada negó al demandante la existencia de un contrato realidad y el consecuente pago de las acreencias laborales derivadas del mismo.

I. APTITUD FORMAL DE LA DEMANDA.

Una vez revisado el contenido de la demanda el Juzgado encuentra que satisface las exigencias previstas en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, habida consideración de que:

1.1. Están identificadas las partes y sus representantes (Folio 2 y 45 a 49 «*002DemandaPoderAnexos*»).

1.2. Las pretensiones son claras y precisas (Folios 3 a 6 «*002DemandaPoderAnexos*»).

1.3. Los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones fueron determinados y numerados (Folios 6 a 11 «*002DemandaPoderAnexos*»).

1.4. Los fundamentos de derecho se encuentran debidamente enunciados y argumentados (Folios 11 a 38 «*002DemandaPoderAnexos*»).

1.5. Allegó las pruebas documentales que se encuentran en su poder y que pretende hacer valer en el presente proceso (Folios 50 a 219 «*002DemandaPoderAnexos*» y 56 a 343 «*008EscritoDemandante*»).

1.6. Realizó una estimación razonada de la cuantía, que resulta necesaria a efectos de determinar la competencia en el presente caso, la cual estimó en $14.719.644 (Folios 42 y 43 «*002DemandaPoderAnexos*»).

1.7. Indicó el lugar y la dirección de las partes para efectos de las notificaciones (Folios 43 y 44 «*002DemandaPoderAnexos*»).

1.8. Cumplió con la obligación descrita en el inciso 4º del artículo 6º del Decreto 806 de 4 de junio de 2020, es decir, acreditó el deber de haber enviado copia de la demanda y de sus anexos a la entidad accionada, así como el escrito de subsanación (Folios 3 y 343 «*008EscritoDemandante*»).

II. COMPETENCIA.

2.1. De conformidad con el numeral 2º del artículo 155 e inciso final del artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (factor funcional) este Despacho es competente para conocer del presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a que la cuantía no excede los 50 SMMLV.

2.2. En virtud del numeral 3º del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, también se encuentra demostrada la competencia de esta Agencia Judicial debido a que el

demandante laboró en la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ ubicada en Fusagasugá Cundinamarca (Folios 51 a 81 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado»).

III. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

El numeral 1º del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa que el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá presupuesto procesal cuando en la demanda se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales, por lo que en principio la conciliación extrajudicial se constituiría en requisito de procedibilidad.

En el presente evento el demandante solicita se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. DP-2020-007 de 28 de abril de 2020, notificado el 6 de mayo siguiente, en el que la Entidad demandada le negó el pago de las acreencias laborales derivadas de la existencia de un contrato de trabajo realidad.

Bajo ese contexto, con el fin de acreditar el agotamiento del requisito de procedibilidad, se allegó la constancia de conciliación prejudicial radicada con el No. 094-2020, siendo convocante el señor RICHARD NORBEY BARBOSA MORA y convocado la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio, por lo que de este modo, se encuentra acreditado el agotamiento del requisito de procedibilidad exigido para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (Folios 71 a 74 del archivo denominado «*008EscritoDemandante*» del expediente digitalizado»).

IV. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

En relación con la oportunidad para presentar la demanda, revisando el contenido del literal d) del numeral 2º del artículo 164 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho el término para presentar la demanda es de 4 meses contados a partir del día siguiente a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo según el caso.

En este evento, el acto administrativo demandado, le fue notificado al actor el 6 de mayo de 2020[3], por lo que a partir del 7 del mismo mes y año, empezó a correr el término legal previsto en la Ley 1437 de 2011, la solicitud de conciliación fue presentada el 10 de junio de 2020[4], la audiencia y la constancia se celebró y expidió el 8 de octubre de 2020[5], por lo que el término de caducidad para interponer la demanda vencía el día 12 de enero de 2021, y como la demanda fue presentada el 18 de diciembre de 2020[6] ante a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot (Reparto), se concluye que fue presentada dentro de la oportunidad procesal.

Por otra parte, es del caso precisar que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del 16 de marzo de 2020 en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 se ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del 1º de julio de 2020.

Así también, se recuerda que el Decreto 564 de 15 de abril de 2020 suspendió los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial y procesal desde el 16 de marzo de 2020 y hasta cuando el Consejo Superior de la Judicatura dispusiera la reanudación de los términos judiciales, es decir hasta el 30 de junio de 2020.

---

[3] Folio 4 del archivo denominado «*008EscritoDemandante*»
[4] Folio 71 del archivo denominado «*008EscritoDemandante*»
[5] Folio 73 del archivo denominado «*008EscritoDemandante*»»
[6] Archivos denominados «*003CorreoInformaReparto*» y «*004ActaReparto*»

V. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA.

5.1. Legitimación por Activa.

De conformidad con el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las entidades públicas, los particulares y demás sujetos de derecho que tengan capacidad para comparecer al proceso pueden obrar como demandantes por medio de sus representantes debidamente acreditados, para reclamar ante los jueces el derecho del que son titulares.

El artículo 138 *ibidem*, faculta a toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica a solicitar la nulidad de un acto particular y que se le restablezca el derecho.

En el presente caso, quien se presenta en calidad de demandante es el señor RICHARD NORBEY BARBOSA MORA, a quien se le negó el pago de las acreencias laborales derivadas de la presunta existencia de un contrato de trabajo realidad a través del Oficio No. DP-2020-007 de 28 de abril de 2020.

Por lo tanto, resulta claro que la parte actora se encuentra legitimada en la causa para comparecer al presente proceso en calidad de demandante, siendo representada, por el doctor JORGE ENRIQUE GARZÓN RIVERA, a quien se le reconoció personería adjetiva para actuar mediante auto de 4 de febrero de 2021.

5.2. Legitimación por Pasiva.

Atendiendo al contenido del artículo 159 *ibidem*, en el presente caso deberá concurrir en condición de demandado la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ,** autoridad administrativa que profirió el acto administrativo demandado, por lo que es la que tiene la legitimación en la causa por pasiva en el *sub iudice.*

VI. ANEXOS DE LA DEMANDA.

La parte demandante allegó la prueba documental que, adujo, se encontraba en su poder y que pretende hacer valer en el presente proceso para probar su derecho. Téngase en cuenta que el inciso 3º del artículo 6º del Decreto 806 de 2020 suprimió el requisito de que la parte demandante allegara las copias para efectos de los traslados para la notificación de la demanda y para el Ministerio Público como quiera que las demandas se presentan por medios digitales.

En consecuencia y, de conformidad con el artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REPONER la decisión adoptada mediante auto de 11 de marzo de 2021 mediante el cual este Despacho se abstuvo de dar trámite al proceso de la referencia y, consecuentemente lo dio por terminado, conforme a lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: ADMÍTESE la demanda que en ejercicio del *medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho* presentó el señor **RICHARD NORBEY BARBOSA MORA,** por conducto de apoderado judicial, contra la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ,** con el propósito de que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. DP-2020-007 de 28 de abril de 2020, notificado el 6 de mayo siguiente, en el que la Entidad demandada le negó el pago de las acreencias laborales derivadas de la existencia de un contrato de trabajo realidad.

TERCERO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE en la forma prevista en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021 al **GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ,** o a quien haga sus veces o este haya delegado

la facultad de recibir notificación y al señor **PROCURADOR DELEGADO** en lo judicial ante este Despacho.

CUARTO: ADVIÉRTESE al **GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ** que durante el término para dar respuesta a la presente demanda, **DEBERÁ** allegar el expediente administrativo que contenga los **antecedentes de la actuación objeto del proceso** y que tenga en su poder. Lo anterior de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: CÓRRASE TRASLADO de la demanda por el término de treinta (30) días de conformidad con el artículo 172 ibídem al **GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ** y al señor **PROCURADOR DELEGADO** en lo judicial ante este Despacho, el cual comenzará a correr según lo previsto en los artículos 199 y 200 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: ORDÉNASE a la Secretaría del Despacho dar estricto cumplimiento a los previsto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO: REMÍTASE a través del correo electrónico institucional de este Juzgado la copia del presente auto admisorio, de la demanda y de sus anexos a la parte demandada y al Ministerio Público. Se advierte que una de las copias allegadas, se mantendrá en la Secretaría de este Despacho, a disposición de los notificados.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f6254e843248813cea823ee8234cf0aeb30c7b4cae5123317d2c2eca6fb7a2f9
Documento generado en 15/04/2021 02:44:18 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00004-00**
DEMANDANTE:	**MANUEL ESTEBAN ORTIZ AMAGORA**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar presentada por el apoderado judicial de la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Con el líbelo introductorio allegado a este Despacho el 12 de enero de 2021 el apoderado judicial del demandante solicitó (*«002EscritoMedidaCautelar»* del cuaderno *«C02MedidaCautelar»* del expediente digitalizado):

> *«1. De forma respetuosa solicito al despacho proferir medida cautelar de suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician.*
>
> *2. De igual manera, solicito se profiera medida cautelar de carácter patrimonial, a favor de **MANUEL ESTEBAN ORTIZ AMAGORA,** identificado con C.C. 11.813.425 de Quibdó en el cual se ordene el pago*

> *provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados».*

1.2. Mediante auto de 11 de marzo de 2021 se corrió traslado de la solicitud de medida cautelar de *«suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician»* y de una medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor MANUEL ESTEBAN ORTIZ AMAGORA, en la que se ordene *«el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados»* a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL (*«004AutoCorreMedida»* del cuaderno *«C02MedidaCautelar»* del expediente digitalizado).

1.3. El 24 de marzo de 2021 se notificó a la parte demandada el auto admisorio de la demanda junto con el auto que dispuso correr traslado de la medida cautelar (*«006NotificacionPersonal»* del cuaderno del cuaderno *«C02MedidaCautelar»* del expediente digitalizado).

1.4. El 8 de abril de 2021 la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA, en su condición de apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, descorrió el traslado de la medida cautelar solicitada por el demandante manifestando su oposición y solicitando que la misma sea denegada. Para el efecto, en síntesis, expuso (*«007PronunciamientoMedida»* del cuaderno del cuaderno *«C02MedidaCautelar»* del expediente digitalizado):

1.4.1. En cuanto a la solicitud elevada por el demandante, indicó que ***i)*** *no* estuvo motivada, ***ii)*** no señaló las normas que servían como sustento para ello, evidenciándose *«una pobre argumentación»* y, ***iii)*** no indicó los actos administrativos censurados o que pretende sean suspendidos, razones por las cuales señaló que es imposible pronunciarse o ejercer el derecho de defensa y contradicción ante la solicitud de medida cautelar, pues además, no se cuenta con los actos administrativos enjuiciados y que se pretenden sean suspendidos provisionalmente.

1.4.2. Luego de referirse al artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señaló que quien solicita la medida cautelar debe asumir la carga de argumentación y probatoria que garanticen que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender la valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia.

1.4.3. Posteriormente, previo a señalar los requisitos para decretar la medida cautelar indicó que para que la misma proceda, resulta necesario que del análisis realizado por el Juez, se concluya que existe violación a las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud, resultando claro que en principio no existe vulneración que pueda ser advertida en este momento a través del mecanismo de confrontación que prevé el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, por lo que indicó que debe negarse la solicitud de suspensión provisional solicitada.

1.5. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer («*008ConstanciaDespacho*» de la carpeta «*C02MedidaCautelar*»).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1. GENERALIDADES:

2.1.1. MEDIDAS CAUTELARES EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

2.1.1.1. Las medidas cautelares en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentran contempladas en los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y son aplicables en aquellos casos en que se consideren «*necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia*» según señala el mismo artículo 229.

Al tenor del artículo 230, que enlista aquellas que pueden ser decretadas, pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. Al respecto, ha señalado el Consejo de Estado:

> *«Avanzando en la tipología desarrollada por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se diferencia entre medidas cautelares preventivas, tendientes a operar como una suerte de acción impeditiva para que no se pueda consolidar una afectación a un derecho; conservativas que buscan mantener o salvaguardar un statu quo ante; anticipativas, en donde se pretende satisfacer por adelantado la pretensión perseguida por el demandante, mediante una decisión que propiamente correspondería al fallo que ponga fin al proceso y que se justifica en tanto que de no adoptarse se incurriría en un perjuicio irremediable para el actor, y de suspensión que corresponde a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.»*[1] (Subraya el Despacho)

2.1.1.2. Sobre los criterios para su procedencia, ha señalado el Alto Tribunal:

> *«…en cuanto a los criterios que debe seguir el juez contencioso administrativo para determinar la procedencia de una medida cautelar, es preciso reconocer que éste cuenta con un espacio de discrecionalidad para adoptarla, así como para modular sus efectos en el caso concreto. En este contexto, debe el Juez tener en cuenta el principio de proporcionalidad como, de hecho, se desprende, además de las exigencias constitucionales y convencionales, de la normativa sobre las medidas cautelares al establecer como uno de los requisitos para el decreto de la cautela que "el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla" (artículo 231 CPAyCA)* (Subraya el Despacho)
>
> *3.10.- Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleja la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora*[2]*, debe proceder a un estudio de ponderación*

---

[1] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil quince (2015). Radicación número: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057).

[2] Cita de cita: *Como ya se ha sostenido, estos principios del periculum in mora y el fumus boni iuris significan que "siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que*

y sus subprincipios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad[3]*.»*[4]

2.1.2. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES

El artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a los requisitos que deben tenerse en cuenta al momento del decreto de la medida cautelar dispone:

«**Artículo 231.** ***REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES.***

"Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

---

ponga fin al litigio.". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 27 de febrero de 2013, exp. 45316 (entre otras decisiones similares).

[3] Cita de cita: *En cualquier clase de decisiones jurídicas debe considerarse la razonabilidad de esta, que no solo se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga en irrazonable, desproporcionada o, en suma, contraria a la constitución; se trata, entonces, de adoptar una decisión que satisfaga el criterio de aceptabilidad; y para lograr ello en buena medida contribuye la valoración de los principios constitucionales.*

[4] Ibídem.

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios».

De lo anterior deviene que la procedencia de la suspensión provisional se presenta cuando la violación de las normas invocadas surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o de las pruebas que el accionante haya aportado para que sea decretada la medida cautelar.

2.1.3. MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PATRIMONIAL

En cuanto a las medidas cautelares de carácter patrimonial, si bien no existe una definición para las mismas, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto No. 2015-00554 de 6 de octubre de 2017 señaló:

«Cuando el mencionado precepto se remite a medidas cautelares de carácter patrimonial, se está refiriendo a medidas que directa e inmediatamente afectan el patrimonio de las personas naturales o jurídicas lo cual no ocurre con la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos. pues estos tienen una naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso evitando transitoriamente, que surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el estado de derecho, lo que claramente excluye su patrimonialidad al no afectar el patrimonio de las personas, sino despojando de sus efectos, temporalmente, a un acto administrativo preliminarmente, considerado como contrario al ordenamiento jurídico. Cuestión diferente es que, indirectamente, la suspensión de los efectos del acto administrativo traiga efectos en el patrimonio de las personas naturales o jurídicas que la han solicitado o que resultan afectadas con la respectiva medida. En consecuencia, se precisa que el estudio del carácter patrimonial de la medida cautelar solicitada con la cual se pretende obviar el requisito de procedibilidad de la conciliación administrativa, debe realizarse conforme a lo solicitado en la demanda empero, ese análisis no puede llevarse a cabo cuando se trata de la medida de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, pues la misma no tiene una naturaleza patrimonial».

2.2. CASO CONCRETO

Descendiendo al caso concreto, se observa que la solicitud de suspensión provisional si bien no fue señalada taxativamente por la parte actora, recae en los efectos del acto administrativo innominado de 17 de julio de 2020, proferido por el GESTOR Y ORIENTADOR DE SERVICIO AL CIUDADANO DIPER

NÓMINA DEL EJÉRCITO NACIONAL en virtud del cual negó el reconocimiento y reajuste salarial del 20% y la prima de actividad del actor.

No obstante, el apoderado judicial de la parte actora no expuso las razones que argumentaran su solicitud de decreto de la medida cautelar, es decir obvió la disposición contenida en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, relacionada con que para la procedencia de la medida a petición de parte tiene que estar «*debidamente sustentada*».

Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante reciente proveído de 1° de julio de 2020 señaló:

> *«La exigencia de sustentar en forma expresa y concreta la referida solicitud se explica por su propia naturaleza dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos. Ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor y sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello».*

Ahora, debe señalarse que en proveído de 14 de febrero de 2019 Sección Primera del Consejo de Estado señaló:

> *«Para resolver se considera que no están presentes los requisitos señalados en los articulo 229 y 231 del C.P.A.C.A. para que sea procedente el decreto de la suspensión provisional solicitada, toda vez que no se sustentó en la forma en que lo ordena la citada disposición, omisión ésta que hace imposible efectuar la comparación normativa para deducir de ella la presunta violación del ordenamiento jurídico que propone el demandante.*
>
> *La exigencia de sustentar en forma expresa y concreta la referida solicitud se explica por su propia naturaleza, dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos.*
>
> *Ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor, sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello. Resulta altamente útil traer a colación el análisis que hizo el Despacho en auto del 21 de octubre*

de 2013 expedido en el proceso número 11001 0324 000 2012 00317 00, en el cual se abordó el tema en un asunto semejante:

"En efecto, el requisito consistente en la sustentación de la medida cautelar no se encuentra en el artículo 231 del CPACA que trae a colación el recurrente, sino en el artículo 229 ejusdem cuyo contenido y alcance fueron explicados en el auto recurrido. Con todo, esta disposición advierte que las medidas cautelares, dentro de las que se encuentra la suspensión provisional, pueden ser decretadas ***a solicitud de parte debidamente sustentada,*** *lo que equivale a decir que la solicitud debe ser suficientemente argumentada por quien la solicite.*

Cosa distinta es que en la demanda se indiquen las normas violadas y el concepto de la violación, ya que esto comporta uno de los requisitos exigidos para este tipo de líbelos según lo dispone el artículo 162 numeral 4 del CPACA, requisito que no puede confundirse con el establecido en el comentado artículo 229.

En el mismo sentido, el alcance de la expresión "procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado" contenida en artículo 231 Ibíd, se encuentra dirigida a explicar que la solicitud de suspensión provisional puede ser presentada en el líbelo introductorio o en un escrito aparate, y no a que la sustentación de la medida cautelar quede suplida con el concepto de violación de las normas indicadas en la demanda, dado que, se reitera, se trata de dos requisitos distintos para fines procesales disimiles: uno, el que se refiere a fundamentar jurídicamente la pretensión de nulidad del acto, el otro, a explicar las razones por las cuales el acto debe ser suspendido provisionalmente.

Lo anterior no quiere decir que los argumentos para cada uno de los fines procesales mencionados puedan coincidir, es más, si lo deseado por la actora era que el concepto de violación expuesto en la demanda sirviera de fundamento de la solicitud de suspensión provisional así debió expresarlo, máxime si se tiene en cuenta que en el escrito de la demanda dedicó un capítulo aparte a la suspensión provisional dentro del cual inscribió un subtítulo denominado "FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL", que fue al que se atuvo este Despacho para resolver la medida.

En otras palabras, la actora en su demanda dedicó un capítulo para sustentar la medida cautelar, a esa sustentación se remitieron la entidad demandada y el Despacho para descorrer el traslado y resolver la medida, sin embargo, ahora, viendo que esa sustentación en varios de sus apartes fue insuficiente, pretende que se tengan como tales los argumentos que utilizó para otros fines procesales.

Finalmente sobre este punto, debe ponerse de relieve que la sustentación de la solicitud de suspensión provisional no constituye un exceso ritual, se trata de la observancia de una carga procesal en cabeza de la actora cuyo cumplimiento es el deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia y a su vez la carga que exige la ley para que, entre otras, se garantice el derecho de defensa de la entidad que expidió el acto.

A propósito del derecho de defensa de la entidad demandada, no se puede perder de vista que la nueva codificación trajo consigo la obligación de correr

> *traslado a la parte demandada de la solicitud de suspensión, en ese orden, la carga impuesta para que se sustente la medida también se encuentra dirigida a que la entidad que profirió el acto conozca a ciencia cierta las razones esgrimidas por el actor para poder ejercer eficientemente su derecho de defensa. En ese contexto, no puede tenerse como sustentación de la medida cautelar la sola afirmación de que el acto administrativo desconoce normas de rango superior».*

Así las cosas, resulta evidente que la carga procesal para la procedencia de la solicitud de la medida provisional radica en la parte demandante, la cual debe sustentar jurídicamente la solicitud de suspensión provisional, situación que no acontece dentro del presente asunto, aunado a lo anterior, tampoco se acreditó el criterio de necesidad en el decreto de la medida, ni se probó si quiera de manera sumaria los perjuicios causados de no accederse a la misma, por lo que de no hacerse se estaría faltando a los requisitos señalados en los artículos 229 y 231 de la Ley 1437 de 2011, en ese orden, al no cumplirse con dicha carga procesal dentro del presente asunto, resulta procedente negar la solicitud.

Finalmente se advierte que el análisis efectuado en precedencia resulta aplicable a la solicitud de medida cautelar de «*suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician*», así como a la medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor MANUEL ESTEBAN ORTIZ AMAGORA, en la que se ordene «*el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*».

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: NIÉGASE la SUSPENSIÓN PROVISIONAL «*del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician*», así como a la medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor MANUEL ESTEBAN ORTIZ AMAGORA, en la que se ordene «*el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*».

SEGUNDO: RECONÓCESE PERSONERÍA ADJETIVA a la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA para actuar como apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, de

conformidad con el poder a ella conferido visible en el folio 6 del archivo «*007PronunciamientoMedida*» de la carpeta «*C02MedidaCautelar*».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
268a1fce5765d898c0ba9662309e45b7eccab8ab548a232add663b63257f36d8
Documento generado en 15/04/2021 02:43:40 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00008-00**
DEMANDANTE:	**JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Procede el Despacho a decidir sobre la aprobación de la conciliación extrajudicial realizada ante la Procuraduría 139 Judicial II para Asuntos Administrativos de 15 de enero de 2021, en la que obra como convocante el señor **JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS,** por conducto de apoderado Judicial, y como convocada la **NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG-.**

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. El 7 de octubre de 2020 fue radicada vía correo electrónico ante la PROCURADURÍA 199 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA DE GIRARDOT la solicitud de conciliación extrajudicial que por conducto de apoderado Judicial presentó el señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS (Folios 24 y 25 «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*»).

1.2. El apoderado judicial del señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS en la mencionada convocatoria solicitó (Folio 5 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»):

> *«PRIMERO: Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto configurado el 2 de junio de 2020, frente a la petición radicada el 2 de marzo de 2020 mediante radicado 2020038094 del 2 de marzo de 2020, la cual niega el reconocimiento de la SANCIÓN POR MORA en el pago de las cesantías.*
>
> *SEGUNDO: El reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 1071 de 2006 a mi mandante, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados a partir del día siguiente al vencimiento de los setenta (70) días hábiles según el caso, causados desde el momento en que se radicó la solicitud de la cesantía parcial o definitiva ante la entidad y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma.*
>
> *TERCERO: Que de conformidad con el artículo 187 del C.P.A.C.A, sobre el monto de la SANCIÓN POR MORA reclamada, se ordene el reconocimiento del respectivo ajuste de valor desde la fecha en que cesó la mora, es decir, el 21 de noviembre de 2019, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia.*
>
> *(…)*».

1.3. El 8 de octubre de 2020 el PROCURADOR 199 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE GIRARDOT admitió la referida solicitud de conciliación extrajudicial (Folio 25 a 28 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»).

1.4. El 30 de noviembre de 2020, en virtud de la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del Covid-19, se llevó a cabo de manera «NO PRESENCIAL» la audiencia de conciliación extrajudicial de la referencia, la cual fue suspendida, se fijó nueva fecha y, se ordenó «*Primero.- Advirtiéndose de la posibilidad de la existencia de ánimo conciliatorio en el presente evento, ACCEDER a lo solicitado por las partes, en atención al artículo 2.2.4.3.1.1.10 del Decreto 1069 de 2015 ¨Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho¨, de donde se encuentra compilado el artículo 10º del Decreto 1716 de 2009 ¨Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001¨*» (Folios 75 a 79 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»).

1.5. El 10 de diciembre de 2020, se reanudó de manera «NO PRESENCIAL» la audiencia de conciliación extrajudicial de la referencia, la cual fue nuevamente

suspendida, se fijó nueva fecha y, se ordenó «*Primero.- SUSPENDER la presente audiencia de conciliación, conforme a la parte motiva de la presente decisión.- Segundo.- SOLICITAR RESPETUOSAMENTE al Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, RECONSIDERAR la fórmula conciliatoria propuesta en el presente caso, a fin de realizar la revisión de la liquidación de la propuesta, conforme los razonamiento esbozados por la apoderada sustituta de la parte convocante, de forma tal que la propuesta contenga una obligación clara, expresa y actualmente exigible, para lo cual deberá tener en cuenta las reglas señaladas por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado en la sentencia de unificación por importancia jurídica Nº CE-SUJ-SII-012-2018 de fecha dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018) aplicable al caso en concreto (…)*» (Folios 91 a 96 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»).

1.6. El 15 de enero de 2021, se reanudó también de manera «NO PRESENCIAL» la audiencia de conciliación extrajudicial de la referencia, en la que se llegó al siguiente acuerdo (Folios 126 a 133 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»):

> «*(…) 1) Que la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO pagará o consignará a favor de JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS, la suma total de Dieciocho Millones Ciento Treinta y Dos Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos Moneda Corriente ($18.132.948, M/CTE), por concepto de sanción moratoria en atención al retardo en el reconocimiento y pago de la solicitud de cesantías realizada ante dicha entidad, sin lugar a reconocimiento alguno de intereses moratorios ni de indexación alguna, para lo cual se propone como fecha máxima para efectuar el pago dentro del mes siguiente a la comunicación del auto de aprobación judicial del acuerdo conciliatorio, con cargo a los títulos de Tesorería de conformidad con lo establecido en la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) (…)*».

Puestas en ese estadio las cosas, y para emitir pronunciamiento alguno respecto de la aprobación o improbación del acta de conciliación es del caso hacer las siguientes,

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1 DE LA CONCILIACIÓN COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

El artículo 116 de la Carta Magna prevé la conciliación como uno de los mecanismos que permiten la solución ágil y efectiva para la solución de los conflictos que se suscitan entre particulares y, entre el Estado y aquellos.

La Conciliación lleva inmersa la vigencia de los principios de economía, celeridad, eficiencia, eficacia en la solución de los conflictos y como garantía del acceso efectivo a la administración de justicia.

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, podrán conciliar, total o parcialmente, prejudicial o judicialmente, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En materia Contenciosa Administrativa la Ley autoriza el uso de este mecanismo, siempre que se acrediten unas exigencias especiales que deben ser valoradas. Al respecto la jurisprudencia del Consejo de Estado[1] ha sido reiterada al referirse que el acuerdo conciliatorio se someterá a los siguientes supuestos de aprobación:

> *«(…)*
>
> *- Que no haya operado el fenómeno procesal de la caducidad de la acción (art. 61 ley 23 de 1991, modificado por el art. 81 ley 446 de 1998).*
>
> *- Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 Ley 23 de 1991 y 70 Ley 446 de 1998).*
>
> *- Que las partes estén debidamente representadas y que tales representantes tengan capacidad para conciliar.*

[1]Ver, entre otras, las providencias radicadas bajo los números: 21.677, 22.557, 23.527, 23.534 y 24.420 de 2003.

-Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (art. 65ª Ley 23 de 1991 y art. 73 Ley 446 de 1998).[2]

- Que el solicitante actúe a través de abogado titulado (parágrafo 3 del artículo 1 de la Ley 640 de 2001).

- Que tratándose de conciliaciones con entidades y organismos de derecho público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y de los entes descentralizados de estos mismos niveles, deberán aportar el acta del COMITÉ DE CONCILIACIÓN (artículo 65B de la Ley 23 de 1991, adicionado por el artículo 75 de la ley 443 de 1998)[3]*».*

2.2. DE LA COMPETENCIA EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

El artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, además de los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.

2.3 DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD CONVOCADA

Descendiendo al *sub - examine*, quien obra como Entidad convocada es el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, Entidad que cuenta con independencia patrimonial, sin personería jurídica y cuyos recursos son administrados por una Sociedad de Economía

[2]Consejo de Estado. Auto del 21 de octubre de 2009, radicado 36.221, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

[3] En la exposición de motivos al proyecto de ley 127/90 Cámara "por la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales" (ley 23 de 1991) el gobierno señaló: "5. Conciliación en el campo contencioso-administrativo...La conciliación se realizará bajo la responsabilidad del Fiscal de la Corporación, y bajo el control posterior de la Sala del Tribunal o del Consejo que corresponda, para garantizar a plenitud los derechos del Estado." (SENADO DE LA REPÚBLICA, Historia de las leyes, Legislatura 1991-1992 Tomo III, Pág. 88 y 89, subrayas no originales). Tan importante se consideró el control de legalidad posterior que luego en la ponencia para primer debate al citado proyecto el Representante a la Cámara Héctor Elí Rojas indicó: "...El pliego de modificaciones incluye mecanismos de control jurisdiccional sobre la conciliación prejudicial para, en todo caso, tener la seguridad de que los intereses del Estado no resulten lesionados o traicionados en dicho trámite" (Historia de las leyes, Op. Cit. p. 97).

Mixta, de carácter indirecto del orden nacional, (Fiduciaria La Previsora S.A.), vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica y autonomía administrativa.

Para el efecto, es del caso hacer referencia a lo manifestado por la H. Corte Constitucional en la Sentencia C-928/06[4], el cual describe la naturaleza jurídica del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, de la siguiente forma:

> «***3. EL RÉGIMEN ESPECIAL PRESTACIONAL DEL MAGISTERIO.***
>
> *(…)*
>
> *En cuanto a la naturaleza jurídica del Fondo, la Corte ha considerado que (i)* ***se trata de una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, sin personería jurídica y cuyos recursos son administrados por una Sociedad de Economía Mixta, de carácter indirecto del orden nacional, (Fiduciaria La Previsora S.A.), vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica y autonomía administrativa[5]; (ii) es el encargado tanto del reconocimiento de dichas prestaciones, con un visto bueno previo de la fiduciaria, como de su pago[6];*** *(iii) al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio tiene asignada la función, entre otras, de determinar la destinación de los recursos y el orden de prioridades en que serán atendidas las prestaciones sociales frente a la disponibilidad financiera del Fondo para garantizar así una distribución equitativa de los recursos, si existe disponibilidad presupuestal se imparte visto bueno a las solicitudes[7]; y (iv) hay que compaginar el subsistema de los servicios médicos asistenciales del Magisterio con las normas de la Constitución Política y no se puede afirmar por consiguiente que aquél ha quedado por fuera del sistema constitucional de seguridad social en salud[8] (…)*» (Destaca el Despacho).

2.4. DE LA COMPETENCIA DEL DESPACHO PARA RESOLVER EL PRESENTE ASUNTO.

---

[4] Sala Plena de la Corte Constitucional, Sentencia C-928, Referencia: expediente D-6355, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, demandante Mario Augusto Prieto García, Magistrado Ponente Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil seis (2006).
[5] Auto 167 de 2005
[6] Sentencia T- 1059 de 2002.
[7] Sentencia T- 255 de 2000.
[8] Sentencia T- 727 de 1998.

Este despacho es competente para decidir sobre la legalidad del acuerdo conciliatorio *sub-lite*, por cuanto que el último lugar de prestación de servicios del convocante es en el I.E.D. SALESIANO MIGUEL UNIA del MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, el cual se ubica dentro de su comprensión territorial[9]; se suscitó con ocasión al reconocimiento de mora en el pago de cesantías de un empleado público vinculado bajo una relación legal y reglamentaria y, el monto de la pretensión y del pago acordado, respecto de la sanción por mora, no supera los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.5. DE LOS REQUISITOS PARA APROBAR LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

2.5.1. Caducidad de la Acción:

Tal como lo consagra numeral 1º literal c y d del artículo 164 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuando se trate de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo.

En el presente asunto la caducidad no operó, dado que se reclama la nulidad del acto ficto o presunto negativo producto del silencio administrativo, que se configuró por la falta de respuesta a la petición radicada ante la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- por el señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS el 2 de marzo de 2020, negando de esta forma el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006 (Folios 17 a 19 *«002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»*).

2.5.2 Derechos económicos disponibles por las partes:

[9] Conforme acredita la primera página de la Resolución visible en el folio 10 del archivo denominado *«002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»*.

Se trata del pago de unos derechos laborales en favor de la Convocante.

En este sentido, las partes acordaron en relación con la suma de dinero reclamada, que el tiempo de pago después de la aprobación judicial de la conciliación seria de un mes después de comunicado el auto de aprobación judicial, aunado a que no se reconocería valor alguno por concepto de indexación y, además, que se pagaría la indemnización con cargo a los títulos de tesorería de la Entidad (Folios 126 a 133 «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*»).

2.5.3. Representación de las partes:

Verificado en el expediente que tanto el señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS, como la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- se encuentran habilitados para actuar, con capacidad suficiente para ser parte y comparecer al proceso, que lo hacen por medio de apoderado judicial, y que han conferido a sus apoderados poder expreso para conciliar.

- **Convocante:** Representante judicial, doctora STEFFANY MÉNDEZ MORENO (Folio 45 «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*»[10]).

- **Convocado:** Representante judicial, doctora MAIRA ALEJANDRA PACHÓN FORERO (Folio 97 del archivo del archivo denominado «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*[11]).

[10] Sustitución de poder conferido por el Doctor RUBÉN DARÍO GIRALDO MONTOYA a quien le fue conferido mandato por la convocante (Folios 7 y 8 del archivo «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»). En dicho mandato de manera expresa se consagró que sus apoderados quedaban facultados para recibir, conciliar, transigir, desistir, renunciar, sustituir.

[11] Mediante la sustitución de poder que otorgo el doctor LUIS ALFREDO SANABRIA RÍOS a la doctora MAIRA ALEJANDRA PACHÓN FORERO se estableció que la apoderada tendría las facultades a él conferidas, las cuales se pueden ver con precisión en la Escritura Pública 0062, no obstante, en el Folio 102 del mismo se archivó de manera puntual se encuentra que el doctor SANABRIA RÍOS «*queda expresamente habilitado para conciliar, desistir y transigir dentro de las actuaciones judiciales y/o administrativas que se adelanten en contra*» de la sociedad que representa.

2.5.4. Pruebas necesarias para el acuerdo conciliatorio:

Se encuentra probado que el señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS, el 7 de diciembre de 2018, mediante radicado número 2018-CES-678781 solicitó el reconocimiento y pago de una cesantía parcial por los servicios prestados como docente (Según se desprende de la Resolución visible a folios 10 a 12 «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*»).

Que en virtud de dicha solicitud, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, en nombre y en representación de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, expidió la Resolución No. 001463 de 11 de octubre de 2019, mediante la cual se le reconoció al señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS el pago de unas cesantías parciales (folios 10 a 12 «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*» del expediente digitalizado).

Que en cumplimiento de la anterior resolución, el 21 de noviembre de 2019 le fueron desembolsadas las cesantías parciales al convocante (Folio 14 «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*» del expediente digitalizado).

Y, mediante la petición radicada el 2 de marzo de 2020 el señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS solicitó ante la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no haber pagado a tiempo el valor reconocido por concepto de las cesantías parciales, petición frente a la cual la Entidad convocada guardó silencio, configurándose el silencio administrativo negativo (Folios 17 a 19 «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*» del expediente digitalizado).

2.5.5. Acta del Comité de Conciliación:

El 15 de enero de 2021 se allegó la correspondiente acta del comité de conciliación de 27 de noviembre de 2020, dentro de la cual se manifestó el ánimo conciliatorio por parte de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, con el señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS (Folio 117 «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*» del expediente digitalizado).

2.6. DE LA SANCIÓN MORATORIA

La indemnización moratoria se concibe como una sanción a cargo del empleador moroso y a favor del trabajador, establecida con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía.[12]

Al respecto la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 del 2006, establece:

> «**Artículo 1º.** Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
>
> **Parágrafo.** En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
>
> Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
>
> **Artículo 2º.** La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías

[12] Consejo de Estado. C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia del 28 de junio de 2012, Radicación número: 08001-23-31-000-2009-00718-01(1682-11).

> definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
> **Parágrafo.** En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este»

De los artículos transcritos, se deduce que, si se trata del auxilio de cesantía de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, la entidad pública obligada al pago dispone de un término de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de solicitud de liquidación de cesantías, para producir el acto administrativo que ordene su liquidación y, de cuarenta y cinco (45) días hábiles, después de la ejecutoria de dicho acto administrativo, para proceder a su pago.

Si dentro de los términos establecidos la entidad obligada al pago de las cesantías no lo hiciera, seria sancionada a favor del solicitante, con un pago del equivalente a un día de salario por cada día de retraso, en el pago de la cesantía y hasta que se haga efectivo el mismo.

2.6.1. Del reconocimiento de la sanción moratoria al personal docente oficial en Colombia.

En cuanto al reconocimiento y pago de las cesantías del personal docente la Ley 91 de 1989 en su artículo 9º, establece:

> «Las Prestaciones Sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, función que delegará de tal manera que se realice en las entidades territoriales».

Así mismo, la Ley 115 de 1994 en el artículo 180, dispone que:

> «**Artículo 180.** ***RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.*** Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por

> intermedio del Representante del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará, además, la firma del Coordinador Regional de prestaciones sociales»

Así las cosas, le corresponde al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a través de la Oficina Coordinadora de Prestaciones Sociales del Magisterio en cada regional, liquidar las cesantías parciales o definitivas y emitir la resolución que reconozca o niegue la prestación y a través de la entidad Fiduciaria (Previsora S.A.) realizar el correspondiente pago.

Ahora bien, la Corte Constitucional[13] al hacer el análisis de exequibilidad del artículo 89 de la Ley 1769 de 2016, en cuanto a la aplicación de la Ley 1071 de 2006 al personal oficial docente señaló:

> *«De acuerdo a la legislación y la jurisprudencia, los docentes oficiales han sido considerados como servidores públicos con características especiales. En lo que hace al pago de las cesantías y la mora en el cumplimiento de esta obligación, es aplicable la Ley 1071 de 2006 que en su artículo 4º que establece el término máximo de quince (15) días para proferir la resolución de la solicitud y el artículo 5º, según el cual la entidad pagadora cuenta con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para el pago. El interés de mora en esta normativa equivale a "…un día de salario por cada de retardo hasta que se haga efectivo el pago»*

Posteriormente y, con el fin de unificar la jurisprudencia relacionada con la aplicación de la sanción moratoria para el personal docente, nuestro Máximo Órgano de Cierre[14] concluyó que la misma debía ser reconocida a la luz de los dispuesto en la Ley 244 de 1995, modificada por la 1071 de 2006, teniendo como conclusiones la siguientes:

> *«(…)*
>
> *193. En tal virtud, la Sala dicta las siguientes reglas jurisprudenciales:*
>
> *3.5.1* ***Unificar jurisprudencia*** *en la sección segunda del Consejo de Estado,*

[13] Sentencia C-486 de 2016
[14] Consejo de Estado. Sala Plena Sección Segunda – sentencia de unificación por importancia jurídica. 18 de julio de 2018. Rad. SU-012-S2.

> *para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.*
> *3.5.2* ***Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.***
>
> *194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley*[15] *para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.*
>
> *195. De otro lado, también se* ***sienta jurisprudencia*** *precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.*
>
> *3.5.3* ***Sentar jurisprudencia*** *señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo.*
>
> *3.5.4* ***Sentar jurisprudencia****, reiterando que es improcedente la indexación de la sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011(…)»* (Destaca el Despacho).

Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-336 de 2017 concluyó que la normativa general es aplicable para el reconocimiento de la sanción moratoria para el personal docente en Colombia, concluyendo que «*La voluntad del legislador al implementar el auxilio de cesantía así como la sanción por la mora en el pago de la misma, fue garantizar los derechos a la seguridad social y al pago oportuno de las prestaciones sociales de todo trabajador, independientemente de si este pertenece al sector público o al privado. Para ello, buscó implementar un mecanismo ágil y eficaz que permitiera garantizar de manera efectiva un sustento que se torna básico para el*

[15] Cita de cita: *Artículos 68 y 69 CPACA.*

sostenimiento del trabajador y de su núcleo familiar. Por esa razón, acoger una postura en virtud de la cual se acepte que los docentes estatales no son beneficiarios de la sanción moratoria de las cesantías no solo contraría esa voluntad del Legislativo y las razones por las cuales fue incluida dentro del ordenamiento jurídico una prestación social de esa naturaleza, sino que transgrede los fundamentos constitucionales en los cuales se sustentaron los proyectos de ley que ahora regulan la materia».

3. CASO CONCRETO

En esa secuencia, se encuentra probado que el señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS, el 7 de diciembre de 2018, mediante radicado número 2018-CES-678781 solicitó el reconocimiento y pago de una cesantía parcial por los servicios prestados como docente (Según se desprende de la Resolución visible a folios 10 a 12 del archivo denominado *«002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»*).

Que en virtud de dicha solicitud, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, en nombre y en representación de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, expidió la Resolución No. 001463 de 11 de octubre de 2019, mediante la cual se le reconoció al señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS el pago de unas cesantías parciales (folios 10 a 12 del archivo denominado *«002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»* del expediente digitalizado).

Que en cumplimiento de la anterior resolución, el 21 de noviembre de 2019 le fueron desembolsadas las cesantías parciales al convocante (Folio 14 del archivo denominado *«002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»* del expediente digitalizado).

Y, mediante la petición radicada el 2 de marzo de 2020 el señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS solicitó ante la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-

FOMAG- el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no haber pagado a tiempo el valor reconocido por concepto de las cesantías parciales, petición frente a la cual la Entidad convocada guardó silencio, configurándose el silencio administrativo negativo (Folios 17 a 19 del archivo denominado «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*» del expediente digitalizado).

Así las cosas, debe tenerse en cuenta que el término para determinar el día a partir del cual se genera la indemnización moratoria es de setenta días hábiles conforme señaló el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación que se relacionó, que corresponde a los quince (15) días hábiles que tenía la entidad para expedir la resolución, más diez (10) días hábiles que correspondían a la ejecutoria de la resolución, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución cuando debió efectuarse el pago.

Para el caso en estudio se cuentan así:

Solicitud cesantías parciales	7 de diciembre de 2018
Término para expedir la resolución (15 días)	31 de diciembre de 2018
Término de ejecutoria de la resolución (10 días Art. 76 de la Ley 1437 de 2011)	16 de enero de 2019
Término para efectuar el pago	20 de marzo de 2019
Fecha de pago	21 de noviembre de 2019

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- incurrió en la conducta que da lugar a la aplicación de la sanción prevista en la ley, puesto que desde el 21 de marzo de 2019, día siguiente al vencimiento del plazo de ley para proceder al pago de la cesantía solicitada y hasta el 20 de noviembre de 2019, día anterior al pago, contravino la obligación prevista en el ordenamiento jurídico, lo cual equivale a una mora de 245 días.

En ese orden y, teniendo en cuenta que el señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS, en calidad de docente adscrito a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, se le reconoció y pagó en forma tardía la cesantía parcial solicitada, tiene derecho a que se le pague un (1) día de salario por cada día de retardo en el reconocimiento y pago del auxilio pedido.

En consecuencia, lo adeudado debe liquidarse así:

Asignación básica año 2019:	$2.666.595[16]
Salario diario 2019:	$88.886,05
Días de mora:	245
Sanción moratoria:	$88.886,05 x 245 = $21.777.082,25

Lo anterior permite concluir con certeza que la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- adeuda al señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS por concepto de sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, el equivalente a **245 días de salario, es decir, la suma de $21.777.082,25 de conformidad con lo expuesto**.

Ahora, contrastando lo anterior con la propuesta presentada por la apoderada judicial de la Entidad convocada en la audiencia de conciliación, se encuentra que manifestó que en la sesión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG- celebrada el día 27 de noviembre de 2020, los miembros del mismo decidieron poner en consideración la siguiente formula conciliatoria (Folio 117 «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*»).

> *«No. de días de mora: 245*
> *Asignación básica aplicable: $2.666.595*
> *Valor de la mora: $21.332.880*
> ***Propuesta de acuerdo conciliatorio: $18.132.948 (85%)***

[16] Folio 16 del archivo denominado «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»

> *De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, numerales 3.2 y 3.5 del Acuerdo No. 001 de 1 de octubre de 2020, la presente propuesta en encuentra estructurada conforme a la información suministrada en la convocatoria a conciliar, en razón a que la sanción moratoria es un derecho de carácter discutible y conciliable, que se reclama a través de la denominada justicia rogada. Lo anterior, atendiendo a que corresponde a las entidades estatales la salvaguarda del patrimonio público.*
>
> *Tiempo de pago después de la aprobación judicial de la conciliación: 1 MES (DESPUÉS DE COMUNICADO EL AUTO DE APROBACIÓN JUDICIAL). No se reconoce valor alguno por indexación.*
>
> *La presente propuesta de conciliación no causará intereses entre la fecha en que quede en firme el auto aprobatorio judicial y durante el mes siguiente en que se haga efectivo el pago.*
>
> *Se paga la indemnización con cargo a los títulos de tesorería de conformidad con lo establecido en la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) (…)».*

A su turno, la apoderada judicial de la parte convocante revisado el ofrecimiento hecho por la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, expuso que *«169-2020: la propuesta de acuerdo conciliatorio (85%) resulta de liquidar 240 días, sin embargo en la propuesta indican que la liquidación se realiza sobre 245 días, no obstante el valor a conciliar coincide con lo pretendido es decir sobre los 240 días, y no sobre 245 como en efecto se plasmó en la propuesta, sin embargo: me asiste ánimo conciliatorio, por lo tanto la propuesta se tiene por ACEPTADA»* (Folio 124 *«002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»*).

Puestas en ese estadio las cosas, con fundamento en los argumentos, normas y posiciones jurisprudenciales que fueron expuestas en el cuerpo de esta providencia, el Despacho considera que el acuerdo conciliatorio no es lesivo del patrimonio público, ni va contra el ordenamiento jurídico, pues incluso se pactó por debajo de la operación matemática que se efectuó en este proveído, circunstancia que es plausible en virtud de la naturaleza de la conciliación, por lo que se impartirá su aprobación.

Por lo anteriormente expuesto, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT,**

R E S U E L V E:

PRIMERO: APRUÉBASE en todas sus partes el acuerdo conciliatorio suscrito entre el señor JUAN CARLOS LÓPEZ LONGAS y la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- en la audiencia de Conciliación Extrajudicial llevada a cabo ante la PROCURADURÍA 199 JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE GIRARDOT el 15 de enero de 2021.

SEGUNDO: A costa de la parte convocante **EXPÍDASE** copia auténtica de la presente providencia con nota de ser primera copia que presta mérito ejecutivo.

TERCERO: Ejecutoriado este auto, **ARCHÍVESE** el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
87C138C7715455574CDCEA4C4843AF8C3B901A56C8955784492151631DDA06D4
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:41 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00089-00**
DEMANDANTE:	**PERSONERÍA MUNICIPAL DE CABRERA**
DEMANDADO:	**ENEL CODENSA S.A.**
MEDIO DE CONTROL:	**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a decidir sobre la solicitud del retiro de la demanda que por el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos de que trata el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 instauró la doctora AYDA YURANY CHAVARRO SALAZAR en calidad de PERSONERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA, contra ENEL CODENSA.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El proceso fue radicado ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot el 25[1] de marzo de 2021, una vez efectuado el reparto ese mismo día, le correspondió a este Despacho su conocimiento[2].

---

[1] Si bien fue radicado el 24 de marzo, se hizo fuera del horario laboral por lo que se tiene por radicada el día hábil siguiente.

[2] Archivos denominados «*003CorreoReparto*» y «*004ActaReparto*».

2.2. Por auto de 5 de abril de 2021 se inadmitió la demanda con el fin de que dentro de los tres días siguientes a la notificación de dicha providencia subsanara su líbelo introductorio (Archivo denominado «*006AutoInadmite*»).

2.3. El 7 de abril de 2021 la demandante, doctora AYDA YURANY CHAVARRO SALAZAR en calidad de PERSONERA MUNICIPAL DE CABRERA, allegó solicitud de retiro de la demanda al tenor de lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley 1437 de 2011 habida cuenta que la misma no ha sido admitida. (Archivo denominado «*008EscritoDemandante*»).

2.4. El proceso ingresó al Despacho el 13 de abril de 2021 como constan en el archivo denominado «*009ConstanciaDespacho*».

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas y, en atención a la solicitud de retiro de la demanda, en primer lugar debe precisarse que la Ley 472 de 1998 «*Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones*», no contempla dicha figura, sin embargo, en atención a lo dispuesto en el artículo 44[3] ibídem, resulta procedente acudir a lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (modificado por el artículo 36 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021) el cual dispone:

> «**Artículo 174. *RETIRO DE LA DEMANDA.*** El demandante podrá retirar la demanda siempre que no se hubiere notificado a ninguno de los demandados ni al Ministerio Público.
>
> Si hubiere medidas cautelares practicadas, procederá el retiro, pero será necesario auto que lo autorice. En este se ordenará el levantamiento de aquellas y se condenará al demandante al pago de perjuicios, salvo acuerdo de las partes. El trámite del incidente para la regulación de tales perjuicios se sujetará a lo previsto en el artículo 193 de este código, y no impedirá el retiro de la demanda».

[3] «**ARTICULO 44. *ASPECTOS NO REGULADOS*.** En los procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones».

En ese orden, se tiene que la demanda puede ser retirada mientras no se haya notificado el auto admisorio al demandado y no se hayan practicado medidas cautelares.

Así las cosas, dentro del asunto de la referencia resulta evidente que la demanda no ha sido admitida y por consiguiente no se ha integrado el contradictorio, por lo que de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es procedente acceder a la solicitud de retiro de la misma elevada por la parte actora el 7 de abril de 2021, obrante en el archivo *«008EscritoDemandante»*.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: ACÉPTASE la petición de retiro de la demanda presentada por la demandante, doctora AYDA YURANY CHAVARRO SALAZAR en calidad de PERSONERA MUNICIPAL DE CABRERA, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: En firme la presente providencia **ARCHÍVASE** el proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
fc50fdd80490807a2b4ef8839cd97a595e15cab384854d94dab14254f5cba0b7
Documento generado en 15/04/2021 03:02:58 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00090-00**
DEMANDANTE:	**CRISTINA BAUTISTA RIVERA**
DEMANDADO:	**E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por la señora CRISTINA BAUTISTA RIVERA, por conducto de apoderado judicial, contra la E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. La señora CRISTINA BAUTISTA RIVERA, por conducto de apoderado judicial, el 23 de marzo de 2021 radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*), con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. GR 100/2021 de 15 de marzo de 2021 mediante la cual la Entidad demandada negó la existencia

de una relación laboral entre esta con la demandante y el reconocimiento y pago de acreencias laborales.

2.2. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En primer lugar, se advierte que la demanda no cumple con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante con el numeral 2º del artículo 166 ibidem, relativo a que la parte actora debe aportar «*las documentales que se encuentren en su poder*», lo anterior en atención a que no allegó el escrito de petición por medio del cual solicitó a la Entidad demandada las pruebas relacionadas en el acápite «*4.2. PRUEBAS EN PODER DE LA PARTE DEMANDADA PEDIDAS CON DERECHO DE PETICIÓN*» (folios 12 y 13 «*002DemandaPoderAnexos*»).

Seguidamente, se observa que la demanda tampoco cumple con el requisito del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «*Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)*»), esto es, que el demandante al momento de presentar la demanda debe de manera **simultánea** enviar, por medio electrónico, copia de ella y de sus anexos a los demandados y/o parte demandada, es decir, en un mismo correo «*en o a modo copia*».

Por último, se constata que la demanda no cumple con lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo concerniente a que se debe acompañar junto a la demanda la copia del acto acusado con **la constancia de su publicación, comunicación, notificación o ejecución**.

Motivos por los cuales se hace necesario requerir al apoderado judicial en tal sentido para que subsane en debida forma la demanda y en los términos del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)»). Advirtiéndole que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales y dispuestas para tal fin** de la Entidad demandada de **manera simultánea**[1], esto es, en un mismo correo «*en o a modo copia*».

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE al apoderado judicial de la señora CRISTINA BAUTISTA RIVERA para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, **SO PENA DE RECHAZO**, subsane la demanda en el sentido de que:

1.1. Allegue, de conformidad con numeral 5º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante con el numeral 2º del artículo 166 ibidem, el escrito de petición por medio del cual solicitó a la entidad demandada las pruebas relacionadas en el acápite «*4.2. PRUEBAS EN PODER DE LA PARTE DEMANDADA PEDIDAS CON DERECHO DE PETICIÓN*».

1.2. Acredite el cumplimiento de lo preceptuado en el del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «*Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)*»), esto es, que remita por medio electrónico y de manera **simultánea** la copia de la demanda y de

[1] https://dle.rae.es/simultanear: 1. tr. Realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos.

sus anexos a los demandados a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin, esto es, en un mismo correo «*en o a modo copia*».

1.3. Cumpla con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, que acompañe junto a la demanda la **constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución** del Oficio No. GR 100/2021 de 15 de marzo de 2021.

SEGUNDO: RECUÉRDASELE al apoderado judicial de la señora CRISTINA BAUTISTA RIVERA que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales** de las entidades demandadas de **manera simultánea**, esto es, en un mismo correo electrónico, situación que se deberá acreditar, tal como lo prevé el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
3BD9310D0EDEDC81B707995FAEBAFDB8A34D75C92C0ABD180A6CA3B9E2C8AD5A
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:43 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00091-00**
DEMANDANTE:	**ELKIN FABIAN TRIANA SEGURA**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor ELKIN FABIAN TRIANA SEGURA, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El señor ELKIN FABIAN TRIANA SEGURA, por conducto de apoderado judicial, el 24 de marzo de 2021 radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*), con el propósito de obtener la nulidad de la Orden Administrativa de Personal No. 2049 de 31 de octubre de 2020 mediante la cual la Entidad demandada retiró del servicio activo al

demandante por la inasistencia al servicio por más de diez (10) días consecutivos sin causa justificada.

2.2. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En primer lugar, se advierte que la demanda no cumple con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, que la demanda contenga «*los hechos y omisiones que sirvan de fundamento de las pretensiones,* ***debidamente determinados, clasificados y numerados***», lo anterior en atención a que de la revisión de los hechos descritos en el líbelo introductorio se nota una falta de claridad y determinación de estos, motivo por el cual deberá la parte actora realizar un relato sucinto, determinado, clasificado y enumerado de los hechos.

Seguidamente, se observa que la demanda tampoco cumple con lo dispuesto por el numeral 4º del artículo 162 ibidem concerniente a que «*cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y* ***explicarse[1] el concepto de su violación***», pues, de la lectura de la demanda no se advierte que el apoderado judicial de la parte demandante explique el concepto de violación que fundamenten las pretensiones esbozadas.

Por último, se constata que la demanda no cumple con el requisito del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «*Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)*»), esto es, que el demandante al momento de presentar la demanda debe de manera **simultánea** enviar, por medio

[1] https://dle.rae.es/explicar: 1. tr. Declarar, manifestar, dar a conocer lo que alguien piensa. U. t. c. prnl.
2. tr. Declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil, con palabras muy claras para hacerlos más perceptibles.
3. tr. Enseñar en la cátedra.
4. tr. Justificar, exculpar palabras o acciones, declarando que no hubo en ellas intención de agravio.
5. tr. Dar a conocer la causa o motivo de algo.
6. prnl. Llegar a comprender la razón de algo, darse cuenta de ello.

electrónico, copia de ella y de sus anexos a los demandados y/o parte demandada, es decir, en un mismo correo «*en o a modo copia*».

Motivos por los cuales se hace necesario requerir al apoderado judicial en tal sentido para que subsane en debida forma la demanda y en los términos del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)»). Advirtiéndole que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales y dispuestas para tal fin** de la entidad demandada de **manera simultánea**[2], esto es, en un mismo correo «*en o a modo copia*».

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE al apoderado judicial del señor ELKIN FABIAN TRIANA SEGURA para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, **SO PENA DE RECHAZO**, subsane la demanda en el sentido de que:

1.1. Determine, clasifique y enumere de manera clara, de conformidad con numeral 3º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los hechos y omisiones que sirvan de fundamento de las pretensiones.

1.2. Explique el concepto de violación que sirve de fundamento de las pretensiones de la demanda, según la exigencia establecida en el numeral 4º del artículo 162 ibidem.

1.3. Acredite el cumplimiento de lo preceptuado en el del numeral 8º del artículo 162 ibidem (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de

[2] https://dle.rae.es/simultanear: 1. tr. Realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos.

enero de 2021 «*Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)*»), esto es, que remita por medio electrónico y de manera **simultánea** la copia de la demanda y de sus anexos a los demandados a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin, esto es, en un mismo correo «*en o a modo copia*».

SEGUNDO: RECUÉRDASELE al apoderado judicial del señor ELKIN FABIAN TRIANA SEGURA que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales** de las entidades demandadas de **manera simultánea**, esto es, en un mismo correo electrónico, situación que se deberá acreditar, tal como lo prevé el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
BB633E236FC11EB31A1E6A2E722B8B0F33CC527069582231BE2E0D5DCE525346
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:44 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-33-33-001-2021-00092-00**
Demandante:	**INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S.A.-ITMS COLOMBIA S.A.-**
Demandado:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a decidir sobre la procedencia de librar mandamiento de pago en virtud de la demanda que, invocando la ACCIÓN EJECUTIVA, incoó la sociedad INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S.A.-ITMS COLOMBIA S.A.- contra la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 24 de marzo de 2021, fue radicada ante el Despacho que se encontraba fungiendo como oficina de reparto, la demanda ejecutiva interpuesta por la sociedad INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S.A.-ITMS COLOMBIA S.A.- contra la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL ISMAEL SILVA DE SILVANIA, siendo asignado para su conocimiento a este Juzgado[1].

2.2. En la solicitud se elevaron las siguientes pretensiones[2]:

> «*Que se libre mandamiento de pago a favor de* ***INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S.A.****, sigla* ***ITMS COLOMBIA S A S****, como acreedora y en contra de la* ***ESE HOSPITAL ISMAEL SAILVA (SIC) DE SILVANIA,*** *como deudor, por las siguientes sumas de dinero:*
>
> ***1.-*** *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 3665 (…)***
>
> *a). Por la suma de* ***$3.036.800****, por concepto de capital (…)*
>
> *b). Por los intereses moratorios (…).*
>
> ***2.*** *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 4023 (…)***
>
> *a). Por la suma de* ***$1.044.000****, por concepto de capital (…)*
>
> *b). Por los intereses moratorios (…).*
>
> ***3.*** *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 4024 (…)***
>
> *a). Por la suma de* ***$144.000****, por concepto de capital (…)*
>
> *b). Por los intereses moratorios (…).*
>
> ***4.*** *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 4048 (…)***
>
> *a). Por la suma de* ***$842.400****, por concepto de capital (…)*
>
> *b). Por los intereses moratorios (…).*
>
> ***5.*** *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 4125 (…)***
>
> *a). Por la suma de* ***$2.435.100****, por concepto de capital (…)*
>
> *b). Por los intereses moratorios (…).*
>
> ***6.*** *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 4572 (…)***

[1] Archivo denominado 004ActaReparto del cuaderno principal del expediente digitalizado.
[2] Folios 12 a 17 del archivo denominado 002DemandayAnexos del cuaderno principal del expediente digitalizado.

a). Por la suma de ***$798.300****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

7. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 4628 (…)***

a). Por la suma de ***$118.800****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

8. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 4811 (…)***

a). Por la suma de ***$950.175****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

9.*Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 4832 (…)***

a). Por la suma de ***$66.744****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

10. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 4998 (…)***

a). Por la suma de ***$1.084.590****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

11. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 5070 (…)***

a). Por la suma de ***$33.372****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

12. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 5223 (…)***

a). Por la suma de ***$712.863****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

13. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 5344 (…)***

a). Por la suma de ***$55.620****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

14. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 5411 (…)***

a). Por la suma de ***$419.004****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

15. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 5486 (…)***

a). Por la suma de ***$111.240****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

16. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 5618 (…)***

a). Por la suma de ***$497.799****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

17. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 5682 (…)***

a). Por la suma de ***$88.992****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

18. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 5808 (…)***

a). Por la suma de ***$554.346****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

19. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 5872 (…)***

a). Por la suma de ***$300.348****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

20. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 6001 (…)***

a). Por la suma de ***$581.229****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

21. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 6065 (…)***

a). Por la suma de ***$113.488****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

22. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 6204 (...)***

a). Por la suma de ***$784.242****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

23. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 6268 (...)***

a). Por la suma de ***$100.116****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

24. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 6409 (...)***

a). Por la suma de ***$781.276****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

25. *Respecto de la* ***Factura Electrónica de Venta No. 6468 (...)***

a). Por la suma de ***$163.523****, por concepto de capital (…)*

b). Por los intereses moratorios (…).

26. *En la oportunidad procesal correspondiente, el Señor Juez se servirá condenar a la parte demandante al pago de los gastos y costas del presente proceso».*

2.3. El 12 de abril de 2021 el expediente ingresó al Despacho.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Una vez revisada la demanda el Juzgado evidencia algunas falencias que imponen su inadmisión para que sea subsanada dentro del término señalado en la ley, así:

3.1. No cumple con el requisito establecido en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «*Por*

medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)»), que señala que el demandante al momento de presentar la demanda debe enviar **simultáneamente**, por medio electrónico, copia de ella y de sus anexos a los demandados y/o parte demandada[3].

Al respecto, debe puntualizarse que es necesario que esta se realice en el mismo mensaje con el que se envía la demanda al Juzgado o a la oficina de Reparto, pues la norma impone que el envío se realice de manera **simultánea**.

3.2. No se adjuntaron la totalidad de documentos enunciados en el acápite anexos, que a su vez, remitió al de pruebas, o se encuentra disparidad entre lo enunciado y lo aportado, así:

3.2.1. No se aportaron los CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 267 de 2019, 398 de 2019, 089 de 2020 y 340 de 2020.

3.2.2. No se aportaron las Facturas Electrónicas No. 4028y 6408 que se enuncian como anexas, y, por el contrario, se aportaron las No. 4048 y 6468 que no se enlistan como tal, por lo que deberá aclararse si se trató de un error de digitación al momento de su enunciación.

3.2.3. No se aportó la Factura Electrónica No. 4572 que se enlista dentro de los anexos.

3.3. No se aportó el poder que faculte a la abogada para incoar la demanda en nombre de la sociedad INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S.A.-ITMS COLOMBIA S.A.-, el cual debe cumplir con el requisito establecido en el artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020[4], esto es, ser

---

[3] Pues no se observa que se hubiese enviado de tal manera en el archivo denominado 004ActaReparto del expediente digitalizado.

[4] "**Artículo 5. *PODERES***. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.

conferido mediante mensaje de datos, enunciando la dirección de correo electrónico de la abogada, que debe coincidir con la reportada en el Registro Nacional de Abogados, o, en su defecto, cumplir con las previsiones del artículo 74 del Código General del Proceso.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE a la abogada que se predica apoderada judicial de la sociedad INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S.A.-ITMS COLOMBIA S.A.-, para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, **SO PENA DE RECHAZO,** subsane la demanda en el sentido de que:

1.1. Acredite el cumplimiento de lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «*Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)*»), esto es, envíe la demanda al demandado y al Juzgado en el mismo mensaje. **De la subsanación también debe enviarse mensaje <u>simultáneo</u> al demandado y al Juzgado.**

1.2. Allegue la totalidad de los documentos enunciados como anexos/pruebas, y/o, aclare lo correspondiente, de conformidad con lo especificado en el numeral 3.2. de la parte considerativa de esta providencia.

1.3. Allegue el poder conferido por el representante legal de la sociedad INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEMS COLOMBIA S.A.-ITMS

En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales".

COLOMBIA S.A.-, observando para ello las previsiones del artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 o el artículo 74 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
90f2b7d8f06f5df2a148bae00c27d76d141f821ba6b71bcadedd1e634233e8eb
Documento generado en 15/04/2021 02:44:43 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00093-00**
DEMANDANTE:	**BIBIANA JARA QUINTERO**
DEMANDADO:	**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por la señora BIBIANA JARA QUINTERO, por conducto de apoderado judicial, contra la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. La señora BIBIANA JARA QUINTERO, por conducto de apoderado judicial, el 25 de marzo de 2021 radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*), con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. DP-2021-001 de 10 de febrero de 2020 mediante la cual la Entidad demandada negó la existencia de una relación laboral entre esta con la demandante y el reconocimiento y pago de acreencias laborales.

2.2. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En primer lugar, se advierte que la demanda no cumple con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante con el numeral 2º del artículo 166 ibidem, relativo a que la parte actora debe aportar «*las documentales que se encuentren en su poder*», lo anterior en atención a que no allegó de manera íntegra y legible los folios 273, 282, 285 y 295 del archivo «*002PoderDemandaAnexos*».

Seguidamente, se observa que la demanda tampoco cumple con el requisito del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «*Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)*»), esto es, que el demandante al momento de presentar la demanda debe de manera **simultánea** enviar, por medio electrónico, copia de ella y de sus anexos a los demandados y/o parte demandada, es decir, en un mismo correo «*en o a modo copia*».

Por último, se constata que la demanda no cumple con lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo concerniente a que se debe acompañar junto a la demanda la copia del acto acusado con **la constancia de su publicación, comunicación, notificación o ejecución**.

Motivos por los cuales se hace necesario requerir al apoderado judicial en tal sentido para que subsane en debida forma la demanda y en los términos del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)»). Advirtiéndole que el escrito

de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales y dispuestas para tal fin** de la entidad demandada de **manera simultánea**[1], esto es, en un mismo correo *«en o a modo copia»*.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE al apoderado judicial de la señora BIBIANA JARA QUINTERO para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, **SO PENA DE RECHAZO**, subsane la demanda en el sentido de que:

1.1. Allegue, de conformidad con numeral 5º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante con el numeral 2º del artículo 166 ibidem, de manera íntegra y legible los folios 273, 282, 285 y 295 *«002PoderDemandaAnexos»*.

1.2. Acredite el cumplimiento de lo preceptuado en el del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 *«Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)»*), esto es, que remita por medio electrónico y de manera **simultánea** la copia de la demanda y de sus anexos a los demandados a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin, esto es, en un mismo correo *«en o a modo copia»*.

1.3. Cumpla con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, que acompañe junto a la demanda la **constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución** del Oficio No. DP-2021-001 de 10 de febrero de 2020.

[1] https://dle.rae.es/simultanear: 1. tr. Realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos.

SEGUNDO: RECUÉRDASELE al apoderado judicial de la señora BIBIANA JARA QUINTERO que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales** de las entidades demandadas de **manera simultánea**, esto es, en un mismo correo electrónico, situación que se deberá acreditar, tal como lo prevé el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
F530C523CF1C78B9CF1A75C3E72037C7C215680BB746B34E9D0BE1D2A810259F
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:45 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-3333-001-2021-00094-00**
Demandante:	**NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO–FOMAG-**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A S U N T O

Procede el Despacho a decidir sobre la aprobación de la conciliación extrajudicial realizada ante la Procuraduría 199 Judicial I para Asuntos Administrativos de Girardot el 18 de febrero de 2021, en la que obra como convocante la señora **NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN,** por conducto de apoderada judicial y como convocada la **NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-.**

En ese orden, se puntualiza que la competencia para conocer dentro del presente asunto se estudiará conforme a lo señalado en la Ley 1437 de 2011, habida consideración que la Ley 2080 de 25 de enero de 2021[1] en su artículo 86 dispuso «*La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley*».

[1] «*POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -LEY 1437 DE 2011- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONGESTIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JURISDICCIÓN*».

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. El 17 de febrero de 2021 fue radicada vía correo electrónico ante la PROCURADURÍA 199 JUDICIAL I ADMINISTRATIVA DE GIRARDOT la solicitud de conciliación extrajudicial, que por conducto de apoderada judicial, presentó la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN (Folios 1 «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*»).

1.2. La apoderada judicial de la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN en la mencionada convocatoria solicitó *(Folios 2 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»):*

> *« (…)*
>
> *1. Que la NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO –revoque el acto administrativo ficto o presunto configurado por el silencio administrativo negativo, en relación la petición del 05-feb-2020, por la cual se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por la demora en el pago de cesantías reconocidas mediante Resolución No. 1287del 8/3/2018.*
>
> *2. Que la NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO –y/o la FIDUCIARIA LA PREVISORA – FIDUPREVISORA S.A. –pague la sanción por la demora en el pago de las cesantías, equivalente a un (01) día de salario por cada día de mora, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 5º de la Ley 71 de 2006 y demás normas concordantes.*
>
> *3. Que la NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO –y/o la FIDUCIARIA LA PREVISORA – FIDUPREVISORA S.A. –pague la indexación sobre las sumas de dinero adeudas a mi poderdante.*
>
> *4. Que la NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO –y/o la FIDUCIARIA LA PREVISORA – FIDUPREVISORA S.A. –pague los intereses moratorios causados desde que se hizo exigible la obligación.*
> *(…)»*

1.3. Mediante Auto No. 027 de 18 de febrero de 2021 el PROCURADOR 199 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE GIRARDOT admitió

la referida solicitud de conciliación extrajudicial *(Folios 16 a 19 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»).*

1.4. El 25 de marzo de 2021, en virtud de la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del Covid-19, se llevó a cabo de manera *«NO PRESENCIAL»* la audiencia de conciliación extrajudicial de la referencia, en la que se llegó al siguiente acuerdo (Folios 77 a 84 del archivo denominado *«002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»*):

> *«(…) 1) Que la NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO pagará o consignará a favor de NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN, la suma total de Diecisiete Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos Moneda Corriente ($17.699.682,00M/Cte.)26, por concepto de sanción moratoria en atención al retardo en el reconocimiento y pago de la solicitud de cesantías realizada ante dicha entidad, sin lugar a reconocimiento alguno de intereses moratorios ni de indexación alguna, para lo cual se propone como fecha máxima para efectuar el pago dentro del mes siguiente a la comunicación del auto de aprobación judicial del acuerdo conciliatorio, con cargo a los títulos de tesorería de conformidad con lo establecido en la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo) (…)».*

1.5. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer *(«016ConstanciaDespacho»).*

Puestas en ese estadio las cosas, y para emitir pronunciamiento respecto de la aprobación o improbación del acta de conciliación es del caso hacer las siguientes,

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1 DE LA CONCILIACIÓN COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

El artículo 116 de la Carta Magna prevé la conciliación como uno de los mecanismos que permiten la solución ágil y efectiva para la solución de los conflictos que se suscitan entre particulares y, entre el Estado y aquellos.

La Conciliación lleva inmersa la vigencia de los principios de economía, celeridad, eficiencia, eficacia en la solución de los conflictos y como garantía del acceso efectivo a la administración de justicia.

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, podrán conciliar, total o parcialmente, prejudicial o judicialmente, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En materia Contenciosa Administrativa la Ley autoriza el uso de este mecanismo, siempre que se acrediten unas exigencias especiales que deben ser valoradas. Al respecto la jurisprudencia del Consejo de Estado[2] ha sido reiterada al referirse que el acuerdo conciliatorio se someterá a los siguientes supuestos de aprobación:

> *«(…)*
>
> *- Que no haya operado el fenómeno procesal de la caducidad de la acción (art. 61 ley 23 de 1991, modificado por el art. 81 ley 446 de 1998).*
>
> *- Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 Ley 23 de 1991 y 70 Ley 446 de 1998).*
>
> *- Que las partes estén debidamente representadas y que tales representantes tengan capacidad para conciliar.*
>
> *-Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (art. 65ª Ley 23 de 1991 y art. 73 Ley 446 de 1998).*[3]
> *- Que el solicitante actúe a través de abogado titulado (parágrafo 3 del artículo 1 de la Ley 640 de 2001).*
>
> *- Que tratándose de conciliaciones con entidades y organismos de derecho público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y de los entes descentralizados de estos mismos niveles,*

[2]Ver, entre otras, las providencias radicadas bajo los números: 21.677, 22.557, 23.527, 23.534 y 24.420 de 2003.

[3]Consejo de Estado. Auto del 21 de octubre de 2009, radicado 36.221, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

deberán aportar el acta del COMITÉ DE CONCILIACIÓN (artículo 65B de la Ley 23 de 1991, adicionado por el artículo 75 de la ley 443 de 1998)[4]».

2.2. DE LA COMPETENCIA EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

El artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, además de los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.

2.3 DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD CONVOCADA

Descendiendo al *sub - examine*, quien obra como Entidad convocada es el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, Entidad que cuenta con independencia patrimonial, sin personería jurídica y cuyos recursos son administrados por la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de economía mixta, de carácter indirecto del orden nacional, vinculada al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con personería jurídica y autonomía administrativa.

---

[4] En la exposición de motivos al proyecto de ley 127/90 Cámara "por la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales" (ley 23 de 1991) el gobierno señaló: "5. Conciliación en el campo contencioso-administrativo...La conciliación se realizará bajo la responsabilidad del Fiscal de la Corporación, y bajo el control posterior de la Sala del Tribunal o del Consejo que corresponda, para garantizar a plenitud los derechos del Estado." (SENADO DE LA REPÚBLICA, Historia de las leyes, Legislatura 1991-1992 Tomo III, Pág. 88 y 89, subrayas no originales). Tan importante se consideró el control de legalidad posterior que luego en la ponencia para primer debate al citado proyecto el Representante a la Cámara Héctor Elí Rojas indicó: "...El pliego de modificaciones incluye mecanismos de control jurisdiccional sobre la conciliación prejudicial para, en todo caso, tener la seguridad de que los intereses del Estado no resulten lesionados o traicionados en dicho trámite" (Historia de las leyes, Op. Cit. p. 97).

Para el efecto, es del caso hacer referencia a lo manifestado por la H. Corte Constitucional en la sentencia C-928/06[5], la cual describe la naturaleza jurídica del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, de la siguiente forma:

> «***3. EL RÉGIMEN ESPECIAL PRESTACIONAL DEL MAGISTERIO.***
>
> *(…)*
>
> *En cuanto a la naturaleza jurídica del Fondo, la Corte ha considerado que (i)* ***se trata de una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, sin personería jurídica y cuyos recursos son administrados por una Sociedad de Economía Mixta, de carácter indirecto del orden nacional, (Fiduciaria La Previsora S.A.), vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica y autonomía administrativa[6]; (ii) es el encargado tanto del reconocimiento de dichas prestaciones, con un visto bueno previo de la fiduciaria, como de su pago[7];*** *(iii) al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio tiene asignada la función, entre otras, de determinar la destinación de los recursos y el orden de prioridades en que serán atendidas las prestaciones sociales frente a la disponibilidad financiera del Fondo para garantizar así una distribución equitativa de los recursos, si existe disponibilidad presupuestal se imparte visto bueno a las solicitudes[8]; y (iv) hay que compaginar el subsistema de los servicios médicos asistenciales del Magisterio con las normas de la Constitución Política y no se puede afirmar por consiguiente que aquél ha quedado por fuera del sistema constitucional de seguridad social en salud[9] (…)»* (Destaca el Despacho).

2.4. DE LA COMPETENCIA DEL DESPACHO PARA RESOLVER EL PRESENTE ASUNTO.

Este despacho es competente para decidir sobre la legalidad del acuerdo conciliatorio *sub-lite*, por cuanto el lugar de prestación de servicios de la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN es la I.E.D. ANTONIO RICAURTE[10]; se suscitó con ocasión de la solicitud de reconocimiento de mora en el pago de cesantías de un empleado público vinculado bajo una relación legal y

---

[5] Sala Plena de la Corte Constitucional, Sentencia C-928, Referencia: expediente D-6355, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, demandante Mario Augusto Prieto García, Magistrado Ponente Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil seis (2006).
[6] Auto 167 de 2005
[7] Sentencia T- 1059 de 2002.
[8] Sentencia T- 255 de 2000.
[9] Sentencia T- 727 de 1998.
[10] Conforme acredita la primera página de la Resolución visible en el folio 8 del archivo denominado «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*».

reglamentaria y, el monto de la pretensión y del pago acordado no supera los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.5. DE LOS REQUISITOS PARA APROBAR LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

2.5.1. Caducidad de la Acción:

Tal como lo consagran los literales c y d del numeral 1º del artículo 164 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuando se trate de actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas y cuando se dirija contra actos producto del silencio administrativo, podrán demandarse en cualquier tiempo.

En el presente asunto la caducidad no operó, dado que se reclama la nulidad del acto ficto o presunto negativo producto del silencio administrativo, que se configuró por la falta de respuesta a la petición radicada ante la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- por la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN el 5 de febrero de 2020, en la que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006 *(Folios 13 y 14 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»).*

2.5.2 Derechos económicos disponibles por las partes:

Se trata del pago de unos derechos laborales en favor de la Convocante.

En este sentido, las partes acordaron en relación con la suma de dinero reclamada, que el tiempo de pago después de la aprobación judicial de la conciliación es de un mes después de comunicado el auto de aprobación judicial, aunado a que no se reconocerá valor alguno por concepto de indexación y, además, que se pagará la indemnización con cargo a los títulos de tesorería de la Entidad (Folios 89 a 97 «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*»).

2.5.3. Representación de las partes:

Verificado en el expediente que tanto la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN, como la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- se encuentran habilitados para actuar, con capacidad suficiente para ser parte y comparecer al proceso, que lo hacen por medio de apoderado judicial, y que han conferido a sus apoderados poder expreso para conciliar.

- **Convocante:** Representante judicial, doctora YOVANA MARCELA RAMÍREZ SUAREZ (Folio 5 del archivo denominado «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*»).

- **Convocado:** Representante judicial, doctora ANGELA VIVIANA MOLINA MURILLO (Folio 39 del archivo del archivo denominado «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*[11]).

2.5.4. Pruebas necesarias para el acuerdo conciliatorio:

Se encuentra probado que la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN, el 4 de enero de 2018, mediante radicado número 2018CES518944 solicitó el reconocimiento y pago de una cesantía parcial para estudio por los servicios prestados como docente Municipal en la I.E.D. ANTONIO RICAURTE (Según se desprende de la Resolución visible a folios 8 a 10 del archivo denominado «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*»).

Que en virtud de dicha solicitud, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, en nombre y en representación de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, expidió la

[11] Mediante la sustitución de poder que otorgo el doctor LUIS ALFREDO SANABRIA RÍOS a la doctora ANGELA VIVIANA MOLINA MURILLO se estableció que la apoderada tendría las facultades a él conferidas, las cuales se pueden ver con precisión en las Escrituras Públicas N°. 1230 de 11 de septiembre y N°. 0062 de 31 de enero de 2019.

Resolución No. 1287 de 3 de agosto de 2018, mediante la cual se le reconoció a la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN el pago de una cesantía parcial *(folios 8 a 10 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»).*

Que en cumplimiento de la anterior Resolución, el 28 de septiembre de 2018 quedó a disposición la cesantía reconocida a la convocante *(Folio 79 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»).*

Y, mediante la petición radicada el 5 de febrero de 2020 la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN solicitó ante la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no haber pagado a tiempo el valor reconocido por concepto de la cesantía parcial, petición frente a la cual la Entidad convocada guardó silencio, configurándose el silencio administrativo negativo *(Folios 13 y 14 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»)*

2.5.5. Acta del Comité de Conciliación:

El 18 de marzo de 2021 se expidió la correspondiente acta del comité de conciliación, dentro de la cual se manifestó el ánimo conciliatorio por parte de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, con la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN *(Folio 78 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»).*

2.6. DE LA SANCIÓN MORATORIA

La indemnización moratoria se concibe como una sanción a cargo del empleador moroso y a favor del trabajador, establecida con el propósito de

resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía.[12]

Al respecto la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 del 2006, establece:

> «**Artículo 1º.** Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
>
> **Parágrafo.** En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
>
> Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
>
> **Artículo 2º.** La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
>
> **Parágrafo.** En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este»

De los artículos transcritos, se deduce que si se trata del auxilio de cesantía de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 244 de 1995, la entidad pública obligada al pago dispone de un término de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de solicitud de liquidación de cesantías, para producir el acto administrativo que ordene su liquidación y, de cuarenta y cinco (45) días hábiles, después de la ejecutoria de dicho acto administrativo, para proceder a su pago.

---

[12] Consejo de Estado. C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, sentencia del 28 de junio de 2012, Radicación número: 08001-23-31-000-2009-00718-01(1682-11).

Si dentro de los términos establecidos la entidad obligada al pago de las cesantías no lo hiciera, será sancionada a favor del solicitante, con un pago del equivalente a un día de salario por cada día de retraso, en el pago de la cesantía y hasta que se haga efectivo el mismo.

2.6.1. Del reconocimiento de la sanción moratoria al personal docente oficial en Colombia.

En cuanto al reconocimiento y pago de las cesantías del personal docente el artículo 9º la Ley 91 de 1989 establece:

> «Las Prestaciones Sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán reconocidas por la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional, función que delegará de tal manera que se realice en las entidades territoriales»

Así mismo, el artículo 180 de la Ley 115 de 1994 dispone:

> «**Artículo 180. *RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.*** Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por intermedio del Representante del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará, además, la firma del Coordinador Regional de prestaciones sociales»

Así las cosas, le corresponde al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a través de la Oficina Coordinadora de Prestaciones Sociales del Magisterio en cada regional, liquidar las cesantías parciales o definitivas y emitir la resolución que reconozca o niegue la prestación y a través de la entidad fiduciaria LA PREVISORA S.A. realizar el correspondiente pago.

Ahora bien, la Corte Constitucional[13] al hacer el análisis de exequibilidad del artículo 89 de la Ley 1769 de 2016, en cuanto a la aplicación de la Ley 1071 de 2006 al personal oficial docente señaló:

> *«De acuerdo a la legislación y la jurisprudencia, los docentes oficiales han sido*

[13] Sentencia C-486 de 2016

> *considerados como servidores públicos con características especiales. En lo que hace al pago de las cesantías y la mora en el cumplimiento de esta obligación, es aplicable la Ley 1071 de 2006 que en su artículo 4º que establece el término máximo de quince (15) días para proferir la resolución de la solicitud y el artículo 5º, según el cual la entidad pagadora cuenta con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para el pago. El interés de mora en esta normativa equivale a "…un día de salario por cada de retardo hasta que se haga efectivo el pago»*

Posteriormente y, con el fin de unificar la jurisprudencia relacionada con la aplicación de la sanción moratoria para el personal docente, nuestro Máximo Órgano de Cierre[14] concluyó que la misma debía ser reconocida a la luz de los dispuesto en la Ley 244 de 1995, modificada por la 1071 de 2006, teniendo como conclusiones la siguientes:

> *«(…)*
>
> *193. En tal virtud, la Sala dicta las siguientes reglas jurisprudenciales:*
>
> *3.5.1* ***Unificar jurisprudencia*** *en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.*
>
> *3.5.2* ***Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.***
>
> *194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley[15] para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para sanción moratoria.*
>
> *195. De otro lado, también se* ***sienta jurisprudencia*** *precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la*

[14] Consejo de Estado. Sala Plena Sección Segunda – sentencia de unificación por importancia jurídica. 18 de julio de 2018. Rad. SU-012-S2.
[15] Cita de cita: *Artículos 68 y 69 CPACA.*

cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

3.5.3 ***Sentar jurisprudencia*** *señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo.*

3.5.4 ***Sentar jurisprudencia****, reiterando que es improcedente la indexación de la sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011(…)»* (Destaca el Despacho).

Además, la Corte Constitucional en la sentencia SU-336 de 2017 concluyó que la normativa general es aplicable para el reconocimiento de la sanción moratoria para el personal docente en Colombia, concluyendo que «*La voluntad del legislador al implementar el auxilio de cesantía así como la sanción por la mora en el pago de la misma, fue garantizar los derechos a la seguridad social y al pago oportuno de las prestaciones sociales de todo trabajador, independientemente de si este pertenece al sector público o al privado. Para ello, buscó implementar un mecanismo ágil y eficaz que permitiera garantizar de manera efectiva un sustento que se torna básico para el sostenimiento del trabajador y de su núcleo familiar. Por esa razón, acoger una postura en virtud de la cual se acepte que los docentes estatales no son beneficiarios de la sanción moratoria de las cesantías no solo contraría esa voluntad del Legislativo y las razones por las cuales fue incluida dentro del ordenamiento jurídico una prestación social de esa naturaleza, sino que transgrede los fundamentos constitucionales en los cuales se sustentaron los proyectos de ley que ahora regulan la materia*».

3. CASO CONCRETO

En esa secuencia, se encuentra probado que la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN el 4 de enero de 2018, mediante radicado número 2018CES518944, solicitó el reconocimiento y pago de una cesantía parcial para estudio por los servicios prestados como docente Municipal en la I.E.D. ANTONIO RICAURTE (Según se desprende de la Resolución visible a folios 8 a 10 del archivo denominado «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*»).

Que en virtud de dicha solicitud, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, en nombre y en representación de

la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, expidió la Resolución No. 1278 de 3 de agosto de 2018, mediante la cual se le reconoció a la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN el pago de una cesantía parcial *(Folios 8 a 10 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»).*

Que en cumplimiento de la anterior Resolución, el 28 de septiembre de 2018 quedó a disposición la cesantía reconocida a la convocante *(Folio 79 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»).*

Y, mediante la petición radicada el 5 de febrero de 2020 la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN solicitó ante la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no haber pagado a tiempo el valor reconocido por concepto de la cesantía parcial, petición frente a la cual la Entidad convocada guardó silencio, configurándose el silencio administrativo negativo *(Folios 13 y 14 «002ExpedienteConciliacionExtrajudicial»)*

Así las cosas, debe tenerse en cuenta que el término para determinar el día a partir del cual se genera la indemnización moratoria es de setenta días hábiles conforme señaló el Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación que se relacionó, que corresponde a los quince (15) días hábiles que tenía la entidad para expedir la resolución, más diez (10) días hábiles que correspondían a la ejecutoria de la resolución, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución cuando debió efectuarse el pago.

Para el caso en estudio se cuentan así:

Solicitud cesantías parciales	4 de enero de 2018
Término para expedir la resolución (15 días)	26 de enero de 2018

Término de ejecutoria de la resolución (10 días Art. 76 de la Ley 1437 de 2011)	9 de febrero de 2018
Término para efectuar el pago	18 de abril de 2018
Fecha de pago	28 de septiembre de 2018

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- incurrió en la conducta que da lugar a la aplicación de la sanción prevista en la ley, puesto que desde el 19 de abril de 2018, día siguiente al vencimiento del plazo de ley para proceder al pago de la cesantía solicitada y hasta el 27 de septiembre de 2018, día anterior al pago, contravino la obligación prevista en el ordenamiento jurídico, lo cual equivale a una mora de 162 días.

En ese orden y, teniendo en cuenta que a la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN, en calidad de docente adscrita a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, se le reconoció y pagó en forma tardía la cesantía parcial solicitada, tiene derecho a que se le pague un (1) día de salario por cada día de retardo en el reconocimiento y pago del auxilio pedido.

En consecuencia, lo adeudado debe liquidarse así:

Asignación básica año 2018: $3.641.927
Salario diario 2018: $121.397,56
Días de mora: 162
Sanción moratoria: $121.397,56 x 162 = $19.666.314

Lo anterior permite concluir con certeza que la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- adeuda a la señora ALBA ROCÍO SUÁREZ PARRA por concepto de sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, el equivalente a **162 días de salario, es decir, la suma de $19.666.314 de conformidad con lo expuesto**.

Ahora, contrastando lo anterior con la propuesta presentada por la apoderada judicial de la Entidad convocada en la audiencia de conciliación, se encuentra que manifestó que en la sesión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG- celebrada el día 12 de enero de 2021, los miembros del mismo decidieron poner en consideración la siguiente formula conciliatoria (Folio 78 «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*»).

> «*Fecha de solicitud de las cesantías: 4 de enero de 2018*
> *Fecha de pago: 28 de septiembre de 2018*
> *No. de días de mora: 162*
> *Asignación básica aplicable: $ 3.641.927*
> *Valor de la mora: $ 19.666.314*
> ***Propuesta de acuerdo conciliatorio: $17.699.682 (90%)***
>
> *(…)*
>
> *Tiempo de pago después de la aprobación judicial de la conciliación: 1 MES (DESPUÉS DE COMUNICADO EL AUTO DE APROBACIÓN JUDICIAL). No se reconoce valor alguno por indexación.*
>
> *La presente propuesta de conciliación no causará intereses entre la fecha en que quede en firme el auto aprobatorio judicial y durante el mes siguiente en que se haga efectivo el pago.*
>
> *Se paga la indemnización con cargo a los títulos de tesorería de conformidad con lo establecido en la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo)».*

A su turno, la apoderada judicial de la parte convocante revisado el ofrecimiento hecho por la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, expuso (Folio 86 del archivo denominado «*002ExpedienteConciliacionExtrajudicial*»):

> «
> *Revisada la propuesta presentada por la convocada, manifiesto que la acepto*
> *(…)*
> **».**

Puestas en ese estadio las cosas, con fundamento en los argumentos, normas y posiciones jurisprudenciales que fueron expuestas en el cuerpo de esta providencia, el Despacho considera que el acuerdo conciliatorio no es lesivo

del patrimonio público, ni va contra el ordenamiento jurídico, pues incluso se pactó por debajo de la operación matemática que se efectuó en este proveído, circunstancia que es plausible en virtud de la naturaleza de la conciliación, aunado a que se descontó el valor pagado, por lo que se impartirá su aprobación.

Por lo anteriormente expuesto, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT,**

R E S U E L V E

PRIMERO: APRUÉBASE en todas sus partes el acuerdo conciliatorio suscrito entre la señora NUBIA ELENA ROSERO CALDERÓN y la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- en la audiencia de Conciliación Extrajudicial llevada a cabo ante la PROCURADURÍA 199 JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE GIRARDOT el 25 de marzo de 2021.

SEGUNDO: A costa de la parte convocante **EXPÍDASE** copia auténtica de la presente providencia con nota de ser primera copia que presta mérito ejecutivo.

TERCERO: Ejecutoriado este auto, **ARCHÍVESE** el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
9db6dbb064f782bd181f28b7112aee6fd682842294c4e6bd32bf7d2590ae07d9
Documento generado en 15/04/2021 02:44:54 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00097-00**
DEMANDANTE:	**NAIRA GÓMEZ AMOROCHO y KAREN DAYANA TORRES GÓMEZ**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por las señoras NAIRA GÓMEZ AMOROCHO y KAREN DAYANA TORRES GÓMEZ, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Las señoras NAIRA GÓMEZ AMOROCHO y KAREN DAYANA TORRES GÓMEZ, por conducto de apoderado judicial, el 23 de octubre de 2020 radicaron demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá D.C., correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. (*«02ActaReparto»* de la carpeta *«002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota»*), con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo No. OFI14-66772 MDNSGDAGPSAP de 25 de

septiembre de 2014, por medio del cual la Entidad demandada negó el reajuste y reliquidación de la sustitución de la pensión de sobrevivientes, causada a favor de las demandantes con ocasión del deceso del Sargento Segundo ROOSVELT TORRES LONDOÑÓ (q.e.p.d.).

2.2. El JUZGADO VEINTITRÉS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. mediante proveídos de 30 de octubre de 2020 y 5 de febrero de 2021 requirió a las partes para que acreditaran la última unidad donde prestó los servicios el causante pensional con el fin de determinar la competencia por el factor territorial (*«04AutoPeticionUltimoLugarPrestacionServicios»* y *«12MemorialPruebas»*).

2.3. El 17 de febrero de 2021 el apoderado judicial de la parte actora allegó una imagen parcial contentiva de los haberes del señor ROOSVELT TORRES LONDOÑO (q.e.p.d.) para el mes de junio de 2002 en donde se alcanza a apreciar que *«es orgánico del Batallón de ASPC Contra el Narcotráfico»* (folio 3 *«13Memorial17Feb2021Informacion»* de la carpeta *«002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota»*).

2.4. Por medio de auto de 19 de febrero de 2021 el JUZGADO VEINTITRÉS ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ D.C. remitió el asunto de la referencia a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot por considerar que carecía de competencia por el factor territorial (*«15RemitenPorCompetencia»* de la carpeta *«002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota»*).

2.5. El 5 de abril de 2021 se efectuó el reparto entre los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*).

2.6. El 12 de abril de 2021 el expediente ingresó al Despacho para proveer (*«005ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Bajo el contexto expuesto en el acápite de antecedentes y como quiera que este Despacho no puede determinar la competencia por el factor territorial en atención a la inexistencia dentro del plenario de la constancia o certificación del último lugar **geográfico** de prestación de servicios del señor ROOSVELT TORRES LONDOÑO (q.e.p.d.), habida consideración que si bien se advierte que el 17 de febrero de 2021 el apoderado judicial de la parte actora allegó una imagen parcial contentiva de los haberes del señor TORRES LONDOÑO del mes de junio de 2002, en la que se aprecia que «*es orgánico del Batallón de ASPC Contra el Narcotráfico*» lo cierto es que no obra el municipio, por lo que se requerirá al apoderado judicial de la parte actora y a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que allegue la certificación en tal sentido. Lo anterior con el fin de determinar la competencia por el factor territorial al tenor de lo dispuesto por el artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y seguir con el curso del presente proceso.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE al apoderado judicial de la parte actora y a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído alleguen constancia del **último lugar** donde prestó y/o presta sus servicios el señor ROOSVELT TORRES LONDOÑO identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.075.446, **especificando el municipio**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
F7F5576840F1DBA9043C836BC2D2CA467A0F80B9393046F901557171E2290065
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:46 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00098-00**
DEMANDANTE:	**ORANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor ORANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El señor ORANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ, por conducto de apoderado judicial, el 18 de diciembre de 2020 radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Ibagué, Tolima, correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, Tolima («*02ActaReparto*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgado9Administrativolbague*»), con la finalidad de obtener la nulidad del acto administrativo «*de 21 de julio de 2020*» por medio del cual la Entidad demandada negó la reliquidación y reajuste «*de los salarios, primas, vacaciones, prestaciones sociales y la asignación de retiro del actor*» conforme al IPC.

2.2. Mediante providencia de 10 de marzo de 2021 el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÉ remitió el asunto de la referencia a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, Cundinamarca por considerar que carecía de competencia por el factor territorial en atención a que el último lugar de prestación de servicios del actor fue en Nilo, Cundinamarca (*«14AutoFaltaCompetencia»* de la carpeta *«002ActuacionJuzgados9AdministrativoIbague»*).

2.3. Remitido el proceso, y efectuado el 6 de abril de 2021 el reparto entre los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot le correspondió su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*).

2.4. El 12 de abril de 2021 el expediente ingresó al Despacho para proveer (*«005ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, una vez revisado el expediente, el Despacho advierte que la demanda no cumpla con el requisito del numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, que acompañe la demanda con **la copia del acto acusado** y con **la constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución del acto administrativo acusado**, es decir, del acto administrativo de 21 de julio de 2020, pues, no obra en el expediente como tampoco su constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución.

Motivos por los cuales se hace necesario requerir a la apoderada judicial en tal sentido para que subsane en debida forma la demanda y en los términos del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)») y que es concordante con el inciso 4 del artículo 6º del Decreto 806 de 2020. Advirtiéndole que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales y dispuestas para tal fin** de la

entidad demandada de **manera simultánea**[1], esto es, en un mismo correo *«en o a modo copia»*.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE a la apoderada judicial del señor ORANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, **SO PENA DE RECHAZO**, subsane la demanda en el sentido de que:

1.1. Satisfaga el requisito del numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con relación a que remita; ***(i)*** la copia del acto administrativo de 21 de julio de 2020 junto con, ***(ii)*** la constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución del acto administrativo acusado, es decir, del mismo acto administrativo de 21 de julio de 2020.

SEGUNDO: RECUÉRDASELE a la apoderada judicial del señor ORANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales** de las entidades demandadas de **manera simultánea**, esto es, en un mismo correo electrónico, situación que se deberá acreditar, tal como lo prevé el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (concordante con el inciso 4º del artículo 6º del Decreto 806 de 2020).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO

[1] https://dle.rae.es/simultanear: 1. tr. Realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos.

JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
499927B0EB9256B502134A91EC02D13FB7017B242D5EA82055618B08CDA7EA7D
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:47 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00099-00**
DEMANDANTE:	**MARTHA LUCIA PRIETO DUARTE**
DEMANDADO:	**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por la señora MARTHA LUCIA PRIETO DUARTE, por conducto de apoderado judicial, contra la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. La señora MARTHA LUCIA PRIETO DUARTE, por conducto de apoderado judicial, el 8 de abril de 2021 radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*), con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. DP-2021-004 de 12 de febrero de 2020 mediante la cual la Entidad demandada negó la existencia de una relación laboral entre esta con la demandante y el reconocimiento y pago de acreencias laborales.

2.2. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer («*005ConstanciaDespacho*»).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En primer lugar, se advierte que la demanda no cumple con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante con el numeral 2º del artículo 166 ibidem, relativo a que la parte actora debe aportar «*las documentales que se encuentren en su poder*», lo anterior en atención a que no allegó de manera **legible** la «*orden de apoyo en operaciones asistenciales No. 514-2015*» (folios 107 a 111 «*002PoderDemandaAnexos*»), específicamente el folio 110 del archivo «*002PoderDemandaAnexos*».

Seguidamente, se observa que la demanda tampoco cumple con el requisito del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «*Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)*»), esto es, que el demandante al momento de presentar la demanda debe de manera **simultánea**[1] enviar, por medio electrónico, copia de ella y de sus anexos a los demandados y/o parte demandada, es decir, en un mismo correo «*en o a modo copia*».

Motivos por los cuales se hace necesario requerir al apoderado judicial en tal sentido para que subsane en debida forma la demanda y en los términos del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)»). Advirtiéndole que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales y dispuestas para tal fin** de la

[1] https://dle.rae.es/simultanear: 1. tr. Realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos.

entidad demandada de **manera simultánea**[2], esto es, en un mismo correo «*en o a modo copia*».

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE al apoderado judicial de la señora MARTHA LUCIA PRIETO DUARTE para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, **SO PENA DE RECHAZO**, subsane la demanda en el sentido de que:

1.1. Allegue, de conformidad con numeral 5º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante con el numeral 2º del artículo 166 ibidem, de manera íntegra y **legible** la «*orden de apoyo en operaciones asistenciales No. 514-2015*» (folios 107 a 111 «*002PoderDemandaAnexos*»), específicamente el folio 110 del archivo «*002PoderDemandaAnexos*».

1.2. Acredite el cumplimiento de lo preceptuado en el del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «*Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)*»), esto es, que remita por medio electrónico y de manera **simultánea** la copia de la demanda y de sus anexos a los demandados a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin, esto es, en un mismo correo «*en o a modo copia*».

SEGUNDO: RECUÉRDASELE al apoderado judicial de la señora MARTHA LUCIA PRIETO DUARTE que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales** de las entidades demandadas de **manera simultánea**, esto es, en un mismo correo electrónico, situación que se deberá acreditar, tal como lo prevé

[2] https://dle.rae.es/simultanear: 1. tr. Realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos.

el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
0B0828F1C248B787550EACD5576E856218A66C5D7258478D54E7B9186CC45D00
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:49 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00100-00**
DEMANDANTE:	**RÚBEN CAMILO BONILLA PARRA**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor RÚBEN CAMILO BONILLA PARRA, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El señor RÚBEN CAMILO BONILLA PARRA, por conducto de apoderado judicial, el 8 de abril de 2021 radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*), con el propósito de obtener la nulidad de la Resolución No. 2858 de 26 de octubre de 2021 mediante la cual la Entidad demandada retiró del servicio activo al actor «*por llamamiento a calificar servicios*».

2.2. El 9 de abril de 2021 el apoderado judicial de la parte actora remitió únicamente a la dirección electrónica de este Despacho las pruebas y/o anexos de la demanda (*«005EscritoDemandante»*).

2.3. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«006ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En primer lugar, se observa que la demanda no cumple con el requisito del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 *«Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)»*), esto es, que el demandante al momento de presentar la demanda debe de manera **simultánea**[1] enviar, por medio electrónico, copia de ella **y de sus anexos a los demandados** y/o parte demandada, es decir, en un mismo correo *«en o a modo copia»*.

Lo anterior, por cuanto, se precisa, si bien el apoderado judicial de la parte actora al momento de presentar la demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, Cundinamarca, envió de manera simultánea este escrito a la parte demandada, lo cierto es que, los anexos del libelo introductorio están y/o estaban, como se desprende del folio 10 *«002DemandaPoderAnexos»* en el siguiente enlace web: https://drive.google.com/drive/folders/1NoCE5kh_JxAnh0M1iVR7i_Mo8GyifwrF?usp=sharing. Empero, el acceso a dicho enlace está supeditado a una autorización por parte de quien comparte el Enlace de Acceso, motivo por el cual, este Despacho, en un primer momento, y en procura de la efectividad del derecho de defensa y contradicción no podía tener por satisfecho el requisito de la demanda consistente en el deber de aportar las pruebas de esta (numeral

[1] https://dle.rae.es/simult%C3%A1neo: 1. adj. Dicho de una cosa: Que se hace u ocurre al mismo tiempo que otra.

5º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

No obstante, tal y como se narró en el acápite de antecedentes de esta providencia, el apoderado judicial de la parte actora, esto es, el 9 de abril de 2021, remitió como único destinatario a este Despacho los anexos y/o pruebas de la demanda (*«005EscritoDemandante»*). Aspecto por el cual, al tenor de lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se tiene por no satisfecho, pues, se reitera, la parte actora no envío copia de la demanda **y de sus anexos a los demandados de manera simultánea**.

Seguidamente, se advierte que el poder allegado visible en el folio 19 del archivo *«002DemandaPoderAnexos»* resulta insuficiente como quiera que no se cumple la exigencia contemplada, bien sea en el artículo 5º del Decreto 806 de 2020, o la del artículo 74 del Código General del Proceso, concerniente a que, por un lado, el *«poder especial para cualquier actuación judicial se podrán conferir **mediante**[2] mensaje de datos»* (Artículo 5º del Decreto 806 de 2020) y, por el otro, *«el poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o por memorial dirigido al juez de conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado **personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario**»* (Artículo 74 del Código General del Proceso).

Motivos por los cuales se hace necesario requerir al apoderado judicial en tal sentido para que subsane en debida forma la demanda y en los términos del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)»). Advirtiéndole que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales y dispuestas para tal fin** de la

[2] https://dle.rae.es/mediante: 1. prep. Por medio de, con, con la ayuda de.

entidad demandada de **manera simultánea**[3], esto es, en un mismo correo *«en o a modo copia»*.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE al apoderado judicial del señor RÚBEN CAMILO BONILLA PARRA para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, **SO PENA DE RECHAZO**, subsane la demanda en el sentido de que:

1.1. Acredite el cumplimiento de lo preceptuado en el del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 *«Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)»*), esto es, que remita por medio electrónico y de manera **simultánea la copia** de la demanda **y de sus anexos** a los demandados a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin, esto es, en un mismo correo *«en o a modo copia»*.

1.2. Allegue el poder debidamente conferido en donde el asunto este claramente identificado, determinado e individualizado con toda precisión y dirigido al juez de conocimiento, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso. Debe recordarse que el poder debe remitirse teniendo en cuenta lo previsto en el artículo en comento o en el artículo 5º del Decreto 806 de 4 de junio de 2020.

SEGUNDO: RECUÉRDASELE al apoderado judicial del señor RÚBEN CAMILO BONILLA PARRA que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales** de las entidades demandadas de **manera simultánea**, esto es, en un mismo correo electrónico, situación que se deberá acreditar, tal

[3] https://dle.rae.es/simultanear: 1. tr. Realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos.

como lo prevé el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
ED8A65D93519FDFDD499CE5123A226F467EB79630CDD8B98F80111D8C5B2A9C2
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:50 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00071-00**
DEMANDANTE:	**JOSÉ ROBERTO MACANA**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**EJECUTIVO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 4 de febrero de 2021 este Despacho libró mandamiento de pago a favor del señor JOSÉ ROBERTO MACANA y a cargo de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con la orden impartida en la sentencia proferida en primera instancia por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT el 7 de octubre de 2015, modificada en segunda instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN «D» el 9 de junio de 2016 dentro del radicado No. 25307333300120140066500[1].

2.2. El 17 de febrero de 2021 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda[2].

---

[1] Archivo denominado 009AutoLibraMandamientodePago del expediente digitalizado.
[2] Archivo denominado 011NotificacionPersonal del expediente digitalizado.

2.3. El 26 de febrero de 2021, quien adujo ser la apoderada de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, allegó un confuso escrito que tituló oposición a medida cautelar (aun cuando en el proceso no se ha decretado cautelar alguna), en el que solicitó la terminación del proceso argumentando que la Entidad se encuentra adelantando el trámite administrativo para el pago ordenado[3], sin invocar alguna de las excepciones enlistadas en el numeral 2º del artículo 442 del Código General del Proceso.

2.4. El 23 de marzo de 2021, nuevamente, quien adujo ser la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, allegó contestación a la demanda, la cual fue radicada de manera extemporánea[4], según se señaló en la constancia secretarial de 12 de abril de 2021[5].

2.5. El 12 de abril de 2021 ingresó el proceso al Despacho.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1. Observadas las valoraciones realizadas en precedencia, sería del caso dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 440 del Código General del Proceso y ordenar seguir adelante con la ejecución, no obstante, se advierte que quien adujo ser la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, no aportó la documental que se le solicitó a la Entidad, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el ordinal sexto de la parte resolutiva del auto con el que se libró mandamiento de pago, esto es: la documental en la que se precise el salario en actividad y demás acreencias laborales (subsidio familiar, prima de antigüedad, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías) pagadas al señor JOSÉ ROBERTO MACANA, desde el 03 de junio de 2007 hasta el 29 de noviembre de 2011. Al respecto, es necesario precisar que si bien en el folio 10 del archivo denominado 013ContestacionEjercito del expediente digitalizado se evidencia una

[3] Archivo denominado 012EscritoEjercitoNacional del expediente digitalizado.
[4] Archivo denominado 013ContestacionEjercito del expediente digitalizado.
[5] Archivo denominado 014ConstanciaDespacho del expediente digitalizado.

certificación en la que un Oficial de Nómina del Ejército indica que al señor JOSÉ ROBERTO MACANA le fue realizada liquidación de acuerdo a lo ordenado por este Juzgado, tal documento no suple lo que le fue solicitado a la Entidad, pues deben especificarse de manera puntual las sumas que le fueron pagadas por cada uno de los conceptos al demandante durante el período señalado. Por lo anterior, habrá de requerirse a la Entidad.

2.2. De otra parte, se observa que el escrito de poder aportado no cumple con el requisito establecido en el artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020[6], esto es, ser conferido mediante mensaje de datos, enunciando la dirección de correo electrónico de la abogada, que debe coincidir con la reportada en el Registro Nacional de Abogados, o, en su defecto, cumplir con las previsiones del artículo 74 del Código General del Proceso. Por lo que también se requerirá en tal sentido.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a quien se reputa apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, para que en el término máximo e improrrogable de los diez (10) días contados a partir de la notificación del presente proveído allegue, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso[7], la documental en la que se precise el salario en actividad

---

[6] "**Artículo 5.** ***PODERES***. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.

En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.

Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales".

[7] «**Artículo 44.** ***PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*****.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(…)

2. **Sancionar con arresto** inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.

y demás acreencias laborales (subsidio familiar, prima de antigüedad, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías) pagadas al señor JOSÉ ROBERTO MACANA, desde el 03 de junio de 2007 hasta el 29 de noviembre de 2011, se resalta que deben especificarse de manera puntual las sumas que le fueron pagadas por cada uno de los conceptos al demandante durante el período señalado.

SEGUNDO: REQUIÉRESE a quien se reputa apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que, dentro del mismo término, allegue el poder a ella conferido, observando las previsiones del artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 o el artículo 74 del Código General del Proceso.

Lo anterior deberá ser allegado sin que se requiera librar oficio por Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

---

3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

(…)» (Destaca el Despacho).

Código de verificación:
2f2a3bcf432c6505ab95e65053cfd64dcbbdd5fb4ab8c9295db325b2d0b59d2f
Documento generado en 15/04/2021 02:44:35 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00072-00**
DEMANDANTE:	**JOSÉ EVER ALBERTO VARGAS**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**EJECUTIVO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 4 de febrero de 2021 este Despacho libró mandamiento de pago a favor del señor JOSÉ EVER ALBERTO VARGAS y a cargo de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con la orden impartida en la sentencia proferida por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT el 14 de junio de 2016 dentro del radicado No. 25307333300120150033300[1].

2.2. El 17 de febrero de 2021 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda[2].

2.3. El 26 de febrero de 2021, quien adujo ser la apoderada de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, allegó un confuso

[1] Archivo denominado 009AutoLibraMandamiento del expediente digitalizado.
[2] Archivo denominado 011NotificacionPersonal del expediente digitalizado.

escrito que tituló oposición a medida cautelar (aun cuando en el proceso no se ha decretado cautelar alguna), en el que solicitó la terminación del proceso argumentando que la Entidad se encuentra adelantando el trámite administrativo para el pago ordenado[3], sin invocar ninguna de las excepciones enlistadas en el numeral 2º del artículo 442 del Código General del Proceso.

2.4. El 23 de marzo de 2021, nuevamente, quien adujo ser la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, allegó contestación a la demanda, la cual fue radicada de manera extemporánea[4], según se señaló en constancia secretarial de 12 de abril de 2021[5].

2.5. El 12 de abril de 2021 ingresó el proceso al Despacho.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1. Observadas las valoraciones realizadas con anterioridad, sería del caso dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 440 del Código General del Proceso y ordenar seguir adelante con la ejecución, no obstante, se advierte que quien adujo ser la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, no aportó la documental que se le solicitó a la Entidad, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el numeral sexto de la parte resolutiva del auto con el que se libró mandamiento de pago, esto es: la documental en la que se precise el salario en actividad y demás acreencias laborales (subsidio familiar, prima de antigüedad, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías) pagadas al señor JOSÉ EVER ROBERTO VARGAS, desde el 1º de noviembre de 2003 hasta la fecha de su retiro del servicio. Al respecto, es necesario precisar que si bien en el folio 10 del archivo denominado 013ContestacionEjercito del expediente digitalizado se evidencia certificación en la que un Oficial de Nómina del Ejército indica que al señor JOSÉ EVER ALBERTO VARGAS le fue realizada liquidación de acuerdo a lo

[3] Archivo denominado 012EscritoEjercitoNacional del expediente digitalizado.
[4] Archivo denominado 013ContestacionEjercito del expediente digitalizado.
[5] Archivo denominado 014ConstanciaDespacho del expediente digitalizado.

ordenado por este Juzgado, tal documento no suple lo que le fue solicitado a la Entidad, pues deben especificarse de manera puntual las sumas que le fueron pagadas por cada uno de los conceptos al demandante durante el período señalado. Por lo anterior, habrá de requerirse a la Entidad.

2.2. De otra parte, se observa que el escrito de poder aportado no cumple con el requisito establecido en el artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020[6], esto es, ser conferido mediante mensaje de datos, enunciando la dirección de correo electrónico de la abogada, que debe coincidir con la reportada en el Registro Nacional de Abogados, o, en su defecto, cumplir con las previsiones del artículo 74 del Código General del Proceso. Por lo que también se requerirá en tal sentido.

En consecuencia **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a quien se reputa apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, para que en el término máximo e improrrogable de los diez días contados a partir de la notificación del presente proveído allegue, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso[7], la documental en la que se precise el salario en actividad y demás acreencias laborales (subsidio familiar, prima de antigüedad, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías) pagadas al señor JOSÉ EVER ROBERTO VARGAS, desde el 1º de noviembre de 2003 hasta

---

[6] "**Artículo 5. *PODERES***. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales".

[7] «**Artículo 44. *PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(...)
2. **Sancionar con arresto** inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.
3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.
(...)» (Destaca el Despacho).

la fecha de su retiro del servicio, se resalta que deben especificarse de manera puntual las sumas que le fueron pagadas por cada uno de los conceptos al demandante durante el período señalado.

SEGUNDO: REQUIÉRESE a quien se reputa apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que, dentro del mismo término, allegue el poder a ella conferido, observando las previsiones del artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 o el artículo 74 del Código General del Proceso.

Lo anterior deberá ser allegado sin que se requiera librar oficio por Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
d0f30b7394d63942516e7592ba4e8943621630a9d4e2f738a04b63e272500f9b
Documento generado en 15/04/2021 02:44:36 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00074-00**
DEMANDANTE:	**ENÉL GUILLÉN GARCÍA**
DEMANDADO:	**MACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**EJECUTIVO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 4 de febrero de 2021 este Despacho libró mandamiento de pago a favor del señor ENEL GUILLÉN GARCÍA y a cargo de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con la orden impartida en la sentencia proferida en primera instancia por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT el 31 de julio de 2017, dentro del radicado No. 25307333300120160015800[1].

2.2. El 17 de febrero de 2021 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda[2].

---

[1] Archivo denominado 010AutoLibraMandamiento del expediente digitalizado.
[2] Archivo denominado 012NotificacionPersonal del expediente digitalizado.

2.3. El 26 de febrero de 2021, quien adujo ser la apoderada de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, allegó un confuso escrito que tituló oposición a medida cautelar (aun cuando en el proceso no se ha decretado cautelar alguna), en el que solicitó la terminación del proceso argumentando que la Entidad se encuentra adelantando el trámite administrativo para el pago ordenado[3], sin invocar ninguna de las excepciones enlistadas en el numeral 2º del artículo 442 del Código General del Proceso.

2.4. El 23 de marzo de 2021, nuevamente, quien adujo ser la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, allegó contestación a la demanda, la cual fue radicada de manera extemporánea[4], según se señaló en constancia secretarial de 12 de abril de 2021[5].

2.5. El 12 de abril de 2021 ingresó el proceso al Despacho.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1. Observadas las valoraciones realizadas con anterioridad, sería del caso dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 440 del Código General del Proceso y ordenar seguir adelante con la ejecución, no obstante, se advierte que quien adujo ser la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, no aportó la documental que se le solicitó a la Entidad, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el numeral sexto de la parte resolutiva del auto con el que se libró mandamiento de pago, esto es: la documental en la que se precise el salario en actividad y demás acreencias laborales (subsidio familiar, prima de antigüedad, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías) pagadas al señor ENEL GUILLÉN GARCÍA, desde el 30 de noviembre de 2011 y hasta su retiro del servicio. Al respecto, es necesario precisar que si bien en el folio 11 del archivo denominado 014ContestacionEjercito del expediente digitalizado se evidencia certificación

[3] Archivo denominado 013EscritoEjercitoNacional del expediente digitalizado.
[4] Archivo denominado 014ContestacionEjercito del expediente digitalizado.
[5] Archivo denominado 015ConstanciaDespacho del expediente digitalizado.

en la que un Oficial de Nómina del Ejército indica que al señor JOSÉ EVER ALBERTO VARGAS le fue realizada liquidación de acuerdo a lo ordenado por este Juzgado, tal documento no suple lo que le fue solicitado a la Entidad, pues deben especificarse de manera puntual las sumas que le fueron pagadas por cada uno de los conceptos al demandante durante el período señalado. Por lo anterior, habrá de requerirse a la Entidad.

2.2. De otra parte, se observa que el escrito de poder aportado no cumple con el requisito establecido en el artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020[6], esto es, ser conferido mediante mensaje de datos, enunciando la dirección de correo electrónico de la abogada, que debe coincidir con la reportada en el Registro Nacional de Abogados, o, en su defecto, cumplir con las previsiones del artículo 74 del Código General del Proceso. Por lo que también se requerirá en tal sentido.

En consecuencia **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a quien se reputa apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, para que en el término máximo e improrrogable de los diez días contados a partir de la notificación del presente proveído allegue, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso[7], la documental en la que se precise el salario en actividad y demás acreencias laborales (subsidio familiar, prima de antigüedad, prima

[6] "**Artículo 5. *PODERES***. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales".

[7] «**Artículo 44. *PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(...)
2. **Sancionar con arresto** inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.
3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.
(...)» (Destaca el Despacho).

de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías) pagadas al señor ENEL GUILLÉN GARCÍA, desde el 30 de noviembre de 2011 y hasta su retiro del servicio, se resalta que deben especificarse de manera puntual las sumas que le fueron pagadas por cada uno de los conceptos al demandante durante el período señalado.

SEGUNDO: REQUIÉRESE a quien se reputa apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que, dentro del mismo término, allegue el poder a ella conferido, observando las previsiones del artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 o el artículo 74 del Código General del Proceso.

Lo anterior deberá ser allegado sin que se requiera librar oficio por Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
9533890c1e0da20c1b658108cfc23f2f5d58dff6ac91969ecff5ed057b4d9da9
Documento generado en 15/04/2021 02:44:37 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00075-00**
DEMANDANTE:	**JORGE LUIS DORIA MARTÍNEZ**
DEMANDADO:	**MACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**EJECUTIVO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 4 de febrero de 2021 este Despacho libró mandamiento de pago a favor del señor JORGE LUIS DORIA MARTÍNEZ y a cargo de la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con la orden impartida en la sentencia proferida en primera instancia por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT el 21 de junio de 2017, dentro del radicado No. 25307333300120150067100[1].

2.2. El 17 de febrero de 2021 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda[2].

---

[1] Archivo denominado 010AutoLibraMandamiento del expediente digitalizado.
[2] Archivo denominado 012NotificacionPersonal del expediente digitalizado.

2.3. El 26 de febrero de 2021, quien adujo ser la apoderada de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, allegó un confuso escrito que tituló oposición a medida cautelar (aun cuando en el proceso no se ha decretado cautelar alguna), en el que solicitó la terminación del proceso argumentando que la Entidad se encuentra adelantando el trámite administrativo para el pago ordenado[3], sin invocar ninguna de las excepciones enlistadas en el numeral 2º del artículo 442 del Código General del Proceso.

2.4. El 23 de marzo de 2021, nuevamente, quien adujo ser la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, allegó contestación a la demanda, la cual fue radicada de manera extemporánea[4], según se señaló en constancia secretarial de 12 de abril de 2021[5].

2.5. El 12 de abril de 2021 ingresó el proceso al Despacho.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1. Observadas las valoraciones realizadas con anterioridad, sería del caso dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 440 del Código General del Proceso y ordenar seguir adelante con la ejecución, no obstante, se advierte que quien adujo ser la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, no aportó la documental que se le solicitó a la Entidad, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el numeral sexto de la parte resolutiva del auto con el que se libró mandamiento de pago, esto es: la documental en la que se precise el salario en actividad y demás acreencias laborales (subsidio familiar, prima de antigüedad, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías) pagadas al señor JORGE LUIS DORIA MARTÍNEZ, desde el 30 de enero de 2011 y hasta su retiro del servicio. Al respecto, es necesario precisar que si bien en el folio 11 del archivo denominado 014ContestacionEjercito del expediente digitalizado se evidencia certificación

[3] Archivo denominado 013EscritoEjercitoNacional del expediente digitalizado.
[4] Archivo denominado 014ContestacionEjercito del expediente digitalizado.
[5] Archivo denominado 015ConstanciaDespacho del expediente digitalizado.

en la que un Oficial de Nómina del Ejército indica que al señor JORGE LUIS DORIA MARTÍNEZ le fue realizada liquidación de acuerdo a lo ordenado por este Juzgado, tal documento no suple lo que le fue solicitado a la Entidad, pues deben especificarse de manera puntual las sumas que le fueron pagadas por cada uno de los conceptos al demandante durante el período señalado. Por lo anterior, habrá de requerirse a la Entidad.

2.2. De otra parte, se observa que el escrito de poder aportado no cumple con el requisito establecido en el artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020[6], esto es, ser conferido mediante mensaje de datos, enunciando la dirección de correo electrónico de la abogada, que debe coincidir con la reportada en el Registro Nacional de Abogados, o, en su defecto, cumplir con las previsiones del artículo 74 del Código General del Proceso. Por lo que también se requerirá en tal sentido.

En consecuencia **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a quien se reputa apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, para que en el término máximo e improrrogable de los diez días contados a partir de la notificación del presente proveído allegue, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso[7], la documental en la que se precise el salario en actividad y demás acreencias laborales (subsidio familiar, prima de antigüedad, prima

---

[6] "**Artículo 5. *PODERES***. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales".

[7] «**Artículo 44. *PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(...)
2. **Sancionar con arresto** inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.
3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.
(...)» (Destaca el Despacho).

de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías) pagadas al señor JORGE LUIS DORIA MARTÍNEZ, desde el 30 de enero de 2011 y hasta su retiro del servicio, se resalta que deben especificarse de manera puntual las sumas que le fueron pagadas por cada uno de los conceptos al demandante durante el período señalado.

SEGUNDO: REQUIÉRESE a quien se reputa apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que, dentro del mismo término, allegue el poder a ella conferido, observando las previsiones del artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 o el artículo 74 del Código General del Proceso.

Lo anterior deberá ser allegado sin que se requiera librar oficio por Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
e62e91c0f3780c81351b54a8ba154da2f6b58d6638914f8a2c64e4c9886061ba
Documento generado en 15/04/2021 02:44:38 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2020-00081-00**
Demandante:	**COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. ahora TELEFÓNICA**
Demandado:	**MUNICIPIO DE RICAURTE**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 16 de julio de 2020 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. ahora TELEFÓNICA, por conducto de apoderado judicial, contra el MUNICIPIO DE RICAURTE, con el propósito de obtener la nulidad de la Factura No. RIC-005-2019 de 23 de enero de 2019 y de la Resolución No. 004 de 27 de febrero de 2020, por medio de las cuales el Ente demandado determinó a la actora el impuesto de alumbrado público del mes de diciembre de 2018 y desató el recurso de reconsideración respectivamente (*«006AutoAdmiteDemanda»*).

1.2. Previo pago de los gastos procesales, el 19 de agosto de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«007PagoGastosProcesales»* y *«009NotificacionPersonalDemanda»*).

1.3. El 14 de octubre de 2020 el MUNICIPIO DE RICAURTE contestó la demanda sin remitir los anexos correspondientes y sin adjuntar el mandato que acredite el derecho de postulación de la profesional del derecho que aduce ser la apoderada judicial del Ente territorial demandado (*«010ContestacionDemanda»*).

1.4. El 10 de diciembre de 2020 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 9 de noviembre de 2020 (*«011ConstanciaTerminos»*).

1.5. El 11 de diciembre de 2020 se corrió traslado de las excepciones planteadas en el escrito de contestación de la demanda (*«012FijacionLista»*).

1.6. El 3 de febrero de 2021 el doctor ÁNGEL MAURICIO CORTÉS MARTÍNEZ allego poder a él conferido por la doctora GLORIA RICARDO DONDEL, en su calidad de Alcaldesa del Municipio de Ricaurte, para representar a dicho Ente territorial en el asunto de la referencia (*«013PoderMunicipio»*).

1.7. Mediante providencia de 25 de febrero de 2021 este Despacho, por un lado, reconoció personería adjetiva al doctor CORTÉS MARTÍNEZ para actuar como apoderado judicial del ente territorial demandado y, por el otro, requirió al MUNICIPIO DE RICAURTE para que: ***i)*** allegara de manera íntegra y legible el expediente administrativo que contuviese los antecedentes de la actuación objeto del presente asunto y ***ii)*** acreditara que la profesional del derecho que contestó la demanda el 14 de octubre de 2020 era la representante judicial del Municipio (*«015AutoRequiere»*).

1.8. El 26 de febrero de 2021 el apoderado judicial del MUNICIPIO DE RICAURTE remitió el mandato que acredita que la profesional del derecho que presentó el escrito de contestación de la demanda era la representante judicial del ente territorial y adjunto de manera parcial el expediente administrativo del asunto de la referencia (*«017EscritoPoderMunicipio»*).

1.9. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer.

I. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, y revisado la documental allegada por el apoderado judicial del MUNICIPIO DE RICAURTE el 26 de febrero de 2021, advierte esta Instancia Judicial que el ente territorial demandado no atendió de manera íntegra el requerimiento efectuado por este Despacho en proveído de 25 de febrero hogaño en atención a que no remitió los Acuerdos Municipales Nos. 29 de 26 de septiembre de 1998, 24 de 10 de diciembre de 2001, 12 de 11 de septiembre de 2008 y 18 de 28 de diciembre de 2012. Piezas y/o documentos que se entienden que comportan los antecedentes administrativos de la presente actuación en atención a que tal y como se desprende de la Factura No. RIC-005 de 2019; estos sirvieron de base para la determinación del impuesto del alumbrado público que en el asunto de la referencia es objeto de controversia.

Por lo anterior, es del caso requerir al MUNICIPIO DE RICAURTE, por medio de su apoderado judicial, para que allegue la **totalidad** del expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, esto es, lo relacionado a la Factura RIC-005 de 23 de enero de 2019 y a la Resolución No. 004 de 27 de febrero de 2020, especialmente los Acuerdos Municipales Nos. 29 de 26 de septiembre de 1998, 24 de 10 de diciembre de 2001, 12 de 11 de septiembre de 2008 y 18 de 28 de diciembre de 2012.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE al apoderado judicial del MUNICIPIO DE RICAURTE para que en el término máximo e improrrogable de los cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente proveído allegue, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del

artículo 44 del Código General del Proceso[1], de manera **íntegra** y legible el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, esto es, lo relacionado a la Factura RIC-005 de 23 de enero de 2019 y a la Resolución No. 004 de 27 de febrero de 2020, especialmente los Acuerdos Municipales Nos. 29 de 26 de septiembre de 1998, 24 de 10 de diciembre de 2001, 12 de 11 de septiembre de 2008 y 18 de 28 de diciembre de 2012.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
a2ff7524b7bfe4eccccb5fccd58b3bc1e2564834fa867dba9d4a63701299e459
Documento generado en 15/04/2021 02:43:31 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

---

[1] «**Artículo 44. *PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(...)

2. **Sancionar con arresto** inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.

3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

(...)» (Destaca el Despacho).

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00084-00**
DEMANDANTE:	**ESAÚ CÁCERES LEÓN**
DEMANDADO:	**MACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**EJECUTIVO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 4 de febrero de 2021 este Despacho libró mandamiento de pago a favor del señor ESAÚ CÁCERES LEÓN y a cargo de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con la orden impartida en la sentencia proferida en primera instancia por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT el 18 de diciembre de 2017, dentro del radicado No. 25307333300120160018900[1].

2.2. El 17 de febrero de 2021 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda[2].

---

[1] Archivo denominado 009LibraMandamiento del expediente digitalizado.
[2] Archivo denominado 011NotificacionPersonal del expediente digitalizado.

2.3. El 26 de febrero de 2021, quien adujo ser la apoderada de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, allegó un confuso escrito que tituló oposición a medida cautelar (aun cuando en el proceso no se ha decretado cautelar alguna), en el que solicitó la terminación del proceso argumentando que la Entidad se encuentra adelantando el trámite administrativo para el pago ordenado[3], sin invocar ninguna de las excepciones enlistadas en el numeral 2º del artículo 442 del Código General del Proceso.

2.4. El 23 de marzo de 2021, nuevamente, quien adujo ser la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, allegó contestación a la demanda, la cual fue radicada de manera extemporánea[4], según se señaló en constancia secretarial de 12 de abril de 2021[5].

2.5. El 12 de abril de 2021 ingresó el proceso al Despacho.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1. Observadas las valoraciones realizadas con anterioridad, sería del caso dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 440 del Código General del Proceso y ordenar seguir adelante con la ejecución, no obstante, se advierte que quien adujo ser la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, no aportó la documental que se le solicitó a la Entidad, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el numeral sexto de la parte resolutiva del auto con el que se libró mandamiento de pago, esto es: la documental en la que se precise el salario en actividad y demás acreencias laborales (subsidio familiar, prima de antigüedad, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías) pagadas al señor ESAÚ CÁCERES LEÓN, desde el 10 de noviembre de 2011 y hasta su retiro del servicio. Al respecto, es necesario precisar que si bien en el folio 9 del archivo denominado 013ContestacionEjercito del expediente digitalizado se evidencia certificación

[3] Archivo denominado 012EscritoEjercitoNacional del expediente digitalizado.
[4] Archivo denominado 013ContestacionEjercito del expediente digitalizado.
[5] Archivo denominado 014ConstanciaDespacho del expediente digitalizado.

en la que un Oficial de Nómina del Ejército indica que al señor ESAÚ CÁCERES LEÓN le fue realizada liquidación de acuerdo a lo ordenado por este Juzgado, tal documento no suple lo que le fue solicitado a la Entidad, pues deben especificarse de manera puntual las sumas que le fueron pagadas por cada uno de los conceptos al demandante durante el período señalado. Por lo anterior, habrá de requerirse a la Entidad.

2.2. De otra parte, se observa que el escrito de poder aportado no cumple con el requisito establecido en el artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020[6], esto es, ser conferido mediante mensaje de datos, enunciando la dirección de correo electrónico de la abogada, que debe coincidir con la reportada en el Registro Nacional de Abogados, o, en su defecto, cumplir con las previsiones del artículo 74 del Código General del Proceso. Por lo que también se requerirá en tal sentido.

En consecuencia **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a quien se reputa apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, para que en el término máximo e improrrogable de los diez días contados a partir de la notificación del presente proveído allegue, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso[7], la documental en la que se precise el salario en actividad y demás acreencias laborales (subsidio familiar, prima de antigüedad, prima

[6] "**Artículo 5. *PODERES***. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales".

[7] «**Artículo 44. *PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(...)
2. **Sancionar con arresto** inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.
3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.
(...)» (Destaca el Despacho).

de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías) pagadas al señor ESAÚ CÁCERES LEÓN, desde el 10 de noviembre de 2011 y hasta su retiro del servicio, se resalta que deben especificarse de manera puntual las sumas que le fueron pagadas por cada uno de los conceptos al demandante durante el período señalado.

SEGUNDO: REQUIÉRESE a quien se reputa apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que, dentro del mismo término, allegue el poder a ella conferido, observando las previsiones del artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 o el artículo 74 del Código General del Proceso.

Lo anterior deberá ser allegado sin que se requiera librar oficio por Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
750b3df1034023bcf24b45c88dfbe1f81220537edf6f6c7686df8f6e138e519d
Documento generado en 15/04/2021 02:44:40 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00088-00**
DEMANDANTE:	**NOÉ TOTENA DÍAZ**
DEMANDADO:	**MACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**EJECUTIVO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 4 de febrero de 2021 este Despacho libró mandamiento de pago a favor del señor NOÉ TOTENA DÍAZ y a cargo de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con la orden impartida en la sentencia proferida en primera instancia por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT el 18 de julio de 2018, dentro del radicado No. 25307333300120170005200[1].

2.2. El 17 de febrero de 2021 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda[2].

---

[1] Archivo denominado 009AutoLibraMandamiento del expediente digitalizado.
[2] Archivo denominado 011NotificacionPersonal del expediente digitalizado.

2.3. El 26 de febrero de 2021, quien adujo ser la apoderada de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, allegó un confuso escrito que tituló oposición a medida cautelar (aun cuando en el proceso no se ha decretado cautelar alguna), en el que solicitó la terminación del proceso argumentando que la Entidad se encuentra adelantando el trámite administrativo para el pago ordenado[3], sin invocar ninguna de las excepciones enlistadas en el numeral 2º del artículo 442 del Código General del Proceso.

2.4. El 23 de marzo de 2021, nuevamente, quien adujo ser la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, allegó contestación a la demanda, la cual fue radicada de manera extemporánea[4], según se señaló en constancia secretarial de 12 de abril de 2021[5].

2.5. El 12 de abril de 2021 ingresó el proceso al Despacho.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1. Observadas las valoraciones realizadas con anterioridad, sería del caso dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 440 del Código General del Proceso y ordenar seguir adelante con la ejecución, no obstante, se advierte que quien adujo ser la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, no aportó la documental que se le solicitó a la Entidad, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el numeral sexto de la parte resolutiva del auto con el que se libró mandamiento de pago, esto es: el salario en actividad y demás acreencias laborales (subsidio familiar, prima de antigüedad, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías) pagadas al señor NOÉ TOTENA DÍAZ, desde el 22 de noviembre de 2012 y hasta su retiro del servicio. Al respecto, es necesario precisar que si bien en el folio 11 del archivo denominado 013ContestacionEjercito del expediente digitalizado se evidencia certificación en la que un Oficial de

[3] Archivo denominado 012EscritoEjercitoNacional del expediente digitalizado.
[4] Archivo denominado 013ContestacionEjercito del expediente digitalizado.
[5] Archivo denominado 014ConstanciaDespacho del expediente digitalizado.

Nómina del Ejército indica que al señor ESAÚ CÁCERES LEÓN le fue realizada liquidación de acuerdo a lo ordenado por este Juzgado, tal documento no suple lo que le fue solicitado a la Entidad, pues deben especificarse de manera puntual las sumas que le fueron pagadas por cada uno de los conceptos al demandante durante el período señalado. Por lo anterior, habrá de requerirse a la Entidad.

2.2. De otra parte, se observa que el escrito de poder aportado no cumple con el requisito establecido en el artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020[6], esto es, ser conferido mediante mensaje de datos, enunciando la dirección de correo electrónico de la abogada, que debe coincidir con la reportada en el Registro Nacional de Abogados, o, en su defecto, cumplir con las previsiones del artículo 74 del Código General del Proceso. Por lo que también se requerirá en tal sentido.

En consecuencia **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a quien se reputa apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, para que en el término máximo e improrrogable de los diez días contados a partir de la notificación del presente proveído allegue, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso[7], la documental en la que se precise el salario en actividad y demás acreencias laborales (subsidio familiar, prima de antigüedad, prima

---

[6] "**Artículo 5. *PODERES***. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales".

[7] «**Artículo 44. *PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(...)
2. **Sancionar con arresto** inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.
3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.
(...)» (Destaca el Despacho).

de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías) pagadas al señor NOÉ TOTENA DÍAZ, desde el 22 de noviembre de 2012 y hasta su retiro del servicio, se resalta que deben especificarse de manera puntual las sumas que le fueron pagadas por cada uno de los conceptos al demandante durante el período señalado.

SEGUNDO: REQUIÉRESE a quien se reputa apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que, dentro del mismo término, allegue el poder a ella conferido, observando las previsiones del artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 o el artículo 74 del Código General del Proceso.

Lo anterior deberá ser allegado sin que se requiera librar oficio por Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f9a08e7699fec8cbdeb378690d51b1bc78398b211db80d500931d9562a2f39e3
Documento generado en 15/04/2021 02:44:41 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2020-00095-00**
Demandante:	**ESPERANZA AGUIRRE HERNÁNDEZ**
Demandado:	**NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO–FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Encontrándose el proceso pendiente para que le Despacho se pronuncie sobre la procedencia de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 6 de abril de 2021 la apoderada judicial de la parte actora, mediante escrito allegado vía correo electrónico, desiste de la demanda, en los siguientes términos (*«013Desistimiento»*):

> *« (…) por medio del presente escrito me permito manifestar al despacho, que con fundamento en el artículo 314 de la ley 1564 de 2012, aplicable ante la jurisdicción administrativa,* ***desisto de todas y cada una de las pretensiones que habían sido solicitadas en el libelo introductorio de la demanda****, en la cual se solicitaba el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la ley 1071 del 2006 al demandado, por el incumplimiento y la tardanza en el pago de las cesantías de mi representado,* ***toda vez que el día 15 DE MARZO DE 2021fue notificado por parte de la FIDUPREVISORA S.A, el depósito de la sanción por mora por vía***

> ***administrativa a nombre de mi poderdante, que luego de revisado cumple con el pago total de la obligación que se pretendía.***
>
> *Así las cosas y toda vez que con este pago se cumple el derecho que estaba siendo reclamado ante esta jurisdicción* ***solicito al despacho tener en cuenta el artículo 188 de la ley 1437 del 2011 que indica que se dispondrá de la condena en costas SOLO en el caso de proferirse sentencia que ponga fin al proceso, esto en concordancia con el artículo 365 de la ley 1564 de 2012 numeral octavo****, donde se indica que para imponer costas es necesario que aparezca probado en el expediente su causación y que ello sea comprobable, argumento que incluyo el Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de segunda instancia del 13 de junio de 2016 proceso con radicado 2013-911 M.P: Jairo Jiménez Aristizábal, de igual manera se indicó algo similar en la sentencia 2013-1136 del 29 de junio de 2016 con ponencia de la Dra. Martha Cecilia Madrid Roldán.»* (Destaca el Despacho).

1.2. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«014ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Así las cosas, el Despacho evidencia que a la parte actora le asiste ánimo que se declare la terminación del proceso.

Bajo ese contexto, esta sede judicial recuerda que en relación con el desistimiento, los artículos 314 a 316 del Código General del Proceso disponen:

> «**Artículo 314.** ***DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES.*** El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso.
>
> El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia.
>
> Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él.
>
> (…)
>
> El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y sólo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes.

(…)

Cuando el demandante sea la Nación, un departamento o municipio, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo».

«**Artículo 315.** ***QUIÉNES NO PUEDEN DESISTIR DE LAS PRETENSIONES.*** No pueden desistir de las pretensiones:

1. Los incapaces y sus representantes, a menos que previamente obtengan licencia judicial.

En este caso la licencia deberá solicitarse en el mismo proceso, y el juez podrá concederla en el auto que acepte el desistimiento si considera que no requiere la práctica de pruebas; en caso contrario fijará fecha y hora para audiencia con tal fin.

2. Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello.
3. Los curadores ad lítem».

«**Artículo 316.** ***DESISTIMIENTO DE CIERTOS ACTOS PROCESALES.*** Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.

El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.

El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos:

1. Cuando las partes así lo convengan.

2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido.

3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares.

4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así

> solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas».

De lo anterior se infiere que; ***i)*** se puede desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso, ***ii)*** el desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda con efectos de cosa juzgada, ***iii)*** el desistimiento puede ser total o parcial, ***iv)*** pueden presentar la solicitud de desistimiento los apoderados judiciales que tengan facultad expresa para ello y, ***v)*** de la solicitud se correrá traslado al demandado por el término de tres (3) días.

Puestas en ese estadio las cosas y, descendiendo al sub examine se tiene que; el 6 de abril de 2021 la señora ESPERANZA AGUIRRE HERNÁNDEZ, por conducto de su apoderada judicial, doctora PAULA MILENA AGUDELO MONTAÑA, presentó escrito con manifestación de desistimiento de la demanda, esto, una vez finalizado el término de traslado de la excepción previa propuesta en la contestación de la demanda y previo a el Despacho pronunciarse sobre la procedencia de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según se desprende de la constancia secretarial visible en el archivo *«010ConstanciaDespacho»* y, se observa que la apoderada judicial de la demandante cuenta con la facultad expresa para desistir, de conformidad con las facultades conferidas en el poder visible en folios 12 a 15 del archivo *«002DemandaPoderAnexos»* del expediente digitalizado.

En ese orden, previo a emitir pronunciamiento sobre la solicitud de desistimiento total de la demanda, es del caso, en aplicación del numeral 4º del artículo 316 del Código General del Proceso, poner en conocimiento de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- y del señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho dicha solicitud, para que se manifiesten al respecto.

En consecuencia, se **DISPONE:**

PRIMERO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y del señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho, por el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, la solicitud de desistimiento total de la demanda presentada por la apoderada judicial de la señora ESPERANZA AGUIRRE HERNÁNDEZ para que se manifiesten al respecto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
0BF5F564E1F6491C22D0979AC91245DC0E04325CAB3753817571DEDA8B19F2B8
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:51 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2020-00098-00**
Demandante:	**GISETH ANDREA RODRÍGUEZ ESPINOSA Y OTROS**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL**
Medio de Control:	**REPARACIÓN DIRECTA**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 23 de julio de 2020 este Despacho, admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron los señores GISETH ANDREA RODRÍGUEZ ESPINOSA, MARTHA ISABEL ESPINOSA RODRÍGUEZ, MAIRA ALEXANDRA RODRÍGUEZ TOVAR, BLANICH JULITZA MONROY GARCÍA, NAYRA ISABELLA MONROY, DAVID XAVIER MONROY y BERNARDINO OLIVAR QUINTERO, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN–MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL con ocasión a la tentativa de homicidio que sufrió la señora GISETH ANDREA RODRÍGUEZ ESPINOSA el 22 de abril de 2018 (*«008AutoAdmiteDemanda»*).

1.3. Previo pago de los gastos procesales, el 19 de agosto de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«009PagoGastosProcesales»* y *«010NotificacionPersonalDemanda»*).

1.4. El 6 de noviembre de 2020 el apoderado judicial de la NACIÓN–MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, dentro del término legal contestó la demanda *(«011ContestacionDemanda»)*.

1.5. Mediante auto de 18 de febrero de 2021 se fijó como fecha para la celebración de la audiencia inicial que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el 12 de marzo de 2021 *(«017AutoFijaFechaAudInicial»)*.

1.6. En la audiencia inicial celebrada el 12 de marzo de 2021, entre otros, se ordenó oficiar al JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE GIRARDOT, al JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE GIRARDOT y, a la FISCALÍA PRIMERA LOCAL DE GIRARDOT, para que aportaran lo siguiente *(«029ActaAudienciaInicial»)*:

> *«(…)*
>
> ***OFÍCIESE al JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA**, para que en el término de los diez (10) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación envíe con destino a este proceso la copia simple del expediente penal bajo el radicado No. 25-307-60-00694-2018-00210, N.I 0208-018, con ocasión del juzgamiento del procesado DIEGO FERNANDO DONCEL VÁSQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.108.455.879.*
>
> ***OFÍCIESE** al **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA**, para que en el término de los diez (10) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación envíe con destino a este proceso la copia simple de los expedientes penal es bajo los radicados No. 25-307-60-00000-2018-00009 y No. 25-307-60-00000-2018-00011, que desencadenó en el juzgamiento de los procesados JUAN CARLOS ORDOÑEZ DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.070.621.606, CRISTIAN ORLANDO CRUZ LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.108.455.704, CAMPO ELÍAS HERRERA PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.108.453.155y MIGUEL ÁNGEL CETINA VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.108.455.726.*
>
> ***OFÍCIESE** a la **FISCALÍA PRIMERA LOCAL DE GIRARDOT** para que en el término de los diez (10) días siguientes al recibo de la correspondiente comunicación envíe con destino a este proceso la copia simple de la investigación penal posiblemente radicada bajo el No. 253076000401-2018-02705 que se adelanta por los delitos cometidos contra la señora GISSETH*

ANDREA RODRÍGUEZ ESPINOSA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.069.176.476 en los hechos ocurridos el22abril de 2018.

(…)»

1.8. Mediante memorial de 16 de marzo de 2021 la secretaria del JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE GIRARDOT, comunicó que la solicitud efectuada por el Despacho se remitió el oficio 0352 de 15 de marzo de 2021 al Centro de Servicios Judiciales, por cuanto allí, es en donde reposan los expedientes identificados bajo los radicados No. 25-307-60-00000-2018-00009 y 25-307-60-00000-2018-00011, al encontrase la sentencia proferida debidamente notificada y ejecutoriada *(«024EscritoJuzgadoPenal»).*

1.9. A su turno, la asistente de la FISCALÍA PRIMERA LOCAL DE GIRARDOT, mediante correos electrónicos de 18 y 19 de marzo hogaño, remitió la copia simple de la investigación penal solicitada *(«026EscritoFiscalia, 027EscritoFiscalia, y 029EscritoFiscaliaLocal»).*

1.10. De igual forma, mediante correo electrónico de 5 de abril de 2021 el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE GIRARDOT remitió la copia simple del expediente penal bajo el radicado No. 25-307-60-00694-2018-00210, N.I 0208-018 *(«031EscritoJuzgadoPenal»).*

1.11. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho *(«032ConstanciaDespacho»).*

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, previo a fijar fecha para la celebración de la audiencia de pruebas, se advierte que no se ha recaudado las copias simples de los expedientes penales con radicados No. 25-307-60-00000-2018-00009 y No. 25-307-60-00000-2018-00011, por cuanto, el CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE GIRARDOT no ha dado cumplimiento a la remisión realizada por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE

GIRARDOT del oficio 0352 de 15 de marzo de 2021 emitido por este Despacho, por lo que es del caso requerir al dicha Dependencia.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE al CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE GIRARDOT para que, en el término máximo e improrrogable de los diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, allegue con destino a este proceso la copia simple de los expedientes penales radicados bajo los Nos. 25-307-60-00000-2018-00009 y 25-307-60-00000-2018-00011, que desencadenó en el juzgamiento de los procesados JUAN CARLOS ORDOÑEZ DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.070.621.606, CRISTIAN ORLANDO CRUZ LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.108.455.704, CAMPO ELÍAS HERRERA PÉREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.108.453.155y MIGUEL ÁNGEL CETINA VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.108.455.726.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
6a449857a2ae3ebf29ce5be3fad0539686aa209085da020cebee3cccc7430c8a
Documento generado en 15/04/2021 02:44:52 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00108-00**
DEMANDANTE:	**LUIS ÁNGEL ORJUELA DÍAZ**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Por auto de 18 de febrero de 2021 se requirió a ***i)*** la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que allegara el expediente administrativo contentivo del oficio No. OFI 19- 45493 MDNSGDAGPSAS de 22 de mayo de 2019, por medio del cual se negó al demandante la reliquidación de la asignación de retiro conforme al índice de precios al consumidor –I.P.C.- así como para que allegara el expediente prestacional del señor ORJUELA DÍAZ y, ***ii)*** al apoderado judicial del demandante para que allegara de manera legible la Resolución No. 5016 de 14 de agosto de 1991 «*POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES…*», y de la hoja de servicios No. 082. (*«014AutoRequiere»*).

1.2. El 23 de febrero de 2021 el apoderado judicial del demandante, informó que radicó escrito de petición ante el GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL solicitando lo requerido por el Despacho esto es,

de la Resolución No. 5016 de 14 agosto de 1991 y de la hoja de servicios No. 082 (*«016EscritoDemandante»*).

1.3. El 8 de marzo de 2021 el doctor JIMMY ALEXANDER CHOCONTÁ SANTISTEBAN, en calidad de Auxiliar de Correspondencia 4-72 del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, allegó la respuesta al escrito de petición elevado por el apoderado judicial del demandante señalado en precedencia y, para el efecto, remitió la copia de la Resolución No. 5016 de 14 agosto de 1991 y de la hoja de servicios No. 082 (*«017EscritoEjercito»*).

1.4. El 16 de marzo de 2021 la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA, en calidad de apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, allegó los oficios No. 00022 y No. 00023 de 12 de marzo hogaño en los que solicitó a la DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJERCITO NACIONAL los documentos correspondientes al señor LUIS ÁNGEL ORJUELA RODRÍGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.122.970 (*«018EscritoEjercito»*).

1.5. El proceso ingresó al Despacho el 12 de abril de 2021 (*«019ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, se tiene por cumplido el requerimiento efectuado al apoderado judicial de la parte actora en el sentido de que allegara de manera legible la Resolución No. 5016 de 14 agosto de 1991 y la hoja de servicios No. 082, conforme a la documental obrante en el archivo «017EscritoEjercito».

De otro lado, como quiera que la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA únicamente allegó los oficios No. 00022 y No. 00023 de 12 de marzo hogaño mediante los cuales solicitó a la DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJERCITO NACIONAL el expediente

administrativo contentivo de los antecedentes que dieron origen al oficio No. 19-45493 del 27 de septiembre de 2018 que negó la reliquidación del retiro del señor LUIS ÁNGEL ORJUELA RODRÍGUEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.122.970 y el expediente prestacional del mencionado señor, sin que a la fecha se haya allegado dicha documental, resulta procedente requerir por última vez dicha documental.

En consecuencia, **SE DISPONE**:

PRIMERO: REQUIÉRASE POR ÚLTIMA VEZ a la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, para que en el término de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación de este proveído allegue, **so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso**[1]**,** el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, esto es, del oficio No.OFI 19- 45493 MDNSGDAGPSAS de 22 de mayo de 2019, por medio del cual se negó la reliquidación de la asignación de retiro conforme al índice de precios al consumidor –I.P.C.- del señor LUIS ÁNGEL ORJUELA DÍAZ identificado con la cédula de ciudadanía No.19.122.970. Asimismo deberá allegar el expediente prestacional del demandante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

[1] «**Artículo 44. *PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*. S**in perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(...)

2. **Sancionar con arresto** inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.

3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

(...)» (Destaca el Despacho).

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
5B2AEEACB8D120AB479F688FEA80E5DE2337103269813C7C98115B9A25F27FEE
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:06 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00128-00**
Demandante:	**PAULA ANDRÉA MUÑÓZ OSPINA Y OTROS**
Demandado:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA**
Medio de Control:	**REPARACIÓN DIRECTA**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo procede el Despacho a resolver sobre la solicitud de llamamiento en garantía a la COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LAPRESTACIÓN DE SERVICIO A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD-COMEDSALUD, a la COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO y al señor FRANCISCO ALFONSO JOYA PINILLA, elevada por la apoderada judicial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ el 5 de marzo de 2021.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 24 de agosto de 2020 los señores PAULA ANDREA MUÑOZ OSPINA, JUAN DAVID GÓMEZ, SEBASTIÁN DE JESÚS SÁNCHEZ

OCHOA, JUAN DAVID GÓMEZ, GLORIA HELENA OCHOA y MARIO MUÑÓZ REYES, por conducto de apoderado judicial, radicaron ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot (Reparto), demanda de reparación directa contra la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, correspondiéndole por reparto su conocimiento a este Despacho (Archivos denominados «*005CorreoInformaReparto*» y «*006ActaReparto*»).

2.2. Mediante proveído de 10 de septiembre de 2020 se inadmitió la demanda de la referencia, subsanada la misma, por auto de 29 de octubre siguiente fue admitida (Archivos denominados «*008AutoInadmite*», «*010SubsanacionDemanda*» y «*012AutoAdmite*»).

2.3. El 26 de noviembre de 2020, se notificó la demanda (Archivo «*014NotificacionPersonal*»).

2.4. El 5 de marzo de 2021 la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAELDE FUSAGASUGÁ, estando dentro del término legal, contestó la demanda, propuso excepciones, y allegó solicitud de llamamiento en garantía a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD-COMEDSALUD-, a la COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO y al señor FRANCISCO ALFONSO JOYA PINILLA (Archivos denominados «*015ContestacionDemanda*» *y* «*016ConstanciaTerminos*» del cuaderno principal y archivos denominados «*001SolicitudLlamamiento*» del cuaderno llamamiento en garantía).

2.5. El 12 de abril de 2021 el cuaderno de llamamiento en garantía ingresó al Despacho (Archivo denominado «*002ConstanciaDespacho*» del cuaderno de llamamiento en garantía).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

DE LAS SOLICITUDES DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

La apoderada judicial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ solicita se llame en garantía a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LAPRESTACIÓN DE SERVICIO A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD-COMEDSALUD-, a la COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO y al señor FRANCISCO ALFONSO JOYA PINILLA.

Respecto de la COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD-COMEDSALUD, señala (Folio 2 del archivo denominado «*001SolicitudLlamamiento*» del cuaderno llamamiento en garantía):

> «*…en virtud del Contrato de Prestación de Servicios número 1390-2017 de fecha dos (2) de octubre de dos mil diecisiete (2017) cuyo objeto era el de "prestación de servicios de apoyo a la gestión y operación en los procesos y subprocesos asistenciales de la E.S.E. Hospital san Rafael de Fusagasugá". Cooperativa esta que tenía a su cargo la prestación del servicio asistencial y médico en el servicio de ginecología y anestesiología de la E.S.E, para el momento de los hechos, cuyo plazo de ejecución se fue hasta el día 31 de octubre de 2017*».

En cuanto a la COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. aduce (Folios 3 y 4 del archivo denominado «*001SolicitudLlamamiento*» del cuaderno llamamiento en garantía):

> «*…en virtud de la póliza de seguro de responsabilidad civil clínicas y hospitales No. 17-03-101000972 con vigencia desde el 24 de febrero de 2017 hasta el 24 de febrero de 2018, en virtud de la cual la compañía aseguradora llamada en garantía, amparó la responsabilidad civil clínicas y centros médicos, por daño emergente en el servicio médico y responsabilidad civil institucional de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá*».
>
> «*4.1. Póliza de seguros de cumplimiento de entidades estatales número 21-44-101256239, suscrita por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD "**COMEDSALUD**", en virtud del Contrato **NO. 1390-2017** con vigencia desde el 01 de octubre de 2017 hasta el 31 de*

> *diciembre de 2020,mediante la cual la compañía aseguradora amparó entre otros, el cumplimiento del Contrato, calidad del servicio y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, según lo narrado en el numeral anterior».*
>
> *«4.2. Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual número 21-40-101111699, suscrita por la empresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD "**COMEDSALUD**", a favor de la **E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ,** en virtud del Contrato **NO. 1390-2017** con vigencia desde el 01 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018, mediante la cual la compañía llamada en garantía amparó el contrato mencionado en el numeral 1 del presente llamamiento en garantía, responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento en favor de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá y terceros afectados».*

En lo concerniente al señor FRANCISCO ALFONSO JOYA PINILLA precisa (Folio 3 del archivo denominado «*001SolicitudLlamamiento*» del cuaderno llamamiento en garantía):

> *«El llamado en garantía medico Anestesiólogo Doctor **FRANCISCO ALFONSO JOYA PINILLA,** identificado con cedula de ciudadanía No.3.228.514, en virtud del contrato de "Prestación de Servicios Profesionales como médico especialista en anestesiología de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá", No. 1200-2017 de fecha de 01 de septiembre de 2017, el cual se encontraba vigente para la fecha de los hechos, y cuyo plazo de ejecución se fue hasta el 31 de diciembre».*

Así las cosas, en el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé lo relacionado con el llamamiento en garantía, en los siguientes términos:

> «**Artículo 225.** ***LLAMAMIENTO EN GARANTÍA*****.** Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.
>
> El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.
>
> El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:
> 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.

2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.

3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.

El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen».

CASO CONCRETO

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD-COMEDSALUD- Y DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Conforme a lo expuesto, y a pesar de que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD-COMEDSALUD- y la COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., no se encuentran como demandada dentro del presente asunto, dicha situación no excluye la posibilidad de concurrir al proceso como llamadas en garantía, en virtud de la relación jurídico procesal entre el demandado (llamante) y el llamado con el fin de responder por la posible condena impuesta a aquel, en virtud de lo siguiente:

ENTIDAD LLAMADA EN GARANTÍA	**NOMBRE Y NÚMERO DEL CONTRATO Y/O PÓLIZA DE SEGURO**	**FOLIOS**
COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LAPRESTACIÓN DE SERVICIO A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD-COMEDSALUD	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 1390-2017, cuyo objeto contractual consistía en «***PRIMERA: OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y OPERACIÓN EN LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS ASISTENCIALES DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ***»	Folios 12 a 24 del archivo *«001SolicitudLlamamient»* del cuaderno de llamamiento en garantía.

NIT. 808 003 421-2	vigencia desde el 2 de octubre al 31 de diciembre de 2017	
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860 009 578-6	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional No. 17-03-101000972, cuyo asegurado es la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ y beneficiario «*TERCEROS AFECTADOS*» vigencia desde el 24-02-2017 al 24-02-2018	Folios 29 a 30 del archivo «*001SolicitudLlamamient*» del cuaderno de llamamiento en garantía.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el que se determina los requisitos que debe contener el escrito de llamamiento en garantía para su admisión, y una vez confrontada la documental allegada en la presente foliatura, se pudo acreditar por parte de este Despacho que es viable proceder a su admisión por cuanto se cumple cabalmente con los requisitos exigidos por la ley, además de que el mismo fue presentado dentro de la oportunidad legalmente establecida.

No obstante, como quiera que la demandada también solicitó llamar en garantía a la COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., en virtud de las pólizas No. 21-44-101256239 y No. 21-40-101111699 suscritas por COMEDSALUD, se advierte que si bien las mismas fueron aportadas lo cierto es que no obran de manera legible para identificar con precisión y claridad el objeto del seguro, por lo que previo a decidir sobre la solicitud de llamamiento respecto a las mencionadas pólizas, se requerirá para que se alleguen de manera legible. **SO PENA DE NEGAR DICHA SOLICITUD.**

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA AL SEÑOR FRANCISCO ALFONSO JOYA PINILLA

De otro lado, en cuanto a la solicitud de llamar en garantía al señor FRANCISCO ALFONSO JOYA PINILLA, habida cuenta que prestaba los servicios profesionales como médico anestesiólogo para la época de los hechos

en virtud del contrato de prestación de servicios No. 1200-2017 de 1° de septiembre de 2017, se pone de presente que se trata de un llamamiento en garantía con fines de repetición el cual, en los términos del artículo 225 de la Ley 1437 de 2011 se rige la Ley 678 de 2001.

Puntualizado lo anterior, la Ley 678 de 2001 *«por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición»*, en el parágrafo 1° del artículo 2 señaló que «*para efectos de repetición, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales, por lo tanto estarán sujetos a lo contemplado en esta ley*».

En ese orden, el artículo 19 ibidem dispone:

> «**Artículo 19.** ***LLAMAMIENTO EN GARANTÍA***. Dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, **reparación directa** y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, **podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave**, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario.
>
> **Parágrafo. La entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor**» (Destaca el Despacho).

Es así, como de la norma transcrita se advierte que en los procesos de responsabilidad contra el Estado, como el caso que ocupa la atención del Despacho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público tienen la posibilidad de solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, con el fin de que dentro del mismo proceso se decida la responsabilidad de la entidad y la del funcionario correspondiente. Aunado a lo anterior, que el llamante no haya propuesto en la contestación de la

demanda las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor.

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Boyacá en proveído de 27 de abril de 2018 citó el pronunciamiento realizado por la Sección Tercera del Consejo de Estado de 28 de julio de 2010[1], la cual sostuvo:

> *«Por otra parte, en los procesos de reparación directa, en los relativos a controversias contractuales y en los de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandada puede llamar en garantía con fines de repetición al agente estatal por cuya actuación se está adelantando el juicio de responsabilidad del Estado, siempre que presente prueba sumaria del actuar doloso o gravemente culposo de aquél. Contrario seas" no procederá el mismo si se propuso en la contestación de la demanda las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, techo de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor, porque la defensa en tal sentido lleva ínsita la exoneración por parle de la entidad al agente estatal que intervino en el hecho.*
>
> *Como colorario de lo anterior se establece la exigencia para el llamamiento del agente o ex agente público, de acompañar el escrito de llamamiento con la prueba aunque sea sumaria de su actuar doloso o gravemente culposo, dado que la relación de garantía que permite al Estado llamar al proceso de responsabilidad adelantada en su contra, al funcionario o ex funcionario, está constituida por la norma legal que establece la responsabilidad de éste frente al Estado por la condena que pueda sufrir, pero unida a la acreditación así sea sumaria, de la culpa grave o el dolo que determinó la actuación del agente estatal».*

Así también, la subsección "B" de la Sección Tercera del Consejo de Estado[2], señaló:

> *«El artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regula lo relacionado con el llamamiento en garantía en términos generales. Primero, señala que quién considere tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero 'garante' (i) la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir o (ii) el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, puede pedir su citación para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.*
>
> *Segundo, enumera los requisitos que debe contener el escrito de llamamiento, a saber: el nombre del llamado y su dirección, los hechos, fundamentos de derecho y la dirección de quién realiza el llamado. Y tercero, establece que el llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la*

[1] Dentro del proceso con radicación número 15001-23-31- 000-2007-00546-01, con ponencia de la Consejera Doctora Ruth Stella Correa Palacio.
[2] Auto de 14 de septiembre de 2017 dentro del expediente con radicación número. 25000-23-36-000-2016-01214-01 (59132), con ponencia de la Consejera Doctora Ruth Stella Correa Palacio.

> *Ley 678 de 2001 diferenciando así el llamamiento que tiene su origen en una relación legal o contractual entre el demandado y el tercero que llene la calidad de garante como ocurre en los contratos de seguros con aquel que se generó contra un servidor público con fines de repetición»*

Puestas en este estadio las cosas, resulta claro que el llamamiento en garantía con fines de repetición reviste un carácter especial que implica un manejo diferenciado, habida cuenta que la misma ley prevé una regulación específica, esto es, la establecida en la Ley 678 de 2001, motivo por el cual, al juez le corresponde examinar su procedencia, previo cumplimiento de los siguientes supuestos:

- Que el escrito reúna los requisitos del artículo 225 de la Ley 1437 de 2011.
- Que se acredite la relación legal o contractual entre el demandado y el tercero.
- Que se acompañe el escrito de llamamiento con la prueba aunque sea sumaria del actuar doloso o gravemente culposo del agente llamado en garantía.
- Que el llamante no haya propuesto en la contestación de la demanda las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor.

En ese orden, al realizar el análisis del cumplimiento de los requisitos señalados se advierte que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ en la solicitud de llamamiento en garantía con fines de repetición no dio cumplimiento a los mismos pues, ***i)*** no acompañó el escrito de llamamiento con la prueba, aunque sea sumaria, del actuar doloso o gravemente culposo del señor FRANCISCO ALFONSO JOYA PINILLA, pues se limitó a señalar que para la época de los hechos prestaba los servicios profesionales como médico anestesiólogo, razón suficiente para negar la presente solicitud de llamamiento en garantía y; ***ii)*** dentro del escrito de contestación propuso como excepción de mérito que la E.S.E., cumplió con los atributos de la calidad, pues ejecutó el acto médico necesario e indispensable y adelanto todas las acciones correspondientes que conforman los atributos de la

calidad que le competían y le exigían los protocolos hospitalarios situación que, en síntesis, se traduce en un caso fortuito o de fuerza mayor, razones por las cuales no se accederá al llamado del mencionado profesional de la salud.

Finalmente, del folio 6 al 11 del archivo denominado «*015ContestacionDemanda*» obra el poder conferido por parte del gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, doctor ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ CAYCEDO, a la doctora ANA KATHERINE MEDELLÍN GUTIÉRREZ, junto con la documental que acredita la calidad de poderdante, en consecuencia se reconocerá personería adjetiva para actuar en los términos y para los efectos del poder a ella conferido.

Por lo expuesto, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT,**

R E S U E L V E

PRIMERO: ADMÍTESE el llamamiento en garantía presentado por la apoderada judicial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ contra la COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD-COMEDSALUD en virtud del contrato de prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 1390-2017 y contra la COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., en virtud de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional No.17-03-101000972.

SEGUNDO: NIÉGASE el llamamiento en garantía presentado por la apoderada judicial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ contra el señor FRANCISCO ALFONSO JOYA PINILLA, por las razones expuestas en precedencia.

TERCERO: REQUIÉRASE a la apoderada judicial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ para que dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación de este proveído allegue de manera íntegra y legible las pólizas No. 21-44-101256239 y No. 21-40-101111699 suscritas por COMEDSALUD. **SO PENA DE NEGAR LA SOLICITUD DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.**

CUARTO: NOTIFÍQUESE de manera personal el contenido de esta providencia y del auto admisorio de la demanda a los representantes legales de la COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD-COMEDSALUD y de la COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., a través del buzón de correo electrónico creado para tal fin, conforme lo dispone el artículo 199[3] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: De conformidad con el inciso segundo del artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **CÓRRASE TRASLADO** por el término de quince (15) días de la demanda y del llamamiento en garantía a los representantes legales de la COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD-COMEDSALUD y de la COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A., para que procedan a contestar las piezas procesales que se le ponen de presente.

SEXTO: **ADVIÉRTESE** que si dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la presente providencia no se logra la notificación personal del llamado en garantía, el mismo se entenderá ineficaz y dará lugar a continuar con el trámite del proceso, conforme lo dispone el artículo 66 del Código General del Proceso.

---

[3] Modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.

SÉPTIMO: **RECONÓCESE PERSONERÍA** adjetiva para actuar a la doctora ANA KATHERINE MEDELLÍN GUTIÉRREZ como apoderada judicial de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ,** en los términos y para los efectos del poder a él conferido que obra del folio 6 al 11 del archivo denominado «*015ContestacionDemanda*».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
cce9b43ba12f7210f9606176ee0cac20c9e72a764d05fd956e882b868d86ee98
Documento generado en 15/04/2021 02:44:07 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00134-00**
DEMANDANTE:	**NUBIA ENITH CORTÉS SÁNCHEZ**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 8 de octubre de 2020 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora NUBIA ENITH CORTÉS SÁNCHEZ, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, con el propósito de obtener la nulidad del acto

administrativo ficto negativo producto del silencio administrativo que se configuró por la falta de respuesta de la Entidad demandada a la petición radicada el 18 de julio de 2019 por medio de la cual se solicitó el reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías de la actora (*«009AutoAdmite»*).

2.2. El 28 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«011NotificacionPersonal»*).

2.3. El 10 de diciembre de 2020 la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda sin la proposición de excepciones (*«012ContestacionDemanda»*).

2.4. El 12 de abril de 2021; ***i)*** la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 10 de marzo de 2021 y, ***ii)*** el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«013ConstanciaTerminosDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021)
> ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
>
> **1. Antes de la audiencia inicial:**
>
> a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
>
> b) Cuando no haya que practicar pruebas;
>
> c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.

Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.

No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas son inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno al reconocimiento y pago de la sanción por mora en el desembolso de las cesantías reconocidas a la actora en la Resolución No. 1786 de 12 de septiembre de 2016, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver habida cuenta que no fueron propuestas; tampoco hay pruebas por practicar y, únicamente, las partes solicitaron tener como pruebas las documentales allegadas con la demanda, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a pronunciarse sobre las pruebas y se realizará la fijación del litigio, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el

Despacho proceder a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas por las partes que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

PARTE DEMANDANTE

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 7 a 19 «*002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota*» y 4 a 6 «*007SubsanacionDemanda*» del expediente digitalizado.

PARTE DEMANDADA

La NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- únicamente solicito tener como pruebas «*las que reposan en el expediente*», tal y como se desprende del folio 8 visible en el archivo «*012ContestacionDemanda*» del expediente digitalizado.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

Seguidamente, se realizará la fijación del litigio.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

De la lectura de la demanda se desprende la existencia del **acto demandado** en la presente acción, este es:

- El acto administrativo ficto negativo producto del silencio administrativo que se configuró por la falta de respuesta de la Entidad demandada a la petición radicada el 18 de julio de 2019 por medio de la

cual la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el desembolso de las cesantías reconocidas a la actora en la Resolución No. 1786 de 12 de septiembre de 2016 (folios 4 a 6 «*007SubsanacionDemanda*»).

En consecuencia, a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (folio 3 «*002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota*»):

- Se condene a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- a que se le reconozca y pague la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006, esto es, la equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados a partir del 21 de octubre de 2016, día siguiente al vencimiento de los setenta (70) días hábiles causados desde el momento en que se radicó la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de esta, es decir, al 27 de febrero de 2017.

Del mismo modo, este Despacho, en virtud del líbelo introductorio, señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. El 13 de julio de 2016 la señora NUBIA ENITH CORTÉS SÁNCHEZ solicitó a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- el pago de las cesantías a que tenía derecho (folio 11 «*002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota*»).

2. El 12 de septiembre de 2016 la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, mediante la Resolución No. 1786, reconoció y pagó a la señora NUBIA ENITH CORTÉS SÁNCHEZ la suma de $5.291.291 por concepto de liquidación parcial de cesantías (folios 11 a 13

«002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota» de la carpeta *«002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota»*).

3. El 27 de febrero de 2017 la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-puso a disposición de la señora NUBIA ENITH CORTÉS SÁNCHEZ el pago de las cesantías reconocidas mediante la Resolución No. 1786 de 12 de septiembre de 2016 (folio 14 *«002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota»* de la carpeta *«002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota»*).

4. El 18 de julio de 2019 la señora NUBIA ENITH CORTÉS SÁNCHEZ, mediante escrito de petición, solicitó a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el desembolso de las cesantías reconocidas a la actora en la Resolución No. 1786 de 12 de septiembre de 2016 (folios 4 a 6 *«007SubsanacionDemanda»*).

Bajo ese contexto, se encuentra que existe **discrepancia** en relación con: i) el reconocimiento de la sanción moratoria al personal docente oficial en Colombia.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en establecer la legalidad del acto administrativo acusado resolviendo el siguiente **problema jurídico**: **1)** ¿Debe reconocerse y pagarse a la señora NUBIA ENITH CORTÉS SÁNCHEZ la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías parciales de que trata la Ley 1071 de 2006 la cual adicionó y modificó la Ley 244 de 1995?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÁSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 7 a 19 *«002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota»* de la carpeta *«002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota»* y 4 a 6 *«007SubsanacionDemanda»* del expediente digitalizado., los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

---

[1] «**Artículo 207. *CONTROL DE LEGALIDAD.*** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -19 de agosto de 2020: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá (folio 20 «002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota» de la carpeta «002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota»).
-21 de agosto de 2020: Juzgado 23 Administrativo de Bogotá remite por el factor territorial a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot (folio 23 «002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota» de la carpeta «002ActuacionJuzgado23AdministrativoBogota»).
-1 de septiembre de 2020: Efectuado el reparto, correspondió su conocimiento a este Despacho («004ActaReparto»).
-8 de octubre de 2020: Auto que admite demanda y ordena notificar a la demandada («009AutoAdmite»).
-26 de noviembre de 2020: Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («011NotificacionPersonal»).
-10 de diciembre de 2020 -Parte demandada contesta la demanda sin la proposición de excepciones («012ContestacionDemanda»).
-12 de abril de 2021: El proceso ingresa al Despacho («013ConstanciaTerminosDespacho»).

TERCERO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

CUARTO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

QUINTO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

SEXTO: RECONÓCESE PERSONERÍA ADJETIVA al doctor JUAN CAMILO OTÁLORA ALDANA para actuar como apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, de conformidad con la sustitución de poder visible en el folio 10 «*012ContestacionDemanda*» del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
3639F758A64B2B1DA831DD9B63DCEEC31912AB3ADEF025DA4B375875792DBE97
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:32 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00141-00**
DEMANDANTE:	**GILBERTO VÁSQUEZ MENESES**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor GILBERTO VÁSQUEZ MENESES, por conducto de apoderada judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El señor GILBERTO VÁSQUEZ MENESES, por conducto de apoderado judicial, el 11 de septiembre de 2020 radicó demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole por reparto a este Despacho («004ActaReparto»), con el propósito de obtener la nulidad de los actos administrativos Nos. 20193170109591: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10

de 23 de enero de 2019 y 20193110291261: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 de 18 de febrero de 2019,por medio de las cuales la entidad demandada negó el reajuste y pago del 20% del sueldo básico y del subsidio familiar del actor.

2.3. Mediante proveído de 17 de septiembre de 2020 este Despacho inadmitió la demanda para que el apoderado judicial de la parte actora: ***i)*** allegara el mandato de manera legible, en los términos del artículo 5º del Decreto 806 de 2020, en consideración a que del obrante en el plenario no se advertía con claridad que el poder haya sido conferido mediante mensaje de datos, o en los términos del artículo 74 del Código General del Proceso, ***ii)*** remitiera la constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución de los actos administrativos que se enjuician, ***iii)*** adjuntara una documental enunciada en el acápite de pruebas del escrito de la demanda y, ***iv)*** acreditara el cumplimiento de lo preceptuado en el inciso 4º del artículo 6º del Decreto 806 de 2020 (concordante hoy con el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), esto es, que remitiera por medio electrónico y de manera simultánea la copia de la demanda y de sus anexos a los demandados (*«006AutoInadmiteDemanda»*).

2.4. El 23 de septiembre de 2020 el apoderado judicial de la parte demandante allegó escrito con subsanación de la demanda (*«008EscritoDemandante»*).

2.5. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, y de conformidad con los artículos 169 y 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho determinará si la parte actora cumplió la carga de subsanar la demanda en debida forma.

En ese sentido, de conformidad con los hechos expuestos en el acápite de antecedentes de esta providencia y constatando, por un lado, que el auto inadmisorio de la demanda se notificó en debida forma al correo electrónico dispuesto en el acápite de notificaciones del escrito de la demanda («*maurocortes07@hotmail.com e intermelgar2019@hotmail.com*» visible en el folio 41 del archivo «*002DemandaPoderAnexos*») y, por el otro, que el apoderado judicial de la parte actora:

Primero, no allegó el mandato que cumpliera con las exigencias bien sea del artículo 74 del Código General del Proceso o del artículo 5º del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 (folios 49 y 88 «*008EscritoDemandante*»), pues, de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo, la ley exige que «*en los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados (…) el poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario*» y, el artículo 5º del Decreto 806 de 4 de junio de 2020, establece que «*los poderes especiales para cualquier actuación judicial* ***se podrán conferir mediante[1] mensajes de datos*** *(…)*».

Al respecto se advierte que no se allegó mandato alguno junto con el escrito de subsanación de la demanda de 23 de septiembre de 2020 ya que únicamente se observa lo que aparentemente puede ser el envío mediante mensaje de datos de este, esto es, no se remitió el poder de manera **legible** en el cual se acredite el derecho de postulación del profesional del derecho que presenta la demanda, exigencia establecida en los artículos 159 y 160 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Y segundo, no cumplió con lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante con el inciso 4º del artículo 6º del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 (vigente para la época del trámite de la subsanación), esto es, que al

[1] https://dle.rae.es/mediante: 1. prep. Por medio de, con, con la ayuda de

momento de presentar la demanda, el demandante remitiera **simultáneamente**[2] por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados a los canales oficiales dispuestos, lo anterior en atención a que tal y como se desprende del folio 1 visible en el archivo «*003CorreoInformaReparto*», **el escrito de demanda no se presentó**, se insiste, de **manera simultánea** ante el correo de reparto y ante los canales de notificaciones de la parte demandada, pues, la demanda únicamente se presentó de manera simultánea al correo de reparto de los Juzgados Administrativos y a los correos electrónicos «*procesosjuidiciales@procuraduria.gov.co*», «*procesosnacionales@defensajuridica.gov.co*», «*MARTHA XIMENA SIERRA SOSSA – notificaciones.ibague@mindefensa.gov.co*» omitiéndose de esta manera enviarla, se itera, de manera simultánea a la dirección de notificaciones judiciales de la Entidad demandada. La cual se encuentra publicada al final de su página web: https://www.cgfm.mil.co/es/tags/ejercito-nacional («*notificacionjudicial@cgfm.mil.co*»).

Ahora bien, el escrito de subsanación tampoco se remitió de manera simultánea al canal digital de notificación de la entidad demandada, tal y como se aprecia del folio 1 «*007EscritoDemandante*», lo que deviene en que la exigencia establecida en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (concordante con el inciso 4º del artículo 6º del Decreto 806 de 2020) no se tenga por satisfecha.

Para el efecto se trae a colación lo consagrado tanto en el inciso 4º del artículo 6º del Decreto 806 de 4 de junio de 2020, como del artículo 35 de la Ley 2080 de 2021:

El Decreto 806 de 4 de junio de 2020, indica lo siguiente:

> «**Artículo 6. *DEMANDA.*** La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio

[2] https://dle.rae.es/simultanear: 1. tr. Realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos.

electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda.
Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este.

De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado.

En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, **el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda.** De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado» (Destaca el Despacho).

Por su parte el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021:

«**Artículo 35.** ***Modifíquese el numeral 7 y adiciónese un numeral al artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así***:

(…)

8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la

> notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado» (Destaca el Despacho).

Motivos por los cuales, de conformidad con los artículos 169[3] y 170[4] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se rechazará la demanda en razón a que la parte actora no dio cumplimiento a lo ordenado por el Despacho en auto de 17 de septiembre de 2020.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: RECHAZAR la demanda instaurada por el señor GILBERTO VÁSQUEZ MENESES contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: En firme esta decisión, **DEVUÉLVASE** la demanda y los anexos sin necesidad de desglose y **ARCHÍVESE** el expediente previas las constancias de rigor**.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

---

[3] «**Artículo 169.** ***RECHAZO DE LA DEMANDA.*** Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad.

2. **Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida**.

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial» (Destaca el Despacho).

[4] «**Artículo 170.** ***INADMISIÓN DE LA DEMANDA.*** Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, **para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda**» (Destaca el Despacho).

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
3E44882D4B7A1EDCC464B5272C0C11B9B9F0E9DE11E9B97CA7DBEBDE6419A5A2
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:33 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00151-00**
DEMANDANTE:	**HÉRMES JULIÁN BERMÚDEZ CÁRDENAS**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la solicitud de reforma de la demanda presentada por el apoderado judicial de la parte demandante el 5 de noviembre de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante auto de 29 de octubre de 2020 se admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor HÉRMES JULIÁN BERMÚDEZ CÁRDENAS, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, con el propósito de que se declare la existencia y nulidad del acto administrativo ficto o presunto, producto del silencio administrativo negativo frente a la petición de 23 de junio de 2018 bajo

radicado K1F9UT6J8D, en la que solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% y la prima de actividad, así como la nulidad del oficio No. 2018311997001 de 16 de octubre de 2018, que negó el reconocimiento del subsidio familiar. (*«011AutoAdmite»*).

2.2. El 5 de noviembre de 2020 el doctor WILMER YACKSON PEÑA SÁNCHEZ presentó escrito de reforma de la demanda (*«013ReformaDemanda»*).

2.3. El 26 de noviembre de 2020 se surtió la notificación de la demanda al extremo pasivo (*«014NotificacionPersonal»*).

2.4. El 1° de febrero de 2021 la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL allegó escrito de contestación de la demanda sin la proposición de excepciones previas (*«015ContestacionDemandal»*).

2.5. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«016ConstanciaTerminosDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Así las cosas, se tiene que el artículo 173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone:

> «**Artículo 173. *REFORMA DE LA DEMANDA*.** El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:
>
> 1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial.
>
> 2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los hechos en que estas se fundamentan o a las pruebas.

> 3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán cumplirse los requisitos de procedibilidad.
>
> La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un solo documento con la demanda inicial».

En virtud de lo anterior, la reforma a la demanda es el acto procesal mediante el cual la parte actora podrá adicionar, corregir, aclarar o modificar la demanda, la cual se podrá proponer una sola vez y hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda, pudiéndose referir a las partes, las pretensiones, los hechos o las pruebas.

Por otra parte, se advierte que en la reforma a la demanda no se podrá sustituir la totalidad de las personas demandantes o demandadas, ni todas las pretensiones. Se destaca que frente a nuevas pretensiones se deberá cumplir con los requisitos de procedibilidad.

Así las cosas, como quiera que la solicitud de reforma cumple con los requisitos exigidos por el artículo en comento, toda vez que ***i)*** se allegó la solicitud el 5 de noviembre de 2020, esto es, antes del vencimiento de los diez días siguientes al traslado de la demanda y ***ii)*** se refiere a las pretensiones, hechos, normas violadas y su fundamentación, y pruebas, por lo que se admitirá la misma, ordenando la notificación de la presente providencia.

Finalmente ha de reconocerse personería adjetiva para actuar a la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA como apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, en los términos del poder a ella conferido por la doctora SONIA CLEMENCIA RODRÍGUEZ URIBE en calidad de DIRECTORA (E) DE ASUNTOS LEGALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, obrante en los folios 26 a 34 del archivo denominado «015ContestacionDemanda».

En consecuencia se **DISPONE:**

PRIMERO: ADMÍTESE la reforma de la demanda presentada por el apoderado judicial del señor HÉRMES JULIÁN BERMÚDEZ CÁRDENAS en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes de conformidad a lo indicado en el numeral 1º del artículo 173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. *«De la reforma de la demanda se correrá traslado mediante notificación por estado»*.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva para actuar como apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, a la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA en los términos y para los efectos del poder a ella conferido obrante en los folios 26 a 34 del archivo denominado «015ContestacionDemanda».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
4C5D406EC893484DEADEE0FF25AA106BFDF5428598446F07DCBE6FD8C24CF6ED
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:08 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00159-00**
Demandante:	**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
Demandado:	**BAUDILIO PÁEZ CASTRO**
	WILLIAM HERNÁN NORIEGA REY
Medio de Control:	**REPETICIÓN**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante auto de 29 de octubre de 2020 se admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de repetición promovió el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ contra los señores BAUDILIO PÁEZ CASTRO y WILLIAM HERNÁN NORIEGA REY, con el objeto de que se les declare responsables por el fallo de primera instancia proferido por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT el 4 de mayo de 2018 dentro del proceso de Reparación Directa radicado bajo el No. 2014-00034, en el que se declaró administrativamente responsable al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ *«por la ocupación permanente de una franja de terreno de 81 metros cuadrados del predio ubicado en la Carrera 7 A Este N° 2 – 67 de la ciudad de Fusagasugá, e identificado con la Matrícula Inmobiliaria N° 157- 13210 y Ficha Catastral 01-00-0431-0005-000 como resultado de la ampliación de la calle 3 entre las carreras 6 Este y 6 A Este del mentado ente territorial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia»*, ordenando pagar a la señora BLANCA YANED CASTILLO

DÍAZ la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS ($53.121.411) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente (*«005AutoAdmite»*).

1.2. El 26 de noviembre de 2020 se surtió la notificación personal del auto admisorio de la demanda (*«008NotificacionPersonal»*).

1.3. El 29 de enero de 2021, el apoderado judicial de los señores BAUDILIO PÁEZ CASTRO y WILLIAM HERNÁN NORIEGA REY, contestó la demanda y propuso excepciones las cuales si bien no fueron propuestas detalladamente en un acápite de excepciones sí se encuentran inmersas dentro del escrito de contestación (*«009ContestacionDemanda»*).

1.4. El proceso ingresó al Despacho el 12 de abril de 2021 (*«010ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Sería del caso, resolver sobre la procedencia de fijar fecha para realizar la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 o sobre dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A ibídem, de no ser porque en el escrito de contestación de la demanda si bien no se hizo dentro de un acápite de excepciones sí fueron propuestas, las cuales se observan inmersas del folio 67 a 69 del archivo *«009ContestacionDemanda»*, sin embargo, por secretaría no se ha corrido traslado de las excepciones propuestas conforme lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 175 ibídem, el cual dispone:

> «**Artículo 175.** ***Contestación de la demanda.*** Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:
> (…)
>
> **Parágrafo 2°**. Cuando se formulen excepciones se correrá traslado de las mismas por secretaría, sin necesidad de auto que lo ordene, por el término de tres (3) días.
> (…)».

Bajo ese contexto, en aras de garantizar el derecho al debido proceso y con el fin de evitar futuras nulidades, previo a decidir sobre la citación a la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o sobre la procedencia de dictar sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A ibidem, se ordenará a la secretaría de este Juzgado dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 175 ibidem.

De otro lado, el 19 de noviembre de 2020 fue allegado poder conferido por la SECRETARIA JURÍDICA del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ a la doctora DANIELA ALEJANDRA GARZÓN ROZO, sin embargo no se remitió la documental que acredite la calidad de poderdante, por lo que este Despacho se abstendrá de reconocer personería y se requerirá en tal sentido (*«007Poder»).*

Finalmente, se reconocerá personería adjetiva para actuar al doctor JULIO CESAR BOBADILLA MARTÍNEZ, como apoderado judicial de los demandados, señores BAUDILIO PÁEZ CASTRO y WILLIAM HERNÁN NORIEGA REY, en los términos y para los efectos de los poderes a él conferidos obrantes en los folios 84 y 86 del archivo *«009ContestacionDemanda»*.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: ORDÉNASE a la secretaría de este Juzgado que fije en lista el traslado de las excepciones propuestas por la parte demandada en el escrito de contestación de la demanda allegado el 29 de enero de 2021 dentro del proceso de la referencia, conforme a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011.

SEGUNDO: ABSTENERSE de reconocer personería adjetiva para actuar a la doctora DANIELA ALEJANDRA GARZÓN ROZO, conforme a lo expuesto en parte motiva. para que dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación de este proveído allegue la documental que acredite la

calidad de poderdante de la SECRETARIA JURÍDICA del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva para actuar como apoderado judicial de los demandados, señores BAUDILIO PÁEZ CASTRO y WILLIAM HERNÁN NORIEGA REY al doctor JULIO CESAR BOBADILLA MARTÍNEZ, en los términos y para los efectos de los poderes a él conferidos obrantes en los folios 84 y 86 del archivo *«009ContestacionDemanda».*

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
a92fe002a27bba81f3e95d34673a9e121755e1ee4b5c6c596b3f41cdb426eeb4
Documento generado en 15/04/2021 02:44:10 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00162-00**
DEMANDANTE:	**JOSÉ DAVID VERGARA PADILLA**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor JOSÉ DAVID VERGARA PADILLA, por conducto de apoderada judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. EL señor JOSÉ DAVID VERGARA PADILLA, por conducto de apoderado judicial, el 7 de octubre de 2020[1] radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, efectuado el reparto al día siguiente, el proceso le correspondió a este Despacho *(«003CorreoInformaReparto»* y *«004ActaReparto»).*

[1] Si bien se presentó el 6 de octubre de 2020, lo cierto es que fue en hora no hábil, por lo que se tiene en cuenta el día hábil siguiente, esto es, el 7 de octubre.

2.2. Mediante proveído de 29 de octubre de 2020 este Despacho inadmitió la demanda para que se allegara ***i)*** la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor VERGARA PADILLA, especificando el municipio, ***ii)*** la constancia de publicación, comunicación, notificación o, ejecución del acto administrativo acusado, ***iii)*** de manera legible y completa la copia de los documentos obrantes en los folios 37 a 42 del archivo denominado *«002DemandaPoderAnexos»*, ***iv)*** indicara el lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda, recibirían las notificaciones personales, ***v)*** la demanda debidamente suscrita por la apoderada judicial del demandante, en ejercicio de las facultades otorgadas por el poderdante y ***vi)*** la constancia del envío de la demanda y los anexos a la demandada, así como del escrito de subsanación, de conformidad con el artículo 6° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020. Así mismo, dispuso oficiar a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, para que certificara el último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor JOSÉ DAVID VERGARA PADILLA, especificando el municipio (*«006AutoInadmite»*).

2.3. El anterior auto se notificó en debida forma tal y como se desprende del correo electrónico por medio del cual se dio a conocer el estado No. 34 de 30 de octubre de 2020 visible en el archivo *«007NotificacionEstadoOctubre30»*.

2.4. Mediante los oficios No. 00430 de 1° de diciembre de 2020 y No. 00110 de 25 de febrero de 2021 se ofició a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, para que certificara el último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor JOSÉ DAVID VERGARA PADILLA, especificando el municipio (*«008OficioRequiere»* y *«009OficioRequiere»*).

2.5. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer sin manifestación alguna por parte del demandante (*«010ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, y de conformidad con los artículos 169[2] y 170[3] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho determinará si la parte actora cumplió la carga de subsanar la demanda en debida forma.

En ese sentido, de conformidad con los hechos expuestos en el acápite de antecedentes de esta providencia y, constatando, por un lado, que el auto inadmisorio de la demanda se notificó en debida forma al correo electrónico mediante el cual se radicó la demanda[4] (*«faquita1@hotmail.com»* visible en el folio 1 del archivo *«003CorreoInformaReparto»*) y, por el otro, que la parte actora guardó silencio según se desprende de la constancia secretarial de 5 de abril de 2021 («010ConstanciaDespacho»), se concluye que la parte actora no dio cumplimiento a lo ordenado por el Despacho en auto de 29 de octubre de 2020, por lo que se rechazará la demanda, de conformidad con lo establecido en los artículo 169 y 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: RECHAZAR la demanda instaurada por el señor JOSÉ DAVID VERGARA PADILLA, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con las consideraciones expuestas.

---

[2] «**Artículo 169. *RECHAZO DE LA DEMANDA***. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad.

2. **Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.**

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial» (Destaca el Despacho).

[3] «**Artículo 170. *INADMISIÓN DE LA DEMANDA***. Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, **para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda**» (Destaca el Despacho).

[4] Habida cuenta que no se suministró dirección para notificaciones personales siendo uno de los motivos de inadmisión de la demanda.

SEGUNDO: En firme esta decisión, **ARCHÍVESE** el expediente previas las constancias de rigor**.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
F59A6F3E306DACE789DA00007EDA40430E68AE5C6A5409CF864E098ACCD3E1EE
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:12 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00169-00**
DEMANDANTE:	**LUZ MARINA MANRIQUE SÁNCHEZ**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 29 de octubre de 2020 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora LUZ MARINA MANRIQUE SÑANCHEZ, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, con el propósito de obtener la nulidad del acto

administrativo ficto negativo producto del silencio administrativo que se configuró por la falta de respuesta de la Entidad demandada a la petición radicada el 11 de junio de 2019 por medio de la cual se solicitó el reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías de la actora (*«006AutoAdmite»*).

2.2. El 26 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«008NotificacionPersonal»*).

2.3. El 10 de diciembre de 2020 la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda sin la proposición de excepciones (*«009ContestacionDemanda»*).

2.4. El 12 de abril de 2021; ***i)*** la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 10 de marzo de 2021 y, ***ii)*** e ingresó el proceso al Despacho (*«010ConstanciaTerminosDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021)
> ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
>
> **1. Antes de la audiencia inicial:**
>
> a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
>
> b) Cuando no haya que practicar pruebas;
>
> c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.

Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.

No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas son inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno al reconocimiento y pago de la sanción por mora en el desembolso de las cesantías reconocidas a la actora en la Resolución No. 677 de 24 de agosto de 2018, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver habida cuenta que no fueron propuestas; tampoco hay pruebas por practicar y, únicamente, las partes solicitaron tener como pruebas las documentales allegadas con la demanda, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a pronunciarse sobre las pruebas y se realizará la fijación del litigio, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho proceder a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente

solicitadas por las partes que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

PARTE DEMANDANTE

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 7 a 19 *«002Demanda»* de la carpeta *«003ActuacionJuzgado56AdministrativoBogota»* del expediente digitalizado.

PARTE DEMANDADA

La NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- únicamente solicitó tener como pruebas *«las que reposan en el expediente»*, tal y como se desprende del folio 8 visible en el archivo *«009ContestacionDemanda»* del expediente digitalizado.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

Seguidamente, se realizará la fijación del litigio.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

De la lectura de la demanda se desprende la existencia del **acto demandado** en la presente acción, este es:

- El acto administrativo ficto negativo producto del silencio administrativo que se configuró por la falta de respuesta de la Entidad demandada a la petición radicada el 11 de junio de 2019 por medio de la cual el demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por la mora en el desembolso de las cesantías reconocidas a la actora

mediante la Resolución No. 677 de 24 de agosto de 2018 (folios 15 a 17 *«002Demanda»* de la carpeta *«003ActuacionJuzgado56AdministrativoBogota»*).

En consecuencia, a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (folio 3 *«002Demanda»* de la carpeta *«003ActuacionJuzgado56AdministrativoBogota»*):

- Se condene a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- a que se le reconozca y pague la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006, esto es, la equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados a partir del 26 de octubre de 2018, día siguiente al vencimiento de los setenta (70) días hábiles causados desde el momento en que se radicó la solicitud de la cesantía ante la demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de esta, es decir, el 12 de diciembre de 2018.

Del mismo modo, este Despacho, en virtud del líbelo introductorio, señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. El 17 de julio de 2018 la señora LUZ MARINA MANRIQUE SÁNCHEZ solicitó a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- el pago de las cesantías a que tenía derecho (folio 11 *«002Demanda»* de la carpeta *«003ActuacionJuzgado56AdministrativoBogota»*).

2. El 24 de agosto de 2018 la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, mediante la Resolución No. 677, reconoció y pagó a la señora LUZ MARINA MANRIQUE SÁNCHEZ la suma de $11.915.800 por concepto de liquidación parcial de cesantías (folios 11 a 13 *«002Demanda»* de la carpeta *«003ActuacionJuzgado56AdministrativoBogota»*).

3. El 12 de diciembre de 2018 la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-puso a disposición de la señora LUZ MARINA MANRIQUE SÁNCHEZ el pago de las cesantías reconocidas mediante la Resolución No. 677 de 24 de agosto de 2018 (folio 24 «*002Demanda*» de la carpeta «*003ActuacionJuzgado56AdministrativoBogota*»).

4. El 11 de junio de 2019 la señora LUZ MARINA MANRIQUE SÑANCHEZ, mediante escrito de petición, solicitó a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el desembolso de las cesantías reconocidas a la actora en la Resolución No. 677 de 24 de agosto de 2018 (folios 15 a 17 «*002Demanda*» de la carpeta «*003ActuacionJuzgado56AdministrativoBogota*»).

Bajo ese contexto, se encuentra que existe **discrepancia** en relación con: i) el reconocimiento de la sanción moratoria al personal docente oficial en Colombia.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en establecer la legalidad del acto administrativo acusado resolviendo el siguiente **problema jurídico**: **1)** ¿Debe reconocerse y pagarse a la señora LUZ MARINA MANRIQUE SÁNCHEZ la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías parciales de que trata la Ley 1071 de 2006 la cual adicionó y modificó la Ley 244 de 1995?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÁSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 7 a 19 *«002Demanda»* de la carpeta *«003ActuacionJuzgado56AdministrativoBogota»* del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

---

[1] «**Artículo 207. *CONTROL DE LEGALIDAD*.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -19 de agosto de 2020: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá («003ActaReparto» de la carpeta «003ActuacionJuzgado56AdministrativoBogota»).
-10 de septiembre de 2020: Juzgado 56 Administrativo de Bogotá remite por el factor territorial a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot («008Remite» de la carpeta «002ActuacionJuzgado56AdministrativoBogota»).
-15 de octubre de 2020: Efectuado el reparto, correspondió su conocimiento a este Despacho («004ActaReparto»).
-29 de octubre de 2020: Auto que admite demanda y ordena notificar a la demandada («006AutoAdmite»).
-26 de noviembre de 2020: Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («008NotificacionPersonal»).
-10 de diciembre de 2020 -Parte demandada contesta la demanda sin la proposición de excepciones («009ContestacionDemanda»).
-12 de abril de 2021: El proceso ingresa al Despacho («010ConstanciaTerminosDespacho»).

TERCERO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

CUARTO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

QUINTO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

SEXTO: RECONÓCESE PERSONERÍA ADJETIVA al doctor JUAN CAMILO OTÁLORA ALDANA para actuar como apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, de conformidad con la sustitución de poder visible en el folio 10 «*009ContestacionDemanda*» del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
DC9B66CA95A6D1B5AE482C5706006D6CEDA567B8B4E5F23F1D564FD55727B8EB
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:35 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación: **25307-3333-001-2020-00175-00**
Demandante: **ACABADOS Y ESTRUCTURAS S.A.S.**
Demandado: **MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
Medio de Control: **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

Juez: **Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar presentada por la apoderada judicial de la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Inmerso en el líbelo introductorio allegado el 21 de octubre de 2020, la apoderada judicial del demandante solicitó como medida cautelar lo siguiente: («*002DemandaPoderAnexos*» del cuaderno principal):

> *«Dados los anteriores argumentos y hechos, y en aras de que no se vulneren derechos a la empresa Acabados y Estructuras S.A.S. con la ejecución de los actos administrativos atacados, solicito a su señoría de forma provisional DECRETAR la suspensión de los actos administrativos Nos 041 DE 18 DE ENERO DE 2019 y 011 DE 24 DE ENERO DE 2020, emitidos por la alcaldía de Fusagasugá».*

2.2. Mediante auto de 11 de marzo de 2021 se corrió traslado de la solicitud de medida cautelar de «*…suspensión de los actos administrativos Nos 041 DE 18 DE*

ENERO DE 2019 y 011 DE 24 DE ENERO DE 2020, emitidos por la alcaldía de Fusagasugá» al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ (*«002CorreMedida»* del cuaderno de Medida Cautelar).

2.3. El 24 de marzo de 2021 se notificó a la parte demandada el auto admisorio de la demanda junto con el auto que dispuso correr traslado de la medida cautelar (*«004NotificacionPersonal»* del cuaderno de Medida Cautelar).

2.4. El 8 de abril de 2021 la doctora DANIELA ALEJANDRA GARZÓN ROZO, en su condición de apoderada judicial del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, descorrió el traslado de la medida cautelar solicitada por el demandante manifestando su oposición, solicitando que la misma sea denegada. Para el efecto, en síntesis, expuso (Archivo denominado *«005PronunciamientoMedidar»* del cuaderno de Medida Cautelar):

2.4.1. Indicó que en atención a la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional como fundamento de la misma se tiene lo señalado en el acápite de concepto de violación y hechos de la demanda, frente a lo cual señala que el demandante omitió construir el edificio ubicado en la calle 18 No. 2-09/13/17 en las condiciones en las que se le otorgó en la licencia de construcción No. 370 de 11 de septiembre de 2009, y que al realizar el 2 de septiembre de 2020 una visita técnica al edifico *«el rincón del mirador»*, a través del CONSEJO DE GESTIÓN DEL RIESGO se generó el concepto donde se determinó que dicha estructura *«se encuentra en riesgo inminente de colapso»*, por lo que refiere que frente a la caducidad de la sanción debe ser probada dentro del proceso, pero que es pertinente dejar el precedente sobre el riesgo que representa dicha estructura a la seguridad, vida e integridad de la comunidad, siendo necesaria la evacuación inmediata.

2.4.2. Refiere que cursa ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA la acción popular No. 2014-00373 dentro de la cual, en primera instancia, se ampararon los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, al acceso de una infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública, a la salubridad y prevención de desastres previsibles

técnicamente, a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y el derecho de los consumidores y usuarios del edificio el rincón del mirador y se ordenó, entre otras, a la SOCIEDAD ACABADOS Y ESTRUCTURAS LTDA. tramitar de forma inmediata la respectiva licencia para la demolición del edificio. Lo anterior para reiterar que el edificio el Rincón del Mirador se encuentra en riesgo inminente de colapso por lo que de ordenarse la suspensión provisional de los actos enjuiciados podría significar la ocurrencia de una tragedia previsible.

2.4.3. Finalmente expone que la demandante no argumentó los requisitos consagrados en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, limitándose a la misma tesis expuesta en la demanda los cuales deben ser probados en desarrollo del proceso o implicaría un prejuzgamiento. Por lo que al resultar más gravoso para el interés público ordenar la suspensión provisional de los actos administrativos enjuiciados teniendo en cuenta el riesgo inminente de colapso del edificio el rincón del mirador.

2.5. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«006ConstanciaDespacho»* del cuaderno de Medida Cautelar).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

3.1. GENERALIDADES:

3.1.1. MEDIDAS CAUTELARES EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

3.1.1.1. Las medidas cautelares en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentran contempladas en los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y son aplicables en aquellos casos en que se consideren *«necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia»* según señala el mismo artículo 229.

Al tenor del artículo 230, que enlista aquellas que pueden ser decretadas, pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. Al respecto, ha señalado el Consejo de Estado:

> «*Avanzando en la tipología desarrollada por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se diferencia entre medidas cautelares preventivas, tendientes a operar como una suerte de acción impeditiva para que no se pueda consolidar una afectación a un derecho; conservativas que buscan mantener o salvaguardar un statu quo ante; anticipativas, en donde se pretende satisfacer por adelantado la pretensión perseguida por el demandante, mediante una decisión que propiamente correspondería al fallo que ponga fin al proceso y que se justifica en tanto que de no adoptarse se incurriría en un perjuicio irremediable para el actor, y de suspensión que corresponde a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.*»[1] (Subraya el Despacho)

3.1.1.2. Sobre los criterios para su procedencia, ha señalado el Alto Tribunal:

> «*…en cuanto a los criterios que debe seguir el juez contencioso administrativo para determinar la procedencia de una medida cautelar, es preciso reconocer que éste cuenta con un espacio de discrecionalidad para adoptarla así como para modular sus efectos en el caso concreto. En este contexto, debe el Juez tener en cuenta el principio de proporcionalidad como, de hecho, se desprende, además de las exigencias constitucionales y convencionales, de la normativa sobre las medidas cautelares al establecer como uno de los requisitos para el decreto de la cautela que "el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla" (artículo 231 CPAyCA)* (Destaca el Despacho).
>
> *3.10.- Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleja la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora[2], debe proceder a un estudio de ponderación y sus subprincipios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad*

---

[1] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil quince (2015). Radicación número: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057).

[2] Cita de cita: *Como ya se ha sostenido, estos principios del periculum in mora y el fumus boni iuris significan que "siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio.". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 27 de febrero de 2013, exp. 45316 (entre otras decisiones similares).*

stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad[3]*.»*[4]

3.1.2. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES

El artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a los requisitos que deben tenerse en cuenta al momento del decreto de la medida cautelar dispone:

«**Artículo 231.** ***REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES.***

"Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios»

De lo anterior deviene que la procedencia de la suspensión provisional se presenta cuando la violación de las normas invocadas surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas

---

[3] Cita de cita: *En cualquier clase de decisiones jurídicas debe considerarse la razonabilidad de esta, que no solo se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga en irrazonable, desproporcionada o, en suma, contraria a la constitución; se trata, entonces, de adoptar una decisión que satisfaga el criterio de aceptabilidad; y para lograr ello en buena medida contribuye la valoración de los principios constitucionales.*
[4] Ibídem.

superiores invocadas como violadas, o de las pruebas que el accionante haya aportado para que sea decretada la medida cautelar.

3.2. CASO CONCRETO

Descendiendo al caso concreto, se observa que la solicitud de suspensión provisional recae en los efectos de los actos administrativos No. 041 de 18 de enero de 2019 por medio de la cual la Secretaria de Gobierno del Municipio de Fusagasugá sancionó a la Sociedad demandante por haber realizado construcción en contravención a la licencia, en el predio denominado Edificio el Rincón del Mirador, ubicado en la Calle 18 No. 2-09/13/17 del Municipio de Fusagasugá y de la Resolución No. 011 de 24 de enero de 2020, que confirmó la anterior decisión.

No obstante, la apoderada judicial de la parte actora no expuso los argumentos con el fin de decretar la medida cautelar, es decir olvidó tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a que la procedencia de la medida a petición de parte debe estar «*debidamente sustentada*», pues pese a que señaló «*Dados los anteriores argumentos y hechos…*», es decir, pretendió que se tuvieran como argumentos de su solicitud de medida cautelar los mismos señalados en el líbelo introductorio, situación proscrita jurisprudencialmente, habida cuenta que en la demanda se indican las normas violadas y el concepto de la violación como requisito exigido para este tipo de procesos, según lo dispone el numeral 4° del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual no puede confundirse con el establecido en el artículo 229 ibídem, pues se trata de dos requisitos distintos para fines procesales disimiles, el primero, que consiste en fundamentar jurídicamente la pretensión de nulidad del acto y, el segundo, explicar las razones por las cuales el acto debe ser suspendido provisionalmente.

Aunado a lo anterior, no se probó que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos enjuiciados que concederla, pues, contrario sensu, se desprende no sólo del contenido de uno de los actos enjuiciados sino de la

documental allegada por la apoderada judicial del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ en el escrito mediante el cual se pronunció de la medida que el Edificio Rincón del Mirador presenta fallas estructurales que devienen en un riesgo de colapso situación que a toda luz de decretarse la medida provisional solicitada sí resultaría más gravoso para el interés público.

Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante reciente proveído de 1° de julio de 2020 señaló:

> *«La exigencia de sustentar en forma expresa y concreta la referida solicitud se explica por su propia naturaleza dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos. Ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor y sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello».*

Ahora, debe señalarse que en proveído de 14 de febrero de 2019 Sección Primera del Consejo de Estado señaló:

> *«Para resolver se considera que no están presentes los requisitos señalados en los articulo 229 y 231 del C.P.A.C.A. para que sea procedente el decreto de la suspensión provisional solicitada, toda vez que no se sustentó en la forma en que lo ordena la citada disposición, omisión ésta que hace imposible efectuar la comparación normativa para deducir de ella la presunta violación del ordenamiento jurídico que propone el demandante.*
>
> *La exigencia de sustentar en forma expresa y concreta la referida solicitud se explica por su propia naturaleza, dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos.*
>
> *Ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor, sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello. Resulta altamente útil traer a colación el análisis que hizo el Despacho en auto del 21 de octubre de 2013 expedido en el proceso número 11001 0324 000 2012 00317 00, en el cual se abordó el tema en un asunto semejante:*
>
> *"En efecto, el requisito consistente en la sustentación de la medida cautelar no se encuentra en el artículo 231 del CPACA que trae a colación el recurrente, sino en el artículo 229 ejusdem cuyo contenido y alcance fueron explicados en*

el auto recurrido. Con todo, esta disposición advierte que las medidas cautelares, dentro de las que se encuentra la suspensión provisional, pueden ser decretadas ***a solicitud de parte debidamente sustentada,*** *lo que equivale a decir que la solicitud debe ser suficientemente argumentada por quien la solicite.*

Cosa distinta es que en la demanda se indiquen las normas violadas y el concepto de la violación, ya que esto comporta uno de los requisitos exigidos para este tipo de líbelos según lo dispone el artículo 162 numeral 4 del CPACA, requisito que no puede confundirse con el establecido en el comentado artículo 229.

En el mismo sentido, el alcance de la expresión "procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado" contenida en artículo 231 Ibíd, se encuentra dirigida a explicar que la solicitud de suspensión provisional puede ser presentada en el líbelo introductorio o en un escrito aparate, y no a que la sustentación de la medida cautelar quede suplida con el concepto de violación de las normas indicadas en la demanda, dado que, se reitera, se trata de dos requisitos distintos para fines procesales disimiles: uno, el que se refiere a fundamentar jurídicamente la pretensión de nulidad del acto, el otro, a explicar las razones por las cuales el acto debe ser suspendido provisionalmente.

Lo anterior no quiere decir que los argumentos para cada uno de los fines procesales mencionados puedan coincidir, es más, si lo deseado por la actora era que el concepto de violación expuesto en la demanda sirviera de fundamento de la solicitud de suspensión provisional así debió expresarlo, máxime si se tiene en cuenta que en el escrito de la demanda dedicó un capítulo aparte a la suspensión provisional dentro del cual inscribió un subtítulo denominado "FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL", que fue al que se atuvo este Despacho para resolver la medida.

En otras palabras, la actora en su demanda dedicó un capítulo para sustentar la medida cautelar, a esa sustentación se remitieron la entidad demandada y el Despacho para descorrer el traslado y resolver la medida, sin embargo, ahora, viendo que esa sustentación en varios de sus apartes fue insuficiente, pretende que se tengan como tales los argumentos que utilizó para otros fines procesales.

Finalmente sobre este punto, debe ponerse de relieve que la sustentación de la solicitud de suspensión provisional no constituye un exceso ritual, se trata de la observancia de una carga procesal en cabeza de la actora cuyo cumplimiento es el deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia y a su vez la carga que exige la ley para que, entre otras, se garantice el derecho de defensa de la entidad que expidió el acto.

A propósito del derecho de defensa de la entidad demandada, no se puede perder de vista que la nueva codificación trajo consigo la obligación de correr traslado a la parte demandada de la solicitud de suspensión, en ese orden, la carga impuesta para que se sustente la medida también se encuentra dirigida a que la entidad que profirió el acto conozca a ciencia cierta las razones esgrimidas por el actor para poder ejercer eficientemente su derecho de defensa. En ese contexto, no puede tenerse como sustentación de la medida cautelar la sola afirmación de que el acto administrativo desconoce normas de rango superior»

Así las cosas, resulta evidente que la carga procesal para la procedencia de la solicitud de la medida provisional radica en la parte demandante, la cual debe sustentar jurídicamente la solicitud de suspensión provisional, situación que no acontece dentro del presente asunto, aunado a lo anterior, tampoco se acreditó el criterio de necesidad en el decreto de la medida, ni se probó, si quiera de manera sumaria, los perjuicios causados de no accederse a la misma, por lo que de no hacerse se estaría faltando a los requisitos señalados en los articulo 229 y 231 de la Ley 1437 de 2011. En ese orden, al no cumplirse con dicha carga procesal dentro del presente asunto, aunado a que de decretarse la suspensión sí resultaría más gravoso para el interés público ante la falla estructural y consecuente riesgo de colapso del Edificio Rincón del Mirador, se negará la aludida solicitud.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: NIÉGASE la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos administrativos No. 041 de 18 de enero de 2019 por medio de la cual la Secretaría de Gobierno del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ sancionó a la Sociedad demandante por haber realizado construcción en contravención a la licencia, en el predio denominado Edificio el Rincón del Mirador, ubicado en la Calle 18 No. 2-09/13/17 del Municipio de Fusagasugá y de la Resolución No. 011 de 24 de enero de 2020, que confirmó la anterior decisión, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar a la doctora DANIELA ALEJANDRA GARZÓN ROZO como apoderada judicial del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ en los términos y para los efectos del poder a ella conferido obrante en el folio 13 del archivo denominado *«005PronunciamientoMedida»* del cuaderno de medida cautelar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
3e188203b4d559fe48e43b2d38854b704be2ae7afad393b4f9c65f0160f41e12
Documento generado en 15/04/2021 02:44:13 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00176-00**
DEMANDANTE:	**JOSÉ RAMÓN CHATE YOINÓ**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar presentada por el apoderado judicial de la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Con el líbelo introductorio allegado a este Despacho el 21 de octubre de 2020 el apoderado judicial del demandante solicitó (folio 34 «*001EscritoMedidaCautelar*» del cuaderno «*C02MedidaCautelar*» del expediente digitalizado):

> *«1. De forma respetuosa solicito al despacho proferir medida cautelar de suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician.*
>
> *2. De igual manera, solicito se profiera medida cautelar de carácter patrimonial, a favor de* ***JOSÉ RAMÓN CHATE YOINÓ,*** *identificado*

> *con C.C. 1.062.075.888 de Colon en el cual se ordene el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados».*

1.2. Mediante auto de 25 de febrero de 2021 se corrió traslado de la solicitud de medida cautelar de *«suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician»* y de una medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor CHATE YOINÓ, en la que se ordene *«el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados»* a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL (*«002AutoCorreMedida»* del cuaderno *«C02MedidaCautelar»* del expediente digitalizado).

1.3. El 11 de marzo de 2021 se notificó a la parte demandada el auto admisorio de la demanda junto con el auto que dispuso correr traslado de la medida cautelar (*«004NotificacionPersonal»* del cuaderno del cuaderno *«C02MedidaCautelar»* del expediente digitalizado).

1.4. El 18 de marzo de 2021 la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA, en su condición de apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, descorrió el traslado de la medida cautelar solicitada por el demandante manifestando su oposición y solicitando que la misma sea denegada. Para el efecto, en síntesis, expuso (*«005EscritoEjercito»* del cuaderno del cuaderno *«C02MedidaCautelar»* del expediente digitalizado):

1.4.1. En cuanto a la solicitud elevada por el demandante, indicó que ***i)*** *no* estuvo motivada, ***ii)*** no señaló las normas que servían como sustento para ello, evidenciándose *«una pobre argumentación»* y, ***iii)*** no indicó los actos administrativos censurados o que pretende sean suspendidos, razones por las cuales señaló que es imposible pronunciarse o ejercer el derecho de defensa y contradicción ante la solicitud de medida cautelar, pues además, no se cuenta con los actos administrativos enjuiciados y que se pretenden sean suspendidos provisionalmente.

1.4.2. Luego de referirse al artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señaló que quien solicita la medida cautelar debe asumir la carga de argumentación y probatoria

que garanticen que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender la valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia.

1.4.3. Posteriormente, previo a señalar los requisitos para decretar la medida cautelar indicó que para que la misma proceda, resulta necesario que del análisis realizado por el Juez, se concluya que existe violación a las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud, resultando claro que en principio no existe vulneración que pueda ser advertida en este momento a través del mecanismo de confrontación que prevé el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, por lo que indicó que debe negarse la solicitud de suspensión provisional solicitada.

1.5. El 7 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer («*006ConstanciaDespacho*» de la carpeta «*C02MedidaCautelar*»).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1. GENERALIDADES:

2.1.1. MEDIDAS CAUTELARES EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

2.1.1.1. Las medidas cautelares en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentran contempladas en los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y son aplicables en aquellos casos en que se consideren «*necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia*» según señala el mismo artículo 229.

Al tenor del artículo 230, que enlista aquellas que pueden ser decretadas, pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. Al respecto, ha señalado el Consejo de Estado:

«Avanzando en la tipología desarrollada por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se diferencia entre medidas cautelares preventivas, tendientes a operar como una suerte de acción impeditiva para que no se pueda consolidar una afectación a un derecho; conservativas que buscan mantener o salvaguardar un statu quo ante; anticipativas, en donde se pretende satisfacer por adelantado la pretensión perseguida por el demandante, mediante una decisión que propiamente correspondería al fallo que ponga fin al proceso y que se justifica en tanto que de no adoptarse se incurriría en un perjuicio irremediable para el actor, y de suspensión que corresponde a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.»[1] (Subraya el Despacho)

2.1.1.2. Sobre los criterios para su procedencia, ha señalado el Alto Tribunal:

«…en cuanto a los criterios que debe seguir el juez contencioso administrativo para determinar la procedencia de una medida cautelar, es preciso reconocer que éste cuenta con un espacio de discrecionalidad para adoptarla, así como para modular sus efectos en el caso concreto. En este contexto, debe el Juez tener en cuenta el principio de proporcionalidad como, de hecho, se desprende, además de las exigencias constitucionales y convencionales, de la normativa sobre las medidas cautelares al establecer como uno de los requisitos para el decreto de la cautela que "el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla" (artículo 231 CPAyCA) (Subraya el Despacho)

3.10.- Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleja la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora[2]*, debe proceder a un estudio de ponderación y sus subprincipios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad*

---

[1] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil quince (2015). Radicación número: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057).

[2] Cita de cita: *Como ya se ha sostenido, estos principios del periculum in mora y el fumus boni iuris significan que "siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio.". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 27 de febrero de 2013, exp. 45316 (entre otras decisiones similares).*

stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad[3]*.»*[4]

2.1.2. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES

El artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a los requisitos que deben tenerse en cuenta al momento del decreto de la medida cautelar dispone:

«**Artículo 231.** ***REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES.***

"Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios».

---

[3] Cita de cita: *En cualquier clase de decisiones jurídicas debe considerarse la razonabilidad de esta, que no solo se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga en irrazonable, desproporcionada o, en suma, contraria a la constitución; se trata, entonces, de adoptar una decisión que satisfaga el criterio de aceptabilidad; y para lograr ello en buena medida contribuye la valoración de los principios constitucionales.*
[4] Ibídem.

De lo anterior deviene que la procedencia de la suspensión provisional se presenta cuando la violación de las normas invocadas surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o de las pruebas que el accionante haya aportado para que sea decretada la medida cautelar.

2.1.3. MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PATRIMONIAL

En cuanto a las medidas cautelares de carácter patrimonial, si bien no existe una definición para las mismas, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto No. 2015-00554 de 6 de octubre de 2017 señaló:

> *«Cuando el mencionado precepto se remite a medidas cautelares de carácter patrimonial, se está refiriendo a medidas que directa e inmediatamente afectan el patrimonio de las personas naturales o jurídicas lo cual no ocurre con la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos. pues estos tienen una naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso evitando transitoriamente, que surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el estado de derecho, lo que claramente excluye su patrimonialidad al no afectar el patrimonio de las personas, sino despojando de sus efectos, temporalmente, a un acto administrativo preliminarmente, considerado como contrario al ordenamiento jurídico. Cuestión diferente es que, indirectamente, la suspensión de los efectos del acto administrativo traiga efectos en el patrimonio de las personas naturales o jurídicas que la han solicitado o que resultan afectadas con la respectiva medida. En consecuencia, se precisa que el estudio del carácter patrimonial de la medida cautelar solicitada con la cual se pretende obviar el requisito de procedibilidad de la conciliación administrativa, debe realizarse conforme a lo solicitado en la demanda empero, ese análisis no puede llevarse a cabo cuando se trata de la medida de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, pues la misma no tiene una naturaleza patrimonial».*

2.2. CASO CONCRETO

Descendiendo al caso concreto, se observa que la solicitud de suspensión provisional si bien no fue señalada taxativamente por la parte actora, recae en los efectos de los actos administrativos Nos. 20183111794241: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 de 20 de septiembre de 2020 y en el ficto o presunto negativo producto del silencio administrativo negativo

configurado a partir del escrito radicado bajo el No. REFS3A899V de 30 de agosto de 2018 por medio de los cuales se le negó al actor el reconocimiento y/o reajuste salarial del 20%, el subsidio familiar de conformidad con el Decreto 1794 de 2000 y la prima de actividad, aunado a una medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor CHATE YOINÓ, en la que se ordene «*el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*».

No obstante, el apoderado judicial de la parte actora no expuso las razones que argumentaran su solicitud de decreto de la medida cautelar, es decir obvió la disposición contenida en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, relacionada con que para la procedencia de la medida a petición de parte tiene que estar «*debidamente sustentada*».

Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante reciente proveído de 1° de julio de 2020 señaló:

> «*La exigencia de sustentar en forma expresa y concreta la referida solicitud se explica por su propia naturaleza dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos. Ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor y sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello*».

Ahora, debe señalarse que en proveído de 14 de febrero de 2019 Sección Primera del Consejo de Estado señaló:

> «*Para resolver se considera que no están presentes los requisitos señalados en los articulo 229 y 231 del C.P.A.C.A. para que sea procedente el decreto de la suspensión provisional solicitada, toda vez que no se sustentó en la forma en que lo ordena la citada disposición, omisión ésta que hace imposible efectuar la comparación normativa para deducir de ella la presunta violación del ordenamiento jurídico que propone el demandante.*
>
> *La exigencia de sustentar en forma expresa y concreta la referida solicitud se explica por su propia naturaleza, dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos.*

Ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor, sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello. Resulta altamente útil traer a colación el análisis que hizo el Despacho en auto del 21 de octubre de 2013 expedido en el proceso número 11001 0324 000 2012 00317 00, en el cual se abordó el tema en un asunto semejante:

"En efecto, el requisito consistente en la sustentación de la medida cautelar no se encuentra en el artículo 231 del CPACA que trae a colación el recurrente, sino en el artículo 229 ejusdem cuyo contenido y alcance fueron explicados en el auto recurrido. Con todo, esta disposición advierte que las medidas cautelares, dentro de las que se encuentra la suspensión provisional, pueden ser decretadas ***a solicitud de parte debidamente sustentada,*** *lo que equivale a decir que la solicitud debe ser suficientemente argumentada por quien la solicite.*

Cosa distinta es que en la demanda se indiquen las normas violadas y el concepto de la violación, ya que esto comporta uno de los requisitos exigidos para este tipo de líbelos según lo dispone el artículo 162 numeral 4 del CPACA, requisito que no puede confundirse con el establecido en el comentado artículo 229.

En el mismo sentido, el alcance de la expresión "procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado" contenida en artículo 231 Ibíd, se encuentra dirigida a explicar que la solicitud de suspensión provisional puede ser presentada en el líbelo introductorio o en un escrito aparate, y no a que la sustentación de la medida cautelar quede suplida con el concepto de violación de las normas indicadas en la demanda, dado que, se reitera, se trata de dos requisitos distintos para fines procesales disimiles: uno, el que se refiere a fundamentar jurídicamente la pretensión de nulidad del acto, el otro, a explicar las razones por las cuales el acto debe ser suspendido provisionalmente.

Lo anterior no quiere decir que los argumentos para cada uno de los fines procesales mencionados puedan coincidir, es más, si lo deseado por la actora era que el concepto de violación expuesto en la demanda sirviera de fundamento de la solicitud de suspensión provisional así debió expresarlo, máxime si se tiene en cuenta que en el escrito de la demanda dedicó un capítulo aparte a la suspensión provisional dentro del cual inscribió un subtítulo denominado "FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL", que fue al que se atuvo este Despacho para resolver la medida.

En otras palabras, la actora en su demanda dedicó un capítulo para sustentar la medida cautelar, a esa sustentación se remitieron la entidad demandada y el Despacho para descorrer el traslado y resolver la medida, sin embargo, ahora, viendo que esa sustentación en varios de sus apartes fue insuficiente, pretende que se tengan como tales los argumentos que utilizó para otros fines procesales.

Finalmente sobre este punto, debe ponerse de relieve que la sustentación de la solicitud de suspensión provisional no constituye un exceso ritual, se trata de

> *la observancia de una carga procesal en cabeza de la actora cuyo cumplimiento es el deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia y a su vez la carga que exige la ley para que, entre otras, se garantice el derecho de defensa de la entidad que expidió el acto.*
>
> *A propósito del derecho de defensa de la entidad demandada, no se puede perder de vista que la nueva codificación trajo consigo la obligación de correr traslado a la parte demandada de la solicitud de suspensión, en ese orden, la carga impuesta para que se sustente la medida también se encuentra dirigida a que la entidad que profirió el acto conozca a ciencia cierta las razones esgrimidas por el actor para poder ejercer eficientemente su derecho de defensa. En ese contexto, no puede tenerse como sustentación de la medida cautelar la sola afirmación de que el acto administrativo desconoce normas de rango superior».*

Así las cosas, resulta evidente que la carga procesal para la procedencia de la solicitud de la medida provisional radica en la parte demandante, la cual debe sustentar jurídicamente la solicitud de suspensión provisional, situación que no acontece dentro del presente asunto, aunado a lo anterior, tampoco se acreditó el criterio de necesidad en el decreto de la medida, ni se probó si quiera de manera sumaria los perjuicios causados de no accederse a la misma, por lo que de no hacerse se estaría faltando a los requisitos señalados en los artículos 229 y 231 de la Ley 1437 de 2011, en ese orden, al no cumplirse con dicha carga procesal dentro del presente asunto, resulta procedente negar la solicitud.

Finalmente se advierte que el análisis efectuado en precedencia resulta aplicable a la solicitud de medida cautelar de «*suspensión del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician*», así como a la medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor CHATE YOINÓ, en la que se ordene «*el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*».

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: NIÉGASE la SUSPENSIÓN PROVISIONAL «*del acto administrativo, para cada uno de los actos que en la presente demanda se enjuician*», así como a la medida cautelar de carácter patrimonial a favor del señor CHATE YOINÓ, en la que se ordene «*el pago provisional de cada una de las mesadas de los derechos aquí demandados*».

SEGUNDO: RECONÓCESE PERSONERÍA ADJETIVA a la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA para actuar como apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con el poder visible en el folio 6 del archivo «*005EscritoEjercito*» de la carpeta «*C02MedidaCautelar*».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
bebec13646baa859c05628e37ea366efd5301897710a1e33131ce057ddba3bc9
Documento generado en 15/04/2021 02:43:36 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00179-00**
DEMANDANTE:	**MARTHA AMELIA RODRÍGUEZ FAJARDO**
DEMANDADO:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL– UGPP-**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda que en ejercicio del medio de control de *nulidad y restablecimiento del derecho* presentó la señora MARTHA AMELIA RODRÍGUEZ FAJARDO, por conducto de apoderada judicial, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, con el propósito de obtener la nulidad de las Resoluciones No.RDP008823 de 18 de marzo de 2019 «*Por la cual se NIEGA una Pensión de Sobrevivientes*» y No.RDP015455 de 21 de mayo de la misma anualidad «*Por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 8823 del 18 de marzo de 2019*».

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Siendo remitido el proceso de la referencia por el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE GIRARDOT, por reparto de 23 de octubre de 2020 le correspondió su conocimiento a este Despacho (Folios 110 a 112 «*01ExpedienteDigital*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgadoLaboralGirardot*» y «*004ActaReparto*»).

2.2. Previa certificación del último lugar de prestación de servicios del señor HUMBERTO MUÑOZ MOLINA (q.e.p.d), este Despacho mediante proveído de 4 de marzo de 2021 avocó el conocimiento e inadmitió la demanda para que se adecuara a los parámetros y requisitos establecidos para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta las normas procesales previstas para el efecto, so pena de rechazo y se le indicó que el escrito de subsanación se debía remitir además, a la dirección electrónica oficial de la Entidad demandada de manera simultánea, esto es, en un mismo correo (*«013AutoInadmite»*).

2.3. El 16 de marzo de 2021 el apoderado judicial de la parte actora allegó escritos por medio de los cuales pretende subsanar la demanda y, mediante memorial allegado el 23 siguiente informó que había presentado solicitud de desistimiento de conciliación extrajudicial ante el PROCURADURÍA 199 JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE GIRARDOT, para no incurrir en causal de nulidad teniendo en cuenta que ya cursaba demanda por los mismos hechos, por lo que solicitó se admita la demanda conforme al escrito de subsanación (*«015EscritoDemandanteSinAnexos»*, *«016EscritoDemandanteAnexos»* y *«017EscritoDemandante»*).

2.4. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«018ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, y de conformidad con los artículos 169 y 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, este Despacho determinará si la parte actora cumplió la carga de subsanar la demanda en debida forma.

En ese orden, en primer lugar debe señalarse que en el auto de 4 de marzo de 2021 se inadmitió la demanda para que la parte actora adecuara la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta las normas procesales previstas para el efecto, habida cuenta que la misma fue dirigida y presentada ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral.

Así las cosas, el apoderado judicial de la parte actora el 16 de marzo de 2021 allegó escrito con el que pretende subsanar la demanda indicando que «*Se adecuó la demanda a todos los parámetros y requisitos establecidos para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho*», de otro lado, informó que había radicado la solicitud de conciliación prejudicial ante la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y por consiguiente solicita la suspensión del proceso hasta tanto se cuente con el acta correspondiente como requisito de procedibilidad.

Sin embargo, mediante escrito allegado el 23 de marzo de 2021 informó que presentó la solicitud de desistimiento de la conciliación extrajudicial ante el PROCURADURÍA 199 JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE GIRARDOT, para no incurrir en causal de nulidad teniendo en cuenta que ya cursaba demanda por los mismos hechos, por lo que solicita se admita la demanda conforme al escrito de subsanación.

Bajo ese contexto, en primer lugar debe puntualizarse que como quiera que lo que se pretende dentro del asunto de la referencia es declarar la nulidad de las Resoluciones No. RDP008823 de 18 de marzo de 2019 «*Por la cual se NIEGA una Pensión de Sobrevivientes*» y la No. RDP015455 de 21 de mayo de la misma anualidad «*Por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 8823 del 18 de marzo de 2019*», las cuales se derivan y/o comprenden prestaciones periódicas, al tenor de lo dispuesto en el literal c del numeral

primero del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 puede ser presentada en cualquier tiempo aunado a que por tratarse de un derecho pensional no es exigible el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial habida cuenta que no es un asunto conciliable al respecto, el H. Consejo de Estado en proveído de 16 de junio de 2016 dentro del proceso con radicado No. 73-001-23-33-000-2012-00240-01(3047-14) señaló:

> *«Las excepciones a la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la demanda son: i) cuando el asunto no sea conciliable, es decir, cuando se discuten derechos ciertos, indiscutibles o irrenunciable, ii) cuando la administración demande un acto que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, iii) de conformidad con el Código General del Proceso cuando quien demande sea una entidad pública.*
>
> *(…)*
>
> *En asuntos pensionales no es obligatorio la exigencia de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, toda vez que su objeto no es conciliable por ninguna de las partes al discutirse derechos irrenunciables…»*

Expuesto lo anterior, para el caso en concreto conforme a lo señalado en precedencia no es exigible el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial, por lo que no será tenida en cuenta para efectos de la calificación de la admisión de la demanda, por lo que bajo ese entendido el Despacho se abstendrá de emitir pronunciamiento en cuanto a la solicitud elevada por la parte actora en el sentido de suspender el proceso hasta tanto se expida por parte de la PROCURADURÍA la constancia de conciliación prejudicial aunado a que la misma parte actora allegó escrito en donde informó que había desistido de dicha solicitud.

Por otro lado, una vez revisado el escrito de subsanación de la demanda el Juzgado encuentra que el mismo no satisface las exigencias previstas en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, habida consideración de que ***i)*** si bien se señalaron como violadas con la expedición de los actos administrativos enjuiciados los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 no se explicó el concepto de su violación, ***ii)*** no se realizó una estimación razonada de la cuantía y ***iii)*** no se advierte que el escrito de subsanación haya sido enviado simultáneamente a la dirección electrónica

oficial de la Entidad demandada, que según consulta realizada en la página web en el siguiente enlace https://www.ugpp.gov.co/Notificaciones-judiciales, corresponde a notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co, como se le indicó en la providencia de 4 de marzo de 2021.

En ese orden, se concluye de manera evidente que la parte actora no dio cumplimiento a lo ordenado por el Despacho en auto de 4 de marzo de 2021, por lo que se rechazará la demanda, de conformidad con los artículos 169[1] y 170[2] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: RECHAZAR la demanda instaurada por la señora MARTHA AMELIA RODRÍGUEZ FAJARDO, por conducto de apoderado judicial, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, de conformidad con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: RECONÓCESE PERSONERÍA ADJETIVA al doctor JEISSON GIOVANNI BAUTISTA RODRÍGUEZ para actuar como apoderado judicial de la señora MARTHA AMELIA RODRÍGUEZ FAJARDO, de conformidad con el poder visible en los folios 9 y 10 del archivo «*016EscritoDemandanteAnexos*» del expediente digitalizado, en los términos y para los efectos del poder a él conferido.

---

[1] «**Artículo 169. *RECHAZO DE LA DEMANDA.*** Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad.

2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial» (Destaca el Despacho).

[2] «**Artículo 170. *INADMISIÓN DE LA DEMANDA.*** Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, **para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda**» (Destaca el Despacho).

TERCERO: En firme esta decisión, **DEVUÉLVASE** la demanda y los anexos sin necesidad de desglose y **ARCHÍVESE** el expediente previas las constancias de rigor**.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
AD1CD59788E3BB6B4FFBFD4EE0F489391507FDF48E3F554AB6073A55F2793F72
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:14 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-3333-001-2019-00150-00**
Demandante:	**JULIA ESTHER ANDRADE ROA**
Demandado:	**CONCEJO MUNICIPAL DE SILVANIA**
Vinculado:	**MUNICIPIO DE SILVANIA**
Medio de Control:	**NULIDAD**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver la solicitud de solicitud de tener como tercero coadyuvante del MUNICIPIO DE SILVANIA a la sociedad CONSTRUCTORA VALU LTDA. y sobre la concesión del recurso de apelación incoado por el apoderado judicial de referida Sociedad contra la sentencia proferida por este Juzgado el 18 de febrero de 2021 dentro del asunto de la referencia.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 18 de febrero de 2021 este Despacho dictó sentencia dentro del presente medio de control declarando la nulidad del Acuerdo Municipal No. 009 de 10 de diciembre de 2018, así («*035Sentencia*»):

«***RESUELVE***

> ***PRIMERO: DECLÁRASE*** *la nulidad del Acuerdo Municipal No. 009 de 10 de diciembre de 2018, expedido por el CONCEJO MUNICIPAL DE SILVANIA - CUNDINAMARCA «POR EL CUAL EXCEPCIONALMENTE SE INCORPORA UN PREDIO RURAL AL PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 1753 DE 2015», por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.*
>
> ***SEGUNDO: ABSTIÉNESE*** *de condenar en costas, de conformidad con lo expuesto.*
> *(..)».*

2.2. En aplicación del artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el 19 de febrero de 2021 se notificó la aludida sentencia *(«036NotificacionSentencia»).*

2.3. Mediante correo electrónico de 5 de marzo de 2021 el apoderado judicial de la sociedad CONSTRUCTORA VALU LTDA., incoó recurso de apelación en el cual realiza una narración breve de los antecedentes en el proceso, así como de los motivos esgrimidos en la sentencia para el decreto de la nulidad, y continua, aduciendo los motivos por los cuales debe ser revocada la sentencia proferida por este Juzgado el 18 de febrero de 2021. Además, solicita su reconocimiento como tercero coadyuvante del extremo pasivo dentro del presente medio de control en los términos del artículo 223 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así: (*«037RecursoApelacion»*).

> *«Teniendo en cuenta el carácter público de la acción incoada por la demandante, se les permite a terceros intervenir en el curso del proceso, conforme lo permite el artículo 223 de la ley 1437 de 2011.*
>
> > *Artículo 223. Coadyuvancia en los procesos de simple nulidad. En los procesos que se tramiten con ocasión de pretensiones de simple nulidad, desde la admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del demandante o del demandado.*
> >
> > *El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta.*
> >
> > *Antes del vencimiento del término para aclarar, reformar o modificar la demanda, cualquier persona podrá intervenir para formular nuevos cargos o para solicitar que la anulación se extienda a otras disposiciones*

> *del mismo acto, caso en el cual se surtirán los mismos traslados ordenados para la reforma de la demanda principal.*
>
> *Precisamente mi representado comparece para coadyuvar al extremo pasivo en la defensa de la legalidad del acto demandado. Solicito, entonces, se reconozca su calidad y se admita el presente recurso.»*

2.4. El 5 de abril de 2021 el expediente ingresó al Despacho para proveer («038ConstanciaDespacho»).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho en primer orden analizará la solicitud de reconocimiento como tercero coadyuvante del extremo pasivo elevada por el apoderado judicial de la sociedad CONSTRUCTORA VALU LTDA. y, en segundo orden, sobre la concesión o procedencia del recurso de alzada incoado por el apoderado judicial de la señalada Sociedad.

Bajo ese contexto, se hacer necesario recordar que el artículo 223 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo determinó la intervención de terceros que pretendan coadyuvar en el medio de control de nulidad, así:

> «**Artículo 223.** ***COADYUVANCIA EN LOS PROCESOS DE SIMPLE NULIDAD.*** En los procesos que se tramiten con ocasión de pretensiones de simple nulidad, **desde la admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del demandante o del demandado**.
>
> **El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta.**
>
> Antes del vencimiento del término para aclarar, reformar o modificar la demanda, cualquier persona podrá intervenir para formular nuevos cargos o para solicitar que la anulación se extienda a otras disposiciones del mismo acto, caso en el cual se surtirán los mismos traslados ordenados para la reforma de la demanda principal.

Así las cosas, de la lectura de la norma en comento, se tiene que: ***i)*** dentro del medio de control de simple nulidad cualquier persona puede pedir que se

tenga como coadyuvante de alguno de los extremos procesales, ***ii)*** **que dicha solicitud se debe realizar desde la admisión de la demanda hasta la audiencia inicial**, ***iii)*** que quien sea reconocido como coadyuvante de alguna de las partes, podrá de manera independiente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, (iv) que las actuaciones desplegadas por quien se le reconoció la calidad de coadyuvante no podrán ir en contravía u oposición con las del extremo procesal al cual ayuda.

En ese orden, téngase en cuenta que la notificación del auto admisorio de la demanda se realizó en debida forma, habida cuenta que allí se dio estricto cumplimiento a lo contemplado en los artículos 199 y 197 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el mismo sentido, es de vital importancia resaltar que, mediante auto de 27 de noviembre de 2020, en virtud del artículo 13 del decreto 806 de 2020, al cumplir el presente proceso los requisitos del su numeral primero para dictar sentencia anticipada se pretermitió la celebración de la audiencia inicial, por lo que solo hasta antes de ese estadio procesal, se debían presentar las solicitudes para el reconocimiento como tercero coadyuvante de alguno de los extremos procesales, por lo que al solicitar el reconocimiento solo hasta el presente estadio procesal deviene en extemporánea.

Cabe destacar el conocimiento que de la norma que regula la coadyuvancia en los medios de control, como el que ocupa la atención del Despacho, por parte del apoderado judicial de la CONSTRUCTORA VALU LTDA., habida consideración que él mismo en su solicitud la refiere y hace alusión con gran claridad y, a su vez contraviniéndola ya que pretende, en primer lugar, un reconocimiento cuya oportunidad feneció y, en segundo lugar, al incoar un recurso para el cual no está facultado, por cuanto no es parte o interviniente dentro del presente proceso. Es de precisar, que el Despacho no desconoce el carácter de público del medio de control de nulidad simple, pero también exalta que pese a dicha condición se deben cumplir las ritualidades previstas por el legislador para el efecto sin que sea posible por parte del operador judicial o de cualquier persona inaplicarlas, so pretexto de dicha connotación.

Ahora bien, aun cuando en gracia de discusión pudiera la sociedad CONSTRUCTORA VALU LTDA., solicitar el reconocimiento de coadyuvante de la parte demandada en los términos del artículo 71 del Código General del Proceso, lo cierto es que no cumple con lo presupuestos contenidos en dicha norma, pues no aduce que tenga una relación sustancial con el MUNICIPIO DE SILVANIA, así como tampoco manifiesta cual es la afectación ocasionada con el contenido de la decisión, aunado a que, tal como se consignó en el fallo en comento, el MUNICIPIO DE SILVANIA en sus alegatos de conclusión solicitó la declaratoria de nulidad del acto demandado, por lo que su petición va en manifiesta oposición con lo esgrimido por el extremo pasivo a quien pretende coadyuvar.

Al respecto, el mencionado artículo 71 del Código General del Proceso prevé:

> **«Artículo 71. *COADYUVANCIA*: Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida**, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia.
>
> El coadyuvante tomará el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención y podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, **en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.**
>
> La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.
>
> Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que hubiere formulado el interviniente.
>
> La intervención anterior al traslado de la demanda se resolverá luego de efectuada esta» (Destaca el Despacho)

Robustece lo anterior, los reiterados pronunciamientos del H. Consejo de Estado, en los que ha indicado:

> *«(…)*

> *cualquier persona está legitimada para intervenir como coadyuvante en los procesos de simple nulidad, con el fin de apoyar los argumentos de la parte demandante o de la demandada, quedando facultada para adelantar todas las actuaciones procesales permitidas a la parte que coadyuva, siempre que no se oponga a los intereses de esta.*
>
> ***La intervención a la que se alude puede hacerse en el interregno comprendido desde la admisión de la demanda y hasta la celebración de la audiencia inicial,*** *plazo que una vez fenecido impide que el ciudadano concurra al proceso, en razón a que hasta dicho momento procesal se fija el objeto del litigio.*
>
> *(…)*
>
> *En resumen, cualquier ciudadano puede intervenir en el proceso de simple nulidad como coadyuvante de la parte demandante o demandada,* ***siempre y cuando radique la solicitud desde la admisión de la demanda y hasta la celebración de la audiencia inicial****. En virtud de la coadyuvancia puede ejercer de forma independiente todos los actos procesales permitidos a la parte que coadyuva y formular nuevos cargos hasta que finalice el término para aclarar, reformar o modificar la demanda.»* [1]

Por los anteriores razonamientos, se negará la solicitud de tener como tercero coadyuvante del MUNICIPIO DE SILVANIA a la sociedad CONSTRUCTORA VALU LTDA.

Corolario de lo anterior, el Despacho no concederá el recurso de apelación incoado contra la sentencia de 18 de febrero de 20201, como quiera que a la sociedad CONSTRUCTORA VALU LTDA. no le asiste interés reconocido para actuar dentro del presente medio de control.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: NEGAR la solicitud de reconocimiento como tercero coadyuvante del MUNICIPIO DE SILVANIA elevada por la sociedad CONSTRUCTORA VALU LTDA., por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.

[1] Providencia de 3 de abril de 2020, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, radicación número: 11001 – 03 – 25 – 000 – 2016 – 0171 - 00(478-16).

SEGUNDO: NO CONCEDER el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad CONSTRUCTORA VALU LTDA., contra la sentencia proferida por este Juzgado el 18 de febrero de 2021, por las razones expuestas en precedencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
B31B54FD3C5650981C285D6D9C122B1DF31C732D6AAC5B8DBA7C76EC678F71E5
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:45:00 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00156-00**
DEMANDANTE:	**CODENSA S.A. E.S.P.**
DEMANDADO:	**MUNICIPIO DE GIRARDOT**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 27 de noviembre de 2020 se dispuso requerir al MUNICIPIO DE GIRARDOT para que allegara el expediente administrativo contentivo de los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, habida consideración que dicha prueba fue decretada de oficio en la audiencia inicial realizada el 25 de septiembre de 2020, frente a la cual se puso de presente que había sido requerida en el auto admisorio de 6 de junio de 2019 y, que además, en los términos del parágrafo 1° del artículo 176 de la Ley 1437 de 2011, es deber de la demandada allegarlo (*«039AutoRequiere»*).

1.2. El 14 y 15 de marzo de 2021 el doctor JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ ZOTA, en calidad de apoderado judicial del MUNICIPIO DE GIRARDOT, allegó escrito en donde indicó que en atención al oficio No. 00229 de 1° de marzo de 2021 remite *«el link mediante We transfer (en atención al tamaño de la misma) que me fue remitido por la oficina jurídica, el cual contiene la información*

solicitada (ver final de este correo) y el archivo en pdf que contiene el remisorio de la información» («*042EscritoDemandante*» y «*043EscritoDemandante*»).

1.3. El 19 y el 24 de marzo de 2021 el apoderado judicial del MUNICIPIO DE GIRARDOT allegó escritos en donde indicó que remitía lo solicitado por el Despacho («*044EscritoMunicipioGirardot*», «*045EscritoMunicipioGirardot*» y «*046EscritoMunicipio*»).

1.4. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho («*047ConstanciaDespacho*»).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Así las cosas, encontrándose el proceso pendiente de correr traslado de las pruebas decretadas en audiencia inicial y subsiguientemente correr traslado para alegar, encuentra el Despacho de la documental allegada el 14, 15, 19 y 24 de marzo de 2021 lo siguiente:

Fecha de Radicación	Radicado por	Contenido de lo Radicado	Observación
14-Marzo-2021	Apoderado judicial de la demandada, MUNICIPIO DE GIRARDOT doctor JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ ZOTA. «*042EscritoDemandante*»	«*el link mediante We transfer (en atención al tamaño de la misma) que me fue remitido por la oficina jurídica, el cual contiene la información solicitada (ver final de este correo) y el archivo en pdf que contiene el remisorio de la información*»	El link de acceso no conlleva a ningún archivo que contenga el expediente administrativo de los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso.
15-Marzo-2021	Apoderado judicial de la demandada, MUNICIPIO DE GIRARDOT doctor JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ ZOTA. «*043EscritoDemandante*»	«*el link mediante We transfer (en atención al tamaño de la misma) que me fue remitido por la oficina jurídica, el cual contiene la información solicitada (ver final de este correo) y el*	El link de acceso no conlleva a ningún archivo que contenga el expediente administrativo de los antecedentes de la actuación

		archivo en pdf que contiene el remisorio de la información»	objeto del presente proceso.
19-Marzo-2021	Apoderado judicial de la demandada, MUNICIPIO DE GIRARDOT doctor JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ ZOTA. *«044EscritoMunicipioGirardot»*	*«…el trámite de la prueba ordenada en el expediente de que trata la referencia según lo solicitado por el despacho».*	Se advierte que se adjuntan documentos cuya foliatura manual corresponde del folio 93 al 123.
19-Marzo-2021	Apoderado judicial de la demandada, MUNICIPIO DE GIRARDOT doctor JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ ZOTA. *«045EscritoMunicipioGirardot»*	*«…el trámite de la prueba ordenada en el expediente de que trata la referencia según lo solicitado por el despacho».*	Se advierte que se adjuntan documentos cuya foliatura manual corresponde del folio 124 al 126.
24-Marzo-2021	Apoderado judicial de la demandada, MUNICIPIO DE GIRARDOT doctor JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ ZOTA. *«045EscritoMunicipioGirardot»*	*«…el trámite de la prueba ordenada en el expediente de que trata la referencia según lo solicitado por el despacho».*	Se advierte que se adjuntan documentos cuya foliatura manual corresponde del folio 69 al 126.

Nótese de la relación anterior, que si bien los link de acceso al expediente administrativo allegados el 14 y 15 de marzo de 2021 resultaron no funcionales, el apoderado judicial de la demandada procedió a remitir en archivo .pdf el documento en mención, no obstante, revisada la foliatura manual de los documentos adjuntos se advierte que faltan la documental del folio 1 al 68 y no existe certeza sobre si el expediente administrativo finaliza en el folio 126, por lo que es del caso requerir al apoderado judicial del MUNICIPIO DE GIRARDOT para que, sin más dilaciones y de forma organizada, íntegra y legible proceda a allegar el expediente administrativo que, se reitera, fue solicitado desde el auto admisorio de 6 de junio de 2019, requerido por segunda vez en la audiencia inicial realizada el 25 de septiembre de 2020, y que además, en los términos del parágrafo 1° del artículo 176 de la Ley 1437 de 20117, es deber de la demandada allegarlo, por lo que se torna necesario

requerir dicha documental por **ÚLTIMA VEZ**, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso[1].

Se advierte que esta es la única prueba pendiente por recaudar para poner en conocimiento junto con las demás recaudadas y posteriormente correr traslado para alegar de conclusión, lo que la falta de acatamiento estricto a las órdenes impartidas por este Juzgado conlleva a una dilación injustificada y temeraria de la parte demandada.

En consecuencia, se **DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRASE al doctor JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ ZOTA, en calidad de apoderado judicial del MUNICIPIO DE GIRARDOT, para que sin más dilaciones en el término máximo e improrrogable de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de este proveído allegue de forma organizada, íntegra y legible el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, esto es, de los recibos universales No. 2018014364 y No. 2018016291. **So pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

---

[1] «**Artículo 44.** ***PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ***. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(...)

2. **Sancionar con arresto** inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.

3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

(...)» (Destaca el Despacho).

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
163A6CFD772126A6AEE6D6D036D37000E8BFEBFD3DBE4336A27E3490953581F0
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:09 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00176-00**
DEMANDANTE:	**HÉCTOR HERISINDO GÓMEZ MORALES**
DEMANDADO:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ-EMSERFUSA- y EICE TERMINAL DE TRASPORTES DE FUSAGASUGÁ**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición y decidir sobre la concesión del recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA contra el auto de 4 de marzo de 2021 por medio del cual se declararon no probadas las excepciones propuestas.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 17 de mayo de 2019 el apoderado judicial del señor HÉCTOR HERISINDO GÓMEZ MORALES incoó demanda por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo asignada por reparto a este Despacho quien declaró la falta de competencia y ordenó su remisión al H.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la providencia de 23 de mayo de 2019. (*«005AutoRemitePorCompetenciaPorCuantia»*).

2.2. El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA por auto de fecha 12 de julio de 2019 rechazó por caducidad la demanda respecto de la Resolución No. 361 de 3 de octubre de 2016, declaró la falta de competencia por el factor cuantía y ordenó la remisión del expediente a este Despacho. (*«009AutoRechazaDemandaDeclaraFaltaDeCompetenciaRemiteExpediente»*).

2.3. El 11 de septiembre de 2019 llegó el expediente a este Despacho, por lo que el 19 del mismo mes y año se dictó el auto admisorio de la demanda y se ordenó notificar a las partes. (*«013AutoAdmiteDemanda»*).

2.4. El 24 de septiembre de 2019 fue interpuesto recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda el cual fue resuelto en providencia del 10 de octubre de 2019. Este Despacho repuso la decisión y ordenó admitir el presente medio de control contra la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ-EMSERFUSA E.S.P.- y de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGÁ. (*«016AutoResuelveRecursoReposicion»*).

2.5. El 13 de diciembre de 2019 se surtió la notificación personal del auto admisorio de la demanda. (*«022NotificacionAutoAdmiteDemanda»*).

2.6. Dentro del término legal para contestar la demanda, el apoderado judicial de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ – EMSERFUSA E.S.P.- propuso las excepciones previas de *«CADUCIDAD DE LA ACCIÓN»*, *«INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN»* e *«INEPTA SUSTANCIAL DE LA DEMANDA E INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES»*, pues, aunque reseñó como tal otras, ninguna de ellas tiene tal carácter. (*«023ContestacionDemandaYPoderEMSERFUSA»*).

2.7. El 1° de julio de 2020 la apoderada judicial de la EICE TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGÁ contestó la demanda, dentro del término legal y, propuso las excepciones de «*CADUCIDAD DE LA ACCIÓN*», «*INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN*» e «*INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES*». («*026ContestacionTerminal*»).

2.8. El 24 de noviembre de 2020 se fijó en lista el traslado de las excepciones propuestas. («*028FijacionLista*»).

2.9. El 27 de noviembre de 2020 la apoderada judicial del señor HÉCTOR HERISINDO GÓMEZ MORALES descorrió el traslado de las excepciones, oponiéndose a la prosperidad de las mismas. («*029DescorreTrasladoExcepciones*»).

2.10. Por auto de 4 de marzo de 2021, notificado por estado al día siguiente, el Despacho declaró no probadas las excepciones propuestas por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA- y EICE TERMINAL DE TRASPORTES DE FUSAGASUGÁ (*«032AutoResuelveExcepciones»* y *«033NotificacionEstado5Marzo»*).

2.11. El 10 de marzo de 2021 la apoderada judicial de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA-, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la decisión que declaró no probadas las excepciones propuestas argumentándolos como a continuación de sucinta: (*«034RecursoReposicionApelacion»*).

2.11.1. Señaló que el Despacho al pronunciarse en cuanto a la excepción de «*Ineptitud Sustancial de la demanda e indebida Acumulación de Pretensiones*» no tuvo en cuenta que de la solicitud de declarar la nulidad de la Resolución No. 361 de 2016 se deriva el reconocimiento de las demás pretensiones como «*ordenar el reintegro y pago de prestaciones sociales desde el momento en que se desvinculó al señor GÓMEZ MORALES, al igual que el reconocimiento y pago de indemnizaciones y perjuicios morales*». Aunado a que, aduce, advirtió que el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 12 de julio de 2019 rechazó por caducidad la demanda respecto a la mencionada Resolución, de la que, indica, se deriva el reconocimiento de las pretensiones inmersas en los numerales 4, 5 y 6 de la demanda, las cuales, considera, no tendrían lugar dentro del proceso al encontrarse en firme la Resolución mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor HÉCTOR HERISINDO GÓMEZ MORALES.

2.11.2. Indicó que el Despacho debió admitir la demanda únicamente con relación a la legalidad del acto administrativo mediante el cual se impuso la sanción al señor GÓMEZ MORALES para desempeñar cargos públicos y la Resolución que confirmó dicha decisión.

2.11.3. Por otro lado, mencionó que en el libelo introductorio se señalaron una serie de pretensiones de las cuales, precisa, no se puede evidenciar con claridad lo que implora el demandante, pues si bien, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos solicita el reintegro sin solución de continuidad y el pago de las prestaciones laborales dejadas de percibir desde el momento de su desvinculación, también solicita una indemnización por los perjuicios morales ocasionados, la cual a su juicio resulta improcedente habida cuenta que no se puede pretender el pago de salarios y prestaciones sociales y a la vez una indemnización, a menos que fuese solicitado subsidiariamente en el evento que no se ordenare su reintegro, constituyéndose de ese modo en una indebida acumulación de pretensiones. Aunado a que no se realizó la estimación razonada y bajo juramento, discriminando cada uno de los conceptos de la indemnización solicitada, desatendiendo lo previsto en el artículo 206 del Código General del Proceso.

2.12. El 16 de marzo de 2021 se fijó en lista el recurso interpuesto para correr traslado del mismo. (*«035TrasladoFijacionLista»*).

2.13. El 19 de marzo de 2021 la apoderada judicial del demandante se pronunció en cuanto al recurso de reposición interpuesto, manifestando que

en el escrito de excepciones la denominada «*Ineptitud Sustancial de la demanda e indebida Acumulación de Pretensiones*», se fundamentó en la ineptitud del señor GÓMEZ MORALES para laborar en el cargo de Jefe de Plantas de Tratamiento por no contar con los requisitos exigidos en el manual más no en la presunta acumulación de las pretensiones como lo indica en el escrito de reposición. Así también, indico que la recurrente olvidó que la Resolución No. 172 de 16 de octubre de 2018 destituyó del cargo de JEFE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO al señor HÉCTOR MORALES, por tanto, las pretensiones de reintegro, pago de salarios, prestaciones e indemnización no se encuentran indebidamente acumuladas, por el contrario aduce, hacen parte determinante en el litigio, ya que una vez el Despacho emita sentencia, deberá pronunciarse sobre la mencionada destitución (*«037EscritoDescorreRecurso»*).

2.14. El 5 de abril de 2021 el proceso ingresa al Despacho (*«038ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho abordará el estudio de la procedencia y oportunidad de los recursos incoados, para determinar si hay lugar a confirmar o revocar la decisión atacada o a concederlo, en el efecto en que se advierta la procedencia del recurso de alzada.

DEL RECURSO DE REPOSICIÓN:

Frente al recurso de reposición el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021) prevé:

> «**Artículo 242: *REPOSICIÓN.*** El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso»

En virtud de ello, resulta imperioso acudir a lo señalado en el artículo 318 del Código General del Proceso[1], en cuanto a la oportunidad para presentar el recurso, en donde se prevé que cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia, el recurso debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto.

Para el caso en comento, el auto recurrido de 4 de marzo de 2021, fue notificado por estado al día siguiente, es decir, en principio los tres días para presentar el recurso vencían el 10 de marzo siguiente, no obstante atendiendo el contenido del numeral segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021), el término de la notificación del auto notificado, sólo empezará a contabilizarse a los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, por lo que finalmente la parte interesada tenía como término máximo para recurrir la decisión hasta el **12 de marzo de 2021,** y como quiera que lo hizo el 10 de marzo hogaño, se advierte presentado en término.

En ese orden, el Despacho puntualiza que el motivo de la interposición del recurso de reposición obedece únicamente en cuanto a la parte resolutiva de la excepción propuesta de «*Ineptitud Sustancial de la demanda e indebida Acumulación de Pretensiones*» en auto de 4 de marzo de 2021, pues, en concepto de la apoderada judicial de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA-, el Despacho al decidir sobre la mencionada

---

[1] «**Artículo 318.** ***PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES.*** Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

Parágrafo. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente».

excepción no tuvo en cuenta que de la pretensión de declarar la nulidad de la Resolución No. 361 de 2016 se deriva el reconocimiento de las demás pretensiones consistentes en «*ordenar el reintegro y pago de prestaciones sociales desde el momento en que se desvinculó al señor GÓMEZ MORALES, al igual que el reconocimiento y pago de indemnizaciones y perjuicios morales*» las cuales considera, al haberse declarado la caducidad frente a la Resolución en comento no tendrían lugar dentro del proceso de la referencia. Aunado a que aduce, el Despacho debió admitir la demanda únicamente con relación a la legalidad del acto administrativo mediante el cual se impuso la sanción al señor GÓMEZ MORALES para desempeñar cargos públicos y la Resolución que confirmó dicha decisión.

Así también, mencionó que en el líbelo introductorio se señalaron una serie de pretensiones de las cuales aduce, no se puede evidenciar con claridad lo que implora el demandante, pues refiere que no se puede pretender el pago de salarios y prestaciones sociales y a la vez una indemnización, a menos que se hubiesen solicitado subsidiariamente en el evento de que no se ordenare su reintegro, constituyéndose de ese modo en una indebida acumulación de pretensiones, más aún cuando no se realizó la estimación razonada, bajo juramento y discriminando cada uno de los conceptos de la indemnización solicitada, desatendiendo lo previsto en el artículo 206 del Código General del Proceso.

Expuesto lo anterior, y para impartir claridad dentro del presente asunto el Despacho recuerda que la subsección "F" de la sección Segunda del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en proveído de 12 de julio de 2019 rechazó por caducidad la demanda respecto de la por medio de la cual se declaró insubsistente al señor GÓMEZ MORALES en el cargo de JEFE DE DIVISIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.

Por lo anterior, este Despacho en el auto admisorio de 19 de septiembre de 2019, obedeció y cumplió lo resuelto por el ad-quem, lo que sin mayor análisis deviene concluir que la demanda fue admitida frente a las demás pretensiones

que **no** guardan relación con la Resolución No. 361 de 3 de octubre de 2016, por sustracción de materia, ya que al haberse declarado la caducidad respecto de dicho acto administrativo no hay lugar a realizar pronunciamiento alguno en relación con las pretensiones que de este se derivan, en virtud del principio reconocido reiteradamente por el Consejo de Estado consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, puesto que al excluirse del debate la legalidad del acto que separó del cargo al demandante las pretensiones de reintegro carecen de sustento.

Sobre el principio de derecho consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, el H. Consejo de Estado en proveído de 22 de febrero de 2018 a modo ilustrativo señaló:

> *«En consecuencia, si la pertenencia de un servidor público a un determinado régimen laboral, llámese trabajador oficial o empleado público, no es un derecho adquirido, entonces la facultad de presentar convenciones colectivas, que es apenas una potestad derivada del tipo específico de régimen laboral, tampoco lo es. Jurídicamente, la Corte encuentra válido considerar que en este caso lo accesorio sigue la suerte de lo principal, de modo que al no existir un derecho a ser empleado público o trabajador oficial, tampoco existe un derecho a presentar convenciones colectivas si el régimen laboral ha sido modificado.*

Bajo esa premisa se reitera, el Despacho no se desconoce lo resuelto en la subsección "F" de la sección Segunda del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, en el entendido que rechazó por caducidad la demanda respecto de la Resolución No. 361 de 3 de octubre de 2016.

De otro lado, para resolver el presente recurso incoado, debe recordarse el fundamento realizado por el apoderado judicial de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA- al momento de la interposición de la excepción de «*Ineptitud Sustancial de la demanda e indebida Acumulación de Pretensiones*», a saber («*023ContestacionDemandaYPoderEMSERFUSA*»):

> *«Esta excepción está llamada a prosperar en razón a que, si dentro del proceso se está instrumentalizando esta clase de medio de control para buscar la nulidad del acto administrativo por medio del cual se declara una insubsistencia, -recuérdese que esta insubsistencia contenida en la resolución 361 de 2016 se encuentra amparada en la ley-, al momento de llegar a existir*

> *la procedencia de esta nulidad, no sería posible reintegrar o mantener al señor Gómez Morales, en razón al no cumplir con los requisitos contenidos en el MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES, PERFILES Y REQUISITOS, y en consecuencia la nulidad de esta resolución de insubsistencia, no puede ser violar la norma o en su defecto la creación de un nuevo empleo o llegar mucho menos llegar a aplicarse la nulidad y restablecer un derecho cuando existe una sanción disciplinaria del señor GÓMEZ MORALES que no le permita, es decir existiría una nulidad pero no un restablecimiento del derecho.*
>
> *Por lo que se puede concluir que no se estaría frente a esta acción si el juez califica por separado cada uno de los actos administrativos invocados, aún más cuando la pretensión segunda y tercera se tendría la obligación de decidirse en conjunto, lo que constituye una indebida acumulación de pretensiones, pues resulta imposible y confuso para que el juez declare la nulidad y restablecimiento del derecho de la resolución que lleva la primera instancia, y dejar intacta la segunda».*

Lo anterior, para señalar que tal y como se indicó en el auto de 4 de marzo de 2021, la proposicion de dicha excepcion se centró en la presunta indebida acumulación de pretensiones con ocasión de la solicitud de declaratoria de nulidad de la Resolución No. 361 de 2016, señalandose entonces, que el Despacho se relevaría de abordar su estudio en atención a que el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en su providencia del 12 de julio de 2019 resolvió: «*PRIMERO: RECHÁZASE la demanda de la referencia respecto de la Resolución No. 361 del 3 de octubre de 2016 por caducidad de conformidad con las razones expuestas en esta providencia*», por lo que se le indicó a la excepcionante que debería estarse a lo resuelto en la mencionada providencia.

Claro lo anterior, debe enfatizarse que, la recurrente no puede exponer fundamentos nuevos o diferentes a los ya esbozados en el escrito de excepciones frente a los cuales el Despacho ya efectuó su pronunciamiento, pues de resolverse en esta instancia procesal la excepción de «*Ineptitud Sustancial de la demanda e indebida Acumulación de Pretensiones*» bajo los parámetros señalados en el escrito de reposición contra la decisión que declaró no probada dicha excepción, en primer lugar, se advierte que se esbozan nuevos argumentos de manera extemporánea y, en segundo lugar, se estaría transgrediendo el derecho al debido proceso de la contraparte, habida cuenta que era en esa etapa procesal donde debió exponerse íntegramente lo señalado

en el escrito de recurso de reposición, si a bien lo consideraba y no pretermitir las oportunidades procesales establecidas por el legislador para el efecto y hacerlo con la interposición de recursos, atendiendo a que las etapas dentro de los medios de control que se adelantan ante esta Jurisdicción son preclusivas, por lo que el Despacho no repondrá la decisión adoptada en el proveído de 4 de marzo de 2021.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

En lo que respecta al recurso de apelación, el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021) prevé:

> «**Artículo 243.** ***Apelación.*** Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:
>
> 1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.
>
> 2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
>
> 3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.
>
> 4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.
>
> 5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.
>
> 6. El que niegue la intervención de terceros.
>
> 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
>
> 8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.
>
> **Parágrafo 1°.** El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.
>
> **Parágrafo 2°.** En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se

> tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir.
>
> **Parágrafo 3°.** La parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente sustentado, podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la apelación.
>
> La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.
>
> Parágrafo 4°. Las anteriores reglas se aplicarán sin perjuicio de las normas especiales que regulan el trámite del medio de control de nulidad electoral».

Nótese como el auto recurrido no se encuentra enlistado dentro de los apelables, por lo que se rechazará por improcedente.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: NO REPONER la decisión adoptada mediante auto de 4 de marzo de 2021 mediante el cual este Despacho declaró no probadas las excepciones propuestas, conforme a lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: RECHÁZASE por improcedente el recurso de apelación incoado la apoderada judicial de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA, conforme a lo expuesto en parte motiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f914590d584ce5c794340e21a478b120cd3bb9ac51c9412ad63ccea5ca4678fb
Documento generado en 15/04/2021 02:44:25 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2019-00259-00**
Demandante:	**HÉCTOR JULIO ÁVILA RICAURTE**
Demandado:	**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL–CASUR-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con lo dispuesto en la providencia de 8 de marzo de 2021, en la que se dio aplicación al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo («*014AutoFijaLitigio*») y, vencido el término de ejecutoria sin que las partes hicieran manifestación al respecto, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en concordancia con el inciso 2º del artículo 182 *ibidem*), se **CORRE TRASLADO** a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
FC79FF6CE46C4D3D5F946D853A515AB1DDDD4D7C90215BEB7E4031C538AF7C3D
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:45:01 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00266-00**
DEMANDANTE:	**E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RICAURTE**
DEMANDADO:	**ELVIA FLORANCY ROJAS SÁNCHEZ**
MEDIO DE CONTROL:	**REPETICIÓN**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicia, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 9 de julio de 2019 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de repetición presentó la E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, por conducto de apoderado judicial, contra la señora ELVIA FLORANCY ROJAS SÁNCHEZ, con el propósito de declarar que la demandada obró con dolo por el incumplimiento de reportar la información exógena ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN- (*«008AutoAdmiteDemanda»*).

2.2. El 25 de noviembre de 2019, previo pago de los gastos procesales, se notificó personalmente la demanda (*«009PagoGastosProcesales»* y *«016NotificacionPersonalAutoAdmiteDemanda»*).

2.3. El 3 de marzo de 2020 el apoderado judicial de la señora ELVIA FLORANCY ROJAS SÁNCHEZ, dentro del término legal, contestó la demanda, solicitó llamar en garantía a la EQUIDAD SEGUROS y a SEGUROS DEL ESTADO S.A. y propuso la excepción previa de *«ineptitud del demandante»* (*«018ContestacionDemandaAnexos»*).

2.4. El 23 de noviembre de 2020 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 5 de marzo de 2020 (*«022ConstanciaTerminos»*).

2.5. El 24 de noviembre de 2020 se corrió traslado de las excepciones planteadas en el escrito de contestación de la demanda (*«023FijacionLista»*).

2.6. El 25 de febrero de 2021 este Despacho negó el llamamiento en garantía propuesto por el apoderado judicial de la señora ELVIA FLORANCY ROJAS SÁNCHEZ (*«025AutoNiegaLlamamientoGarantia»*).

2.7. El 18 de marzo de 2021 este Despacho resolvió la excepción con el carácter de previa que fue propuesta por el apoderado judicial de la parte demandada y declaró no probada la *«INEPTITUD DEL DEMANDANTE»* (*«028AutoResuelveExcepcion»*).

2.8. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«030ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021) ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
>
> **1. Antes de la audiencia inicial:**
>
> a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
>
> b) Cuando no haya que practicar pruebas;
>
> c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
>
> d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
>
> **El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia**.
>
> Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.
>
> No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.
>
> **2.** En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.
>
> Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

> **3.** En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.
>
> **4.** En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.
>
> **Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.
>
> Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.
>
> No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas son inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno a la presunta responsabilidad que tuvo la demandada por los hechos que dieron lugar al pago de la sanción que efectuó la E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RICAURTE ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN- por concepto de la no presentación de la información exógena del año 2016, es decir, aunque no es un asunto de puro derecho, no hay excepciones con el carácter de previas pendientes por resolver habida cuenta que ya fueron resueltas en el auto de 18 de marzo de 2021; tampoco hay pruebas por practicar, las partes solicitaron tener como pruebas las documentales allegadas con la

demanda y con su contestación, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; las solicitadas a instancia de la parte demandada son inútiles, inconducentes e impertinentes como se expondrá en el correspondiente acápite; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio, razones por las cuales es procedente dar aplicación a la figura jurídica que se analiza.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a pronunciarse sobre las pruebas y se realizará la fijación del litigio, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho proceder a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas por las partes que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

PARTE DEMANDANTE

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 6 a 44 *«002DemandaPoderAnexos»* y 2 a 12 *«006AllegaLoRequerido»* del expediente digitalizado.

PARTE DEMANDADA

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con el escrito de contestación de la demanda visibles en los folios 10 a 13 *«018ContestacionDemandaPoderAnexos»* del expediente digitalizado.

No obstante, solicitó las siguientes pruebas (folios 6 y 7 *«018ContestacionDemandaPoderAnexos»*):

1. *«Conforme a los artículos 186 y 265 del Código General del Proceso, se solicita al Despacho fijar fecha y hora para que el demandante presente ante el mismo: Copia de todos y cada uno de los contratos de asesores contables, financieros y jurídicos que prestaron sus servicios al Centro de Salud del Municipio de Ricaurte E.S.E. (…) durante las vigencias 2016 y 2017»*.

2. *«Conforme al artículo 212 del Código General del Proceso, solicito se decrete la recepción del testimonio o la declaración del señores (sic): Todos y cada uno de los contratos de los asesores contables, financieros y jurídicos que prestaron sus servicios al Centro de Salud del Municipio de Ricaurte E.S.E. (…) durante las vigencias 2016 y 2017»*.

3. *«Prueba Pericial de Inspección Judicial: A todos y cada uno de los documentos obrantes. En el Centro de Salud del Municipio de Ricaurte E.S.E. (…) durante las vigencias 2016 y 2017, en todo lo referente a los procesos jurídicos y contables, en materia tributaria ante la DIAN»*.

De conformidad con lo anterior, el Juzgado **NEGARÁ** las pruebas en atención a lo siguiente:

-Respecto a la exhibición de la *«Copia de todos y cada uno de los contratos de asesores contables, financieros y jurídicos que prestaron sus servicios al Centro de Salud del Municipio de Ricaurte E.S.E. (…) durante las vigencias 2016 y 2017»*,

porque, por un lado, el artículo 186 del Código General del Proceso se circunscribe a las pruebas extraprocesales, por ende, no aplicable al sub exámine y, por el otro, en razón a que, si bien el artículo 265 ibidem preceptúa sobre la procedencia de la exhibición de documentos, también es cierto que el artículo subsiguiente (el artículo 266[1]) establece como requisitos para su procedencia: «*quien pida la exhibición* ***expresará los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento o la cosa se encuentran en poder de la persona llamada a exhibirlos****, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos.* ***Si la solicitud reúne los anteriores requisitos el juez ordenara que se realice la exhibición*** *(…)*».

Condiciones que, de conformidad con el escrito de contestación de la demanda, no se satisfacen por lo que al tenor de los dispuesto en el artículo 266 del Código General del Proceso este Juzgado queda imposibilitado de ordenar la exhibición de documentos solicitada.

- Frente al decreto de la declaración de «*todos y cada uno de los contratos de los asesores contables, financieros y jurídicos que prestaron sus servicios al Centro de Salud del Municipio de Ricaurte E.S.E. (…) durante las vigencias 2016 y 2017*», a la luz del artículo 212[2] del Código General del Proceso, tampoco se cumplen las condiciones para su decreto, pues, no se expresó el nombre, domicilio,

[1] **«Artículo 266.** ***TRÁMITE DE LA EXHIBICIÓN.*** Quien pida la exhibición expresará los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento o la cosa se encuentran en poder de la persona llamada a exhibirlos, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos. Si la solicitud reúne los anteriores requisitos el juez ordenará que se realice la exhibición en la respectiva audiencia y señalará la forma en que deba hacerse.

Cuando la persona a quien se ordena la exhibición sea un tercero, el auto respectivo se le notificará por aviso.

Presentado el documento el juez lo hará transcribir o reproducir, a menos que quien lo exhiba permita que se incorpore al expediente. De la misma manera procederá cuando se exhiba espontáneamente un documento. Si se trata de cosa distinta de documento el juez ordenará elaborar una representación física mediante fotografías, videograbación o cualquier otro medio idóneo».

[2] **«Artículo 212.** ***PETICIÓN DE LA PRUEBA Y LIMITACIÓN DE TESTIMONIOS.*** Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.

El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso».

residencia y lugar donde podían ser citados los testigos, aunado a que no se enunció concretamente los hechos objeto de prueba.

- Por último y referente a la «*Prueba Pericial de Inspección Judicial: A todos y cada uno de los documentos obrantes. En el Centro de Salud del Municipio de Ricaurte E.S.E. (…) durante las vigencias 2016 y 2017, en todo lo referente a los procesos jurídicos y contables, en materia tributaria ante la DIAN*», en virtud de los artículos 236[3] y 237[4] del Código General del Proceso, la inspección judicial procede cuando; ***i)*** sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, ***ii)*** cuando el Juez considere que esta prueba sea necesaria en virtud de las otras pruebas que existen en el proceso y, ***iii)*** **cuando quien la solicita exprese con precisión y claridad los hechos que pretende probar**.

De ese modo, salta a la vista que no se cumplen los presupuestos para la procedencia de la inspección judicial debido a que el apoderado judicial de la parte demandada únicamente se limitó a solicitarla, sin señalar el objeto de la misma, así «*Prueba Pericial de Inspección Judicial: A todos y cada uno de los documentos obrantes. En el Centro de Salud del Municipio de Ricaurte E.S.E. (…) durante las vigencias 2016 y 2017, en todo lo referente a los procesos jurídicos y contables, en materia tributaria ante la DIAN*».

---

[3] «**Artículo 236.** ***PROCEDENCIA DE LA INSPECCIÓN.*** Para la verificación o el esclarecimiento de hechos materia del proceso podrá ordenarse, de oficio o a petición de parte, el examen de personas, lugares, cosas o documentos.

Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba.

Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o como prueba extraprocesal con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere necesaria para aclararlos.

El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos, caso en el cual otorgará a la parte interesada el término para presentarlo. Contra estas decisiones del juez no procede recurso».

[4] «**Artículo 237. SOLICITUD Y DECRETO DE LA INSPECCIÓN. Quien pida la inspección expresará con claridad y precisión los hechos que pretende probar.**

En el auto que decrete la inspección el juez señalará fecha, hora y lugar para iniciarla y dispondrá cuanto estime necesario para que la prueba se cumpla con la mayor eficacia» (Destaca el Despacho).

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.
Seguidamente, se realizará la fijación del litigio.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

De la lectura de la demanda y de su contestación se extrae que los pretendido por la parte demandante es:

- Se declare que la señora ELVIA FLORANCY ROJAS SÁNCHEZ, en su condición de Gerente de la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE obró con dolo como consecuencia de los hechos que dieron lugar al pago que tuvo que efectuarse por parte de la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE por el incumplimiento de reportar la información exógena ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN- durante la vigencia 2016 (folios 1 «*002DemandaPoderAnexos*» y 1 «*018ContestacionDemandaPoderAnexos*»).

Del mismo modo, este Despacho de consuno con las partes, en virtud del líbelo introductorio y de su contestación, señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. El 14 de octubre de 2016, mediante acta de posesión No. 007, la señora ELVIA FLORANCY ROJAS SÁNCHEZ se posesionó en el cargo de Gerente Código 050, Grado 02 de la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE (folio 27 «*002DemandaPoderAnexos*»).

2. El 15 de noviembre de 2016 la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN- realizó «*invitación al cumplimiento de la obligación formal de suministrar*

información a la DIAN por el año gravable 2016» (folios 9 y 10 «*002DemandaPoderAnexos*»).

3. El 1º de septiembre de 2017 la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN efectúo «*invitación a suministrar la información exógena correspondiente al año gravable 2016*» (folio 11 «*002DemandaPoderAnexos*»).

4. El 20 de octubre de 2017 la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECAUDO Y COBRANZAS de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN- invitó a la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE a «*suministrar la información exógena correspondiente al año gravable 2016*» (folios 14 y 15 «*002DemandaPoderAnexos*»).

5. El 21 de marzo de 2019 la E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RICAURTE recibió información por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN- al correo institucional csricauteeese@yahoo.es (folios 1, 8 «*002DemandaPoderAnexos*» y 3 «*018ContestacionDemandaPoderAnexos*»).

6. El 12 de abril de 2019 la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE requirió a la señora ELVIA FLORANCY ROJAS SÁNCHEZ para que informara por qué no se reportó la información exógena a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN-para el año gravable 2016 (folios 2, 16 «*002DemandaPoderAnexos*» y 3 «*018ContestacionDemandaPoderAnexos*»).

7. El 27 de mayo de 2019 la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE pagó ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN- la sanción por concepto de no presentación de la información exógena del año 2016 (folios 20 y 21 «*002DemandaPoderAnexos*»).

Bajo ese contexto, se encuentra que existe **discrepancia** en relación con: i) la responsabilidad de la demandada por los hechos que dieron lugar al pago que tuvo que efectuarse por parte de la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-DIAN- con ocasión del incumplimiento de reportar la información exógena de la vigencia fiscal del año 2016.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en resolver los siguientes **problemas jurídicos**: **1)** ¿Es responsable a título de culpa grave o dolo la señora ELVIA FLORANCY ROJAS SÁNCHEZ del pago que tuvo que efectuar la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE RICAURTE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAD NACIONALES-DIAN- en virtud del incumplimiento de reportar la información exógena para la vigencia fiscal del año 2016?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[5] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[6], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

---

[5] «**Artículo 207. *CONTROL DE LEGALIDAD*.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[6] -16 de agosto de 2019: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole de su conocimiento a este Despacho («003ActaReparto»).
-5 de septiembre de 2019: Auto que admite demanda y ordena notificar a la demandada («008AutoAdmiteDemanda»).
-23 de septiembre de 2019: Pago gastos procesales («006PagoGastosProcesales»).
-25 de noviembre de 2019: Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («007NotificacionPersonalAutoAdmiteDemanda»).

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÁSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 6 a 44 «*002DemandaPoderAnexos*» y 2 a 12 «*006AllegaLoRequerido*» del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

TERCERO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda visibles en los folios 10 a 13 «*018ContestacionDemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

CUARTO: NIÉGUESE por inconducentes e impertinentes la exhibición, los testimonios de la «*copia de todos y cada uno de los contratos de asesores contables, financieros y jurídicos que prestaron sus servicios al Centro de Salud del Municipio de Ricaurte E.S.E. (…) durante las vigencias 2016 y 2017*» y la inspección judicial de

---

-3 de marzo de 2020: La señora ELVIA FLORANCY ROJAS SÁNCHEZ, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda, propuso excepciones y realizó llamamiento en garantía («018ContestacionDemandaPoderAnexos»).
-23 de noviembre de 2020: la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 5 de marzo de 2020 («022ConstanciaTerminos»).
-24 de noviembre de 2020: la Secretaría de este Juzgado fijó en lista las excepciones planteadas («023FijacionLista»).
-25 de febrero de 2021: Auto por medio del cual se negó el llamamiento en garantía propuesto por la parte demandada («025AutoNiegaLlamamientoGarantia»).
-18 de marzo de 2021: Auto declara no probada la excepción de ineptitud del demandante («028AutoResuelveExcepcion»).
-12 de abril de 2021: Proceso ingresó al Despacho para proveer (030ConstanciaDespacho»).

«a todos y cada uno de los documentos obrantes. En el Centro de Salud del Municipio de Ricaurte E.S.E. (…) durante las vigencias 2016 y 2017, en todo lo referente a los procesos jurídicos y contables, en materia tributaria ante la DIAN», de conformidad con lo expuesto en precedencia.

QUINTO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SEXTO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

OCTAVO: RECONÓCESE PERSONERÍA ADJETIVA al doctor ÓSCAR JULIÁN DELGADO PANTOJA para actuar como apoderado judicial de la señora ELVIA FLORANCY ROJAS SÁNCHEZ, de conformidad con el poder visible en los folios 10 y 11 del archivo *«018ContestacionDemandaPoderAnexos»* del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A

LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
522848F8EB3AC680C4B0A424ADD7897962E16247ACEADC5505FFF211585B6A3A
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:58 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00298-00**
DEMANDANTE:	**VICENTE FERRER CAMARGO PINEDA Y OTROS**
DEMANDADO:	**MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS Y OTRO**
VINCULADOS:	**LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCAIMA Y AGUA DE DIOS E.S.P.-TOCAGUA E.S.P. y LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL AGUA S.A.S. E.S.P.-INGEAGUA S.A.S. E.S.P.-**
MEDIO DE CONTROL:	**REPARACIÓN DIRECTA**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 5 de diciembre de 2019 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron los señores VICENTE FERRER CAMARGO PINEDA, ESTHER AURENITA RODRÍGUEZ, ELIANAN ICDALY CAMARGO RODRÍGUEZ, WILSON FERRER CAMARGO PORTILLO en nombre propio y en representación de sus hijas ALIZON TALIANA CAMARGO DEVIA y JULIAN CAMARGO SANTIAGO DEVIA contra el MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS y el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE AGUA DE DIOS, con el propósito de declarar administrativamente responsables a las demandadas de los perjuicios ocasionados a los demandantes como consecuencia de la falla en el servicio público esencial de prevención y control de incendios que condujo a la pérdida de su bien inmueble, de sus bienes y enseres y de su negocio. En

dicho proveído se dispuso vincular como litisconsorte necesario de la parte demandada a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCAIMA Y AGUA DE DIOS E.S.P.-TOCAGUA E.S.P. y a la empresa INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL AGUA S.A.S. E.S.P. INGEAGUA S.A.S. E.S.P. (*«006AutoAdmiteDemanda»*).

1.2. Previo pago de los gastos procesales, el 6 de febrero de 2020 se llevó a cabo la notificación personal del líbelo introductorio al MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCAIMA Y AGUA DE DIOS E.S.P.-TOCAGUA E.S.P. y a la empresa INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL AGUA S.A.S. E.S.P. INGEAGUA S.A.S. E.S.P. (*«007PagoGastos»* y *«008NotificacionPersonal»*).

2.3. El 9 de julio de 2020 la empresa INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL AGUA S.A.S. E.S.P. INGEAGUA S.A.S. E.S.P., por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda, sin la proposición de excepciones previas. (*«011ContestacionDemanda»*).

2.4. El 12 de agosto de 2020 la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCAIMA Y AGUA DE DIOS E.S.P.-TOCAGUA E.S.P. de igual manera, por medio de apoderado judicial, descorrió la demanda sin la proposición de excepciones previas. (*«012ContestacionDemanda»*).

2.5. El 10 de noviembre de 2020 la secretaría de este Despacho mediante fijación en lista corrió traslado de las excepciones planteadas (*«014FijacionLista»*).

2.6. El 9 de noviembre de 2020 por Secretaría se dejó constancia sobre i) el vencimiento del término para contestar la demanda, ii) la suspensión de los términos judiciales del 16 de marzo al 30 de junio de 2020, en virtud del COVID-19 y iii) la falta de notificación de la demanda al CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE AGUA DE DIOS. (*«013ConstanciaTerminos»*).

2.7. Mediante auto de 20 de noviembre de 2020 se ordenó que por Secretaría se organizara el expediente híbrido digitalizado atendiendo las instrucciones impartidas por parte de la suscrita Juez en los términos consignados en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 6 de junio de 2020 y en la Circular PCSJC20-27 de 21 de julio de 2020 proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. (*«016AutoCumplase»*).

2.8. El 25 de noviembre de 2020 se notificó la demanda al CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE AGUA DE DIOS (*«017NotificacionPersonal»*).

2.9. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«018ConstanciaTerminosDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Así las cosas, se tiene que el 9 de julio de 2020 junto con el escrito de contestación de la demanda, el doctor JHON EDISSON CHARRY CLADERO allegó poder a él conferido por el representante legal de la empresa INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL AGUA S.A.S. E.S.P. INGEAGUA S.A.S. E.S.P., doctor INOCENCIO MARÍA VILLAMIL SÁNCHEZ, sin embargo, no se allegó la documental que acredite la calidad de poderdante, por lo que se requerirá en tal sentido.

Por su parte, el 12 de agosto de 2020 el doctor JOSÉ FERNANDO GÍL CASTILLO junto con el escrito de contestación de la demanda allegó poder a él conferido por parte de la doctora SILVIA PIEDAD VIANA ACEVEDO en calidad de Directora Ejecutiva de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCAIMA Y AGUA DE DIOS E.S.P.-TOCAGUA E.S.P., junto con la documental que acredita la calidad de poderdante, por lo que se le reconocerá personería adjetiva para actuar en los términos y para los efectos del poder a él conferido obrante en los folios 2 y 3 del archivo *«012ContestacionDemanda»*.

De otra parte, atendiendo que el MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS y el CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE AGUA DE DIOS no han constituido apoderado judicial en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, se requerirá en tal sentido.

En ese orden, sería del caso fijar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, no obstante como quiera que la empresa INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL AGUA S.A.S. E.S.P. INGEAGUA S.A.S. E.S.P., el MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS y el CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE AGUA DE DIOS no han constituido apoderado judicial allegando la documental que acredite la calidad de poderdante, es del caso requerirlos en tal sentido con el fin de garantizar el derecho de contradicción y defensa.

En consecuencia se **DISPONE:**

PRIMERO: RECONOCER personería adjetiva para actuar como apoderado judicial de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCAIMA Y AGUA DE DIOS E.S.P.-TOCAGUA E.S.P., al doctor JOSÉ FERNANDO GÍL CASTILLO en los términos y para los efectos del poder a él conferido obrante en los folios 2 y 3 del archivo *«012ContestacionDemanda»*.

SEGUNDO: ABSTENERSE de reconocer personería al doctor JHON EDISSON CHARRY CLADERO como apoderada judicial de la empresa INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL AGUA S.A.S. E.S.P. INGEAGUA S.A.S. E.S.P., habida cuenta que no acreditó la calidad de poderdante del doctor INOCENCIO MARÍA VILLAMIL SÁNCHEZ. En consecuencia se **REQUIERE** para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este proveído allegue el certificado de existencia y representación legal para la fecha de la contestación de la demanda **SO PENA DE TENER POR NO CONTESTADA LA DEMANDA.**

TERCERO: REQUIÉRASE al MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS y al CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE AGUA DE DIOS para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este proveído constituyan apoderado judicial en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
E4D6E67E6A2E5011A628F795F66E0365925E7E6C0D1E98AB574D3D4FDE7C4C66
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:26 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00313-00**
DEMANDANTE:	**JAMES ORLANDO VALENCIA VALDÉS**
DEMANDADO:	**CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL-**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 13 de diciembre de 2019 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor JAMES ORLANDO VALENCIA VALDÉS, por conducto de apoderado judicial, contra la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL-, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo No. 73204 consecutivo 2017-73205 de 17 de noviembre de 2019 por medio de la cual la Entidad demandada le negó al actor la reliquidación de su asignación de retiro y la nulidad parcial de la Resolución

No. 2121 de 22 de marzo de 2017 mediante la cual la misma Entidad le reconoció al actor la asignación de retiro y el consecuente reajuste liquidando la prima de antigüedad en la forma establecida en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 (*«005AutoAdmiteDemanda»*).

2.2. El 16 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«008NotificacionPersonalDemanda»*).

2.3. El 17 de noviembre de 2020 la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL- contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas (*«008ContestacionDemanda»*).

2.4. El 20 de enero de 2021 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 7 de diciembre de 2020 (*«010ConstanciaTerminos»*).

2.5. Motivo por el cual el 21 de enero de 2021 la Secretaría de este Juzgado fijó en lista las excepciones de mérito planteadas (*«011FijacionLista»*).

2.6. Mediante proveído de 25 de febrero de 2021 este Despacho previo a emitir pronunciamiento frente a la procedencia de la aplicación del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y ante la renuncia al mandato presentado por la apoderada judicial de la entidad demandada el 15 de enero de 2021 (*«009RenunciaPoder»*), requirió a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL- para que constituyera nuevo apoderado judicial (*«013AutoRequiere»*).

2.7. El 10 de marzo de 2021 el doctor GUSTAVO ADOLFO URIBE HERNÁNDEZ allegó poder a él conferido por el director de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, doctor LEONARDO PINTO MORALES, para representar a la Entidad demandada en el asunto de la referencia (*«016PoderCremil»*).

2.8. El 12 de marzo de 2021 el proceso al Despacho para proveer.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021) ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
>
> **1. Antes de la audiencia inicial:**
>
> a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
>
> b) Cuando no haya que practicar pruebas;
>
> c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
>
> d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
>
> **El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia**.
>
> Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.
>
> No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.
>
> **2.** En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.
>
> Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición

> por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.
>
> **3.** En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.
>
> **4.** En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.
>
> **Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.
>
> Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.
> No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas son inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno al reconocimiento y reliquidación de las partidas computables de la asignación de retiro del actor, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver habida cuenta que no fueron propuestas; tampoco hay pruebas por practicar y, únicamente, las partes solicitaron tener como pruebas las documentales allegadas con la demanda y con su contestación, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a pronunciarse sobre las pruebas y se realizará la fijación del litigio, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho proceder a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas por las partes que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

PARTE DEMANDANTE

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 14 a 26 «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado.

PARTE DEMANDADA

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con el escrito de contestación de la demanda visibles en los folios 14 a 102 «*008ContestacionDemanda*» del expediente digitalizado.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

Seguidamente, se realizará la fijación del litigio.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

De la lectura de la demanda y de su contestación se tiene que las partes coinciden en la existencia de los **actos demandados** en la presente acción, estos son:

- La Resolución No. 2121 de 22 de marzo de 2017, «*por la cual se ordena el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al señor Soldado Profesional (r) del Ejército JAMES ORLANDO VALENCIA VALDÉS (…)*» (folios 22 a 24 «*002DemandaPoderAnexos*»).

- El acto administrativo contenido en el Oficio No. 0073204, consecutivo 2017-73205, de 17 de noviembre de 2017 en virtud del cual la Entidad demandada negó el reajuste de la asignación de retiro del señor JAMES ORLANDO VALENCIA VALDÉS, en lo que respecta a la prima de antigüedad en los términos del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 (folios 19 a 21 «*002DemandaPoderAnexos*»).

En consecuencia, a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (folios 4 y 5 «*002DemandaPoderAnexos*»):

- Se condene a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL- a liquidar la asignación de retiro del señor JAMES ORLANDO VALENCIA VALDÉS de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004.

Del mismo modo, este Despacho de consuno con las partes, en virtud del líbelo introductorio y de su contestación, señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. El señor JAMES ORLANDO VALENCIA VALDÉS ingresó al EJÉRCITO NACIONAL como soldado voluntario (folio 24 «*008ContestacionDemanda*»).

2. El señor JAMES ORLANDO VALENCIA VALDÉS estuvo vinculado al EJÉRCITO NACIONAL por más de veinte (20) años (folios 22 «*002DemandaPoderAnexos*» y 24 «*008ContestacionDemanda*»).

3. El 22 de marzo de 2017 la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL- mediante la Resolución No. 2121 le reconoció al actor una asignación de retiro (folios 22 a 24 «*002DemandaPoderAnexos*» y 44 a 46 «*008ContestacionDemanda*»).

4. El 25 de octubre de 2017 el señor JAMES ORLANDO VALENCIA VALDÉS solicitó ante la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL-, ente otras, la liquidación de la prima de antigüedad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 (folios 17 a 18 «*002DemandaPoderAnexos*» y 66 a 68 «*008ContestacionDemanda*»).

5. El 17 de noviembre de 2017 la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL-, mediante el oficio No. 0073204 consecutivo No. 2017-73205, negó la solicitud elevada por el señor JAMES ORLANDO VALENCIA VALDÉS el 25 de octubre de 2017 (folios 19 a 21 «*002DemandaPoderAnexos*» y 69 a 71 «*008ContestacionDemanda*»).

Bajo ese contexto, se encuentra que existe **discrepancia** en relación con: i) la aplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en establecer la legalidad del acto administrativos acusado resolviendo los siguientes **problemas jurídicos**: **1)** ¿Adolecen de falsa motivación los actos administrativos demandados?, **2)** ¿Procede la reliquidación de la asignación de retiro del señor JAMES ORLANDO VALENCIA VALDÉS en lo que respecta a la prima de antigüedad en los términos del artículo 16 del Decreto No. 4433 de 31 de diciembre de 2004?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÁSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 14 a 26 «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

---

[1] «**Artículo 207. CONTROL DE LEGALIDAD.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -4 de octubre de 2019: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole de su conocimiento a este Despacho («003ActaReparto»).
-13 de diciembre de 2019: Auto que admite demanda y ordena notificar a la demandada («005AutoAdmiteDemanda»).
-27 de febrero de 2020: Pago gastos procesales («006PagoGastosProcesales»).
-16 de septiembre de 2020: Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («007NotificacionPersonaDemanda»).
-17 de noviembre de 2020: Parte demandada contesta la demanda sin la proposición de excepciones previas («008ContestacionDemanda»).
-21 de enero de 2021: Fijación en lista («011FijacionLista»).
-25 de febrero de 2021: Auto que requiere a la entidad demandada para que constituya nuevo apoderado judicial («013AutoRequiere»).
-10 de marzo de 2021 -Entidad demandada constituye nuevo apodero judicial («016PoderCremil»).

TERCERO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con el escrito de contestación de la demanda visibles en los folios 14 a 102 *«008ContestacionDemanda»* del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

CUARTO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

QUINTO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

SEXTO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado.

SÉPTIMO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderada judicial de la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL- al doctor GUSTAVO ADOLFO URIBE HERNÁNDEZ, en los términos y para el efecto del poder a él conferido visible en el archivo *«016PoderCremil»* del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A

LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
4EB40F06827F70ED8C7707E526339770080F5902039FBD3FF79B174F86B03994
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:26 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2019-00333-00**
Demandante:	**NOHORA ELSA ROMERO ARÉVALO**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante auto de 13 de diciembre de 2019 se admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora NOHORA ELSA ROMERO ARÉVALO contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, con el objeto de obtener la nulidad del acto administrativo ficto resultante de la solicitud

radicada por la demandante el 3 de mayo de 2019 y que tenía como objeto el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías (*«005AutoAdmiteDemanda»*).

2.2. El 7 de febrero de 2020 se surtió la notificación personal del auto admisorio de la demanda a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-. (*«007NotificacionPersonal»*).

2.3. El 1º de julio de 2020, la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- contestó la demanda y, propuso una excepción previa («010ContestacionDemanda»).

2.4. El 24 de noviembre de 2020 se fijó en lista la excepción propuesta (*«012FijaciónLista»*).

2.5. Mediante auto de 25 de febrero de 2021 se declaró no probada la excepción previa de *«FALTA DE INTEGRACIÓN DE LITISCONSORTE NECESARIO»*. (*«014ResuelveExcepcion»*).

2.6. El proceso ingresó al Despacho el 12 de abril de 2021. (*«016ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021)
> ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
> **1. Antes de la audiencia inicial:**
> a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

> **Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.
>
> Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.
>
> No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas son inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno al pago de la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de reconocimiento de las cesantías, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver, habida cuenta que la propuesta por la Entidad demandada fue resuelta mediante proveído de 25 de febrero de 2021; tampoco hay pruebas por practicar y las solicitadas por el extremo pasivo se tornan inconducentes, impertinentes e inútiles, tampoco aportó pruebas, por su parte la demandante únicamente solicitó tener como pruebas las documentales allegadas con el líbelo inicial, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a pronunciarse sobre las pruebas y se realizará la fijación del litigio, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho procede a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas y aportadas por las partes según los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

- PARTE DEMANDANTE:

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visible en los folios 21 a 53 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado.

- PARTE DEMANDADA:

DOCUMENTALES: El Despacho observa que en el escrito de contestación de la demanda la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, no aportó material probatorio, sin embargo solicitó oficiar a la Secretaría de Educación de Cundinamarca para que indicara si dio respuesta a la petición elevada por la parte actora con la finalidad de desvirtuar el acto administrativo alegado y, la de oficiar a la Entidad territorial para que allegara el expediente administrativo de la demandante, sin embargo no se decretaran las

prenombradas pruebas habida cuenta que las mismas se tornan inconducentes, impertinentes e inútiles, pues pudieron ser aportadas con la contestación de la demanda, aunado a que con el material probatorio obrante dentro desproceso se puede proferir una decisión de fondo dentro del asunto de la referencia.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

Seguidamente, se realizará la fijación del litigio.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

De la lectura de la demanda se tiene que el **acto demandado** en la presente acción, este es:

- El acto ficto o presunto configurado en virtud de la ocurrencia del silencio administrativo acaecido por la falta de respuesta de la Administración a la petición radicada el 3 de mayo de 2019, por medio del cual se negó el pago de la sanción por mora, establecida en la Ley 244 de 1995 y en la Ley 1071 de 2006, en el pago de las cesantías reconocidas por medio de la Resolución 000154 de 7 de febrero de 2018.

En consecuencia, y a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (folio 4 *«002DemandaPoderAnexos»*):

- Se ordene a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- reconocer y pagar la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la reconocimiento y pago de las cesantías ante la entidad y hasta cuando se haga efectivo el pago.

Del mismo modo, este Despacho en virtud del líbelo introductorio, señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. La señora NOHORA ELSA ROMERO ARÉVALO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.989.202, estuvo vinculada como docente Nacionalizada desde el 9 de mayo de 1986 hasta el 29 de junio de 2017 (Folio 21 «*002DemandaPoderAnexos*»).

2. La señora NOHORA ELSA ROMERO ARÉVALO, mediante escrito de petición radicado bajo el No. 2017-CES-481997 de 8 de septiembre de 2017 solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales (Folio 21 «*002DemandaPoderAnexos*»).

3. La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, en nombre y representación de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-, mediante la Resolución No. 000154 de 7 de febrero de 2018 reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales a la señora NOHORA ELSA ROMERO ARÉVALO por valor neto de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($24.992.000) (Folios 22 y 23 «*002DemandaPoderAnexos*»).

4. El monto reconocido en la Resolución No. 000154 de 7 de febrero de 2018 estuvo disponible para pago solo hasta el 27 de marzo de 2018, sin que fuera cobrado en oportunidad, por lo que fue reprogramado para el 2 de octubre de 2018 (Folio 25 «*002DemandaPoderAnexos*»).

5. Mediante escrito de petición de 3 de mayo de 2019, con radicado No 2019082445, por intermedio de apoderado judicial, la señora NOHORA ELSA ROMERO ARÉVALO solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora, establecida en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, por el pago tardío de las cesantías reconocidas en la Resolución No. 000154 de 7 de febrero de 2018 (Folios 21 a 24 «*002DemandaPoderAnexos*»).

Bajo ese contexto, se encuentra que existe **discrepancia** en relación con: i) el reconocimiento de la sanción moratoria al personal docente oficial en Colombia.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en los siguientes **problemas jurídicos**:

1) ¿Debe declararse la existencia del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo respecto a la petición elevada por la señora NOHORA ELSA ROMERO ARÉVALO el 3 de mayo de 2019 ante la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-? **2)** ¿Debe la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- pagar a la señora NOHORA ELSA ROMERO ARÉVALO la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías definitivas reclamadas, contando a partir del día siguiente al que venció el término legal establecido, al no haberse expedido el acto administrativo y pagado la misma dentro de los términos señalados en la Ley 1071 de 2006 que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

---

[1] «**Artículo 207. CONTROL DE LEGALIDAD.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -28 de octubre de 2019: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole de su conocimiento a este Despacho («003ActaReparto»).

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÉSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 21 a 53 del archivo denominado *«002DemandaPoderAnexos»* del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

TERCERO: NIÉGASE la solicitud de oficiar a la Secretaría de Educación de Cundinamarca para que indique si dio respuesta a la petición elevada por la parte actora y, la de oficiar a la Entidad territorial para que allegue el expediente administrativo de la demandante, conforme a lo expuesto en parte motiva.

CUARTO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

QUINTO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

-13 de diciembre de 2019: Auto que admite demanda y ordena notificar a la demandada («005AutoAdmiteDemanda»).
- 17 de enero de 2020 pago de gastos procesales («006PagoGastos»).
-7 de febrero de 2020 Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («007NotificacionPersonal»).
-1° de julio de 2020: Parte demandada contesta la demanda con la proposición de excepciones previas («010ContestacionDemanda»).
-24 de noviembre de 2020: Fijación en lista («012FijacionLista»).
-25 de febrero de 2021 resuelve excepciones («014ResuelveExcepciones»)

SEXTO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
5fc702a16de65eef51346f78dc3a66f9566eb3a59a9cb715d27a70fc8ae2027b
Documento generado en 15/04/2021 02:44:27 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2019-00337-00**
Demandante:	**LUCY MARTÍNEZ PERDOMO**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante auto de 13 de diciembre de 2019 se admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora LUCY MARTÍNEZ PERDOMO contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, con el objeto de obtener la nulidad del acto administrativo ficto resultante de la solicitud

radicada por la demandante el 3 de mayo de 2019 y que tenía como objeto el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. (*«005AutoAdmiteDemanda»*).

2.2. El 7 de febrero de 2020 previo pago de los gastos procesales se surtió la notificación personal del auto admisorio de la demanda a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- (*«006PagoGastos»* y *«007NotificacionPersonal»*).

2.3. El 1º de julio de 2020, la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- contestó la demanda y, propuso una excepción previa (*«010ContestacionDemanda»*).

2.4. El 24 de noviembre de 2020 se fijó en lista la excepción propuesta. (*«012FijaciónLista»*).

2.5. Mediante auto de 25 de febrero de 2021 se declaró no probada la excepción previa de *«FALTA DE INTEGRACIÓN DE LITISCONSORTE NECESARIO»*. (*«014ResuelveExcepcion»*).

2.6. El proceso ingresó al Despacho el 12 de abril de 2021 (*«016ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021)
> ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
> **1. Antes de la audiencia inicial:**

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.
4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

> **Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.
>
> Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.
>
> No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas son inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno al pago de la sanción por mora, establecida en la Ley 244 de 1995 y en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de reconocimiento de las cesantías, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver, habida cuenta que la propuesta por la entidad demandada fue resuelta mediante proveído de 25 de febrero de 2021; tampoco hay pruebas por practicar y las solicitadas por el extremo pasivo se tornan inconducentes, impertinentes e inútiles, tampoco aportó pruebas, por su parte la demandante únicamente solicitó tener como pruebas las documentales allegadas con el líbelo inicial, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a pronunciarse sobre las pruebas y se realizará la fijación del litigio, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho procede a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas y aportadas por las partes según los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

- PARTE DEMANDANTE:

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visible en los folios 21 a 33 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado.

- PARTE DEMANDADA:

DOCUMENTALES: El despacho observa que en el escrito de contestación de la demanda la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, no aportó material probatorio, sin embargo solicitó oficiar a la Secretaría de Educación de Cundinamarca para que indicara si dio respuesta a la petición elevada por la parte actora con la finalidad de desvirtuar el acto administrativo alegado y, la de oficiar a la Entidad territorial para que allegue el expediente administrativo de la demandante, sin embargo no se decretaran las

prenombradas pruebas habida cuenta que las mismas se tornan inconducentes, impertinentes e inútiles, pues pudieron ser aportadas con la contestación de la demanda, aunado a que con el material probatorio obrante dentro desproceso se puede proferir una decisión de fondo dentro del asunto de la referencia.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

Seguidamente, se realizará la fijación del litigio.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

De la lectura de la demanda se tiene que el **acto demandado** en la presente acción, este es:

- El acto ficto o presunto configurado en virtud de la ocurrencia del silencio administrativo acaecido por la falta de respuesta de la Administración a la petición radicada el 3 de mayo de 2019, por medio del cual se negó el pago de la sanción por mora, establecida en la Ley 244 de 1995 y en la Ley 1071 de 2006, en el pago de las cesantías reconocidas por medio de la Resolución 001718 de 5 de septiembre de 2018.

En consecuencia, y a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (folio 4 «*002DemandaPoderAnexos*»):

- Se ordene a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- reconocer y pagar la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la reconocimiento y pago de las cesantías ante la entidad y hasta cuando se haga efectivo el pago.

Del mismo modo, este Despacho en virtud del líbelo introductorio, señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. La señora LUCY MARTÍNEZ PERDOMO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.560.904, estuvo vinculada como docente Departamental desde el 10 de marzo de 2006 hasta el 30 de diciembre de 2017 (Folio 21 «*002DemandaPoderAnexos*»).

2. La señora LUCY MARTÍNEZ PERDOMO, mediante escrito de petición radicado bajo el No. 2018-CES-563646 de 11 de mayo de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales (Folio 21 «*002DemandaPoderAnexos*»).

3. La SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA en nombre y representación de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- mediante la Resolución No. 001718 de 5 de septiembre de 2018 reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales a la señora LUCY MARTÍNEZ PERDOMO por valor neto de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($18.500.566) (Folio 22 «*002DemandaPoderAnexos*»).

4. El monto reconocido en la Resolución No. 001718 de 5 de septiembre de 2018 estuvo disponible para pago solo hasta el 29 de octubre de 2018 (Folio 25 «*002DemandaPoderAnexos*»).

5. Mediante escrito de petición de 3 de mayo de 2019, con radicado No 2019082432, por intermedio de apoderado judicial, la señora LUCY MARTÍNEZ PERDOMO solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora, establecida en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, por el pago tardío de las cesantías reconocidas por medio de la Resolución No. 001718 de 5 de septiembre de 2018 (Folios 21 a 24 «*002DemandaPoderAnexos*»).

Bajo ese contexto, se encuentra que existe **discrepancia** en relación con: i) el reconocimiento de la sanción moratoria al personal docente oficial en Colombia.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en los siguientes **problemas jurídicos**:

1) ¿Debe declararse la existencia del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo respecto a la petición elevada por la señora LUCY MARTÍNEZ PERDOMO el 3 de mayo de 2019 ante la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-? **2)** ¿Debe la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- pagar a la señora LUCY MARTÍNEZ PERDOMO la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías definitivas reclamadas, contando a partir del día siguiente al que venció el término legal establecido, al no haberse expedido el acto administrativo y pagado la misma dentro de los términos señalados en la Ley 1071 de 2006 que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

---

[1] «**Artículo 207. CONTROL DE LEGALIDAD.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -30 de octubre de 2019: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole de su conocimiento a este Despacho («003ActaReparto»).

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÉSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 21 a 33 del archivo denominado *«002DemandaPoderAnexos»* del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

TERCERO: NIÉGASE la solicitud de oficiar a la Secretaría de Educación de Cundinamarca para que indique si dio respuesta a la petición elevada por la parte actora y, la de oficiar a la Entidad territorial para que allegue el expediente administrativo de la demandante, conforme a lo expuesto en parte motiva.

CUARTO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

QUINTO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

-13 de diciembre de 2019: Auto que admite demanda y ordena notificar a la demandada («005AutoAdmiteDemanda»).
- 17 de enero de 2020 pago de gastos procesales («006PagoGastos»).
-7 de febrero de 2020 Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («007NotificacionPersonal»).
-1° de julio de 2020: Parte demandada contesta la demanda con la proposición de excepciones previas («010ContestacionDemanda»).
-24 de noviembre de 2020: Fijación en lista («012FijacionLista»).
-25 de febrero de 2021 resuelve excepciones («014ResuelveExcepciones»)

SEXTO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
30d17d31a54367d94970aca477f9528933bd12d8b6231b952e3a3d359575c1fa
Documento generado en 15/04/2021 02:44:28 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00342-00**
DEMANDANTE:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**
DEMANDADO:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT**
MEDIO DE CONTROL:	**CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Como medida de saneamiento mediante auto de 4 de marzo de 2021 se requirió a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA para que constituyera apoderado judicial en ejercicio de su derecho de postulación. (*«014AutoRequierePoder»*).

1.2. El 5 de marzo de 2021 el doctor YEISON ALBERTO MONCADA RAMOS allegó poder a él conferido por el doctor CARLOS ARTURO HURTADO MEDINA en calidad de Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT (*«016PoderEntidadDemandada»*).

1.3. El proceso ingresó al Despacho el 12 de abril de 2021 (*«017ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, sería del caso resolver las excepciones previas propuestas por la parte demandada en el escrito de contestación a la demanda,

sin embargo, pese a que el doctor YEISON ALBERTO MONCADA RAMOS allegó el poder conferido por el doctor CARLOS ARTURO HURTADO MEDINA en calidad de Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT, lo cierto es que el Despacho se abstendrá de reconocer personería adjetiva para actuar, habida cuenta que no se aportó la documental en donde se acredite la calidad de poderdante, es decir los actos administrativos de nombramiento y posesión del doctor HURTADO MEDINA, por lo que se requerirá para que allegue los mismos. **SO PENA DE TENER POR NO CONTESTADA LA DEMANDA.**

En consecuencia, **SE DISPONE**:

PRIMERO: REQUIÉRASE al doctor YEISON ALBERTO MONCADA RAMOS, para que en el término de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación de este proveído allegue la documental que acredite la calidad de poderdante del doctor CARLOS ARTURO HURTADO MEDINA, esto es, los actos administrativos de nombramiento y posesión como Gerente y/o Representante Legal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT. **SO PENA DE TENER POR NO CONTESTADA LA DEMANDA.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A

LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
36E732A0B3F527572CF94CD94E96418E32A0693E7137029D2A6EDC70A75C1D02
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:00 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2019-00368-00**
Demandante:	**HERNÁN ARANGO SOTO Y NOHELIA RÍOS HERNÁNDEZ**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Por auto de 6 de febrero de 2020 el Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentaron la señora NOHELIA RÍOS HERNÁNDEZ y el señor HERNÁN ARANGO SOTO, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, con el objeto de tener la nulidad de la Resolución No. 6397 de 28 de diciembre de 2018 mediante la cual la entidad demandada negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión del deceso del señor JOSÉ FERNAN ANRANGO RÍOS (*«005AutoInadmiteDemanda»*).

1.2. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del **16 de marzo de**

2020 en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020**.

1.3. Previo pago de los gastos procesales, el 25 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«006PagoGastosProcesal»* y *«007NotificacionDemanda»*).

1.5. El 29 de enero de 2021 la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, dentro del término legal contestó la demanda *(«009ContestacionDemanda»).*

1.6. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer *(«010ConstanciaDespacho»).*

Puestas en ese estadio las cosas, previo a resolver sobre la procedencia de dar aplicación a lo establecido en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se advierte que la parte demandada no allegó el expediente prestacional necesario para el objeto del presente proceso, el cual es una obligación[1] de allegar con la contestación de la demanda.

En consecuencia, **SE DISPONE**:

---

[1]«**Artículo 175. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:
(...)
PARÁGRAFO 10. Durante el término para dar respuesta a la demanda, la entidad pública demandada o el particular que ejerza funciones administrativas demandado deberá allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder.

Cuando se trate de demandas por responsabilidad médica, con la contestación de la demanda se deberá adjuntar copia íntegra y auténtica de la historia clínica pertinente, a la cual se agregará la transcripción completa y clara de la misma, debidamente certificada y firmada por el médico que haga la transcripción.

La inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto.
(...)»

PRIMERO: REQUÍERESE a la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, para que en el término máximo e improrrogable de los diez (10) días contados a partir de la notificación del presente proveído allegue de manera íntegra y legible el expediente prestacional del señor JOSÉ FERNAN ANRANGO RÍOS (q.e.p.d), so pena de hacerse acreedora a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso.

SEGUNDO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL a la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA en los términos del poder a ella conferido y que obra en el folio 11 del archivo denominado «008ContestacionDemanda».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
90ff488b7d86c079f99d131a9969cd48aca636c20f4d446c82b56586a66583bb
Documento generado en 15/04/2021 02:45:02 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2019-00369-00**
Demandante:	**ARMANDO DE JESÚS NIÑO BELLO**
Demandado:	**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante auto de 12 de marzo de 2020 se admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor ARMANDO DE JESÚS NIÑO BELLO contra el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, con el objeto de que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos (*«008AutoAdmiteDemanda»*):

- Resolución No. 024 de 10 de enero de 2019 «*Por medio de la cual se dicta fallo de primera instancia en un proceso administrativo sancionatorio por contravención urbanística*».
- Resolución No. 074 de 13 de febrero de 2019 «*Por medio de la cual se corrige la Resolución Administrativa No. 024 del 10 de enero de 2019*».
- Actuación administrativa de 13 de febrero de 2019 por medio de la cual se resuelve el recurso de Reposición confirmando la Resolución 024 de 10 de enero de 2019 y concede la apelación.
- Resolución No. 287 de 27 de octubre de 2019 mediante la cual se resuelve el recurso de apelación.

2.2. El 19 de agosto de 2020 se surtió la notificación personal del auto admisorio de la demanda (*«014NotificacionDemanda»*).

2.3. El 28 de septiembre de 2020, la apoderada judicial del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ contestó la demanda y propuso la excepción previa de inepta demanda por falta de los requisitos formales (*«016ContestacionDemandayAnexos»*).

2.4. El 11 de diciembre de 2020 se fijó en lista la excepción propuesta (*«018FijaciónLista»*).

2.5. Mediante auto de 25 de febrero de 2021 se declaró no probada la excepción previa de «*INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS FORMALES*» (*«020AutoResuelveExcepcion»*).

2.6. El proceso ingresó al Despacho el 12 de abril de 2021 (*«022ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

«**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021) ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación,

> la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.
>
> **4.** En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.
>
> **Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.
>
> Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.
>
> No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas son inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno a la declaratoria de nulidad del acto administrativo por medio del cual se declaró contraventor urbanístico y se impuso una sanción al demandante, señor ARMANDO DE JESÚS NIÑO BELLO, dentro del proceso de contravención urbanística No. 091 de 2015, así como los actos administrativos que resolvieron los recursos de reposición y apelación contra dicha decisión, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver, habida cuenta que la propuesta por la Entidad demandada fue resuelta mediante proveído de 25 de febrero de 2021; tampoco hay pruebas por practicar, en virtud a que la solicitada por el demandante en el sentido de

solicitar informe bajo la gravedad de juramento se torna inconducente, impertinente e inútiles, en lo demás, las partes únicamente solicitaron tener como pruebas las documentales allegadas respectivamente, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a pronunciarse sobre las pruebas y se realizará la fijación del litigio, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho procede a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas y aportadas por las partes según los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

- PARTE DEMANDANTE:

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visible en los folios 27 a 145 del archivo denominado «*002DemandayAnexos*» del expediente digitalizado.

NIÉGASE la solicitud de oficiar al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ para que allegue la copia del proceso de contravención urbanística No. 091-2015 habida cuenta que el mismo ya fue aportado con la contestación de la demanda.

NIÉGASE el decreto de la **PRUEBA POR INFORME** en los términos en los que fue solicitada en el líbelo introductorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 194 y 195 del Código General del Proceso, como quiera que el formulario de preguntas señalado para el efecto supondría una confesión por parte del Alcalde Municipal, situación proscrita por las normas en comento. Aunado a que la misma se torna inconducente, impertinente e inútil, pues con el material probatorio obrante dentro del proceso se puede adoptar una decisión de fondo dentro del asunto de la referencia.

- PARTE DEMANDADA:

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda visible en los folios 21 a 799 del archivo denominado «*016ContestacionDemandayAnexos*» del expediente digitalizado.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

Seguidamente, se realizará la fijación del litigio.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

De la lectura de la demanda se tiene que los **actos demandados** en el presente medio de control, son:

- Resolución No. 024 de 10 de enero de 2019 «*Por medio de la cual se dicta fallo de primera instancia en un proceso administrativo sancionatorio por contravención urbanística*».
- Resolución No. 074 de 13 de febrero de 2019 «*Por medio de la cual se corrige la Resolución Administrativa No. 024 del 10 de enero de 2019*».

- Actuación administrativa de 13 de febrero de 2019 por medio de la cual se resuelve el recurso de Reposición confirmando la Resolución 024 de 10 de enero de 2019 y concede la apelación.
- Resolución No. 287 de 27 de octubre de 2019 mediante la cual se resuelve el recurso de apelación.

En consecuencia, y a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (folio 4 «*002DemandaPoderAnexos*»):

- Se ordene al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ a reparar los daños materiales y morales causados con las «*actuaciones y procedimientos administrativos*» demandados, reconociendo por daños materiales y daños morales la suma individual de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2015, incrementados en los ajustes anuales de Ley con su respectiva indexación e intereses corrientes y moratorios desde cuando se causó la obligación hasta cuando se realice el pago.

Del mismo modo, este Despacho en virtud del líbelo introductorio, señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. El señor ARMANDO DE JESÚS NIÑO BELLO es el titular del derecho real de dominio del bien inmueble ubicado en la calle 9 No. 4-21 del Municipio de Fusagasugá con matrícula inmobiliaria No. 157-24390 (Folios 22 a 31 «*016ContestacionDemandayAnexos*»).

2. El 30 de julio de 2015 se diligenció el formato de contravención urbanística por parte del Secretario de Planeación Municipal cuyo radicado de contravención correspondió al No. 091-2015 respecto al predio ubicado en la calle 9 No. 4-21 del Municipio de Fusagasugá con matrícula inmobiliaria No. 157-24390, por la presunta construcción sin licencia (Folios 32 a 33 «*016ContestacionDemandayAnexos*»).

3. Mediante la Resolución No. 024 de 10 de enero de 2019 «*Por medio de la cual se dicta fallo de primera instancia en un proceso administrativo sancionatorio por contravención urbanística*», el doctor HOLMAN JAVIER RODRÍGUEZ PARALES en calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ declaró contraventor al demandante, señor ARMANDO DE JESÚS NIÑO BELLO por haber adelantado obras constructivas en el predio ubicado en la calle 9 No. 4-21 del Barrio Antonio Nariño de dicha Municipalidad sin contar con la respectiva licencia de construcción expedida por la oficina de Planeación Municipal e impuso una sanción de multa por valor de $24.843.600. Decisión que fue notificada el 14 de enero de 2019 (Folios 27 a 42 «*002DemandayAnexos*»).

4. El 18 de enero de 2019 el señor ARMANDO DE JESÚS NIÑO BELLO interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la anterior decisión (Folios 43 a 60 «*002DemandayAnexos*»).

5. Mediante la Resolución No. 074 de 13 de febrero de 2019 «*Por medio de la cual se corrige la Resolución Administrativa No. 024 del 10 de enero de 2019*», el SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (E) DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, doctor ÓSCAR ANDRÉS VELA RAMÍREZ corrigió los errores formales de transcripción contenidos en la Resolución No. 024 de 10 de enero de 2019 respecto al nombre a quien se le impuso la sanción de multa y a quien se le impartió la orden de presentar el acto de reconocimiento de construcción (Folios 61 a 62 «*002DemandayAnexos*»).

6. Por decisión de 13 de febrero de 2019 el SECRETARIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA (E) DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, doctor ÓSCAR ANDRÉS VELA RAMÍREZ confirmó la decisión adoptada en la Resolución No. 024 de 10 de enero de 2019, modificó el numeral primero de dicha Resolución y concedió el recurso de apelación para ante el Despacho del alcalde. Decisión notificada el 18 de febrero de 2019 (Folios 63 a 69 «*002DemandayAnexos*»).

7. Mediante la Resolución No. 287 de 27 de octubre de 2019 el Alcalde Municipal de Fusagasugá, doctor LUIS ANTONIO CIFUENTES SABOGAL, al resolver el recurso de apelación incoado por el señor ARMANDO DE JESÚS NIÑO BELLO confirmó en su totalidad la Resolución No. 024 de 10 de enero de 2019 y negó el incidente de nulidad solicitado. Decisión notificada el 8 de noviembre de 2019 (Folios 82 a 107 «*002DemandayAnexos*»).

Bajo ese contexto, se encuentra que existe **discrepancia** en relación con: i) la caducidad del proceso de contravención urbanística No-091-2015, ii) la competencia del SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ para proferir los actos administrativos enjuiciados y iii) la presunta infracción de las normas en que debería fundarse los actos administrativos enjuiciados.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en los siguientes **problemas jurídicos**: **1)** ¿Los actos administrativos enjuiciados fueron expedidos con falta de competencia, violación al debido proceso y con infracción a las normas en que deberían fundarse? En caso afirmativo **2)** ¿Debe declararse la nulidad de la Resolución No. 024 de 10 de enero de 2019 «*Por medio de la cual se dicta fallo de primera instancia en un proceso administrativo sancionatorio por contravención urbanística*», de la Resolución No. 074 de 13 de febrero de 2019 «*Por medio de la cual se corrige la Resolución Administrativa No. 024 del 10 de enero de 2019*», de la actuación administrativa de 13 de febrero de 2019 por medio de la cual se resuelve el recurso de Reposición confirmando la Resolución 024 de 10 de enero de 2019 y concede la apelación y de la Resolución No. 287 de 27 de octubre de 2019 mediante la cual se resuelve el recurso de apelación?, **3)** ¿Causó el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ perjuicios materiales y morales al señor ARMANDO DE JESÚS NIÑO BELLO con la expedición de los aludidos actos administrativos demandados?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÉSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 27 a

[1] «**Artículo 207. CONTROL DE LEGALIDAD.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -5 de diciembre de 2019: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole de su conocimiento a este Despacho («003ActaReparto»).
-6 de febrero de 2020 se inadmitió la demanda, la cual, luego de ser subsanadada, mediante proveído de 12 de marzo siguiente fue admitida y por auto separado se corrió traslado de la medida cautelar. («005AutoInadmiteDemanda», «006EscritoSubsanacion», «008AutoAdmiteDemanda» del cuaderno principal y «003AutoCorreTrasladoMedidaCautelar» del Cuaderno de Medida Cautelar).
- 3 de julio de 2020 pago de gastos procesales («012PagoGastosProcesales»).
-19 de agosto de 2020 Notificación personal del libelo introductorio y del auto que ordenó correr traslado de la medida cautelar a la demandada («014NotificacionDemanda» del cuaderno principal y «004NotificacionPersonalMedidaCautelar» del Cuaderno de Medida Cautelar).
- el 27 de agosto y 28 de septiembre de 2020 la demandada se pronunció en cuanto a la solicitud de medida cautelar y contestó la demanda con la proposición de excepciones previas, respectivamente. («016ContestacionDemandayAnexos» del cuaderno principal y «005PronunciamientoMedidaCautelar» del Cuaderno de Medida Cautelar).
- 12 de noviembre de 2020 el Despacho negó la solicitud de medida cautelar, decisión que fue recurrida el 19 de noviembre siguiente y por auto de 11 de diciembre de dicha anualidad se dispuso no reponer la decisión adoptada en proveído de 12 de noviembre de 2020. («007AutoNiegaMedida», «009RecursoReposicion» y «011AutoResuelveReposicion» del Cuaderno de Medida Cautelar).
-11 de diciembre de 2020: Fijación en lista («018FijacionLista»).
-25 de febrero de 2021 resuelve excepciones («020ResuelveExcepcion»)

145 del archivo denominado «*002DemandayAnexos*» del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

TERCERO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda visibles en los folios 21 a 799 del archivo denominado «*016ContestacionDemandayAnexos*» del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

CUARTO: NIÉGASE la solicitud de oficiar al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ para que remita como prueba trasladada copia del proceso de contravención urbanística No. 091-2015, así como el decreto de la **PRUEBA POR INFORME** en los términos en los que fue solicitada en el líbelo introductorio, conforme a lo señalado en parte motiva.

QUINTO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SEXTO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
bb67f403aa1d4164843942e44fedc991906217a2f258cf3b41cff9506febf81e
Documento generado en 15/04/2021 02:44:01 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2019-00388-00**
Demandante:	**MARÍA SANTOS REYES Y JOSÉ DELFIRIO RAMÍREZ**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Por auto de 20 de febrero de 2020 el Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentaron la señora MARÍA SANTOS REYES y el señor JOSÉ DELFIRIO RAMÍREZ, por conducto de apoderada judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, con el propósito de obtener la nulidad de la Resolución No. 4191 de 22 de agosto de 2019 mediante la cual la Entidad demandada negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión del deceso del señor NELSON ENRIQUE RAMÍREZ REYES (*«006AutoInadmiteDemanda»*).

1.2. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del **16 de marzo de**

2020 en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020**.

1.3. Previo pago de los gastos procesales, el 25 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«006PagoGastos»* y *«007NotificacionPersonal»*).

1.5. El 29 de enero de 2021 la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL dentro del término legal contestó la demanda *(«008ContestacionDemanda»).*

1.6. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer *(«009ConstanciaDespacho»).*

Puestas en ese estadio las cosas, previo a resolver sobre la procedencia de dar aplicación a lo establecido en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se advierte que la parte demandada no allegó el expediente prestacional necesario para el objeto del presente proceso, el cual es una obligación[1] de allegar con la contestación de la demanda.

En consecuencia, **SE DISPONE**:

---

[1]«**Artículo 175. *CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA***. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:
(...)
PARÁGRAFO 10. Durante el término para dar respuesta a la demanda, la entidad pública demandada o el particular que ejerza funciones administrativas demandado deberá allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder.

Cuando se trate de demandas por responsabilidad médica, con la contestación de la demanda se deberá adjuntar copia íntegra y auténtica de la historia clínica pertinente, a la cual se agregará la transcripción completa y clara de la misma, debidamente certificada y firmada por el médico que haga la transcripción.

La inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto.
(...)»

PRIMERO: REQUÍERESE a la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que en el término máximo e improrrogable de los diez (10) días contados a partir de la notificación del presente proveído allegue de manera íntegra y legible el expediente prestacional del señor NELSON ENRIQUE RAMÍREZ REYES (q.e.p.d), so pena de hacerse acreedora a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso.

SEGUNDO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL a la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA en los términos del poder a ella conferido y que obra en el folio 10 del archivo denominado «008ContestacionDemanda».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
ab179e8cee421a5df3f1996cea319d16d8bc8cfdc426524b7c1e605b25bc2d85
Documento generado en 15/04/2021 02:44:48 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2019-00390-00**
Demandante:	**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
Demandado:	**JORGE EFRAÍN CALDERÓN RODRÍGUEZ**
Medio de Control:	**REPETICIÓN**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 20 de febrero de 2020 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de repetición presentó el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, por conducto de apoderado judicial, contra el señor JORGE EFRAÍN CALDERÓN RODRÍGUEZ, con el propósito de declarar que el demandado obró con culpa grave en los hechos que dieron lugar a la condena impuesta por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT en la sentencia de 5 de febrero de 2016, la cual fue confirmada por la SUBSECCIÓN "A" DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA el 10 de agosto de 2017 (*«006AutoAdmiteDemanda»*).

1.2. Previo pago de los gastos procesales, el 19 de agosto de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«008PagoGastosProcesales»* y *«013NotificacionPersonalDemanda»*).

1.3. El 22 de enero de 2021 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 12 de diciembre de 2020 y que la parte demandada guardó silencio (*«019ConstanciaTerminos»*).

1.4. El 4 de febrero de 2021, una vez transcurrido el término de traslado de la demanda y encontrándose el proceso pendiente para resolver sobre la procedencia de la aplicación del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho, en aras de evitar posibles nulidades y en garantía del postulado constitucional del debido proceso del señor JORFE EFRAÍN CALDERÓN RODRÍGUEZ, requirió a la apoderada judicial del MUNICPIO DE FUSAGASUGÁ para que remitiera las evidencias correspondientes que acreditaran que la dirección electrónica *«jorgecalderon59@yahoo.com»* corresponde al utilizado por el demandado con el fin de proseguir con el proceso (*«021AutoRequiere»*). Exigencia que se reitero mediante auto de 11 de marzo de 2021 (*«025AutoRequiere»*).

1.5. El 12 de febrero y 17 de marzo de 2021, respectivamente, la apoderada judicial del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ allegó la documental que evidencia que la dirección electrónica *«jorgecalderon59@yahoo.com»* efectivamente corresponde al utilizado por el demandado (*«023EscritoMunicipio»* y *«027EscritoMunicipio»*).

1.6. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«028ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, y como quiera que la apoderada judicial del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ acreditó mediante la certificación del Director de Gestión Humana del MUNCIPIO DE FUSAGASUGÁ (folio 7 *«023EscritoMunicipio»*) y la hoja de vida DAFP del señor JORFE EFRAÍN CALDERÓN RODRÍGUEZ (folios

4 a 6 «*027EscritoMunicipio*») que la dirección electrónica «*jorgecalderon59@yahoo.com*» corresponde al canal de comunicación del señor CALDERÓN RODRÍGUEZ, deviene, por un lado, del estudio del trámite procesal del asunto de la referencia que no se ha atentado contra el debido proceso ni contra el derecho de defensa y contradicción en consideración a que la notificación personal de la demanda se realizó en debida forma y, por el otro, que se hace necesario requerir al señor CALDERÓN RODRÍGUEZ para que constituya apoderado judicial con el fin de proseguir con el trámite subsiguiente, so pena de hacerse acreedor de las sanciones contempladas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso[1].

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: Por Secretaría, **REQUIÉRESE** al señor JORGE EFRAÍN CALDERÓN RODRÍGUEZ para que, en el término improrrogable de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente proveído, constituya apoderado judicial dentro del asunto de la referencia para que represente sus intereses con el fin de proseguir con el curso del proceso, so pena de hacerse acreedor de las sanciones contempladas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

---

[1] «**Artículo 44. *PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

1. Sancionar con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

2. **Sancionar con arresto inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia**.

3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos **y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución**.

(...)» (Destaca el Despacho).

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
88fd9daedf9587b6b4576f6d7b0bfb7797d2444eaeb1ff34d026d078029ef119
Documento generado en 15/04/2021 02:43:28 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2020-00007-00**
Demandante:	**ÁNGEL ALBERTO ACOSTA RUÍZ**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 20 de febrero de 2020 este Despacho, admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor ÁNGEL ALBERTO ACOSTA RUÍZ, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-. con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo ficto configurado en virtud de la ocurrencia del silencio administrativo acaecido por la falta de respuesta de la Administración a la petición radicada el 1 de agosto de 2019, por medio del cual se negó el pago de la sanción por mora, establecida en la ley 244 de 1995 y la ley 1071 de 2006, en el pago de las cesantías reconocidas por medio de la Resolución 001226 de 21 de junio de 2016 (*«005AutoAdmiteDemanda»*).

1.2. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del **16 de marzo de 2020** en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020.**

1.3. El 5 de noviembre de 2020, el apoderado judicial de la parte actora mediante memorial radicado vía correo electrónico, solicitó darle impulso al proceso (*«009Impulso»*).

1.4. Previo pago de los gastos procesales el 24 de febrero de 2020, se llevó a cabo la notificación personal de la demanda el 25 de noviembre de 2020 (*«006PagoGastosPrcoesales»* y *«010NotificacionPersonal»*).

1.5. Fenecido el termino de traslado del medio de control, esto es el 8 de marzo de 2021, se observa en el expediente que la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- guardó silencio (*«011ConstanciaControlTerminos»*).

1.6. El 22 de febrero de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«017ConstanciaDespacho»*)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, previo a emitir pronunciamiento frente a la procedencia de la aplicación del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y ante la falta de constitución de apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, es del caso

requerir a la entidad para que constituya apoderado judicial en el asunto de la referencia.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- para que, en el término máximo e improrrogable de los diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a constituir apoderado judicial para que represente sus intereses en el presente medio de control.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
35b5842e58f5128000d0631c480ee12dde167ef11c744a490d32d594a7ae2a9c
Documento generado en 15/04/2021 02:44:49 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2020-00012-00**
Demandante:	**LUZ ANGÉLICA GUEVARA JIMÉNEZ**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante auto de 20 de febrero de 2020 se admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora LUZ ANGÉLICA GUEVARA JIMÉNEZ contra la NACIÓN–MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO–FOMAG, con el objeto de tener la nulidad del acto administrativo ficto resultante de la solicitud radicada por el demandante el 12 de agosto de 2019 en la que pidió el

reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías (*«005AutoAdmiteDemanda»*).

2.2. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del **16 de marzo de 2020** en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020**.

2.3. El 25 de noviembre de 2020 se surtió la notificación personal del auto admisorio de la demanda a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- (*«007NotificaciobPersonal»*).

2.3. El 29 de enero de 2021 el apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, estando dentro del término legal presentó escrito de contestación de la demanda *(«008ContestacionDemanda»)*.

2.4. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho *(«009ConstanciaDespacho»)*.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021)
> ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

> **4.** En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.
>
> **Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.
>
> Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.
>
> No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas son inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno al pago de la sanción por la mora en el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995 y en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de reconocimiento de las cesantías, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver, habida cuenta que no se presentaron con la contestación de la demanda; tampoco hay pruebas por practicar y, únicamente se solicitó tener como pruebas las documentales allegadas con el líbelo inicial, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento, la parte demandada no aportó o solicitó el decreto de alguna; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a pronunciarse sobre las pruebas y se realizará la fijación del litigio, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho procede a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas y aportadas por las partes según los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

- PARTE DEMANDANTE:

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visible en los folios 21 a 32 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

Seguidamente, se realizará la fijación del litigio.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

De la lectura de la demanda se tiene que el **acto demandado** en la presente acción, este es:

- El acto ficto o presunto configurado en virtud de la ocurrencia del silencio administrativo acaecido por la falta de respuesta de la Administración a la petición radicada el 12 de agosto de 2019, por medio del cual se negó el pago de la sanción por mora, establecida en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, en el pago de las cesantías reconocidas por en la Resolución 1009 de 28 de noviembre de 2018.

En consecuencia, y a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (folios 5 y 6 «002DemandaPoderAnexos»):

- Se ordene a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- reconocer y pagar la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la reconocimiento y pago de las cesantías ante la entidad y hasta cuando se haga efectivo el pago

Del mismo modo, este Despacho en virtud del líbelo introductorio, señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. La señora LUZ ANGÉLICA GUEVARA JIMÉNEZ, estuvo vinculada como docente en el sector oficial desde el 21 de julio de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2017 *(Folio 21 «002DemandaPoderAnexos»).*

2. La señora LUZ ANGÉLICA GUEVARA JIMÉNEZ, mediante escrito de petición radicado bajo el No. 2018PQR4544 de 11 de septiembre de 2018 solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías parciales *(Folio 21 «002DemandaPoderAnexos»).*

3. La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, en nombre y representación de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -

FOMAG-, mediante la Resolución 1009 de 28 de noviembre de 2018 reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales a la señora LUZ ANGÉLICA GUEVARA JIMÉNEZ por valor neto de SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($7'128.984) *(Folio 23 «002DemandaPoderAnexos»).*

4. El monto reconocido en la Resolución 1009 de 28 de noviembre de 2018 estuvo disponible para pago solo hasta el 18 de febrero de 2019 *(Folio 25 «002DemandaPoderAnexos»).*

5. Mediante escrito de petición de 12 de agosto de 2019, por intermedio de apoderado judicial, la señora LUZ ANGÉLICA GUEVARA JIMÉNEZ solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora, establecida en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, por el pago tardío de las cesantías reconocidas por medio de la Resolución 1009 de 28 de noviembre de 2018 *(Folios 28 a 30 «002DemandaPoderAnexos»).*

Bajo ese contexto, se encuentra que existe **discrepancia** en relación con: i) el reconocimiento de la sanción moratoria al personal docente oficial en Colombia.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en los siguientes **problemas jurídicos**:

1) ¿Debe declararse la existencia del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo respecto a la petición elevada por la señora LUZ ANGÉLICA GUEVARA JIMÉNEZ el 12 de agosto de 2019 ante la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-? **2)** ¿Debe la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- pagar a la señora LUZ ANGÉLICA GUEVARA JIMÉNEZ la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías definitivas reclamadas, contando a partir del día

siguiente al que venció el término legal establecido, al no haberse expedido el acto administrativo y pagado la misma dentro de los términos señalados en la Ley 1071 de 2006 que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÉSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

---

[1] «**Artículo 207. CONTROL DE LEGALIDAD.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -19 de febrero de 2020: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole de su conocimiento a este Despacho («003ActaReparto»).
-12 de marzo de 2020: Auto que admite demanda y ordena notificar a la demandada («005AutoAdmiteDemanda»).
- 23 de julio de 2020 pago de gastos procesales («008PagoGastos»).
-19 de agosto de 2020 Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («009NotificacionPersonal»).
-6 de octubre de 2020: Parte demandada contesta la demanda sin la proposición de excepciones previas («010ContestacionDemanda»).
-11 de diciembre: Fijación en lista («012FijacionLista»).

SEGUNDO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 21 a 32 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

TERCERO: DECLÁRASE cerrado el periodo probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

CUARTO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

QUINTO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

SEXTO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- al doctor JUAN CAMILO OTÁLORA ALDANA en los términos de la sustitución a él conferida y que obra en el folio 10 del archivo denominado «008ContestacionDemanda».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
426d85b2080834d4be828b66f57402532d9601ecca01b5251103aa995b64d24e
Documento generado en 15/04/2021 02:44:50 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00032-00**
DEMANDANTE:	**JULIA ROSA JARAMILLO**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 12 de marzo de 2020 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora JULIA ROSA JARAMILLO, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo ficto

negativo producto del silencio administrativo que se configuró por la falta de respuesta de la Entidad demandada a la petición radicada el 14 de agosto de 2019 por medio de la cual se solicitó el reconocimiento de la sanción por mora en el pago de las cesantías de la actora (*«004AutoAdmiteDemanda»*).

2.2. El 19 de agosto de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«008NotificacionPersonal»*).

2.3. El 6 de octubre de 2020 la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, por conducto de apoderada judicial, contestó la demanda con la proposición de excepciones (*«009ContestacionDemanda»*).

2.4. El 10 de diciembre de 2020 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 9 de noviembre de 2020 (*«010ConstanciaTerminos»*).

2.5. El 11 de diciembre de 2020 se corrió traslado de las excepciones planteadas (*«011FijacionLista»*).

2.6. El 18 de marzo de 2021 este Despacho resolvió sobre las excepciones con el carácter de previas que fueron propuestas por la parte demandada y declaró no probada la excepción de «*FALTA DE INTEGRACION DE LITISCONSORTE NECESARIO*» (*«017AutoResuelveExcepciones»*).

2.7. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«019ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

El artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

«**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021) ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:

1. Antes de la audiencia inicial:

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

> **Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.
>
> Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.
>
> No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas son inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno al reconocimiento y pago de la sanción por mora en el desembolso de las cesantías reconocidas a la actora en la Resolución No. 0578 de 19 de julio de 2018, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas pendientes por resolver habida cuenta que la propuesta se resolvió en el auto de 18 de marzo de 2021; tampoco hay pruebas por practicar y, únicamente, las partes solicitaron tener como pruebas las documentales allegadas con la demanda y con el escrito de contestación, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a pronunciarse sobre las pruebas y se realizará la fijación del litigio, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho proceder a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas por las partes que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

PARTE DEMANDANTE

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 20 a 31 *«002DemandaPoderAnexos»* y en el archivo *«ANEXOS JULIA ROSA JARAMILLO»* de la carpeta *«CD FOLIO 19 CP-DEMANDA-»* de la carpeta *«002DemandaPoderAnexos»* del expediente digitalizado.

PARTE DEMANDADA

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas el documento allegado con el escrito de contestación a la demanda visible en el folio 16 *«009ContestacionDemanda»* del expediente digitalizado.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

Seguidamente, se realizará la fijación del litigio.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

De la lectura de la demanda se desprende la existencia del **acto demandado** en la presente acción, este es:

- El acto administrativo ficto negativo producto del silencio administrativo que se configuró por la falta de respuesta de la Entidad demandada a la petición radicada el 14 de agosto de 2019 por medio de la cual la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el desembolso de las cesantías reconocidas a la actora en la Resolución No. 0578 de 19 de julio de 2018 (folios 26 a 29 «*002DemandaPoderAnexos*» de la carpeta «*002DemandaPoderAnexos*»).

En consecuencia, a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (folio 3 «*002DemandaPoderAnexos*» de la carpeta «*002DemandaPoderAnexos*»):

- Se condene a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- a que se le reconozca y pague la sanción por mora establecida en la Ley 1071 de 2006, esto es, la equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo.

Del mismo modo, este Despacho, en virtud del líbelo introductorio, señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. El 4 de abril de 2018 la señora JULIA ROSA JARAMILLO solicitó a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- el pago de las cesantías a que tenía derecho (folio 20 «*002DemandaPoderAnexos*» de la carpeta «*002DemandaPoderAnexos*»).

2. El 19 de julio de 2018 la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, mediante la Resolución No. 0578, reconoció y pagó a la señora JULIA ROSA JARAMILLO la suma de $9.145.000 por concepto de liquidación parcial de cesantías (folios 20 a 23 «*002DemandaPoderAnexos*» de la carpeta «*002DemandaPoderAnexos*»).

3. El 30 de agosto de 2018 la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-puso a disposición de la señora JULIA ROSA JARAMILLO el pago de las cesantías reconocidas mediante la Resolución No. 578 de 19 de julio de 2018 (folio 16 «*009ContestacionDemanda*»).

4. El 14 de agosto de 2019 la señora JULIA ROSA JARAMILLO, mediante escrito de petición, solicitó a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el desembolso de las cesantías reconocidas a la actora en la Resolución No. 578 de 19 de julio de 2018 (folios 26 a 29 «*002DemandaPoderAnexos*» de la carpeta «*002DemandaPoderAnexos*»).

Bajo ese contexto, se encuentra que existe **discrepancia** en relación con: i) el reconocimiento de la sanción moratoria al personal docente oficial en Colombia.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en establecer la legalidad del acto administrativo acusado resolviendo el siguiente **problema jurídico**: **1)** ¿Debe reconocerse y pagarse a la señora JULIA ROSA JARAMILLO la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías parciales de que trata la Ley 1071 de 2006 la cual adicionó y modificó la Ley 244 de 1995?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÁSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 20 a 31 *«002DemandaPoderAnexos»* y en el archivo *«ANEXOS JULIA ROSA JARAMILLO»* de la carpeta *«CD FOLIO 19 CP-DEMANDA-»* de la carpeta *«002DemandaPoderAnexos»* del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

---

[1] «**Artículo 207. *CONTROL DE LEGALIDAD.*** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -12 de febrero de 2020: Presentación de la demanda («003ActaReparto»).
-12 de marzo de 2020: Auto que admite demanda y ordena notificar a la demandada («004AutoAdmiteDemanda»).
-19 de agosto de 2020: Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («008NotificacionPersonal»).
-6 de octubre de 2020 -Parte demandada contesta la demanda con la proposición de excepciones («009ContestacionDemanda»).
-11 de diciembre de 2020 -Se fija en lista las excepciones planteadas («011FijacionLista»).
-18 de marzo de 2021 -Auto resuelve las excepciones planteadas y las declara no probadas («017AutoResuelveExcepciones»).
-12 de abril de 2021: El proceso ingresa al Despacho («019ConstanciaDespacho»).

TERCERO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas el documento allegado con el escrito de contestación de la demanda visible en el folio 16 «*009ContestacionDemanda*» del expediente digitalizado, el cual será valorado de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

CUARTO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

QUINTO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

SEXTO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

SÉPTIMO: RECONÓCESE PERSONERÍA ADJETIVA a la doctora SOLANGI DÍAZ FRANCO para actuar como apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, de conformidad con la sustitución de poder visible en el folio 15 «*009ContestacionDemanda*» del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
BF27BE96B7AE44944B8AF0CD0464907CC5E13F8D0D91F6828E63780376D8838E
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:29 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00038-00**
DEMANDANTE:	**ROBERTO JUDEX FRANCO**
DEMANDADO:	**MUNICIPIO DE GUATAQUÍ** **CONCEJO MUNICIPAL DE GUATAQUÍ**
VINCULADA:	**IBETTE ROCÍO VALENCIA GODOY**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Como medida de saneamiento mediante auto de 25 de febrero de 2021 se requirió al presidente del CONCEJO MUNICIPAL DE GUATAQUÍ y a la señora IBETTE ROCÍO VALENCIA GODOY, para que constituyeran apoderado judicial en ejercicio del derecho de postulación (*«015AutoRequiere»*).

1.2. El 5 de marzo de 2021 el doctor JUAN MANUEL MURCIA EUSSE allegó poder a él conferido por la señora ANA MILENA FIERRO MORENO, en calidad de presidente del CONCEJO MUNICIPAL DE GUATAQUÍ (*«017PoderConcejoMunicipal»*).

1.3. El 5 de marzo de 2021 el doctor CÉSAR HERNANDO FIGUEREDO MORALES allegó poder a él conferido por la señora IBETTE ROCÍO VALENCIA GODOY (*«018PoderVinculada»*).

1.4. El proceso ingresó al Despacho el 12 de abril de 2021 (*«019ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, sería del caso resolver las excepciones previas propuestas por el extremo pasivo en el escrito de contestación a la demanda, sin embargo, pese a que el doctor JUAN MANUEL MURCIA EUSSE allegó el poder conferido por la señora ANA MILENA FIERRO MORENO en calidad de Presidente del Concejo Municipal de Guataquí, lo cierto es que el Despacho se abstendrá de reconocer personería adjetiva para actuar, habida cuenta que no se aportó la documental en donde se acredite la calidad de la poderdante, es decir los actos administrativos de elección de la señora FIERRO MORENO como presidente de la Corporación en comento, por lo que se requerirá en tal sentido**.**

En consecuencia, **SE DISPONE**:

PRIMERO: REQUIÉRASE al doctor JUAN MANUEL MURCIA EUSSE, para que en el término de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación de este proveído allegue la documental que acredite la calidad de poderdante de la señora ANA MILENA FIERRO MORENO, esto es, los actos administrativos de elección y posesión de la señora FIERRO MORENO como concejal y como presidente del CONCEJO MUNICIPAL DE GUATAQUÍ.

SEGUNDO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderado judicial de la señora IBETTE ROCÍO VALENCIA GODOY al doctor CÉSAR HERNANDO FIGUEREDO MORALES en los términos y para los efectos del poder a él conferido obrante en el archivo «018PoderVinculada».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
FC1FAC370DD5D137E7CCDD154D657B087088732F95BA292B708178CE2C529CD3
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:02 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00047-00**
DEMANDANTE:	**MUNICIPIO DE SAN BERNARDO**
DEMANDADO:	**GRUPO CÁRNICO COLOMBIANO S.A.S.**
MEDIO DE CONTROL:	**CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Trabada la relación jurídico procesal, cumplido lo dispuesto en el auto admisorio de la demanda y teniendo en cuenta que no existen excepciones con el carácter de previas por resolver habida cuenta que las propuestas por el extremo pasivo fueron resueltas mediante auto de 25 de febrero de 2021, **FÍJASE** como fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el día **trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) a partir de las 2:30 p.m**., la cual se celebrará de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, para lo cual, previo a dicha fecha, por parte de un servidor del Despacho se remitirá a los apoderados, por intermedio de los correos electrónicos reportados en el plenario, la correspondiente invitación en la que se compartirá el link de acceso y las instrucciones correspondientes, así como los protocolos del caso.

Téngase en cuenta que los términos judiciales estuvieron suspendidos por disposición expresa del Consejo Superior de la Judicatura[1] desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 en atención a la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia que generó el COVID-19.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
05FB36DE600CCB56D5E43604FA2CF7D341037C325900970491C3FE9E2A6717D7
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:03 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

[1] Que concluyeron con la suspensión de los términos judiciales desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de hogaño mediante los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567.

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00065-00**
Demandante:	**EDUARDO JAVIER DÍAZ CORTES**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial del demandante contra el auto de 11 de marzo de 2021, por medio del cual se negó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo contenido en la Resolución No. 001152 de 20 de junio de 2019.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Con el líbelo introductorio, remitido por competencia a este Despacho por el JUZGADO 52 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ mediante auto de 22 de enero de 2020, el apoderado judicial del demandante solicitó (*«002EscritoMedidaCautelar»* del cuaderno de Medida Cautelar del expediente digitalizado):

> *«Señor juez, respetuosamente le solicito como medida provisional y mientras se emite el presente fallo de nulidad y restablecimiento del derecho, la suspensión provisional del acto administrativo de resolución N° 001152 del 20 de junio de 2019, notificada el 20 de junio de 2019, por medio del cual fue retirado mi defendido por motivo de insubsistencia, utilizando la facultad discrecional según lo preceptuado en el artículo 13 del decreto 1793 de 2000, siendo contrario a lo estipulado en el artículo 229 y siguientes del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta pretensión en aplicación de la sentencia SU-544-2001, con base en el perjuicio causado a mi prohijado por la expedición del Acto acusado al ser retirado como miembro activo del Ejército en su calidad de conductor, con un tiempo de veintitrés (23) años de servicio, a la patria, acto con el que se vulneró y desconoció sus derechos legales y constitucionales, entre otros el debido proceso, derecho de defensa, derecho al trabajo, derecho al mínimo vital y derecho a la seguridad social del demandante».*

2.2. Mediante auto de 13 de agosto de 2020 se corrió traslado de la solicitud de medida cautelar de «*suspensión provisional del acto administrativo de resolución N° 001152 del 20 de junio de 2019*» a favor del señor EDUARDO JAVIER DÍAZ CORTÉS («*003AutoCorreTrasladoMedidaCautelar*» del cuaderno de Medida Cautelar del expediente digitalizado).

2.3. Por medio de informe secretarial de 1° de febrero de 2021 se dejó constancia que no se acreditó el pago de los gastos procesales decretados en el ordinal segundo del auto admisorio de la demanda («*013ConstanciaDespacho*» del cuaderno Principal del expediente digitalizado).

2.4. Por auto de 4 de febrero de 2021, el Despacho dejó sin efecto el ordinal segundo del auto de 13 de agosto de 2020 que admitió la demanda, por lo que ordenó notificar el medio de control («*014OrdenaNotificar*» del cuaderno Principal del expediente digitalizado).

2.5. El 17 de febrero de 2021 se notificó a la parte Demandada el auto admisorio de la demanda junto con el auto que dispuso correr traslado de la medida cautelar («*005NotificacionPersonal*» del cuaderno de Medida Cautelar del expediente digitalizado).

2.6. El 26 de febrero de 2021 la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL descorrió el traslado de la medida cautelar solicitada por el demandante, manifestando su oposición y solicitando

que la misma sea denegada. Para el efecto, en síntesis, expuso (*«006ContestacionMedida»* del cuaderno de Medida Cautelar del expediente digitalizado):

2.6.1. Indicó que en la solicitud: i) se argumentó violación de disposiciones superiores sin identificar tal violación, y ii) no señaló las normas que servían como sustento para ello, evidenciándose *«una pobre argumentación»*, razones por las cuales, solicitó no decretar la suspensión solicitada por el actor por carecer de fundamento suficiente.

2.6.2. Luego de referirse al artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 señaló que quien solicita la medida cautelar debe asumir la carga de argumentación y probatoria que garanticen que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender la valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia.

2.6.3. Posteriormente, previo a señalar los requisitos para decretar la medida cautelar indicó que para que la misma proceda resulta necesario que del análisis realizado por el juez se concluya que existe violación a las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud, resultando claro que en principio no existe vulneración que pueda ser advertida en este momento a través del mecanismo de confrontación que prevé el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, por lo que indicó que debe negarse la solicitud de suspensión provisional solicitada.

2.7. Mediante auto de 11 de marzo de 2021 se negó la solicitud de medida cautelar. Dicha decisión fue notificada al día siguiente mediante estado No.11. (*«008AutoNiegaMedida»* y *«009NotificacionEstado12Marzook»* del cuaderno de Medida Cautelar del expediente digitalizado):

2.8. El 17 de marzo de 2021 el apoderado judicial de la parte demandante incoó el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la decisión de 11 de marzo de 2021, que negó la solicitud de medida cautelar de suspensión

provisional de del acto administrativo contenido en la Resolución No. 001152 de 20 de junio de 2019, como argumento señaló: (*«010RecursoReposicionApelacion»* del cuaderno de Medida Cautelar del expediente digitalizado):

2.8.1. Indica que el Despacho no fue moderado en la decisión y que por el contrario se extrapoló en la misma, pues cayó en la confusión de la aplicación de los conceptos legales y la aplicación de las normas superiores habida consideración que *«…argumentó el despacho en su decisión que no importa que la decisión dada por la demandada en la resolución No 001152 del 20 de junio de 2019, esgrime en la nota final del escrito COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, es decir deja notado que contra esa decisión no cabe recurso alguno, que ello no transgrede las normas superiores?...»,* indicando que pese a ello, este Despacho *«sostiene que no se ha violado derechos constitucionales- la norma superior y constitucional al actor».*

2.8.2. Menciona que el Despacho no aplicó la norma debida y no observó en forma juiciosa el material probatorio en el cual, aduce, se demostró plenamente la violación de la norma, pues refiere que si se hubiere hecho *«sobrada habría declarado la suspensión provisional solicitada por el actor del acto administrativo demandado, por violación de la constitución y la ley, máxime para evitar un perjuicio irremediable que se viene prolongando en el tiempo, puesto su núcleo familiar (dos hijos menores de edad, madre de la tercera edad, copia registro civil de matrimonio) que también se probó sumariamente y pretende desconocer la jueza, que demuestran palmariamente el perjuicio irremediable que no vio el Aquo, que es la otra circunstancia fuera de la violación de la norma constitucional como ya se probó en el presente disenso para proceder a decretar la medida provisional como ha deprecado la misma jurisprudencia que citó la jueza recurrida, insisto reincreíble y como sobre mesa se niega la medida cautelar que permite que continúe el perjuicio irremediable e inminente del actor, que ironía señoría esa inferencia que he desvirtuado».*

2.8.3. Refiere que no es de recibo el argumento hecho por el Despacho en el sentido que no se sustentó la solicitud de la medida cautelar, en similares términos de lo plasmado por la demandada sin valor probatorio alguno al descorrer la medida cautelar, argumentos que, señala, se desvirtuaron fáctica

y jurídicamente en el escrito mediante el cual se presentó el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el auto de 11 de marzo de 2021 que negó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional.

2.8.4. Finalmente manifiesta que se probó y se hizo claridad que el demandante fue retirado por una causal de falsa motivación, abuso de poder, violación de la norma superior, que se demostró con las pruebas aportadas en la demanda, que merece especial protección constitucional y que se le ocasionó un perjuicio irremediable al no poder satisfacer sus principales necesidades y las de su núcleo familiar, pues al ser una persona que su vida laboral siempre la desarrolló en la actividad militar, dificultándosele incorporase laboralmente en la vida civil, por lo que sí procedía la media cautelar solicitada, pues aunado a lo anterior señala que con el acto administrativo, se le vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, salud, mínimo vital, estabilidad laboral reforzada, debido proceso, derecho de defensa y contradicción, la norma legal de la Ley 1437 de 2011 sobre la indebida notificación que conlleva a un acto administrativo ineficaz e inexistente a la vida jurídica.

2.9. El 24 de marzo de 2021 se fijó en lista el recurso de reposición y en subsidio el de apelación (*«011FijacionLista»* y *«012EnvioTrasladoCorreo24Marzo»* del cuaderno de Medida Cautelar del expediente digitalizado).

2.10. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho, dejando constancia que la parte demandada guardó silencio respecto a la fijación en lista del recurso interpuesto por la parte demandante (*«013ConstanciaDespacho»* del cuaderno de Medida Cautelar del expediente digitalizado).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho abordará el estudio de la procedencia y oportunidad de los recursos incoados, para determinar si hay lugar a confirmar o revocar la decisión atacada o a concederlo, en el efecto en que se advierta la procedencia del recurso de alzada.

DEL RECURSO DE REPOSICIÓN:

Frente al recurso de reposición el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021) prevé:

> «**Artículo 242:** ***REPOSICIÓN.*** El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso»

En virtud de ello, resulta imperioso acudir a lo señalado en el artículo 318 del Código General del Proceso[1], en cuanto a la oportunidad para presentar el recurso, en donde se prevé que cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia, el recurso debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto.

Para el caso en comento, el auto recurrido de 11 de marzo de 2021, fue notificado por estado al día siguiente, es decir, en principio los tres días para presentar el recurso vencían el 17 de marzo siguiente, no obstante atendiendo el contenido del numeral segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021), el término de la notificación del auto notificado, sólo empezará a contabilizarse a los dos días

---

[1] «**Artículo 318.** ***PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES.*** Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

Parágrafo. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente».

hábiles siguientes al envío del mensaje, por lo que finalmente la parte interesada tenía como término máximo para recurrir la decisión hasta el **19 de marzo de 2021,** y como quiera que lo hizo el 17 de marzo hogaño, se advierte presentado en término.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

En cuanto al recurso de apelación, el artículo 243 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021) señala:

> «**Artículo 243.** ***APELACIÓN.*** Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:
>
> (…)
>
> 5. **El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar**.
>
> (…)
>
> **Parágrafo 1°.** El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. **La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario**.
>
> (…)» (Destaca el Despacho).

Así también, el artículo 244 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021) en cuanto al trámite del recurso de apelación contra autos indica:

> «**Artículo 244.** ***TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTOS.*** La interposición y decisión del recurso de apelación contra autos se sujetará a las siguientes reglas:
>
> 1. La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar el nuevo auto, si fuere susceptible de este recurso.
>
> (…)

> 3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días.
>
> (…)».

En ese orden, como quiera que la interposición del recurso de apelación cuando el auto sea notificado por estado deberá interponerse y sustentarse dentro de los tres días siguientes a su notificación, para el caso en concreto debe tenerse en cuenta el análisis realizado al respecto en el acápite del recurso de reposición dentro del presente auto y, en consecuencia se tiene presentado en término.

Puestas en ese estadio las cosas el Despacho abordará el caso concreto así:

DEL RECURSO DE REPOSICIÓN:

Se puntualiza que el motivo de la interposición del recurso de reposición obedece por cuanto el demandante aduce que el Despacho no fue moderado en su decisión y por el contrario se extrapoló en la misma, incurriendo en la confusión de la aplicación de los conceptos legales y en la aplicación de las normas superiores habida consideración que «*…argumentó el despacho en su decisión que no importa que la decisión dada por la demandada en la resolución No 001152 del 20 de junio de 2019, esgrime en la nota final del escrito COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, es decir deja notado que contra esa decisión no cabe recurso alguno, que ello no transgrede las normas superiores?...*», aunado a que, indica, se probó con la misma documental la violación de los derechos constitucionales, la norma superior y constitucional al actor constituyéndose en una prueba sumaria de prima facie.

Aunado a lo anterior, señala que el acto administrativo enjuiciado viola el debido proceso constitucional, el derecho a la defensa, pues ejerciendo su potestad dominante del Estado frente al ciudadano, resulta claro que, sí se transgrede flagrantemente la norma superior constitucional per se, aduciendo

que por ello se volvió a probar sumariamente con la respectiva Resolución de retiro.

Añade que este Despacho no aplicó la norma debida y no observó en forma juiciosa el material probatorio en el cual refiere se demostró plenamente la violación de la norma en mención, pues, aduce que si se hubiere hecho se habría declarado la suspensión provisional solicitada, por violación de la constitución y la ley, para evitar un perjuicio irremediable que, señala, se viene prolongando en el tiempo a su núcleo familiar «*(dos hijos menores de edad, madre de la tercera edad, copia registro civil de matrimonio)*», indica también, que se probó sumariamente por lo que considera que al negar la medida cautelar se permite que se continúe causando el perjuicio irremediable e inminente al demandante.

Refiere que las pruebas se enunciaron en el acápite de la demanda y que no es de recibo que el Despacho niegue la solicitud de medida cautelar porque no fue sustentada, porque en consideración de la providencia atacada no hubo violación a la norma superior y que tampoco se probó sumariamente el perjuicio irremediable por parte del actor, pues señala que dichos argumentos se desvirtuaron en el escrito del recurso de reposición y en subsidio el de apelación, pues, reitera, se probó y se hizo claridad que el demandante fue retirado por una causal de falsa motivación, abuso de poder, violación de la norma superior, que por ello merece especial protección constitucional situación que probó el perjuicio irremediable, al no poder satisfacer sus principales necesidades y las de su núcleo familiar.

Bajo ese contexto, se advierte que, tal y como quedó plasmado en el auto de 11 de marzo de 2021, la decisión adoptada en dicho proveído no obedeció a un capricho o a conclusiones a partir de datos parciales o reducidos por parte de la titular del Despacho como lo pretende hacer ver el demandante, sino por el contrario, obedeció a la ausencia de sustento de la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo contenido en la Resolución No. 001152 de 20 de junio de 2019, aunado a la falta de acreditación del criterio de necesidad y ausencia probatoria respecto a los perjuicios presuntamente causados al

demandante, requisitos que necesariamente conlleven a determinar que de no otorgarse la medida cautelar se causare un perjuicio irremediable, o que los efectos de la sentencia serían nugatorios, pues, se reitera, no se evidenció de manera clara la vulneración a los derechos o normativa alguna de la Resolución No. 001152 de 20 de junio de 2019, aunado a que la petición guarda identidad con el fondo del asunto, pues para llegar a la conclusión de la transgresión a la normativa que se considera vulnerada debe surtirse el trámite íntegro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que, se reitera, no es evidente en este estadio procesal la alegada violación que hicieran acceder al decreto de la medida provisional pedida.

En ese orden, se advierte que el recurrente se limitó a realizar manifestaciones subjetivas frente al actuar de la titular del Despacho, sin sustento jurídico que conlleve a cambiar la decisión del Despacho, pues, nótese que en varios apartes de su escrito señaló que las pruebas y fundamentos se encontraban en la demanda, situación que jurisprudencialmente se ha señalado que la falta de sustentación de la medida cautelar no queda suplida con el concepto de violación de las normas indicadas en la demanda, habida cuenta que se trata de dos requisitos distintos para fines procesales disimiles «*uno, el que se refiere a fundamentar jurídicamente la pretensión de nulidad del acto, el otro, a explicar las razones por las cuales el acto debe ser suspendido provisionalmente*», para el efecto se reitera la jurisprudencia mencionada en el auto recurrido a saber:

> *«La exigencia de sustentar en forma expresa y concreta la referida solicitud se explica por su propia naturaleza dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos. Ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor y sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello»*[2].

> *«Para resolver se considera que no están presentes los requisitos señalados en los articulo 229 y 231 del C.P.A.C.A. para que sea procedente el decreto de la suspensión provisional solicitada, toda vez que no se sustentó en la forma en que lo ordena la citada disposición, omisión ésta que hace imposible efectuar la*

[2] Sección Primera del Consejo de Estado proveído de 1° de julio de 2020.

comparación normativa para deducir de ella la presunta violación del ordenamiento jurídico que propone el demandante.

La exigencia de sustentar en forma expresa y concreta la referida solicitud se explica por su propia naturaleza, dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos.

Ha sido criterio reiterado de esta Corporación señalar que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace el actor, sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello. Resulta altamente útil traer a colación el análisis que hizo el Despacho en auto del 21 de octubre de 2013 expedido en el proceso número 11001 0324 000 2012 00317 00, en el cual se abordó el tema en un asunto semejante:

"En efecto, el requisito consistente en la sustentación de la medida cautelar no se encuentra en el artículo 231 del CPACA que trae a colación el recurrente, sino en el artículo 229 ejusdem cuyo contenido y alcance fueron explicados en el auto recurrido. Con todo, esta disposición advierte que las medidas cautelares, dentro de las que se encuentra la suspensión provisional, pueden ser decretadas ***a solicitud de parte debidamente sustentada****, lo que equivale a decir que la solicitud debe ser suficientemente argumentada por quien la solicite.*

Cosa distinta es que en la demanda se indiquen las normas violadas y el concepto de la violación, ya que esto comporta uno de los requisitos exigidos para este tipo de líbelos según lo dispone el artículo 162 numeral 4 del CPACA, requisito que no puede confundirse con el establecido en el comentado artículo 229.

En el mismo sentido, el alcance de la expresión "procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado" contenida en artículo 231 Ibíd, se encuentra dirigida a explicar que la solicitud de suspensión provisional puede ser presentada en el líbelo introductorio o en un escrito aparate, ***y no a que la sustentación de la medida cautelar quede suplida con el concepto de violación de las normas indicadas en la demanda, dado que, se reitera, se trata de dos requisitos distintos para fines procesales disimiles: uno, el que se refiere a fundamentar jurídicamente la pretensión de nulidad del acto, el otro, a explicar las razones por las cuales el acto debe ser suspendido provisionalmente.***

Lo anterior no quiere decir que los argumentos para cada uno de los fines procesales mencionados puedan coincidir, es más, si lo deseado por la actora era que el concepto de violación expuesto en la demanda sirviera de fundamento de la solicitud de suspensión provisional así debió expresarlo, máxime si se tiene en cuenta que en el escrito de la demanda dedicó un capítulo aparte a la suspensión provisional dentro del cual inscribió un subtítulo denominado "FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL", que fue al que se atuvo este Despacho para resolver la medida.

> *En otras palabras, la actora en su demanda dedicó un capítulo para sustentar la medida cautelar, a esa sustentación se remitieron la entidad demandada y el Despacho para descorrer el traslado y resolver la medida, sin embargo, ahora, viendo que esa sustentación en varios de sus apartes fue insuficiente, pretende que se tengan como tales los argumentos que utilizó para otros fines procesales.*
>
> *Finalmente sobre este punto, debe ponerse de relieve que la sustentación de la solicitud de suspensión provisional no constituye un exceso ritual, se trata de la observancia de una carga procesal en cabeza de la actora cuyo cumplimiento es el deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia y a su vez la carga que exige la ley para que, entre otras, se garantice el derecho de defensa de la entidad que expidió el acto.*
>
> *A propósito del derecho de defensa de la entidad demandada, no se puede perder de vista que la nueva codificación trajo consigo la obligación de correr traslado a la parte demandada de la solicitud de suspensión, en ese orden, la carga impuesta para que se sustente la medida también se encuentra dirigida a que la entidad que profirió el acto conozca a ciencia cierta las razones esgrimidas por el actor para poder ejercer eficientemente su derecho de defensa. En ese contexto, **no puede tenerse como sustentación de la medida cautelar la sola afirmación de que el acto administrativo desconoce normas de rango superior***»[3]. Destaca el Despacho.

Así las cosas, como quiera que el recurrente no probó los requisitos que hicieran viable la declaratoria de la suspensión provisional del acto demandado y que conlleven al Despacho a revocar la decisión adoptada en proveído de 11 de marzo de 2021 éste se mantendrá incólume, habida cuenta que, se insiste, hasta esta instancia procesal no se advierte el cumplimiento de los requisitos para reponer la decisión y decretar la medida cautelar solicitada, aunado a que acceder al decreto de la misma en los términos pretendidos por el recurrente conllevarían a un pre juzgamiento sin los elementos suficientes, lo cual solo es dable precisarlo en la correspondiente sentencia al resolver el problema jurídico que se formuló en la demanda.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Expuesto lo anterior, como quiera que el recurso de apelación fue incoado en subsidio de la reposición contra el auto proferido el 11 de marzo de 2021, notificado por estado al día siguiente, por medio del cual se negó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo

[3] Proveído de 14 de febrero de 2019 de la Sección Primera del Consejo de Estado.

contenido en la Resolución No. 001152 de 20 de junio de 2019, teniendo en cuenta que no se repondrá la decisión y que el recurso de apelación fue incoado dentro del término legal para el efecto, resulta procedente al tenor de las normas transcritas conceder el mencionado recurso en el efecto devolutivo de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011. No obstante, no se dispondrá el pago de las expensas al recurrente habida consideración a que el expediente se encuentra digitalizado y no se requiere la reproducción de las piezas procesales.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: NO REPONER la providencia de 11 de marzo de 2021 que negó la SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto administrativo contenido en la en la Resolución No. 001152 de 20 de junio de 2019, conforme a lo expuesto en parte motiva.

SEGUNDO: Para ante la SECCIÓN SEGUNDA DEL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA **CONCÉDESE** en el efecto devolutivo el recurso de apelación incoado por el apoderado judicial del demandante contra el auto de 11 de marzo de 2021 que negó la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo contenido en la Resolución No. 001152 de 20 de junio de 2019.

TERCERO: Por secretaría **ENVÍESE Y/O PERMÍTASE EL ACCESO** al expediente digitalizado al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
ceb9e6f8d565c25b33e1826326bfa7545cec6be9e71810ba19aed468d530d74a
Documento generado en 15/04/2021 02:44:04 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-33-33-001-2013-00581-00**
Demandante:	**BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR**
Demandado:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP-**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. El 19 de noviembre de 2020, fue allegado al Despacho, mensaje de correo electrónico al que se adjuntó[1]:

1.1.1. Copia de la Escritura Pública No. 604 de 12 de febrero de 2020 de la Notaría 73 de Bogotá D.C., con la que el DIRECTOR JURÍDICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- otorgó poder general a la firma VITERI ABOGADOS S.A.S. representada legalmente por el doctor OMAR ANDRÉS VITERI DUARTE para representar judicial y extrajudicialmente a la Entidad que representa[2].

---

[1] Archivo denominado 069SolicitudTerminación del cuaderno principal del expediente digitalizado.
[2] Folios 11 a 24 del Archivo denominado 069SolicitudTerminación del cuaderno principal del expediente digitalizado.

1.1.2. Escrito de sustitución realizada por el doctor OMAR ANDRÉS VITERI DUARTE la doctora PAOLA KATHERINE RODRÍGUEZ HERRÁN[3].

1.1.3. Solicitud de terminación del proceso suscrita por la apoderada sustituta de la Entidad Ejecutada[4].

1.1.4. Comprobante de Orden de Pago Presupuestal de Gastos, con el que se acredita el pago realizado a la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR por valor de $4.501.569,40[5].

1.1.5. Certificaciones expedidas por el PROFESIONAL ESPECIALIZADO QUE HACE LAS VECES DE TESORERO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- en las que indica que a la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR se le han realizado los siguientes pagos, para cubrir la obligación que aquí se ejecuta[6]:

FECHA	VALOR
29 de octubre de 2020	$1.479.567.08
29 de octubre de 2020	$20.665.124.56
29 de octubre de 2020	$4.548.476.64

1.1.6. Resoluciones No. SFO000524 de 22 de octubre de 2020[7] con la que se ordena el pago de $1.479.567.08, SFO000380 de 22 de octubre de 2020[8] con la

[3] Folio 5 del Archivo denominado o69SolicitudTerminación del cuaderno principal del expediente digitalizado.
[4] Folios 2 a 4 del Archivo denominado o69SolicitudTerminación del cuaderno principal del expediente digitalizado.
[5] Folios 25 y 26 del Archivo denominado o69SolicitudTerminación del cuaderno principal del expediente digitalizado.
[6] Folios 27 a 29 del Archivo denominado o69SolicitudTerminación del cuaderno principal del expediente digitalizado.
[7] Folios 30 a 32 del Archivo denominado o69SolicitudTerminación del cuaderno principal del expediente digitalizado.
[8] Folios 33 a 35 del Archivo denominado o69SolicitudTerminación del cuaderno principal del expediente digitalizado.

que se ordena el pago de $20.665.124.56 y SFO000351 de 22 de octubre de 2020[9] con la que se ordena el pago de $4.548.476.64, a favor de la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR.

1.2. El 17 de diciembre de 2020 se remitió por parte de la DIRECTORA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP- la Resolución No. SFO000351 de 22 de octubre de 2020 con la que se ordenó el pago de $4.548.476.64, a favor de la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR[10].

1.3. El 16 de febrero de 2021, se remitió por la DIRECTORA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –UGPP-, la Resolución No. SFO000524 de 22 de octubre de 2020 con la que se ordena el pago de $1.479.567.08, a favor de la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR[11].

1.4. El 12 de abril de 2021 ingresó el expediente al Despacho.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, en primer orden, como quiera que el poder fue otorgado en debida forma, se reconocerá personería adjetiva al doctor OMAR ANDRÉS VITERI DUARTE en calidad de representante legal de la firma VITERI ABOGADOS ASOCIADOS SAS para actuar como apoderado judicial

[9] Folios 36 a 38 del Archivo denominado 069SolicitudTerminación del cuaderno principal del expediente digitalizado.
[10] Archivo denominado 070EscritoUGPP del cuaderno principal del expediente digitalizado.
[11] Archivo denominado 071EscritoUGPP del cuaderno principal del expediente digitalizado.

de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 75 del Código General del Proceso.

Así mismo, al haber sido realizada la sustitución por quien se reconocerá como apoderado judicial principal de la Entidad Demandada, se tendrá como apoderada sustituta de esta, a la doctora PAOLA KATHERINE RODRÍGUEZ HERRÁN, de conformidad con lo estipulado en el inciso sexto ibídem.

Respecto de la solicitud de terminación del proceso, encuentra el Despacho que:

El valor de $4.501.569,40[12] que se acredita pagado con el Comprobante de Orden de Pago Presupuestal de Gastos el 29 de octubre de 2018, fue tenido en cuenta como abono en la actualización de la liquidación del crédito realizada el 26 de mayo de 2019[13], **por lo que es improcedente que sea tenido en cuenta nuevamente,** hecho frente al cual habrá de requerirse a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- para que se abstenga de informar a este Despacho de manera reiterativa, pagos de sumas que ya han sido abonadas a la obligación, puesto que ello, eventualmente, podría inducir en error al Juzgado y dar lugar a providencias contrarias a la verdad.

Referente a las sumas de $1.479.567.08, $20.665.124.56 y $4.548.476.64, que se certificaron como pagadas por la Entidad Demandada, se le REQUERIRÁ para que se sirva aportar el Comprobante de Orden de Pago Presupuestal de Gastos correspondiente a cada una, de igual manera, se REQUERIRÁ al apoderado

[12] Folios 25 y 26 del Archivo denominado o69SolicitudTerminación del cuaderno principal del expediente digitalizado.
[13] Archivo denominado o59AutoModificayApruebaLiquidacionCredito del cuaderno principal del expediente digitalizado.

de la ejecutante, para que se sirva señalar si los pagos que se reputan efectuados han sido recibidos por su poderdante.

En virtud de lo expuesto, el Juzgado **DISPONE:**

PRIMERO: TÉNGASE Y RECONÓZCASE al doctor OMAR ANDRÉS VITERI DUARTE identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.803.031 y Tarjeta Profesional No. 111.852 como apoderado judicial de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- en los términos y para los fines del poder conferido visible en los Folios 11 a 24 del Archivo denominado 069SolicitudTerminación del cuaderno principal del expediente digitalizado.

SEGUNDO: TÉNGASE a la doctora PAOLA KATHERINE RODRÍGUEZ HERRÁN identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.070.589.381 y Tarjeta Profesional No. 169.856 como apoderada sustituta de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- en virtud de la sustitución realizada por el apoderado judicial principal visible en el Folio 5 del Archivo denominado 069SolicitudTerminación del cuaderno principal del expediente digitalizado.

TERCERO: REQUIÉRESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- y a sus apoderados judiciales, para que se abstengan de informar a este Despacho de manera reiterativa, pagos de sumas que ya han sido abonadas a la obligación, puesto que ello, eventualmente, podría inducir en error al Juzgado y dar lugar a providencias contrarias a la verdad.

CUARTO: REQUIÉRESE a la apoderada sustituta de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- para que en el término improrrogable de los cinco (5) días siguientes a la notificación por estado de la presente providencia, se sirva aportar el Comprobante de Orden de Pago Presupuestal de Gastos correspondiente a las sumas de $1.479.567.08, $20.665.124.56 y $4.548.476.64, que señala, fueron pagadas a la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR.

QUINTO: REQUIÉRESE al apoderado judicial de la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR, para que en el término improrrogable de los cinco (5) días siguientes a la notificación por estado de la presente providencia se sirva informar si las sumas de $1.479.567.08, $20.665.124.56 y $4.548.476.64 que se reputan pagados por la Entidad Ejecutada a su poderdante el 29 de octubre de 2020, fueron efectivamente recibidas por ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
72344dc490314bf58d81a765aa977b39e978c24b77365e3f71d1b3550b5ae309
Documento generado en 15/04/2021 02:44:44 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2014-00052-00**
Demandante:	**DIANA MARCELA COBOS ROJAS**
Demandado:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Y OTROS**
Medio de Control:	**REPARACIÓN DIRECTA**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante auto de 11 de marzo de 2021 se dispuso requerir al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE, para que informara el estado de la valoración de la señora DIANA MARCELA COBOS ROJAS, y a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA para que constituyera apoderado. (*«123AutoRequiere»*).

2.2. El 11 de marzo de 2021 la doctora INGRID PAOLA MOLANO ARENAS, en calidad de Asistente de Coordinación del Grupo Regional de Clínica Forense del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-REGIONAL NOROCCIDENTE, remitió el informe No. UBMDE-DSANT-02662-2021 de 8 de marzo, rendido por la profesional universitaria forense, doctora ANA MARÍA GRANADA TORO, dentro del número de caso interno UBMDE-DSANT-1281 1-C-2020 correspondiente a la señora DIANA

MARCELA COBOS, en el que se presentó el informe pericial decretado (*«125EscritoMedicinaLegal»*).

2.3. El 18 de marzo de 2021 el doctor LUIS FELIPE ARAQUES BARAJAS allegó poder conferido a él conferido por el doctor ÉDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS en calidad de gerente y/o representante legal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, junto con la documental que acredita la calidad de poderdante. (*«126EscritoHospitalPoder»*).

2.4. El proceso ingresó al Despacho el 12 de abril de 2021 (*«127ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, se hace necesario poner el conocimiento de las partes el informe No. UBMDE-DSANT-02662-2021 de 8 de marzo de 2021 rendido por la profesional universitaria forense doctora ANA MARÍA GRANADA TORO del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE dentro del número de caso interno UBMDE-DSANT-1281 1-C-2020 correspondiente a la señora DIANA MARCELA COBOS, obrante en el archivo *«125EscritoMedicinaLegal»*.

Finalmente ha de reconocerse personería adjetiva para actuar al doctor LUIS FELIPE ARAQUES BARAJAS como apoderado judicial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, en los términos y para los efectos del poder a él conferido obrante en el archivo *«126EscritoHospitalPoder»*.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de las partes por el término de tres (3) días siguientes a la notificación del presente proveído el informe No.

UBMDE-DSANT-02662-2021 de 8 de marzo de 2021 rendido por la profesional universitaria forense doctora ANA MARÍA GRANADA TORO del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE dentro del número de caso interno UBMDE-DSANT-1281 1-C-2020 correspondiente a la señora DIANA MARCELA COBOS, obrante en el archivo «*125EscritoMedicinaLegal*».

SEGUNDO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderado judicial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA al doctor LUIS FELIPE ARAQUES BARAJAS, en los términos y para los efectos del poder a él conferido obrante en el archivo «*126EscritoHospitalPoder*».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
357c89243a23d1e662468b97bcb02329895279185c9e816de346e31a53a0f723
Documento generado en 15/04/2021 02:44:19 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-33-33-001-2016-00024-00**
Demandante:	**VÍCTOR HERNÁN JIMÉNEZ CELEITA**
Demandado:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

El 27 de noviembre de 2020 se REQUIRIÓ a la apoderada sustituta de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- para que en el término improrrogable de los cinco (5) días siguientes a la notificación por Estado de la providencia, aportara el Comprobante de la Orden de Pago Presupuestal de Gastos correspondiente al pago efectuado por valor de CINCO MILLONES OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($5,008,716.96) al señor VÍCTOR HERNÁN JIMÉNEZ CELEITA[1].

El 16 de marzo de 2021 la apoderada judicial sustituta de la Entidad Demandada aportó distintos actos administrativos y oficios en los que se indica que se ha ordenado el pago de $820.782.79 y $5.008.716.96 a favor del señor VÍCTOR HERNÁN JIMÉNEZ CELEITA, así como la Resolución No.

[1] Archivo denominado 061Requiere del expediente digitalizado.

RDP001010 de 19 de enero de 2021 con la que la Entidad Demandada modificó el valor a pagar de $5.008.716.96 a $4.802.905,81[2].

El 26 de marzo de 2021 fue aportada la misma documental por quien adujo ser el SUBDIRECTOR DE DEFENSA JURÍDICA PENSIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP-[3].

Al respecto se encuentra que, si bien en las misivas allegadas por la apoderada sustituta y el SUBDIRECTOR DE DEFENSA JURÍDICA PENSIONAL de la Entidad Demandada se observan actos administrativos y oficios que ordenan pagos al señor VÍCTOR HERNÁN JIMÉNEZ CELEITA, con ellos no se aporta lo requerido por el Despacho, que clara y puntualmente ha solicitado el **COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS**, de los pagos efectuados al ejecutante.

Así pues, contrastado que en el presente asunto se ejecuta una obligación insatisfecha, para demostrar su pago **no es suficiente que se aporten los actos administrativos que ordenan los pagos al señor JIMÉNEZ CELEITA, ni que se certifique en tal sentido por los mismos empleados de la Entidad, sino que debe acreditarse que efectivamente tales pagos tuvieron lugar, en otras palabras, que el dinero ingresó al pecunio del demandante**, requisito *sine qua non* para que pueda realizarse el estudio correspondiente que lleve a determinar si en el presente asunto se configuró el pago total de la obligación.

Por lo expuesto, se REQUIERE POR SEGUNDA VEZ a la apoderada judicial sustituta de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIALUGPP- para que en el término improrrogable de los cinco (5) días siguientes a la notificación por Estado de la providencia, **APORTE EL**

[2] Archivo denominado 064EscritoUGPP del expediente digitalizado.
[3] Archivo denominado 065EscritoUGPP del expediente digitalizado.

COMPROBANTE DE ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS que acredite de manera certera y concreta, cuáles son los valores que le han sido pagados al señor VÍCTOR HERNÁN JIMÉNEZ CELEITA, so pena de declararla en desacato.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
e65e040a1992e2b625afe74a9683e25d0a8423e0db8fb3241de9675b9abe0553
Documento generado en 15/04/2021 02:44:46 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2016-00195-00**
Demandante:	**REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL**
Demandado:	**NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 11 de agosto de 2017 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, con el propósito de obtener la nulidad parcial del acta No. 025-APROP-GRURE-3-22 e íntegra de la Resolución No. 10442 de 18 de noviembre de 2015 (*«009AutoAdmiteDemanda»*).

1.2. Previo pago de los gastos procesales el 29 de agosto de 2017, se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«016PagoGastos»* y *«012NotificacionAdmiteDemanda»*).

1.3. El 27 de febrero de 2018 el apoderado judicial de la NACIÓN–MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, dentro del término legal contestó la demanda *(«018ContestacionDemanda»)*.

1.4. Mediante auto de 10 de abril de 2018 se fijó como fecha para la celebración de la audiencia inicial que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el 29 de agosto de 2018 *(«020AutoCitaAudienciaInicial»)*.

1.5. En la audiencia inicial celebrada el 29 de agosto de 2018, se ordenó requerir a la INSPECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que informaran si se adelantó investigación disciplinaria por el supuesto acoso laboral del cual fue víctima el señor teniente coronel REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL, BERNAL por parte del entonces director general de la Policía Nacional, señor RODOLFO PALOMINO LÓPEZ; por el Coronel FERNANDO AUGUSTO TORRES GUZMÁN; y por el Teniente Coronel ENGELBERT GRIJALBA SUÁREZ, además fijo fecha para la celebración de la audiencia de pruebas para el 7 de marzo de 2019 *(«029ActaAudienciaInicial»)*.

1.6. Mediante memorial de 15 de noviembre de 2018, el Inspector General de la Policía Nacional, Mayor General ÓSCAR ATEHORTÚA DUQUE, en razón a los requerimientos efectuados por la secretaría de este Despacho en los oficios 1339 y 1340, informó al interior de la Institución no se adelantó investigación disciplinaria por el supuesto acoso laboral del cual fue víctima el señor teniente coronel REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL por parte del entonces director general de la Policía Nacional, señor RODOLFO PALOMINO LÓPEZ; por el Coronel FERNANDO AUGUSTO TORRES GUZMÁN; y por el Teniente Coronel ENGELBERT GRIJALBA SUÁREZ, en tanto la competencia disciplinaria radica en única instancia en la Procuraduría General de la Nación *(«031Oficios1339y1340yRespuesta»)*.

1.7. Por auto de 17 de enero de 2019, nuevamente este Despacho ordenó requerir a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que informará si el adelantó investigación disciplinaria por el supuesto acoso laboral del cual fue víctima el señor teniente coronel REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL, por parte del entonces director general de la Policía Nacional, señor RODOLFO PALOMINO LÓPEZ; por el Coronel FERNANDO AUGUSTO TORRES GUZMÁN; y por el Teniente Coronel ENGELBERT GRIJALBA SUÁREZ *(«033AutoOrdenaRequerir»).*

1.8. En la audiencia de pruebas de 7 de marzo de 2019, pese de haberse oficiado el 12 de septiembre de 2018 y el 28 de enero de 2019, se avizoró la falta de cumplimiento del requerimiento efectuado a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por lo que nuevamente se ordenó requerir al ente de control en el sentido indicado *(«035ActaAudienciaPruebas»).*

1.9. El 11 de abril de 2019 la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN informó que una vez revisados los sistemas de información GEDIS y SIM arrojó que cursó la acción disciplinaria IUS 2016-176325, con IUC D-2016-139-857282 tramitada por la PROCURADURÍA AUXILIAR ASUNTOS DISCIPLINARIOS *(«042Oficios1717,2141,179,180yRespuesta»).*

1.10. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del **16 de marzo de 2020** en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020**.

1.11. El 20 de noviembre de 2020 se requirió al PROCURADOR AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS para que remitiera de manera íntegra la copia del expediente que conforma la investigación disciplinaria IUS 2016-

176325, con IUC D-2016-139-857282 que se adelantó por el presunto acoso laboral del que aduce fue víctima el señor REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL; así también, para allegará un informe acerca de los nombres, apellidos, número de identificación, dirección física y electrónica del responsable para dar solución a estas peticiones ante la PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS *(«049AutoRequiere»).*

1.12. El 5 de abril de 2021 la PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS remitió el expediente de la investigación disciplinaria IUS 2016-176325, con IUC D-2016-139-857282 *(Carpeta «053EscritoProcuraduria»).*

1.13. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer *(«016ConstanciaDespacho»).*

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de las partes por el término de tres (3) días, la documental allegada por la la PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS el 5 de abril de 2021 visible en la Carpeta «053EscritoProcuraduria» del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
a39b7daeef825ac6d9849cd9918d81bfc184a0eb84ff9dcfdb0ae191606f02ae
Documento generado en 15/04/2021 02:44:55 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-33-33-001-2017-00293-00**
Demandante:	**ROGELIO GUEVARA VILLAMIL**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Ingresa el expediente a Despacho con escrito signado por el doctor GIOVANNI ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ en el que indica que sustituye el poder a él conferido, con las mismas facultades que le fueron otorgadas, al doctor LUIS ALBERTO SÁNCHEZ HUÉRFANO[1].

En esa secuencia, observado que el doctor GIOVANNI ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ es quien funge como apoderado judicial del señor ROGELIO GUEVARA VILLAMIL, por cuanto le fue reconocida personería adjetiva mediante auto de 22 de septiembre de 2017[2], al tenor de lo preceptuado en el artículo 75 del Código General del Proceso emerge procedente acceder a lo solicitado.

---

[1] Archivo denominado 047Poder del expediente digitalizado.
[2] Archivo denominado 006AutoInadmiteDemanda del expediente digitalizado.

En virtud de lo expuesto, **TÉNGASE** como apoderado sustituto del señor ROGELIO GUEVARA VILLAMIL al doctor LUIS ALBERTO SÁNCHEZ HUÉRFANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.751.815 y la Tarjeta Profesional No. 111.347 con las mismas facultades otorgadas al abogado principal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
284ca173ebe0ce6667d967010f062c4eacdcbe59ac38b514d9c3aad01a2d180f
Documento generado en 15/04/2021 02:44:47 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-33-33-001-2018-00052-00**
Demandante:	**MACO S.A.S.**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante auto proferido el 8 de agosto de 2019 este Despacho decretó el embargo y retención de las sumas de dinero que se encontraban consignadas en algunas Entidades Financieras, de las que era titular la Entidad Ejecutada[1].

1.2. Tal decisión fue comunicada al BANCO POPULAR mediante oficio 01842 de 26 de septiembre de 2019[2].

1.3. El 20 de noviembre de 2019, el director de Casa Matriz de la Entidad Financiera, solicitó confirmar si debe registrarse la medida, advertido el carácter de inembargabilidad que ostentan las cuentas de la Demandada[3].

---

[1] Archivo denominado 004AutoDecretaMedidaCautelar.pdf del CuadernoMedidaCautelar del expediente digitalizado.
[2] Archivo denominado 011OficiosSecretariaMedidaCautelar del CuadernoMedidaCautelar del expediente digitalizado.
[3] Archivo denominado 020RespuestaOficio del CuadernoMedidaCautelar del expediente digitalizado.

1.4. Mediante auto de 5 de diciembre de 2019 se ordenó informar al BANCO POPULAR que debía registrarse la medida puesto que el presente asunto se encontraba dentro de las excepciones al principio de inembargabilidad[4].

1.5. La anterior decisión fue informada con el oficio 00037 de 22 de enero de 2020[5].

1.6. Por auto de 29 de octubre de 2020 se ordenó oficiar al BANCO POPULAR para que se sirviera informar si la medida cautelar decretada fue efectivamente registrada y aplicada[6].

1.7. Tal acto se cumplió con el oficio No. 00454 de 2 de diciembre de 2020[7], e ingresó en silencio del Banco en comento.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Observado el cuaderno de medida cautelar del expediente digitalizado, encuentra el Despacho que el BANCO POPULAR no ha indicado de manera certera y puntual si la medida cautelar de embargo que fue decretada por este Despacho, fue efectivamente aplicada.

Por lo anterior, en aplicación de la facultad otorgada por el numeral 3° del artículo 44 del Código General del Proceso, se adelantará el trámite incidental de desacato contra el Gerente General de la Entidad Financiera. No obstante, observando el procedimiento que ha señalado la Corte Constitucional que debe seguirse para respetar los derechos fundamentales del incidentado, se ordenará oficiar al señor MAURILIO ROJAS AGUILAR en su calidad de GERENTE GENERAL DEL BANCO POPULAR, para que previo a iniciar

---

[4] Archivo denominado 021AutoOrdenaOficiar del cuaderno de medida cautelar del expediente digitalizado.
[5] Archivo denominado 022OficiosMedidaCautelar del cuaderno de medida cautelar del expediente digitalizado.
[6] Archivo denominado 034AutoRequiere del cuaderno de medida cautelar del expediente digitalizado.
[7] Archivo denominado 033OficioRequiereBancoPopular del cuaderno de medida cautelar del expediente digitalizado.

trámite incidental en su contra, se sirva informar si procedió a registrar la medida cautelar decretada el 8 de agosto de 2019, reiterada el 5 de diciembre de 2019, en caso contrario, informe la razón por la que no lo ha hecho.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado **DISPONE**:

PRIMERO: OFÍCIESE al doctor MAURILIO ROJAS AGUILAR en su calidad de GERENTE GENERAL DEL BANCO POPULAR, para que en el término improrrogable de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la correspondiente comunicación, se sirva informar si procedió a registrar la medida cautelar decretada el 8 de agosto de 2019, reiterada el 5 de diciembre de 2019, sobre los productos de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, en caso contrario, informe la razón por la que no lo ha hecho.

SEGUNDO: ÁBRASE cuaderno de Incidente de desacato con esta providencia y las actuaciones que le sucedan en cumplimiento de ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
463aba3b64caf3b1a51c60018a11f310e95efbbafadea463fd5f5d3824660640

Documento generado en 15/04/2021 02:44:30 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-33-33-001-2018-00052-00**
Demandante:	**MACO S.A.S.**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Ingresa el proceso a Despacho con solicitud elevada por el apoderado judicial de la parte demandante[1], en la que pide: **1)** Se requiera al BANCO POPULAR para que cumpla con la orden de embargo, y, **2)** Se solicite al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA la aducción de los últimos 6 extractos bancarios de las cuentas de la Entidad Demandada.

Al respecto, encuentra necesario este Despacho señalar, que, como quiera que al BANCO POPULAR se le ha oficiado en distintas oportunidades sin que haya informado si aplicó el embargo que fue decretado, se iniciará trámite incidental de desacato contra su Gerente General en auto separado.

De otra parte, debe señalarse que la solicitud de aducción de los extractos bancarios de la Entidad Demandada deviene improcedente, puesto que no se encuentra contemplada en los artículos 593 y siguientes del Código General

[1] Archivo denominado 035EscritoSolicitudDemandante del cuaderno de medidas cautelares del expediente digitalizado.

del Proceso, que regulan las medidas cautelares que pueden ser decretadas y las acciones a adelantar en razón de ello. Lo anterior se refuerza, por cuanto, según se informó por el Profesional Senior de la Entidad[2], la medida se encuentra registrada y en espera de ser aplicada, al hallarse en turno al haberse decretado otras con anterioridad. En orden de ello, la solicitud se **NIEGA.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
0e22ddc621ec9c569d48f82f9ec1c9b1bd39e1451085bfe19ad043de9d466f81
Documento generado en 15/04/2021 02:44:31 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

[2] Archivo denominado 034EscritoBancoAgrario del cuaderno de medida cautelar del expediente digitalizado.

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2018-00120-00**
Demandante:	**DIEGO FERNANDO BARBOSA OLARTE**
Demandado:	**NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 29 de junio de 2018 este Despacho, admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor DIEGO FERNANDO BARBOSA OLARTE, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL (*«009AutoAdmiteDemanda»*).

1.2. Previo pago de los gastos procesales el 4 de julio de 2018, se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«011PagoGastos»* y *«012NotificacionPersonal»*).

1.3. El 19 de noviembre de 2018 la apoderada judicial de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, dentro del término legal contestó la demanda *(«013ContestacionDemanda»)*.

1.4. Mediante auto de 31 de enero de 2019 se fijó como fecha para la celebración de la audiencia inicial que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el 16 de julio de 2019 *(«015AutoCitaAudienciaInicial»).*

1.5. En audiencia inicial celebrada el 16 de julio de 2019, entre otras, se ordenó oficiar al COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL para que remitiera los resultados de las pruebas de polígrafo que le fueron practicadas al señor DIEGO FERNANDO BARBOSA OLARTE *(«016AudienciaInicial»).*

1.6. Mediante oficio No. 1395 de 23 de julio de 2019, la secretaría de este Despacho ofició al COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL con el fin que aportará remitiera los resultados de las pruebas de polígrafo según lo ordenado en audiencia inicial de 16 de julio de 2019 *(«017OficiosRequiere»).*

1.7. Mediante memorial de 29 de agosto de 2019, el JEFE DE ESTADO MAYOR Y SEGUNDO COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR, Coronel CARLOS ERNESTO BUITRAGO RUBIANO, al respecto de la remisión de las pruebas de polígrafo que le fueron practicadas al señor DIEGO FERNANDO BARBOSA OLARTE, manifestó entre otras cosas, lo siguiente:

> *« (…)*
>
> *En el caso en particular del señor DIEGO FERNANDO BARBOSA OLARTE, el informe del resultado de la evaluación de poligrafía que presentó en su calidad de oficial superior receptor de productos de inteligencia y/o contrainteligencia militar, no tuvo asignada ninguna puntuación o porcentaje que fue tenido en cuenta o contabilizado en su proceso de selección para ascenso, y en ningún caso dicho informe corresponde o equivale a un acto administrativo definitivo y por lo tanto no crea, define, modifica o extingue situaciones jurídicas.*
>
> *(…)*
>
> *Respetuosamente se solicita al Despacho, se consideren validos los motivos expuestos para mantener la reserva de los documentos de*

> *contrainteligencia requeridos; sin embargo en caso de que el Despacho considere necesario conocer el contenido de los documentos, antes de tomar una decisión, se solicita que la señora Juez, en aplicación del último inciso del articulo 39 ibidem, reciba en audiencia privada a un delegado de este Comando de Contrainteligencia que le hará el traslado de la reserva conforme indica el articulo 34 ibidem, en fecha y hora que el Despacho se sirva fijar » («020EscritoAnexosEjercito»).*

1.8. En audiencia de pruebas de 18 de noviembre de 2019, el Despacho avizoró la falta de cumplimiento del requerimiento efectuado al COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, respecto de la remisión de las pruebas de polígrafo que le fueron practicadas al señor DIEGO FERNANDO BARBOSA OLARTE, por lo que advirtió que el COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL no puede reusarse a remitir la información solicitada so pretexto de reserva legal, pues esto no es oponible ante el Despacho judicial de conformidad con lo prescrito en el artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, por lo que se ordenó nuevamente requerir *(«021ActaAudienciaPruebas»).*

1.9. Mediante oficio No. 02113 de 18 de noviembre de 2019, por segunda vez ofició al COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL con el fin que aportará la prueba decretada en audiencia inicial de 16 de julio de 2019, la cual fue, requerida nuevamente en audiencia de pruebas de 18 de noviembre de 2019 *(«025OficioRequiere»).*

1.10. Con memorial de 13 de diciembre de 2019, el JEFE DE ESTADO MAYOR Y SEGUNDO COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR, Coronel CARLOS ERNESTO BUITRAGO RUBIANO, dando respuesta al oficio 02113 de 18 de noviembre de 2019, en el cual se requirió por segunda vez la remisión de las pruebas de polígrafo que le fueron practicadas al señor DIEGO FERNANDO BARBOSA OLARTE, manifestó idénticos argumentos a los del memorial por el allegado el 29 de agosto de 2019 *(«026EscritoEjercito»).*

1.11. Por auto de 27 de febrero de 2020 nuevamente se requirió al COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, para que allegará las pruebas de polígrafo que le fueron practicadas al señor DIEGO FERNANDO BARBOSA OLARTE, indicando que tal como quedó plasmado en el acta de la audiencia de pruebas y en el audio de grabación de esta, cuando se requirió al COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL para que allegará la documental en comentó, se le corrió traslado de la decisión a las partes, de las cuales, entre ellas, se encontraba la apoderada judicial de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, quien no manifestó oposición alguna al respecto, por lo cual, la precitada decisión quedo ejecutoriada en dicha instancia procesal y, anudado a lo anterior, recordó este Despacho Judicial que conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, no es posible rehusarse a entregar la información argumentado reserva legal *(«028AutoRequiere»).*

1.12. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del **16 de marzo de 2020** en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020**.

1.13. Mediante los oficios No. 0216 de 13 de octubre de 2020 y No. 00106 de 25 de febrero de 2021, se ofició al COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL con el fin que aportará la mencionada prueba *(«032OficioRequiere y «033OficioRequiere»»).*

1.14. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer, sin pronunciamiento del COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL *(«016ConstanciaDespacho»).*

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, resulta inadmisible para esta Instancia Judicial que tras cuatro requerimientos el COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL continúe rehusándose de manera injustificada a remitir las pruebas de polígrafo que le fueron practicadas al señor DIEGO FERNANDO BARBOSA OLARTE, más aún cuando se extrae del acta y el archivo de grabación de la audiencia de pruebas de 18 de noviembre de 2019, que la apoderada judicial de NACIÓN–MINISTERIO DE DEFENSA–EJÉRCITO NACIONAL no propuso oposición alguna al requerir nuevamente la prueba en el momento que se corrió el respectivo traslado de la decisión, quedando esta ejecutoriada en dicha instancia procesal.

Ahora bien, recuerda este Despacho su postura frente a los argumentos esgrimidos en los memoriales de 13 de diciembre y 29 de agosto de 2019, por el JEFE DE ESTADO MAYOR Y SEGUNDO COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR, Coronel CARLOS ERNESTO BUITRAGO RUBIANO, en tanto no es plausible para la Entidad requerida rehusarse a remitir la información solicitada, so pretexto de reserva legal, por cuanto, la misma no es oponible ante las autoridades judiciales de conformidad con lo prescrito en el artículo 23 de la Ley 1712 de 2014, por lo que, nuevamente, previo a dar curso al incidente de desacato, es del caso requerir **por última vez** al COMANDO DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, para que aporte la prueba decretada en audiencia inicial de 16 de julio de 2019, y requerida en audiencia de pruebas de 18 de noviembre de 2019 y por auto de 27 de febrero de 2020, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso[1].

[1] «**Artículo 44. *PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(...)

2. **Sancionar con arresto** inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: Previo a dar curso al incidente de desacato, **REQUIÉRESE** al COMANDANTE DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL y al JEFE DE ESTADO MAYOR Y SEGUNDO COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO DE COMBATE DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR, para que en el término máximo e improrrogable de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, remita sin más dilaciones las pruebas de polígrafo que le fueron practicadas al señor DIEGO FERNANDO BARBOSA OLARTE, en los términos indicados en la audiencia inicial, en la audiencia de pruebas y en los reiterados requerimientos, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución. (...)» (Destaca el Despacho).

Código de verificación:
9b7a4887d05b6dbb534b2d6c987f7e801b9cdecc516ce19f50b1d1faba673f28
Documento generado en 15/04/2021 02:44:56 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2018-00136-00**
DEMANDANTE:	**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**
DEMANDADO:	**RODRÍGO DANIEL CUBILLOS APOLINAR**
MEDIO DE CONTROL:	**REPETICIÓN**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición en subsidio el de queja que interpuso la apoderada judicial de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ contra el auto de 11 de marzo de 2021por medio del cual este Despacho declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 15 de mayo de 2019 (sic), la cual fue corregida por error aritmético el 29 de mayo de 2020 y que corresponde a la fecha de 15 de mayo de 2020.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 15 de mayo de 2020 este Despacho dictó sentencia dentro del presente medio de control negando las pretensiones de la demanda, así («*021Sentencia*»):

«***RESUELVE***

PRIMERO: NEGAR *las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.*

SEGUNDO: *Sin* ***CONDENA EN CONTAS*** *conforme se señaló.*

(..)».

2.2. En aplicación del artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el 1º de junio de 2020 se llevó a cabo en debida forma la notificación a las partes de la corrección de la sentencia de 29 de mayo de 2020 (*«024CorrecciónSentencia»*).

2.3. El Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del 16 de marzo de 2020 en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20.11581 se ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020**.

2.4. La sentencia del asunto de la referencia quedó ejecutoriada el 14 de julio de 2020 a las 5:00 p.m. conforme se desprende de la constancia secretarial obrante en el archivo *«025ConstanciaEjecutoria»*.

2.5. Mediante correo electrónico de 14 de julio de 2020 la apoderada judicial de la parte demandante interpuso el recurso de apelación en contra del fallo proferido en el asunto de la referencia, pero ante el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT, CUNDINAMARCA (folio 5 *«026RecursoApelacion»*).

2.6. El 2 de marzo de 2021 el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT remitió a este Despacho el recurso impetrado por la apoderada judicial el 14 de julio de 2020 (*«026RecursoApelacion»*).

2.7. El 11 de marzo de 2021 este Despacho declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la E.S.E. HOSPITAL SAN

RAFAEL DE FUSAGASUGÁ contra la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020-corregida el 29 de mayo siguiente- por considerarse que no satisface los requisitos esbozados en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo («*029AutoDeclaraDesiertoRecurso*»).

2.8. El 12 de marzo de 2021 se surtió en debida forma la notificación del anterior auto («*030NotificacionEstado12Marzo*»).

2.9. El 17 de marzo de 2021 la apoderada judicial de la parte actora interpuso y sustentó el recurso de reposición y en subsidio queja contra la providencia proferida por este Juzgado el 11 de marzo hogaño, con fundamento en lo siguiente («*031ReposicionSubsidioQueja*»):

2.9.1. Alega que por un error involuntario radicó el recurso de apelación ante el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT.

2.9.2. Refiere que «*teniendo en cuenta que nos encontramos en el proceso de transición de la presencialidad a la virtualidad de radicar todas las actuaciones judiciales, suplico su señoría, en virtud de la facultad de sanear el proceso en cualquier etapa de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)*».

2.10. El 24 de marzo de 2021 la Secretaría del Despacho corrió traslado del recurso incoado («*033EnvioTraslado24marzo*»).

2.11. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer («*034ConstanciaDespacho*»).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, sea lo primero determinar la procedencia de los recursos de reposición y en subsidio queja que interpuso la apoderada judicial de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ contra el auto que declaró desierto el recurso de apelación incoado contra el fallo proferido el 15 de mayo de 2020-corregido el 29 de mayo siguiente-, para lo cual el Despacho se remite a lo dispuesto en los artículos 242, 243 y 245 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 353 del Código General del Proceso, que consagran las providencias sobre las cuales proceden tanto el recurso de reposición como el de queja, en los siguientes términos:

En cuanto al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:

> «**Artículo 242.** ***REPOSICIÓN.*** El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso».
>
> «**Artículo 243.** ***APELACIÓN***. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:
>
> 1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.
>
> 2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
>
> 3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.
>
> 4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.
>
> 5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.
>
> 6. El que niegue la intervención de terceros.
>
> 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.

8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.

Parágrafo 1º. El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.

Parágrafo 2º. En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir.

Parágrafo 3º. La parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente sustentado, podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la apelación.

La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.

Parágrafo 4º. Las anteriores reglas se aplicarán sin perJu1c10 de las normas especiales que regulan el trámite del medio de control de nulidad electoral».

«**Artículo 245.** ***QUEJA.*** Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente.

Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en un efecto diferente al señalado en la ley y cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este código.

Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código General del Proceso».

En lo que respecta al Código General del Proceso:

«**Artículo 353.** ***INTERPOSICIÓN Y TRÁMITE.*** El recurso de queja deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación o la casación, salvo cuando este sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria.

> Denegada la reposición, o interpuesta la queja, según el caso, el juez ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual se procederá en la forma prevista para el trámite de la apelación. Expedidas las copias se remitirán al superior, quien podrá ordenar al inferior que remita copias de otras piezas del expediente.
>
> El escrito se mantendrá en la secretaría por tres (3) días a disposición de la otra parte para que manifieste lo que estime oportuno, y surtido el traslado se decidirá el recurso.
>
> Si el superior estima indebida la denegación de la apelación o de la casación, la admitirá y comunicará su decisión al inferior, con indicación del efecto en que corresponda en el primer caso».

En virtud de lo anterior, se verifica, en el sub iudice, que el auto que se ataca no es una providencia de las que expresa y taxativamente están consagradas en el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, por ello, procede el recurso de reposición a la luz del artículo 242 *ibidem*, así como también es procedente, en el evento en que no se reponga la decisión censurada, el recurso de queja.

Clara la procedencia de los recursos incoados de manera oportuna[1], se abordará el análisis que le corresponde a este Juzgado para resolver el recurso de reposición.

Así las cosas, se recuerda que la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020 y corregida el 29 de mayo siguiente, fue notificada en los términos del artículo 203 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el **1º de junio de 2020** (*«024NotificacionCorreccionSentencia»*), no obstante, se resalta que los términos judiciales estuvieron suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión del COVID-19, por lo que el término para **interponer** y sustentar el recurso de alzada ante la autoridad que

[1] El auto de 11 de marzo de 2021 se notificó al siguiente día, de conformidad con el artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dicha notificación se entiende realizada dos (2) días después de haberse enviado el mensaje, ante lo cual, se tiene que el recurrente se tuvo por notificado el 16 de marzo de 2021. Por lo que tenia hasta el 19 de marzo de 2021 para recurrir de la decisión (términos de 3 días), no obstante, presentó los recursos el 17 de marzo de 2021. Lo que deviene que acudió dentro del término oportuno.

profirió la providencia empezaba a correr el 1º de julio de 2020 y feneció el **14 de julio de 2020**.

No obstante, se itera lo considerado en la providencia de 11 de marzo de 2021 ya que la apoderada judicial de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ si bien interpuso dentro del término conferido para el efecto el recurso de apelación, esto es, el **14 de julio de 2020**, **lo cierto es que no se hizo ante la autoridad que profirió la providencia**, como lo exige el numeral 1º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues, se reitera, el correo electrónico enviado por la apoderada de la parte actora el 14 de julio de 2020 tuvo como destino la siguiente dirección electrónica: «*jadmin02gir@cendoj.ramajudicial.gov.co*» que corresponde, como lo corrobora en su escrito de reposición y en subsidio queja, al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT, y no al de este Despacho, quien, se insiste, fue la autoridad que profirió la sentencia de 15 de mayo de 2020-corregida el 29 de mayo siguiente. Por lo que la sentencia cobro ejecutoria el 14 de julio de 2020.

Robustece lo anterior, el hecho de que las mentadas providencias se notificaron desde el canal digital de este Despacho, por lo que no es admisible para el Despacho que el escrito del recurso de 14 de julio de 2020 se haya radicado o interpuesto ante una autoridad judicial diferente. Frente a este punto, se trae a colación, una vez más, el numeral 10º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 «*por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado*», que establece como uno de los deberes profesionales del profesional del derecho; el «*atender con celosa diligencia sus encargos profesionales*», pues, no es de recibo la desatención ocurrida por la apoderada cuando salta a la vista que el numeral 1º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es supremamente claro en lo que refiere a los presupuestos para la procedencia de la concesión del recurso de apelación contra sentencias[2].

[2] Para ello se trae a colación los siguientes artículos del Código Civil: «Artículo 27. INTERPRETACION GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu» y «Artículo 28. SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. Las palabras de la ley se

Se destaca, en el mismo sentido que, en relación con el incumplimiento de algunos de los requisitos del recurso de apelación, el H. Consejo de Estado ha declarado desierto el mismo, precisando:

> «*Por lo expuesto, el Despacho declarará desierto el recurso de apelación, por* ***incumplimiento de uno los presupuestos*** *para decidirlo (…)*»[3].

En el mismo hilo, la doctrina respecto al recurso de apelación ha esbozado lo siguiente:

> «*Así las cosas respecto a los recursos, Alfonso Rivera (2014) citando la definición de Palacio advierte que los recursos son actos procesales en "cuya virtud la parte que se considera agraviada por una resolución judicial* ***pide su reforma o anulación, total o parcial, sea al mismo juez o tribunal que la dictó*** *o a un juez o tribunal jerárquicamente superior" (p. 502) (…).*
> *(…)*
>
> *(…) El maestro Miguel Rojas realiza una precisión cuando de sustentación de la sentencia se trata, afirmando que se lleva a cabo en dos momentos, el primero "la precisión breve de los reparos del fallo"* ***en el cual se realiza ante el juez de primera instancia*** *quien oirá la enunciación de las razones de la impugnación y el segundo "la sustentación propiamente dicha" en donde el juez de segunda instancia (…)*»[4] (Destaca el Despacho).

Ahora bien, la apoderada judicial de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ en el escrito que centra la atención del presente pronunciamiento solicita sanear el proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin endilgar, precisar, o comentar para este Despacho algún «*vicio que acarree nulidad*», motivo por el cual este Juzgado se relevara de efectuar su estudio.

Si es gracia de discusión, para emitir pronunciamiento se admitiera el argumento central de su discordia con la providencia calendada el 11 de marzo

---

entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal».

[3] Providencia de 3 de abril de 2020, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZI, radicación número: 25000-23-36-000-2018-01095-01(64843).

[4] QUINTERO, GONZÁLEZ, Armando Augusto, «El recurso de apelación en el Código General del Proceso: un desatino para la justicia colombiana». Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6132861.pdf

de 2021 (en el sentido de darle el alcance de algún vicio que pudiese acarrear nulidad), se tiene, a todas luces, que este no se encausaría en ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso.

Por lo reiterado, y como quiera que la apoderada judicial de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ no interpuso y sustentó el recurso de alzada con el cumplimiento de los presupuestos procesales que la ley le impone, en particular, **el de haberlo presentado ante este Despacho, quien, se reitera, es la «*autoridad que profirió la providencia*» que se pretende impugnar**, resulta imperioso no reponer la decisión atacada.

De ese modo, con lo anterior y aunado a las razones planteadas en la providencia que declaró desierto el recurso de apelación, esta Instancia Judicial no repondrá la decisión recurrida, habida cuenta que, se insiste, el artículo 247[5] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone de manera clara y expresa que el recurso de apelación contra sentencia deberá **interponerse** y sustentarse dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación ante la «*autoridad que profirió la providencia*» que se pretende impugnar, situación, que como se advierte con claridad no sucedió en el sub iudice.

Consecuentemente, como quiera que no se repondrá la decisión adoptada en el auto de 11 de marzo de 2021 y, atendiendo el contenido del artículo 245 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (modificado por el artículo 65 de la Ley 2080 de 2021) que eliminó la competencia para conceder el recurso de queja ante el Superior, por cuanto se estableció de

---

[5]«**Artículo 247. *TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS.*** El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

(...)

3. si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá mediante auto en el que se dispondrá a remitir el expediente al superior (...)».

manera expresa por el legislador que «*este recurso se **interpondrá** ante el superior cuando (…) se declare desierta la apelación*», este Despacho en aras de los principios de la recta administración de la justicia, celeridad y eficiencia, ordenará remitir la presente actuación al Superior para lo de su competencia.

Para dar trámite a lo anterior, y como consecuencia de la virtualidad en la que se encuentra la Rama Judicial, no se ordenará el pago de las expensas necesarias de que trata el artículo 353 concordante con el artículo 324 del Código General del Proceso, habida consideración que el expediente se encuentra digitalizado.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: NO REPONER el auto de 11 de marzo de 2021, por medio del cual se declaró desierto el recurso de apelación incoado por la apoderada judicial de la parte actora contra la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020-corregida el 29 de mayo siguiente-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REMÍTASE la presente actuación a la SECCIÓN TERCERA DEL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA para lo de su competencia.

TERCERO: Por Secretaría, **ENVÍESE Y/O PERMÍTASE EL ACCESO** al expediente digitalizado a la SECCIÓN TERCERA DEL H- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
B430F9822CEFECBFF508C94038BB6924C4AC18F3899105ABFCD8B94F4C3E44BC
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:51 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2018-00199-00**
DEMANDANTE:	**MUNICIPIO DE RICAURTE**
DEMANDADO:	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARÍA DE HACIENDA**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 24 de agosto de 2018 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento el derecho presentó el MUNICIPIO DE RICAURTE, por conducto de apoderado judicial, contra el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, con el propósito de obtener la nulidad de las Resoluciones No. 2268592 de 25 de mayo de 2017 y 422 de 16 de febrero de 2018, por medio de las cuales el Ente departamental expidió la liquidación de aforo por el vehículo de placas PRP89A y desató el recurso de consideración, respectivamente («*009AutoAdmiteDemanda*»).

1.2. Encontrándose el proceso pendiente para la realización de la audiencia inicial y previo requerimiento efectuado por este Despacho al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, el 27 de enero de 2020 el doctor LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO, en su calidad de Director de Rentas y

Gestión Tributaria (E) de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, certificó «*que con base en la expedición de la Ordenanza No. 074 de 2018 de la Honorable Asamblea Departamental, se han cerrado de manera oficiosa, todos los procesos de cobro por Liquidación Oficial de impuestos de vehículos automotores, que estaban expedidos y en curso sobre vehículos de Uso Oficial*» (folio 1 «*024AllegaDocumental*»).

1.3. Por ello, este Juzgado por medio del auto de 13 de febrero de 2020 puso en conocimiento de la parte demandante y mediante auto de 4 de febrero de 2021 requirió al apoderado judicial del MUNICIPIO DE RICAURTE para que, primero, se manifestara respecto de la anterior afirmación realizada por el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y, segundo, informara el estado actual del proceso de Liquidación de Aforo que se tramita sobre el vehículo de placas PRP89A («*026AutoPoneConocimiento*» y «*036AutoRequiere*»).

1.4. El 3 de febrero de 2021 el doctor ÁNGEL MAURICIO CORTES MARTÍNEZ allegó el poder conferido por la Alcaldesa Municipal de Ricaurte doctora GLORIA RICARDO DONCEL junto con la documental que acredita la calidad de poderdante por lo que ha de reconocerse personería adjetiva para actuar («*038PoderMunicipio*»).

1.5. Ante el requerimiento de 4 de febrero de 2021, el 3 de marzo hogaño el doctor ÁNGEL MAURICIO CORTES MARTÍNEZ, en su condición de apoderado judicial del MUNICIPIO DE RICAURTE, allegó escrito en el que señaló que revisada la documentación aportada por la parte demandada y verificada la página web de la Gobernación de Cundinamarca: http://190.60.106.213/sivervcundinamarca/liquidacionweb/motos/listado.php?placa=PRP89A, evidenció que se dio por terminado el proceso de cobro del impuesto sobre el vehículo (motocicleta) de placas PRP89A, por lo que considera que al desaparecer de la vigencia jurídica, los supuestos fácticos o jurídicos que motivaron la interposición de la demanda sería del caso dar por terminado el proceso, sin embargo indica que se debe requerir a la demandada para que certifique si existió o no pago por parte del MUNICIPIO DE

RICAURTE respecto al cobro realizado y de ser positivo proceder con el reintegro de dichas sumas de dinero con su indexación e intereses de mora a que haya lugar. (*«039EscritoMunicipio»*).

1.6. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«046ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, en cuanto a la solicitud elevada por la parte actora en el sentido de oficiar a la demandada para que allegue certificación sobre sí el MUNICIPIO DE RICAURTE efectuó pago alguno respecto al cobro realizado en virtud de la liquidación de aforo por el vehículo de placas PRP89A, debe señalarse que dicha carga procesal debe encontrarse en su poder, sin embargo, el Despacho accederá a la misma y además se requerirá en tal sentido a la parte actora.

De otro lado, como quiera que el doctor LUIS ARMANDO ROJAS QUEVEDO, en su calidad de Director de Rentas y Gestión Tributaria (E) de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, certificó *«que con base en la expedición de la Ordenanza No. 074 de 2018 de la Honorable Asamblea Departamental, se han cerrado de manera oficiosa, todos los procesos de cobro por Liquidación Oficial de impuestos de vehículos automotores, que estaban expedidos y en curso sobre vehículos de Uso Oficial»*, se hace necesario contar con la prenombrada ordenanza y para el efecto se requerirá en tal sentido.

Finalmente, si conforme a la certificación expedida por el Departamento de Cundinamarca el proceso de cobro por la liquidación de aforo del vehículo de placas PRP89A en virtud de Ordenanza No. 074 de 2018 se encuentra cerrado es del caso requerir a dicha Entidad para que allegue la constancia de cierre y/o archivo definitivo del mismo.

Lo anterior previo a realizar un análisis respecto de la posibilidad de terminar el presente proceso por presentarse una carencia actual del objeto.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRASE a los apoderados judiciales de las partes en el término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este auto, manifiesten si el MUNICIPIO DE RICAURTE ha pagado suma alguna por concepto del impuesto sobre el vehículo motocicleta con placa PRP89A para la vigencia 2012.

SEGUNDO: REQUIÉRASE al apoderado judicial del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA para que, de igual modo, en el término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este auto, allegue, ***i)*** copia de la Ordenanza No. 074 de 2018 y ***ii)*** en el caso de proceder para la Entidad que representa, la constancia de cierre y/o de archivo del expediente de determinación del impuesto sobre el vehículo automotor oficial identificado con placa PRP89A para la vigencia 2012.

TERCERO: RECONÓCESE PERSONERÍA ADJETIVA al doctor ÁNGEL MAURICIO CORTÉS MARTÍNEZ para actuar como apoderado judicial del MUNICIPIO DE RICAURTE, de conformidad con el poder visible en el archivo «*038PoderMunicipio*» del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
A6AD3E8E3C5E935322827120D867529373A7778A6BF6506E8343F3DBECD1673B
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:20 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2018-00234-00**
DEMANDANTE:	**LUZ ADIELA VILLEGAS GÓMEZ**
DEMANDADO:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante auto de 4 de febrero de 2021 ***i)*** se requirió a la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA para que certificara las direcciones de notificaciones judiciales físicas y/o electrónicas de la liquidadora de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MÉDICA ESPECIALIZADA MEGACOOP EN LIQUIDACIÓN indicando los nombres y el número de identificación y ***ii)*** se dispuso oficiar a la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA para que constituyera apoderado judicial (*«028AutoRequiere»*).

1.2. El 9 de febrero de 2021 el doctor JAVIER ARCENIO GARCÍA MARTÍNEZ allegó poder a él conferido por el doctor ÉDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS en calidad de representante legal de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA junto con la documental que acredita la calidad de poderdante (*«030EscritoHospitalSamaritana»*).

1.3. El 8 de marzo de 2021 el doctor BERNARDO LEÓN ORTIZ POSADA en calidad de Intendente de Cooperativas y otras Organizaciones de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la Forma Asociativa Solidaria de la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA informó que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MÉDICA ESPECIALIZADA MEGACOOP EN LIQUIDACIÓN (*«032EscritoSuperSolidaria»*):

> *«…entró en liquidación voluntaria mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha diecinueve (19) de septiembre de 2016, acta que nos fue remitida con radicado número 20164400270642 del catorce (14) de octubre de 2016.*
>
> *Así mismo, se le informa que mediante la misma acta se nombró como Liquidador a la doctora Diana Marcela Bermúdez Rojas y sus datos de contacto son los siguientes:*
>
> *Dirección: Carrera 7A N° 21A – 53, Barrio San Antonio, Girardot, Cundinamarca*
> *Correo electrónico: coomega.megacoop@gmail.com y famar86@hotmail.com*
> *Teléfono: (1) 8352998; celular: 3016579564».*

1.4. El proceso ingresó al Despacho el 12 de abril de 2021 (*«033ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, evidencia el Despacho que el proceso se encuentra pendiente de notificar la demanda a las vinculadas EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT y a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEGACOOP ahora COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MÉDICA ESPECIALIZADA MEGACOOP EN LIQUIDACIÓN a través de su agente liquidador, la doctora DIANA MARCELA BERMÚDEZ ROJAS teniendo en cuenta los datos de contacto suministrados por la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA a saber: «*Dirección: Carrera 7A N° 21A – 53, Barrio San Antonio, Girardot, Cundinamarca, Correo electrónico: coomega.megacoop@gmail.com y famar86@hotmail.com, Teléfono: (1) 8352998; celular: 3016579564*».

En tal sentido deberá procederse con la notificación a las mencionadas, teniendo en cuenta que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT por ser una Entidad Pública sus canales de notificación son los dispuestos y/o dados a conocer a través de su página oficial (http://www.esehospitaldegirardot.gov.co/).

De otro lado, en atención a la emergencia de salud pública generada por el Covid-19 que dio origen a la expedición del Decreto 806 de 2020 *«Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica»*, este Despacho considera pertinente dejar sin efecto lo dispuesto en el ordinal quinto del auto de 21 de octubre de 2019, habida cuenta que al realizarse las notificaciones de manera electrónica no se incurre en gastos procesales.

En consecuencia, **SE DISPONE**:

PRIMERO: DEJAR sin efecto el ordinal quinto del auto de 21 de octubre de 2019 que ordenó a la parte demandante el pago de los gastos para la notificación a los vinculados-COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEGACOOP y a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT-, conforme a lo expuesto en parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR el proceso de la referencia a las vinculadas COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MÉDICA ESPECIALIZADA MEGACOOP ahora COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MÉDICA ESPECIALIZADA MEGACOOP EN LIQUIDACIÓN a través de su agente liquidador y a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT conforme a lo dispuesto en el auto de 21 de octubre de 2019.

TERCERO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA al

doctor JAVIER ARCENIO GARCÍA MARTÍNEZ en los términos y para los efectos del poder a él conferido obrante en el archivo *«030EscritoHospitalSamaritana»*.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
16DF8CA747E30EC842880174F70E614092F24015CDE45F09D7E125066D7E4280
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:44:21 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2018-00268-00**
Demandante:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP**
Demandado:	**PATROCINIO CORREDOR AGUILLON en calidad de beneficiario de la pensión de sobreviviente de la causante LIGIA BAQUERO DE CORREDOR.**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-LESIVIDAD**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

En trámite de incidente de nulidad, mediante auto de 11 de marzo de 2021 se requirió al representante legal de la **EMPRESA DE MENSAJERÍA 4-72** o a quien hiciera sus veces para que, rindiera un informe sobre el por qué en detalles de envío de la guía No. RA086679812CO, se desprende que la misma tuvo como ciudad de destino Cartagena y no Turbaco Bolívar, última que fue la suministrada en el oficio No. 296 de 4 de marzo de 2019.

En virtud de lo anterior, la doctora ANDREA DEL PILAR SATOBA, en calidad de Coordinadora Ans Corporativo de la EMPRESA DE MENSAJERÍA 4-72, el 6 de abril de 2021 allegó el oficio PQR- CENT- 4937-21, mediante el cual informa las acciones adelantadas respecto a la guía No. RA086679812CO, en efecto señaló:

> *«En razón a lo anterior esta oficina procedió a revisar la trazabilidad del envío RA086679812CO con el área encargada mediante la cual nos informan que se realizó visita en el predio ubicado en la dirección Urbanización La Granja M A Lote 28 Apartamento 201 en el municipio de Turbaco Bolívar y manifiestan que se contactaron con la señora Ovelisa Torres la cual manifiesta que la dirección es correcta, sin embargo en la visita realizada el pasado 29 de marzo de 2019 no fue posible contactarse con el destinatario motivo por el cual el envío es devuelto a la entidad remitente».*

Como prueba de lo manifestado, allegó el registro fotográfico del bien inmueble ubicado en la «*Urbanización la Granja MZ A LT28 AP201, en el Municipio de Turbaco –Bolívar*».

En ese orden, previo a adoptar una decisión de fondo, se hace necesario poner en conocimiento de las partes y del Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho la documental allegada por la EMPRESA DE MENSAJERÍA 4-72, con el fin de que se pronuncien al respecto.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: PÓNGASE en conocimiento de las partes y del Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho la documental allegada por la EMPRESA DE MENSAJERÍA 4-72 el6 de abril de 2021, con el fin de que dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación del presente proveído, si a bien lo tienen, realicen pronunciamiento al respecto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
283a5db49b8a25d1c4115e98ec1de8230348788d6622227499249f1cfda8ee1b
Documento generado en 15/04/2021 02:44:22 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2018-00293-00**
Demandante:	**ANA MIREYA PULIDO CASAS y OTROS**
Demandado:	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARÍA DE SALUD, EPS CONVIDA, EPS COMFACUNDI y la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ.**
Llamados en Garantía:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS COODESME, FUNDACIÓN SINERGIA Y SOCIEDAD, SEGUROS DEL ESTADO y la COMPAÑÍA SURAMERICANA.**
Medio de Control:	**REPARACIÓN DIRECTA**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a emitir pronunciamiento respecto a la vinculación de oficio del HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA, de conformidad con el artículo 61 del Código General del Proceso.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveídos de 8 de noviembre de 2018 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de reparación directa presentó la señora ANA MIREYA PULIDO CASAS en nombre propio y en representación de sus hijos YISETH SOLANGIE AMAYA PULIDO, JHON

JAIRO PERALTA PULIDO y CEIBY VICTORIA RIÓS PULIDO, así como de su nieto BRAYAN SMITH PULIDO PACHECO por conducto de apoderado judicial, contra el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARÍA DE SALUD, la EPS-S CONVIDA, la EPS COMFACUNDI y la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFARL DE FUSAGASUGÁ, con el propósito de que se declaren administrativa y extracontractualmente responsables con ocasión del deceso de su hijo BRAYAN ARLEY PULIDO CASAS con ocasión de la falla en la prestación del servicio médico oportuno. (*«010AutoAdmite»*).

2.2. El 29 de noviembre de 2018 se acreditó el pago de los gastos procesales, por lo que el 21 de enero de 2019 se realizó la notificación personal del a demanda. (*«011PagoGastos»* y *«012NotificacionPersonal»*).

2.3. El 13 de marzo de 2019 el apoderado judicial del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA allegó contestación de la demanda sin la proposición de excepciones previas (*«013ContestacionDeptoCmarca»*).

2.4. El 2 de abril de 2019 el apoderado judicial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ allegó contestación de la demanda sin la proposición de excepciones previas, solicitando se llame en garantía a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-COODESMECTA, a la FUNDACIÓN SINERGIA Y SOCIEDAD, a SEGUROS DEL ESTADO y a la compañía SURAMERICANA. (*«014ContestacionHospital Fusagasuga»*).

2.5. El 4 de abril de 2019 el apoderado judicial de la EPS COMFACUNDI allegó contestación de la demanda sin la proposición de excepciones previas (*«015ContestacionCOMFACUNDI»*).

2.6. El 8 de abril de 2019 el apoderado judicial de la EPS CONVIDA allegó la contestación de la demanda sin la proposición de excepciones previas (*«016ContestacionConvida»*).

2.7. El 9 de mayo de 2019 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 8 de mayo de 2019 (*«017ConstanciaSecretarial»*).

2.8. El 16 de mayo de 2019 se admitió como llamamiento en garantía de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-COODESMECTA, a la FUNDACIÓN SINERGIA Y SOCIEDAD, a SEGUROS DEL ESTADO y a la compañía SURAMERICANA. (*«004AutoAdmiteLlamamientoGtia»* del cuaderno de llamamiento en garantía).

2.9. El 4 de septiembre de 2019 se acreditó el pago de los gastos procesales, por lo que el 5 de septiembre siguiente se notificó a las llamadas en garantía. (*«005PagoGastos»* y *«006NotificacionPersonalLlamamiento»* del cuaderno de llamamiento en garantía).

2.10. El 26 y 27 de septiembre de 2019 el apoderado judicial del llamado en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A. contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas. (*«007ContestacionSegurosdelEstado»* y *«009ContestacionSegurosdelEstado»* del cuaderno de llamamiento en garantía).

2.11. El 26 de septiembre de 2019 el apoderado judicial del llamado en garantía SURAMERICANA contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas. (*«008ContestacionSuramericana»* del cuaderno de llamamiento en garantía).

2.12. El 1° de octubre de 2019 de manera extemporánea el apoderado judicial del llamado en garantía FUNDACIÓN SINERGIA Y SOCIEDAD contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas. (*«012Contestacion»* del cuaderno de llamamiento en garantía).

2.13. El 30 de septiembre de 2019 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado

de la demanda para los llamados en garantía feneció el 26 de septiembre de 2019 (*«010IngresoDespacho»* del cuaderno de llamamiento en garantía).

2.14. El 4 de octubre de 2019 la Secretaría de este Juzgado fijó en lista las excepciones planteadas (*«024FijacionLista»* del cuaderno principal).

2.15. El 16 de enero de 2020 encontrándose el proceso pendiente de citar a audiencia inicial se aceptó la renuncia a unos poderes y se requirió a las Entidades para que constituyeran los mismos (*«030AutoRequiiere»* del cuaderno principal).

2.16. Por auto de 12 de noviembre de 2020 se ordenó que por secretaría se organizara el expediente híbrido digitalizado atendiendo las instrucciones impartidas por parte de la suscrita Juez en los términos consignados en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 6 de junio de 2020 y en la Circular PCSJC20-27 de 21 de julio de 2020 proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. (*«039AutoCumplase»* del cuaderno principal).

2.17. Por auto de 4 de diciembre de 2020 se reconoció personerías, se efectuaron unos requerimientos de constituir apoderados y se puso en conocimiento la comunicación de «*intervención forzosa administrativa para liquidar el PROGRAMA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CUNDINAMARCA-COMFACUNDI EN LIQUIDACIÓN ENTIDAD IDENTIFICADA CON NIT 860.045.904-7y Medidas Preventivas*». (*«044AutoRequiere»* del cuaderno principal).

2.18. Mediante auto de 18 de febrero de 2021 encontrándose pendiente por cumplir el requerimiento de constitución de apoderado de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, se requirió en tal sentido (*«054AutoRequiere»* del cuaderno principal).

2.19. El 22 de febrero de 2021 la doctora ANA KATHERINE MEDELLÍN GUTIÉRREZ allegó poder a ella conferido por parte del doctor ANDRÉS

MAURICIO GONZÁLEZ CAYCEDO en calidad de Representante Legal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, junto con la documental que acredita la calidad de poderdante. («*056PoderMunicipio*» del cuaderno principal).

2.20. El proceso ingresó al Despacho el 12 de abril de 2021 (Archivo denominado «*057ConstanciaDespacho*» del cuaderno principal).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, una vez revisado el expediente, el Despacho considera necesario hacer las siguientes precisiones:

El artículo 61 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prevé la figura del litisconsorcio necesario e integración del contradictorio de la siguiente manera:

> «**Artículo 61.** ***LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO.*** Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.
>
> En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.
>
> Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.
>
> Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen

> disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.
>
> Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio».

En ese sentido, de conformidad con el inciso 2º del artículo en cita, el Juez de oficio, y hasta antes de la sentencia, puede disponer de la vinculación de personas cuando advierta que son indispensables para decidir de fondo en el proceso.

Conforme a lo expuesto y como quiera que dentro de los fundamentos facticos esbozados en el líbelo introductorio se tiene que el señor BRAYAN ARLEY PULIDO CASAS (q.e.p.d.) previo a su deceso, fue remitido del HOSPITAL DE FUSAGASUGÁ al HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA en el que estuvo hospitalizado desde el 10 de abril de 2016 y para el 3 de junio del mismo año aun lo estaba, encontrándose a la espera de trámites de atención domiciliaria conforme se desprende de la certificación obrante en el folio 138 del archivo *«002DemandaPoderAnexos»*, considera el Despacho que la demanda también debió dirigirse contra el HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA, en atención a que allí fue atendido en virtud del incidente sufrido el 9 de abril de 2016, por lo que en una eventual condena podría concurrir obligaciones y por consiguiente tiene interés en las resultas del proceso.

En virtud de lo anterior, conforme lo dispone el artículo 61 del Código General del Proceso, por cumplir con los requisitos exigidos en la ley y como quiera que el presente asunto no puede resolverse sin la comparecencia del HOSPITAL DE FUSAGASUGÁ al HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA, el Despacho ordenará su vinculación como litisconsorte necesario de la parte pasiva con el fin de integrar en debida forma el contradictorio.

De otro lado se reconocerá personería adjetiva para actuar como apoderada judicial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ a la doctora ANA KATHERINE MEDELLÍN GUTIÉRREZ en los términos y para los efectos del poder a ella.

Finalmente, como quiera que la llamada en garantía COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-COODESMECTA, no contestó la demanda (pese a que fue notificada en debida forma), ni ha constituido apoderado judicial para que ejerza su derecho de contradicción y defensa, se requerirá para que en ejercicio de su derecho de postulación constituya apoderado judicial.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: VINCÚLESE al presente asunto como litisconsorte necesario de la parte demandada al HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA, conforme lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE en la forma prevista en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, al Representante Legal del HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA, o a quien haga sus veces o este haya delegado la facultad de recibir notificación y al señor **PROCURADOR DELEGADO** en lo judicial ante este Despacho.

TERCERO: ADVIÉRTESE al HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA que, durante el término para dar respuesta a la presente demanda, **DEBERÁ <u>allegar la historia clínica del señor BRAYAN ARLEY PULIDO CASAS (q.e.p.d.) identificado con tarjeta de identidad No.98062557109 y que tenga en su poder.</u>** Lo anterior de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: CÓRRASE TRASLADO de la demanda por el término de treinta (30) días de conformidad con el artículo 172 *ibídem* al Representante Legal del HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA y al señor **PROCURADOR DELEGADO** en lo judicial ante este Despacho, el cual comenzará a correr según lo previsto en los artículos 199 y 200 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: ORDÉNASE a la Secretaría del Despacho dar estricto cumplimiento a los previsto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: REMÍTASE a través del correo electrónico institucional la copia del presente auto, de la demanda y de sus anexos al HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE CUNDINAMARCA y al Ministerio Público

SÉPTIMO: RECONÓCESE PERSONERÍA ADJETIVA a la doctora ANA KATHERINE MEDELLÍN GUTIÉRREZ para actuar como apoderada judicial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOHOSPITALSAN RAFAELDE FUSAGASUGÁ, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido obrante en el archivo «*056PoderMunicipio*» del cuaderno principal.

OCTAVO: REQUIÉRASE al representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-COODESMECTA- para que en el término de los 10 días siguientes a la notificación de la presente providencia constituya apoderado judicial que represente a dicha Entidad.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
5bce12d13b03d3c105e19dbb34e0ae3dbf4fb706e2851b5a5d307237755fa1ec
Documento generado en 15/04/2021 02:44:23 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2018-00332-00**
DEMANDANTE:	**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
DEMANDADO:	**CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRÁN y GRISELA MONROY HERNÁNDEZ**
MEDIO DE CONTROL:	**REPETICIÓN**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial del señor CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRÁN contra el auto proferido por este Despacho el 4 de marzo de 2021 en el que se resolvió dar aplicación al trámite de la sentencia anticipada dentro del proceso de la referencia de conformidad con el numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 23 de diciembre de 2018 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de repetición presentó el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, por conducto de apoderado judicial, contra los señores CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRÁN y GRISELA MONROY HERNÁNDEZ, con el propósito de declarar que los demandados obraron con

culpa grave como consecuencia de los hechos que dieron lugar al pago que tuvo que efectuarse a la sociedad FERRY SERVICES LTDA. (*«005AutoAdmiteDemanda»*).

2.2. El 15 de marzo de 2019 se llevó a cabo la notificación del líbelo introductorio al señor Procurador 199 Judicial I delegado para asuntos administrativos ante este Despacho (folio 1 *«007NotificacionPersonal»*).

2.3. El 9 de abril de 2019 se llevó a cabo la notificación por aviso de la demanda a los demandados (folios 9 a 18 *«007NotificacionPersonal»*).

2.4. El 2 de mayo de 2019 el señor CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRÁN, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas (*«008ContestacionDemanda»*).

2.5. El 26 de agosto de 2019 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 3 de julio de 2019 (*«009ConstanciaControlTerminos»*).

2.6. Motivo por el cual el 27 de agosto de 2019 la Secretaría de este Juzgado fijó en lista las excepciones planteadas (*«010FijacionLista»*).

2.7. El 30 de agosto de 2019 el apoderado judicial del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ se pronunció frente a las excepciones propuestas por la parte demandada (*«011EscritoParteActoraDescorreExcepcionesPropuestas»*).

2.8. El 10 de diciembre de 2019 la señora GRISELA MONROY HERNÁNDEZ allegó escrito por medio del cual confirió poder al doctor SANTIAGO CAÑÓN BELTRÁN (*«015PoderParteDemandada»*).

2.9. El 15 de enero de 2020 el apoderado judicial de la señora GRISELA MONROY HERNÁNDEZ presentó incidente de nulidad a partir del auto admisorio de la demanda por indebida notificación de este en consideración a

que la notificación del referido auto se efectuó a las dependencias de la Alcaldía Municipal cuando la señora MONROY HERNÁNDEZ dejo de laborar en dicho lugar (*«002EscritoNulidadGriselaCañonBeltran»*).

2.10. El 13 de febrero de 2020, previo traslado del incidente de nulidad a la parte actora, este Despacho resolvió no declarar la nulidad alegada en consideración a que esta se encontraba saneada por la institución de la notificación por conducta concluyente que se advertía como consecuencia de que la señora GRISELA MONROY HERNÁNDEZ había constituido apoderado judicial para que la representara en el presente asunto (*«007AutoNoDeclaraNulidadPropuesta»* del cuaderno *«CuadernoIncidente»*).

2.11. De igual modo, ese mismo día, esto es, el 13 de febrero de 2020 este Juzgado dispuso realizar nuevamente el conteo del término de traslado de la demanda a la señora MONROY HERNÁNDEZ a partir del día siguiente a la notificación de dicho auto (*«021AutoTengasePorNotificadaGriselaMonroy»* del cuaderno *«CuadernoPrincipal»*).

2.12. El 2 de marzo de 2020 la doctora SANDRA ELENA MAHECHA RUEDA, en su condición de Secretaría Jurídica del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ confirió poder a la doctora YOHANA YADIRA ALDANA PABÓN para que represente los intereses del Municipio en el asunto de la referencia (*«023PoderMunicipio»*).

2.13. El 25 de agosto de 2020 la señora GRISELA MONROY HERNÁNDEZ, por conducto de apoderada judicial, contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas (*«028ContestacionDemanda»*).

2.14. El 20 de enero de 2021, una vez más la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 25 de agosto de 2020 (*«029ConstanciaTerminos»*).

2.15. Motivo por el cual el 21 de enero de 2021 la Secretaría de este Juzgado fijó en lista las excepciones planteadas (*«030FijacionLista»*).

2.16. El 4 de marzo hogaño este Despacho, en aplicación el numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre otras, dio aplicación a la norma en comento, declaró cerrado el período probatorio y fijó el litigio (*«032AutoFijaLitigio»*).

2.17. El 8 de marzo siguiente el apoderado judicial del señor CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRÁN interpuso el recurso de reposición contra el auto de 4 de marzo de 2021, con base en los siguientes argumentos (*«034RecursoReposicion»*):

2.17.1. Alega que la finalidad del recurso es la de adicionar al título de consideraciones del auto recurrido una serie de hechos y argumentos que, aduce, fueron expuestos al contestar la demanda «*y que demuestran la ausencia de culpa grave o dolo, como requisito indispensable para la condena de repetición*». Para el efecto, realiza algunas apreciaciones respecto de los hechos relevantes señalados por el Despacho en el auto recurrido.

2.17.2. Concluye la sustentación del recurso manifestando que «*la situación fáctica que se narró al contestar la demanda, pues evidencia, que en efecto el pago que se realizó a la sociedad Services Ltda. fue estudiado por la Administración Municipal quien dispuso tal situación como se desprende del Acta No. 8 de 17 de diciembre de 2015, obrante en el plenario, sin que se haya generado detrimento patrimonial por parte de mi poderdante*» (folio 6 *«017RecursoReposicion»*).

2.18. El 16 de marzo de 2021 se efectuó el traslado del recurso de reposición presentado (*«036CorreoEnvioTraslados16Marzo»*).

2.19. El 5 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho sin que las partes se manifestaran al respecto (*«037ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, es del caso determinar la procedencia del recurso de reposición que interpuso el apoderado judicial del señor CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRÁN contra el auto que proferido por este Despacho el 4 de marzo de 2021 en el que se resolvió dar aplicación al trámite de la sentencia anticipada de conformidad con el numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para lo cual el Despacho se remite a lo dispuesto en el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual prevé:

> «**Artículo 242. *REPOSICIÓN.* El recurso de reposición procede contra todos los autos**, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso» (Destaca el Despacho).

En virtud de lo anterior, se verifica en el sub iudice que en efecto el auto que se ataca es susceptible del recurso de reposición.

Ahora, debe tenerse en cuenta que por remisión expresa del aludido artículo 242 el término para incoar el recurso de reposición es el consagrado en el artículo 318 del Código General del Proceso, esto es, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto que se recurre. En el sub examine, el recurso se interpuso dentro de la oportunidad legal en consideración a que el auto de 4 de marzo de 2021 se notificó por estado el 5 de marzo siguiente (*«033NotificacionEstado5Marzo»*) y, el apoderado judicial del señor DAZA BELTRÁN presentó el escrito de reposición el 8 de marzo de 2021, es decir, al primer día hábil siguiente al de la notificación de la providencia (*«034RecursoReposición»*). Así también el 16 de marzo de 2021 se corrió traslado a la contraparte del recurso incoado tal y como se desprende del archivo *«036CorreoEnvioTraslados16Marzo»*.

En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos formales del recurso objeto de estudio se analizarán los motivos de inconformidad esbozados por el recurrente para determinar si hay lugar a revocar o a confirmar la providencia atacada.

Bajo ese hilo, este Despacho reitera que el objeto del recurso interpuesto consiste en adicionar al título de consideraciones del auto proferido el 4 de marzo de 2021 una serie de hechos y argumentos que, aduce el profesional del derecho que presentó el recurso, fueron expuestos al contestar la demanda «*y que demuestran la ausencia de culpa grave o dolo, como requisito indispensable para la condena de repetición*».

Por lo anterior, esta Instancia Judicial confrontará lo aludido en el escrito que llama la atención de la presente providencia con lo exigido y dispuesto en el numeral 7º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, disposición aplicable en virtud de la remisión que efectúa la aplicabilidad de la institución de la sentencia anticipada, prevista en el 2º inciso del artículo 182A ibidem, para determinar si le asiste razón al recurrente.

En ese estadio de las cosas, se tiene que la fijación del litigio efectuada por este Juzgado en el auto que se recurre obedeció a los hechos que tanto del escrito de la demanda como de sus contestaciones se estuvieron de acuerdo, pues, la norma en comento establece lo siguiente:

> «**Artículo 180.** ***AUDIENCIA INICIAL.*** Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:
>
> (…)
>
> **7. Fijación del litigio.** Una vez resueltos todos los puntos relativos a las excepciones, **el juez indagará a las partes sobre los hechos en los que están de acuerdo**, y los demás extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la de reconvención, si a ello

> hubiere lugar, y con fundamento en la respuesta procederá a la fijación de litigio.
>
> (…)».

Ahora bien, se recuerda que el término hecho, derivado del latín *factus*[1], permite describir aquello que ocurre, la obra o la cuestión a la que se hace referencia.

Es por lo anterior que, entre otras, de conformidad con el numeral 3º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo, es requisito de la demanda que los hechos estén determinados, clasificados y numerados, con el propósito de responde la exigencia que se le hace al demandado dentro del proceso de exponer de manera numerada su posición frente a los hechos narrados por el actor, **debiendo precisar cuáles de ellos se encuentra de acuerdo y cuáles no**.

Lo expuesto con la finalidad de que; ***i)*** se garantice el derecho de contradicción y defensa del demandado y ***ii)*** la posibilidad del operador judicial de fijar adecuadamente el litigio (numeral 7º del artículo 180 ibidem).

De ese modo, y tal como lo ha expuesto el H. Tribunal Administrativo de Boyacá[2] «*en un debate judicial los hechos deben tener relación directa con las pretensiones y, ser eminentemente pertinentes a la controversia planteada, **sin que haya lugar a confundirlos con fundamentos de derecho o con inferencias inductivas o deductivas del demandante***» **y, de manera más amplia, también del demandado**.

Bajo las anteriores apreciaciones este Despacho exalta que los argumentos de discordia del apoderado del señor DAZA BELTRÁN obedecen a que no se tuvieron en cuenta las apreciaciones esbozadas por el profesional del derecho en el escrito de contestación de la demanda de 2 de mayo de 2019

[1] https://dle.rae.es/hecho
[2] Providencia de 16 de abril de 2018, Despacho No. 5, Magistrada Ponente: Doctora CLARA ELISA CIFUENTES ORTÍZ, radicación número: 15001 2333 000 2018 00130 00.

(*«008ContestacionDemanda»)* referente a los hechos 5, 6, 11, 12 y 13 expuestos en el líbelo introductorio (*«034RecursoReposicion»*).

Al respecto, se precisa que la contestación efectuada respecto a los hechos 5, 11, 12 y 13 no corresponden a circunstancias de tiempo, modo o lugar, esto es, no atienden al concepto de hecho en si mismo, **sino que por el contrario responde a apreciaciones subjetivas del demandado y a argumentos propios de la defensa**, máxime cuando de manera expresa se endilgó que no se tenían como ciertos, de la siguiente manera:

> «II. FRENTE A LOS HECHOS
>
> **5. Frente al 5º. No es cierto (...)**
>
> **11. Frente al 11º. No es cierto (...)**
>
> **12. Frente al 12º. No es cierto (...)**
>
> **13. Frente al 13º. No es cierto** (…)» (folios 3 a 6 «008ContestacionDemanda»).

Motivo por el cual no puede pretender el apoderado judicial del señor DAZA BELTRÁN que se reponga la fijación del litigio efectuada cuando, por un lado, salta a la vista que no estuvo de acuerdo con los hechos Nos. 5, 11, 12 y 13 y, por el otro, consecuente con lo anterior, las partes discrepan de estos (contraviniéndose de ese modo lo preceptuado por el numeral 7º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Ahora bien, en lo atinente al hecho No. 6 relativo a que «*mediante acta No. 8 de 17 de diciembre de 2015 el Comité de Conciliación de Fusagasugá dispuso a conciliar el tema que sometió la sociedad Ferry Services Ltda*», se tiene que la parte demandada en su escrito de contestación lo expuso como cierto, empero, con una apreciación subjetiva y/o concepto relativo a la defensa, pues, realiza una apreciación que desborda lo expuesto en el líbelo introductorio, en el cual la parte demandante citó un aparte de la mencionada acta. Aspecto por el cual no puede este Despacho acceder a la reposición planteada. Refuerza lo anterior la circunstancia frente a la cual este Juzgado en el hecho No. 6 del sub - acápite

«*fijación del litigio*» del título «*consideraciones*» de la providencia de 4 de marzo de 2021 (ver folio 8 «*032AutoFijaLitigio*») plasmó, en atención al numeral 7º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo acontecido el 17 de diciembre de 2015, esto es, la promulgación del Acta No. 8 del Comité de Conciliación del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

Razones por las cuales no puede acceder este Despacho a las suplicas del recurso por cuanto que la fijación del litigio se dio con estricta aplicación del numeral 7º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, en ese sentido, no se repondrá la decisión adoptada en la providencia de 4 de marzo de 2021.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: NO REPONER el auto de 4 de marzo de 202l en el que se resolvió dar aplicación al trámite de la sentencia anticipada dentro del proceso de la referencia de conformidad con el numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A

LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
1F977A86D37882EA313F3DF5BBA3EB01502B6933462D1777BCEE93326B01B72D
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:53 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2018-00352-00**
Demandante:	**MARÍA ANGELICA BELTRÁN GUTIÉRREZ**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Teniendo en cuenta que no existen pruebas pendientes por recaudar y, que las requeridas en la audiencia inicial de 31 de octubre de 2019 y en el auto de 27 de febrero de 2020 fueron allegadas y puestas en conocimiento de las partes mediante proveído de 4 de marzo de 2021, sin manifestación al respecto de las partes, es del caso declarar cerrado el período probatorio y correr traslado para alegar de conclusión

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: CÓRRASE traslado a las partes y al ministerio público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.** de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
fe669ef85a1229aee3f1aeac84a82d376617ce369f598e6c2374b5b5006d50e3
Documento generado en 15/04/2021 02:44:58 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2019-00046-00**
Demandante:	**JOSÉ LUIS MORA BERNAL**
Demandado:	**NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

1. Mediante proveído de 28 de marzo de 2019 este Despacho, admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor JOSÉ LUIS MORA BERNAL, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo No. 20183171855281 de 27 de septiembre de 2018, mediante el cual, la entidad demandada negó la reliquidación de la asignación mensual, el auxilio de las cesantías, primas y demás prestaciones sociales a favor del demandante, allí se advirtió a la entidad demanda que dentro del término para contestar la demanda debería allegar el expediente administrativo de la actuación objeto del presente proceso (*«009AutoAdmiteDemanda»*).

2. Previo pago de los gastos procesales, el 16 de abril de 2019 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«011PagoGastos»* y *«012NotificacionPersonal»*).

3. El 24 de julio de 2019 la apoderada judicial de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL, dentro del término legal contestó la demanda y propuso una excepción previa *(«013ContestacionDemanda»)*.

4. El 12 de agosto de 2019 se fijó en lista la excepción propuesta *(«015FijaciónLista»)*.

5. Mediante auto de 22 de agosto de 2019 se fijó como fecha para la celebración de la audiencia inicial que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el 11 de diciembre de 2019 *(«017AutoCitaAudienciaInicial»)*.

6. En la audiencia inicial celebrada el 11 de diciembre de 2019 se ordenó oficiar a la Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional para que allegará la copia auténtica del expediente prestacional del señor JOSÉ LUIS MORA BERNAL, por segunda vez *(«018ActaAudienciaInicial»)*.

7. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del **16 de marzo de 2020** en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020**.

8. Sólo hasta el 5 de abril de 2021, previos tres requerimientos, la apoderada judicial de la Entidad demandada, vía correo electrónico, remitió el expediente prestacional del señor JOSÉ LUIS MORA BERNAL, dando así cumplimiento a lo ordenado en audiencia de 11 de diciembre de 2019 *(«024OficioEjercito»)*.

9. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer *(«016ConstanciaDespacho»)*.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de las partes por el término de tres (3) días, la documental allegada por la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL el 5 de abril de 2021 visible en el archivo «024OficioEjercito» del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
4d8cd9aeb068e6b91d5c1205eb1809a0b3b3bd58cadc7ed594df60dd019d7b4a
Documento generado en 15/04/2021 02:44:59 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-33-33-001-2019-00105-00**
Demandante:	**FÉLIX ANTONIO SERRANO MARTÍNEZ**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte ejecutante contra el auto proferido el 11 de marzo de 2021, mediante el cual se rechazó la demanda.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 13 de marzo de 2019 fue radicada ante el Juzgado que se encontraba desempeñando las funciones de reparto la demanda incoada por el señor FÉLIX ANTONIO SERRANO MARTÍNEZ, por conducto de apoderado judicial, con el objeto de que se librara mandamiento ejecutivo contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en virtud de la sentencia

proferida en primera instancia por este Juzgado el 11 de abril de 2011, confirmada parcialmente por la SUBSECCIÓN "F"-SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, el 22 de agosto de 2012 dentro del proceso radicado bajo el No. 25307333100120070062000[1], siendo asignado su conocimiento a este Despacho.

2.2. Mediante proveído de 21 de marzo de 2019 se solicitó a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA y a la FIDUPREVISORA S.A., certificar las sumas pagadas en cumplimiento de la sentencia[2].

2.3. El 8 de agosto de 2019, observado que el CONSEJO DE ESTADO avocó conocimiento con el propósito de unificar sentencia en materia de procesos ejecutivos, se suspendió el trámite dentro del proceso de la referencia[3].

2.4. El 4 de febrero de 2021, advertido el tiempo transcurrido sin que se hubiere proferido la sentencia de unificación aludida, se reanudó el trámite del proceso[4].

2.5. El 11 de marzo de 2021 se rechazó la demanda al haber encontrado configurado el fenómeno de la caducidad[5].

2.6. El 17 de marzo de 2021 la apoderada judicial de la parte demandante interpuso el recurso de apelación contra el mencionado auto[6].

2.7. El 5 de abril de 2021 ingresó el expediente al Despacho.

---

[1] Archivo denominado 003ActaReparto del expediente digitalizado.
[2] Archivo denominado 005AutoPrevioAdmitir del expediente digitalizado.
[3] Archivo denominado 012AutoSuspendeTramiteActuacion del expediente digitalizado.
[4] Archivo denominado 017AutolevantaSuspension del expediente digitalizado.
[5] Archivo denominado 020AutoRechazaCaducidad del expediente digitalizado.
[6] Archivo denominado 022RecursoApelacion del expediente digitalizado.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho recuerda que el recurso de apelación se encuentra contemplado en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, así:

> «**Artículo 243.** ***APELACIÓN.*** Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:
>
> 1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.
>
> 2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
>
> 3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales. El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.
>
> 4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.
>
> 5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.
>
> 6. El que niegue la intervención de terceros.
>
> 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
>
> 8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.
>
> **Parágrafo 1º.** El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.
>
> **Parágrafo 2º.** En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir.
>
> **Parágrafo 3º.** La parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente sustentado, podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el

> vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la apelación.
>
> La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.
>
> **Parágrafo 4º.** Las anteriores reglas se aplicarán sin perjuicio de las normas especiales que regulan el trámite del medio de control de nulidad electoral»

Se evidencia entonces, que el recurso fue presentado en tiempo, como quiera que la notificación del auto que rechazó la demanda se surtió por estado de 12 de marzo de 2021[7] y el recurso fue radicado el 17 de marzo de 2021[8], por lo que atendiendo que el auto es apelable al tenor de la normativa transcrita, emerge procedente conceder el recurso, como en efecto se hará.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: CONCEDER en el efecto suspensivo para ante la SECCIÓN SEGUNDA DEL H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA**,** el **RECURSO DE APELACIÓN** incoado por el apoderado judicial del señor FÉLIX ANTONIO SERRANO MARTÍNEZ contra el auto de 11 de marzo de 2021, mediante el cual se rechazó la demanda.

SEGUNDO: Por Secretaría, **PERMITIR** el acceso al expediente digitalizado al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN SEGUNDA para lo de su cargo, comunicándole la decisión aquí adoptada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

---

[7] Archivo denominado «021NotificacionEstado012Marzook» del expediente digitalizado.
[8] Archivo denominado 022RecursoApelacion del expediente digitalizado.

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
e6aafd876f0f772a5c77196fc8b70bd85c0f3c34bb0844713b2abb23b07c5828
Documento generado en 15/04/2021 02:44:32 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00123-00**
DEMANDANTE:	**MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN CARRILLO**
DEMANDADO:	**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver, primero, el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA contra el auto proferido por este Despacho el 11 de marzo de 2021 en el que se negó el llamamiento en garantía a la sociedad CONFIANZA S.A. y, por el otro, sobre la solicitud de llamamiento en garantía de la PREVISORA S.A. elevada por el apoderado de la Entidad demandada el 18 de octubre de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. La señora MARÍA DEL CARMEN GUZMÁN CARRILLO, por conducto de apoderado judicial, el 27 de marzo de 2019 radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su reparto a este Despacho (*«003ActaReparto»* de la carpeta *«C01Principal»*), con el

propósito de obtener la nulidad del Oficio No. 2018401012018-01 de 20 de octubre de 2018, por medio del cual la demandada negó la existencia de un vínculo laboral entre aquella y la demandante.

2.2. Mediante auto de 4 de abril de 2019 se admitió la demanda de la referencia («*005AutoAdmiteDemanda*» de la carpeta «*C01Principal*»).

2.3. El 26 de julio de 2019, previo el pago de los gastos procesales se notificó a la demandada («*009AcreditaPagoGastosProcesales*» y «*011NotificacionPeronalDemanda*» de la carpeta «*C01Principal*»).

2.4. El 20 de septiembre de 2019 el apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, doctor HERNANDO TERREROS REY, estando dentro del término legal presentó escrito de contestación de la demanda y propuso excepciones («*012ContestacionDemanda*» de la carpeta «*C01Principal*»).

2.5. El 18 de octubre de 2019, el doctor JAVIER ARCENIO GARCÍA MARTÍNEZ, en su condición de apoderado judicial de la Entidad demandada, allegó nuevo escrito de contestación de la demanda y dos memoriales formulando llamamiento en garantía a las compañías CONFIANZA S.A. y PREVISORA S.A. («*014ContestacionDemanda*» de la carpeta «*C01Principal*» y «*002EscritoSolicitudLlamamientoGarantia*» y «*003EscritoSolicitudLlamientoGarantia*» de la carpeta «*C02LlamamientoGarantia*»).

2.6. El 20 de noviembre de 2020 este Despacho, de conformidad con el numeral 6º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 806 de 4 de junio de 2020, declaró no probada la excepción de «*falta de jurisdicción y competencia*» incoada por el apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA («*020AutoResuelveExcepciones*» de la carpeta «*C01Principal*»).

2.7. Mediante proveído de 4 de febrero de 2021 este Juzgado requirió al doctor JAVIER ARCENIO GARCÍA para que acreditara su condición de apoderado judicial de la Entidad demandada (*«005AutoRequiere»* de la carpeta *«C02LlamamientoGarantia»*).

2.8. El 9 de febrero de 2021 el apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA atendió el anterior requerimiento (*«007Poder»* de la carpeta *«C02LlamamientoGarantia»*).

2.9. El 11 de marzo de 2021 este Juzgado negó el llamamiento en garantía propuesto por el apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA frente a la sociedad CONFIANZA S.A. (*«009AutoNiegaLlamiento»* de la carpera *«C02LlamamientoGarantia»*).

2.10. El 16 de marzo de 2021 el apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto de 11 de marzo de 2021, con base en los siguientes argumentos (*«011RecursoReposicionApelacion»* de la carpeta *«C02LlamientoGarantia»*):

2.10.1. Fundamenta la oportunidad de recurrir dicha decisión en los artículos 205, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 318 del Código General del Proceso.

2.10.2. Precisa que las solicitudes de llamamiento en garantía de las sociedades CONFIANZA S.A. y la PREVISORA S.A. se realizaron dentro de la oportunidad legal en consideración a que el término de traslado de la demanda culminó el 18 de octubre de 2019, y las respectivas solicitudes se efectuaron ese mismo día.

2.10.3. Enfatiza que el término de traslado de la demanda feneció el 18 de octubre de 2016 en razón al paro nacional vivido en el territorio nacional el 2 y 3 de octubre de 2019.

2.10.4. Finaliza solicitando reponer la decisión de 11 de marzo de 2021.

2.11. El 18 de marzo de 2021 el apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA allegó escrito solicitando proveer sobre la solicitud de llamamiento en garantía sobre la compañía LA PREVISORA S.A. de 18 de octubre de 2019 (*«012SolicitudHospital»* de la carpeta *«C02LlamientoGarantia»*).

2.12. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«015ConstanciaDespacho»* de la carpeta *«C02LlamientoGarantia»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, es del caso determinar la procedencia del recurso de reposición que interpuso el apoderado judicial de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA contra el auto que proferido por este Despacho el 11 de marzo de 2021 en el que negó el llamamiento en garantía a la sociedad CONFIANZA S.A., para lo cual el Despacho se remite a lo dispuesto en el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual prevé:

> «**Artículo 242. *REPOSICIÓN.* El recurso de reposición procede contra todos los autos**, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso» (Destaca el Despacho).

En virtud de lo anterior, se verifica en el sub iudice que, en efecto, el auto que se ataca es susceptible del recurso de reposición.

Ahora, debe tenerse en cuenta que por remisión expresa del aludido artículo 242 el término para incoar el recurso de reposición es el consagrado en el artículo 318 del Código General del Proceso, esto es, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto que se recurre. En el sub examine, el

recurso se interpuso dentro de la oportunidad legal en consideración a que el auto de 11 de marzo de 2021 se notificó por estado el 12 de marzo siguiente («*010NotificacionEstado12Marzo*» de la carpeta «*C02LlamientoGarantia*») y, el apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA presentó el escrito de reposición el 16 de marzo de 2021 («*011RecursoReposiciónApelacion*» de la carpeta «*C02LlamientoGarantia*») debido a que en virtud del artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr al día siguiente al de su notificación. Así también el 24 de marzo de 2021 se corrió traslado a la contraparte del recurso incoado tal y como se desprende del archivo «*014EnvioTraslado24marzo*».

En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos formales del recurso objeto de estudio se analizarán los motivos de inconformidad esbozados por el recurrente para determinar si hay lugar a revocar o a confirmar la providencia atacada.

Bajo ese hilo, este Despacho reitera que el objeto del recurso interpuesto consiste en reponer la decisión adoptada en providencia de 11 de marzo de 2021 por cuanto, endilga el profesional del derecho que presentó el recurso, la solicitud de llamamiento en garantía se presentó dentro de la oportunidad debida.

Por lo anterior, esta Instancia Judicial confrontará lo aludido en el escrito que llama la atención de la presente providencia con el trámite impartido en el asunto de la referencia para determinar si le asiste razón al recurrente.

Así las cosas, en el artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé lo relacionado con el llamamiento en garantía, de la siguiente manera:

> «**Artículo 225.** ***LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.*** Quien afirme tener derecho legal o contractual de exigir a un tercero la reparación integral del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquel, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.
>
> El llamado, dentro del término de que disponga para responder el llamamiento que será de quince (15) días, podrá, a su vez, pedir la citación de un tercero en la misma forma que el demandante o el demandado.
>
> El escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:
>
> 1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.
>
> 2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.
>
> 3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.
>
> 4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.
>
> El llamamiento en garantía con fines de repetición se regirá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen».

Seguidamente, el artículo 227 ibidem, establece que en lo no regulado en la norma especial (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) se aplicaran las normas del Código General del Proceso:

> «**Artículo 227.** ***TRÁMITE Y ALCANCES DE LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS.*** En lo no regulado en este Código sobre la intervención de terceros se aplicarán las normas del Código General del Proceso».

Bajo al amparo de la última norma y en atención a que, por un lado, la institución del llamamiento en garantía en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (artículo 225) está dentro del Capítulo X «*intervención de terceros*» y, segundo, que en dicho precepto no establece la temporalidad en la que se puede acudir a esta figura, se torna

imperioso remitirse, en virtud del artículo 227 *ibidem*, al artículo 64 del Código General del Proceso en consideración a que allí se establece de manera clara el límite temporal para la procedencia del llamamiento en garantía, así:

> «**Artículo 64.** ***LLAMAMIENTO EN GARANTÍA.*** Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, **podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla**, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación» (Destaca el Despacho).

En ese estadio de las cosas, contrastada la fecha de notificación de la demanda con la fecha en que el mentado apoderado judicial presentó la solicitud de llamamiento en garantía, se tiene que le asiste razón al recurrente dado que su solicitud se dio al último día de traslado de la demanda, tal y como se expone y precisa a continuación:

Notificación Demanda	26 de julio
Inicio Traslado	29 de julio
Inicio 25 días	**29 de julio**
Día 1	29 de julio
Día 2	30 de julio
Día 3	31 de julio
Día 4	1 de agosto
Día 5	2 de agosto
Día 6	5 de agosto
Día 7	6 de agosto
Día 8	8 de agosto
Día 9	9 de agosto
Día 10	12 de agosto
Día 11	13 de agosto
Día 12	14 de agosto
Día 13	15 de agosto
Día 14	16 de agosto
Día 15	20 de agosto
Día 16	21 de agosto
Día 17	22 de agosto
Día 18	23 de agosto
Día 19	26 de agosto

Día 20	27 de agosto
Día 21	28 de agosto
Día 22	29 de agosto
Día 23	30 de agosto
Día 24	2 de septiembre
Día 25	3 de septiembre
Vencimiento 25 días	**3 de septiembre**
Inicio 30 días	**4 de septiembre**
Día 1	4 de septiembre
Día 2	5 de septiembre
Día 3	6 de septiembre
Día 4	9 de septiembre
Día 5	10 de septiembre
Día 6	11 de septiembre
Día 7	12 de septiembre
Día 8	13 de septiembre
Día 9	16 de septiembre
Día 10	17 de septiembre
Día 11	18 de septiembre
Día 12	19 de septiembre
Día 13	20 de septiembre
Día 14	23 de septiembre
Día 15	24 de septiembre
Día 16	25 de septiembre
Día 17	26 de septiembre
Día 18	27 de septiembre
Día 19	30 de septiembre
Día 20	1 de octubre
Día 21	4 de octubre[1]
Día 22	7 de octubre
Día 23	8 de octubre
Día 24	9 de octubre
Día 25	10 de octubre
Día 26	11 de octubre
Día 27	15 de octubre
Día 28	16 de octubre
Día 29	17 de octubre
Día 30	18 de octubre

[1] No se tienen en cuenta los días 2 y 3 de octubre de 2019 en virtud de la suspensión de términos acontecida por el paro nacional.

Término Final Traslado de la Demanda	**18 de octubre**

Motivo por el cual este Despacho repondrá la providencia recurrida y estudiará de fondo la solicitud de llamamiento en garantía por haberse presentado de manera oportuna.

En esa secuencia, se itera, que el apoderado judicial de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA solicita que se llame en garantía a CONFIANZA S.A. y a LA PREVISORA S.A., con base en lo siguiente:

Respecto a CONFIANZA S.A. (*«002EscritoSolicitudLlamamientoGarantia-AseguradoraConfianza»* de *«C02LlamamientoGarantia»*):

> *«Entre la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana y la Cooperativa de Trabajo Asociado Médica Especializada "MEGACOOP", se suscribieron los Contratos para prestación de servicios Nos. 300 de 2012, 148 de 28 de enero de 2013, 04 de 8 de enero de 2014 y 127 de 30 de enero de 2015, negocios jurídicos que tuvieron por objeto la ejecución -por parte de la Cooperativa de Trabajo- de actividades empresariales (asesoramiento) y de gestión (apoyo logístico), encaminadas a la proyección comercial de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana – Unidad Funcional de Girardot.*
>
> *(…)*
>
> *Confianza S.A., expidió: i) las pólizas de cumplimiento Nos. GU030815 de 6 de febrero de 2014 y GU034713 de 5 de febrero de 2015, así como sus modificaciones, contratos de seguro que ampararon los perjuicios derivados del incumplimiento de los contratos de prestación de servicios Nos. 004 de 2014 y 127 de 2015, respectivamente, celebrados entre la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana y la Cooperativa de Trabajo Asociado (…) y, RO 008918 de 13 de enero de 2014 y RE001786 de 16 de febrero de 2015, contratos de seguro que ampararon los perjuicios patrimoniales surgidos como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual causada durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios Nos. 004 de 2014 y 127 de 2015, respectivamente, celebrados entre la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana y la Cooperativa de Trabajo Asociado (…), cuyo asegurado y beneficiario es la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, las cuales cubren entre otras contingencias, los perjuicios derivados a cargo del contratista, lo que incluye, por a ver sido expresa disposición contractual, el pago de salarios y prestaciones sociales del personal médico-asistencial (…)».*

En lo referente a LA PREVISORA S.A. (*«003EscritoSolicitudLlamamientoGarantia-AseguradoraLaPrevisora»* de *«C02LlamamientoGarantia»*):

> *«Entre la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana y la Cooperativa de Trabajo Asociado Médica Especializada "MEGACOOP", se suscribieron los Contratos para prestación de servicios Nos. 300 de 2012, 148 de 28 de enero de 2013, 04 de 8 de enero de 2014 y 127 de 30 de enero de 2015, negocios jurídicos que tuvieron por objeto la ejecución -por parte de la Cooperativa de Trabajo- de actividades empresariales (asesoramiento) y de gestión (apoyo logístico), encaminadas a la proyección comercial de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana – Unidad Funcional de Girardot.*
>
> *(…)*
>
> *La Previsora S.A., expidió: i) las pólizas de cumplimiento Nos. 3000258 de 9 de agosto de 2009 y 3000403 de 26 de agosto de 2013, así como sus modificaciones, contratos de seguro que ampararon los perjuicios derivados del incumplimiento de los contratos de prestación de servicios Nos. 300 de 2012 y 148 de 2013, respectivamente, celebrados entre la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana y la Cooperativa de Trabajo Asociado (…) y ii) las pólizas de responsabilidad extracontractual Nos. 1003107 de 8 de agosto de 2012 y 1003300 de 15 de marzo de 2013, así como sus modificaciones, contratos de seguro que ampararon los perjuicios patrimoniales surgidos como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual causada durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios Nos. 300 de 2012 y 148 de 2013, respectivamente, celebrados entre la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana y la Cooperativa de Trabajo Asociado (…), cuyo asegurado y beneficiario es la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, las cuales cubren entre otras contingencias, los perjuicios derivados a cargo del contratista, lo que incluye, por a ver sido expresa disposición contractual, el pago de salarios y prestaciones sociales del personal médico-asistencial (…)».*

Así las cosas, teniendo en cuenta el contenido del referido artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual prevé lo relacionado con el llamamiento en garantía, a pesar de que las compañías aseguradoras CONFIANZA S.A. y LA PREVISORA S.A. no se encuentran demandados dentro del presente asunto, dicha situación no excluye la posibilidad de que concurran al proceso en la posición como llamadas en garantía, en virtud de la relación jurídico procesal entre el demandado (llamante) y los llamados con el fin de responder por la condena impuesta a aquel, en virtud de lo siguiente:

Sujeto Llamado en Garantía	**Pólizas y Fecha de Expedición**	**Folios de «002EscritoSolicitudLlamamientoGarantia-AseguradoraConfianza» de «C02LlamamientoGarantia»**
CONFIANZA S.A.	300058 de 9-08-2012	27

	300058 de 9-08-2012	29
	1003107 de 18-01-2012	31
	300258 de 19-11-2012	36
	1003107 de 14-02-2012	39
	3000258 de 18-02-2013	40
	3000258 de 27-02-2013	43
	1003107 de 27-02-2013	46
	1003107 de 25-10-2013	47 y 49
	1003300 de 15-03-2013	71
	3000403 de 26-07-2013	80
	GU030815 de 13-01-2014	96 y 97
	RO008918 de 13-01-2014	100
	GU030815 de 30-10-2014	105 y 105
	RO008918 de 30-10-2014	106 y 107
	GU030815 de 7-01-2015	110
	RO008918 de 7-01-2015	111
	GU034713 de 5-02-2015	127
	RE001786 de 16-02-2015	131 y 136
	GU034713 de 16-02-2015	133
	RE001786 de 16-02-2015	137
	GU034713 de 18-12-2015	141
	RE001786 de 18-12-2015	142
	GU034713 de 12-02-2016	149
	RE001786 de 12-01-2016	150

Sujeto Llamado en Garantía	**Pólizas y Fecha de Expedición**	**Folios de «002EscritoSolicitudLlamamientoGarantia-AseguradoraConfianza» de «C02LlamamientoGarantia»**
LA PREVISORA S.A.	300258 de 9-08-2012	34
	3000258 de 21-01-2013	36
	1003107 de 18-01-2013	38
	3000258 de 19-11-2012	44

1003107 de 14-02-2013	46
3000258 de 18-02-2013	48
3000258 de 27-02-2013	51
1003107 de 27-02-2013	54
1003107 de 25-10-2012	55
1003300 de 15-03-2013	78
3000403 de 26-07-2013	87
GU030815 de 13-01-2014	103
GU030815 de 6-02-2014	104
RO008918 de 13-01-2014	107
GU030815 de 6-02-2014	108
GU030815 de 30-10-2014	111
RO008918 de 30-10-2014	113
GU030815 de 7-01-2015	117
RO008918 de 7-01-2015	118
GU034713 de 5-02-2015	135
GU034713 de 16-02-2015	136
GU034713 de 16-02-2015	137
RE001786 de 16-02-2015	138
GU034713 de 18-12-2015	149
RE001786 de 18-12-2015	150

Por consiguiente, y de acuerdo a lo reglado en el citado artículo 225 y, una vez confrontada la documental allegada en la presente foliatura, se pudo acreditar por parte de este Despacho que es viable proceder a su admisión por cuanto se cumple cabalmente con los requisitos exigidos por la Ley, además de que el mismo fue presentado dentro de la oportunidad legalmente establecida.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REPONER el auto de 11 de marzo de 2021 en el que se negó el llamamiento en garantía a la sociedad CONFIANZA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADMÍTASE el llamamiento en garantía presentado por el apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, contra las compañías CONFIANZA S.A. y la PREVISORA S.A. el 18 de octubre de 2019.

TERCERO: NOTIFÍQUESE de manera personal el contenido de esta providencia y del auto admisorio de la demanda a los Representantes Legales de las compañías CONFIANZA S.A. y LA PREVISORA S.A., a través de los buzones de correos electrónicos creados para tal fin, el cual consta en los certificados de existencia y representación legal que se adjuntan con el presente, conforme lo dispone el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: De conformidad con el inciso segundo del artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **CÓRRASE TRASLADO** por el término de quince (15) días de la demanda y del llamamiento en garantía a las sociedades CONFIANZA S.A. y LA PREVISORA S.A., para que procedan a contestar las piezas procesales que se le ponen de presente.

QUINTO: Advertir que si dentro de los seis (6) meses siguientes no se logra la notificación personal del llamado en garantía, el mismo se entenderá ineficaz y dará lugar a continuar con el trámite del proceso, conforme lo dispone el artículo 66 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
7A83FDFB8B116DC413A2C72BF5671F2CF8C729BB1272B27A5818DD2B9FCE83F4
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:54 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00142-00**
DEMANDANTE:	**MARLENY HURTADO**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1 Mediante proveído de 18 de julio de 2019 este Despacho, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 48 del Código General del Proceso, designó como curador ad-litem del señor MARINO RODRÍGUEZ al abogado en ejercicio SERGIO ROLANDO ANTÚÑEZ FLÓREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.269.203 y tarjeta profesional No. 208.657 del Consejo Superior de la Judicatura, y con correo electrónico rolando8304@hotmail.com (*«015AutoDesignaCuradorAdLitem»*).

1.2. El 25 de septiembre de 2019 el doctor SERGIO ROLANDO ANTÚÑEZ FLÓREZ se notificó personalmente del anterior auto (*«018NotificacionCuradorAdLitem»*).

1.3. El 4 de marzo de 2021 se fijó como fecha para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo

y de lo Contencioso Administrativo para el 19 de marzo de 2021 a las 9:00 a.m. (*«032AutoFijaAudienciaIinicial»*). Providencia que fue notificada en debida forma tal y como se desprende, por un lado, del estado electrónico visible en el siguiente enlace web: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2362728/0/ESTADO+N%C2%B0%2010+DE+5+DE+MARZO+DE+2021.pdf/625d3a06-454c-4bd9-9960-4c7691440589 y, por el otro, del archivo *«034NotificacionEstado5Marzo»* del expediente digitalizado.

1.4. El doctor SERGIO ROLANDO ANTÚÑEZ FLÓREZ no asistió a la audiencia inicial realizada el 19 de marzo de 2021 dentro del asunto de la referencia (folio 3 *«036ActaAudiencia»* y *«036AsistenciaAudiencia»* de la carpeta *«036AudienciaInicial»*).

1.6. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer sin justificación de la inasistencia por parte del doctor SERGIO ROLANDO ANTÚÑEZ FLÓREZ a la audiencia inicial de 19 de marzo de 2021 (*«039ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Ahora bien, tal y como se observa en el acta (folio 3 *«036ActaAudiencia»* de la carpeta *«036AudienciaInicial»*) y lista de asistencia (*«036AsistenciaAudiencia»* de la carpeta *«036AudienciaInicial»*) de la audiencia inicial de 19 de marzo de 2021, el curador ad litem del señor MARINO RODRÍGUEZ, doctor SERGIO ROLANDO ANTÚÑEZ FLÓREZ, no asistió a esta, motivo por el cual se le concedió el término de tres (3) días a efectos de acreditar justificación alguna por su inasistencia (folios 3 y 4 *«036ActaAudiencia»* de la carpeta *«036AudienciaInicial»*).

Por su parte, el numeral 4º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé las consecuencias de la inasistencia para el profesional del derecho que no concurra a la audiencia

inicial sin justa causa, con imposición de multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de la siguiente manera:

> «**Artículo 180.** ***AUDIENCIA INICIAL.*** Vencido el término de traslado de la demanda o de la reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:
>
> (…)
>
> 4. Consecuencias de la inasistencia. Al apoderado que no concurra a la audiencia sin justa causa se le impondrá multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)».

En el caso que nos ocupa, el profesional del derecho inasistente, dentro del término que otorga la referida norma, no se pronunció al respecto, por ende, no justificó su insastistencia (*«039ConstanciaDespacho»*), por lo tanto, y ante la existencia de la obligación por parte del doctor SERGIO ROLANDO ANTÚÑEZ FLÓREZ de representar al señor MARINO RODRÍGUEZ, desde el auto que lo designó como curador ad-litem y de su notificación en tal calidad, el cual tiene entre sus deberes prestar vigilancia y control a los procesos en lo que figure como representante judicial, no encuentra justificación este Despacho ante la no comparecencia del profesional del derecho a la audiencia inicial celebrada el 19 de marzo de 2021.

En ese sentido, al advertirse el silencio por parte del doctor ATÚÑEZ FLÓREZ, este Juzgado impondrá la multa de que trata el numeral 4º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia: **SE DISPONE:**

PRIMERO: IMPÓNGASE la sanción de multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes al doctor SERGIO ROLANDO ANTÚÑEZ FLÓREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.269.203 y tarje profesional No. 208.657 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad a los establecido en el numeral 4º del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y a lo

estipulado en el artículo 2º del Acuerdo No. PSAA10-6979 de 2010[1] expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, suma que deberá ser consignada a órdenes de la Nación en la cuenta del Banco Agrario **No. 3-082-00-00640-8 denominada Rama Judicial-Multas y Rendimientos-Cuenta Única Nacional**, dentro de un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, so pena de ser cobrada coactivamente.

SEGUNDO: En firme esta providencia, por Secretaría, **NOTIFÍQUESE** a la sancionada por el medio más expedito y **REMÍTASE** certificación al Consejo Superior de la Judicatura, en los términos y parámetros fijados en el artículo 367 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
C8606D0DB2FB9E2FFB196689FABBF8229BA55B03A65428C9617A03BA870A328E

[1] «Artículo Segundo.- La providencia judicial o acto administrativo que imponga una obligación a favor de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura deberá contener:

a. Nombres y apellidos completos del sancionado, tipo y número de documento de identificación.
b. Dirección del lugar de habitación o sitio de trabajo del sancionado, consignada en la pertinente actuación.
c. Cuantía de la obligación y término en el cual deba cancelarse.
d. Identificación de la cuenta donde debe realizarse el pago total de la obligación (...)».

DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:56 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00148-00**
DEMANDANTE:	**MARÍA ELVIA PEDROZA GUZMÁN y OTROS**
DEMANDADO:	**MUNICIPIO DE GIRARDOT**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 18 de julio de 2019 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora MARÍA ELVIRA PEDROZA GUZMÁN y OTROS[1], por conducto de apoderada judicial, contra el MUNICIPIO DE GIRARDOT, con el propósito de obtener la nulidad de la Resolución No. 0851 de 23 de octubre de 2018 por medio de la cual la Entidad demandada negó el reconocimiento y pago de la bonificación por servicios prestados a los demandantes (*«015AutoAdmiteDemanda»* y *«018AutoReponeAutoAdmisorioDemanda»*).

1.2. Previo pago de los gastos procesales, el 1º de octubre de 2019 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«019PagoGastos»* y *«020NotificacionPersonal»*).

[1] Cuarenta personas más.

1.3. El 12 de diciembre de 2019 el MUNICIPIO DE GIRARDOT, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas (*«023ContestacionDemanda»*).

1.4. El 11 de febrero de 200 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 20 de enero de 2020 (*«025ConstanciaTrasladoDemanda»*).

1.5. El 12 de marzo de 2020 este Despacho fijó como fecha de celebración de la audiencia inicial para el 5 de mayo de 2020 (*«032AutoFijaFechaAudienciaInicialyReconoceP»*).

1.6. El 17 de septiembre de 2020 este Juzgado requirió al MUNICIPIO DE GIRARDOT para que remitiera los antecedentes administrativos de la actuación objeto del presente proceso (*«036AutoRequiere»*). Requerimiento reiterado mediante providencia de 20 de noviembre de 2020 (*«041AutoRequiere»*).

1.7. El 4 de marzo de 2021 este Juzgado mediante auto de cúmplase le ordenó a la Secretaría organizar el expediente hibrido digitalizado atendiendo las instrucciones impartidas por la suscrita Juez en los términos consignados en el Acuerdo PCSJA20-115-67 de 6 de junio de 2020 (*«045AutoCumplase»*).

1.8. El 11 de marzo de 2021 la apoderada judicial de la parte actora allegó escrito en los siguientes términos (*«046Solicitud»*):

> *«(…) de la manera más respetuosa me permito solicitar información del estado actual del proceso (…), toda vez que por la plataforma TYBA registra un auto que ordena cumplir con fecha de 4 de marzo de 2021 y notificado el 5 de marzo del presente año, sin embargo, haciendo la verificación en la pagina de la rama judicial no se encuentra la fijación del estado de la fecha ya mencionada ni el auto de dicho requerimiento».*

1.9. El 12 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer.

I. C O N S I D E R A C I O N E S

En atención al escrito allegado el 11 de marzo de 2020, sea lo primero recordarle a la apoderada judicial de la parte demandante, doctora PAULA MILENA AGUDELO MONTAÑA, que en la sede judicial el Juez como instructor del proceso se pronuncia mediante providencias; autos y sentencias. Los primeros se pueden clasificar, entre muchos grupos-según la doctrina-, entre autos de sustanciación o interlocutorios, o según su tipo de notificación. El auto proferido por este Despacho el 4 de marzo de 2021 como bien lo señalada la apoderada concierne a un auto que ordena cumplir una orden; de ese modo se tiene que obedece a un auto de cúmplase, pues, tal y como lo consagra el artículo 204 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -perteneciente al capítulo VII Notificaciones- tiene tal naturaleza las providencias que contengan ordenes dirigidas exclusivamente al Secretario y no **requieren notificación**, ya que a su letra reza:

> «**Artículo 204. A*UTOS QUE NO REQUIEREN NOTIFICACIÓN.*** No requieren notificación los autos que contengan órdenes dirigidas exclusivamente al Secretario. Al final de ellos se incluirá la orden "cúmplase"».

El H. Consejo de Estado[2] del mismo modo ha reiterado y recordado el concepto y/o naturaleza de un auto de cúmplase cuando algún apoderado ha recurrido dicha providencia, de la siguiente manera:

> *«RECURSO DE REPOSICIÓN – Contra auto de cúmplase que ordenó correr traslado de las excepciones / AUTO DE CÚMPLASE – No se notifica, no es susceptible de recursos y es de obligatorio cumplimiento para la Secretaría / RECURSO DE REPOSICIÓN – Se rechaza de plano por improcedente.*
>
> *En el presente caso por auto de cúmplase del 14 de marzo de 2019 se ordenó a la Secretaria de la Sección Quinta del Consejo de Estado atender a lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 y correr traslado a las partes del escrito de excepciones propuesto por el demandante (…), por el término de tres (3) días, providencia que no incluyó ninguna determinación adicional que aquella que dio una orden a la secretaría. (…). Sobre las clases de providencias, esta Corporación ha expuesto: "(…). [P]ara la Sala es claro que los autos de "cúmplase" hacen parte del ordenamiento jurídico, pero no*

[2] Providencia de 19 de marzo de 2019, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejera Ponente: ROCIO ARAÚJO OÑATE, radicación número: 11001-03-28-000-2018-00111-00.

> *para impulsar el trámite procesal ni para resolver asuntos accesorios propios de los autos interlocutorios, sino solamente para impartirle órdenes al secretario del despacho o corporación judicial para que sea él quien exclusivamente las acate". (…). De lo anterior es dable concluir que el auto (…), tiene la naturaleza de ser un auto de "cúmplase", como en efecto así se dispuso, circunstancia que no habilita su notificación y tampoco lo hace recurrible, pues simplemente le ordena a la Secretaría atender el mandato normativo del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, precepto que dispone un trámite procesal que no es de libre disposición de las partes sino de obligatorio cumplimiento de la Secretaría. (…)*».

De conformidad con lo expuesto, este Despacho conmina a la apoderada judicial de la parte actora para que cumpla los deberes profesionales del abogado consagrados en el artículo 28 de la Ley 1123 de 22 de enero de 2007 «*por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado*», especialmente los relacionados a «*actualizar los conocimientos inherentes al ejercicio de la profesión*» (numeral 4º) y «*atender con celosa diligencia sus encargos profesionales*» (numeral 10º). Lo anterior con la finalidad de, por un lado, evitar solicitudes que conllevan a un desgaste para la administración de justica y, por el otro, para, del mismo modo y bajo ese sentido, eludir pronunciamientos innecesarios que interrumpen la celeridad de los procesos judiciales.

Superada la anterior aclaración, con el objeto de imprimirle celeridad al asunto de la referencia, y encontrándose el proceso al Despacho para emitir pronunciamiento frente a la procedencia de la aplicación a lo establecido en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se advierte que no se puede proveer, en razón a que aún la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT no ha remitido los expedientes administrativos de los señores MARÍA ELVIRA PEDROZA GUZMÁN, TIFANY JULIETT IGUARÁN OCHOA, SARA HERNÁNDEZ DE GARZÓN, MARTHA LUCIA FANDIÑO RIOS, MYRIAM TRIANA LUNA, YADI PAOLA SALAZAR ABRIL, OTTO FERNANDO SERNA LÓPEZ, MARÍA ELIZABETH BARRERA MUÑOZ y MARÍA PIEDAD MEJIA PATIÑO, razón por la cual, una vez más resulta necesario requerir a la aludida Secretaría para que allegue los referenciados expedientes administrativos, so pena de que se impongan las sanciones contempladas en el artículo 44 del Código General del Proceso.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT para que, sin más dilaciones, en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído allegue los expedientes administrativos de los señores MARÍA ELVIRA PEDROZA GUZMÁN, TIFANY JULIETT IGUARÁN OCHOA, SARA HERNÁNDEZ DE GARZÓN, MARTHA LUCIA FANDIÑO RIOS, MYRIAM TRIANA LUNA, YADI PAOLA SALAZAR ABRIL, OTTO FERNANDO SERNA LÓPEZ, MARÍA ELIZABETH BARRERA MUÑOZ y MARÍA PIEDAD MEJIA PATIÑO, so pena de que se impongan las sanciones contempladas en el artículo 44 del Código General del Proceso.

SEGUNDO: REQUÍERESE a la apoderada judicial de la parte actora, doctora PAULA MILENA AGUDELO MONTAÑA para que en el término de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente providencia acredite que ha desplegado las acciones necesarias para ayudar a recaudar la documental anteriormente requerida.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
7242F98F89A4A0E5FE993117BACE632F66FB18628D2425EAAD5443443353F9C6
DOCUMENTO GENERADO EN 15/04/2021 02:43:57 PM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA